

El hilo del **LABERINTO**



Conflicto armado, desarme, desmovilización y
reintegración -DDR- de grupos armados ilegales en Santander.

EL HILO DEL LABERINTO

Conflicto armado y desarme, desmovilización y reintegración
-DDR- de grupos armados ilegales en Santander

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL ORIENTE
COMPROMISO

PROGRAMA DE PAZ
Y DERECHOS HUMANOS

Corporación para el Desarrollo del Oriente
COMPROMISO

Director Ejecutivo
EDUARDO RAMÍREZ GÓMEZ

Presidente
LUIS DOMINGO RINCÓN BENÍTEZ

Director del Proyecto de Investigación
JORGE CASTELLANOS PULIDO

Equipo de Investigación
MARTHA EUGENIA CARREÑO GUALDRÓN
JORGE CASTELLANOS PULIDO
ALFONSO CONDE PRADA
SANDRA HELIANA ORTIZ DELGADO
ALBERTO SANTOS PEÑUELA

Corrección de Estilo
HELIANA ORTIZ DELGADO

Carátula
LUIS DOMINGO RINCÓN BENÍTEZ

“El hilo del laberinto” es representado a partir de las Molas provenientes de la cultura Kuna. Las molas son toda una filosofía, una tradición indígena conservada. Sus diseños están elaborados a partir de la representación de laberintos. Los indígenas Kuna creen que el hombre, la vegetación y los animales son constantemente reunidos a través de caminos complejos. A partir de allí se representa la idea de laberinto, pero que contiene salidas al complicado conflicto armado que vive Colombia.

Diseño y Diagramación
MERCEDES PIMENTEL QUINTERO

Impresión
DISTRIBUCIONES QUINTERO CRISTANCHO LTDA

Este trabajo se ha realizado con el apoyo de la Gobernación de Santander en el marco del contrato titulado ***“Apoyo a la promoción de alianzas y acuerdos institucionales que fortalezcan a procesos de paz y reintegración en el departamento de Santander”***, iniciativa aprobada dentro de las metas de la Secretaría del Interior, en su componente de apoyo a la reintegración socioeconómica de población reinsertada y desmovilizada en el departamento de Santander.

Las opiniones expresadas en este libro son de exclusiva responsabilidad de la Corporación Compromiso y no corresponden necesariamente a las de la Gobernación de Santander.

Esta publicación es de carácter público. Puede ser reproducido, copiado, distribuido y divulgado siempre y cuando no se altere su contenido y se cite la fuente.

Este es un documento público cuyo texto completo se podrá consultar en:
www.corporacioncompromiso.org

ISBN: 978-958-97867-5-8
Impreso en Colombia
Primera edición, julio de 2012.

Corporación Compromiso
Bucaramanga, Carrera 32 No. 58-20
www.corporacioncompromiso.org
Colombia

A agradecimientos

A la Gobernación de Santander, Secretaría del Interior, Oficina de Paz y Derechos Humanos

A los Centros de Servicio de la Agencia Colombiana para la Reintegración en Bucaramanga y Barrancabermeja

A los profesionales reintegradores de los Centros de Servicio de la ACR en Bucaramanga y Barrancabermeja

A la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP-OEA en Santander y Magdalena Medio

A Álvaro Villarraga, de la Dirección de Acuerdos por la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica

A la Corporación Nación

A las alcaldías y oficinas de paz de Bucaramanga y Barrancabermeja

Y a la población desmovilizada en proceso de reintegración en Santander

... Por el apoyo brindado a la realización de este trabajo y su compromiso en la búsqueda de nuevos caminos para la paz.



TABLA DE CONTENIDO

Prólogo	15
Preámbulo	27
CAPÍTULO I – RAZGOS DE SANTANDER Y SU REGIÓN DE INFLUENCIA	31
Rasgos económicos, históricos y políticos	31
Localización geográfica, importancia política y económica	33
Santander y la región Nororiental	33
Santander y el Magdalena Medio	35
Santander, límites y municipios	37
Rasgos poblacionales	38
CAPÍTULO II – SANTANDER Y EL CONFLICTO ARMADO INTERNO	43
Génesis paramilitar en Santander y el Magdalena Medio	44
Las “Convivir”: legalización del paramilitarismo	45
De guerrillas, paramilitares y paraestado	47
Irrupción del paraestado	49
Estructura e incidencia del paramilitarismo en Santander y la región	51
Frentes AUC que delinquieron en Santander	53
Graves hechos del paramilitarismo y el conflicto armado en Santander	55
Desplazamiento forzado, un hecho de graves consecuencias en Santander	58
Víctimas del conflicto armado en Santander, en cifras	59
La Parapolítica: un fenómeno que amenaza la vigencia del estado social de derecho	61
Santander escenario del surgimiento e incidencia de la parapolítica	
Parapolítica, el papel del Bloque Central Bolívar en Santander y el Magdalena Medio	63
CAPÍTULO III - MARCO CONCEPTUAL DDR: ESCENARIOS DEL DDR Y MARCO JURÍDICO DEL PROCESO DDR CON LAS AUC	65
Desarme, desmovilización y reintegración, marco conceptual y definiciones básicas	65
Escenarios del DDR en el contexto de las nuevas guerras	69
DDR en el contexto de acuerdos de paz	
Reincidencia, rearme, disidencias y emergentes	71
DDR en Colombia	72
El fracaso de los diálogos del Caguán y la solución militar contra la insurgencia	73
Acuerdos en Ralito con las AUC: desmovilización incompleta	75
Justicia transicional y Ley de Justicia y Paz	76

Corte Suprema de Justicia: paradigma de la reconstrucción institucional y del estado democrático de derecho	77
Surgimiento de la Ley 1424 de 2010	78
Cumplimiento de los acuerdos: entre la extradición y el rearme	80
DDR en Santander, rutas de la desmovilización	
CAPÍTULO IV – COLOMBIA FRENTE AL DESAFIO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL	83
Cambios políticos en el contexto internacional	83
Gobierno Santos y la justicia transicional	84
Desarrollo de la Ley de Justicia y Paz	85
Acercamiento a un balance de la Ley 975 y la desmovilización	89
Versiones libres y su escasa contribución a la verdad	89
Derecho a la reparación en la perspectiva del proceso de Justicia y Paz	90
Ley de Justicia y Paz en la encrucijada: ¿fracaso o reforma?	91
Reflexiones sobre la propuesta de reforma a la Ley 975	92
Dinámica del conflicto armado: tendencias actuales posdesmovilización	93
Grupos armados ilegales pos desmovilización: Distribución territorial y captura del territorio nacional	94
Semántica del conflicto: bacrim, narcoparamilitares, neoparamilitares o GAI	96
Bacrim en Santander: enclaves territoriales y zonas de descanso	97
Alerta sobre riesgos que afectan la desmovilización	99
SEGUNDA PARTE	107
CAPITULO V -CARACTERIZACION SOCIO ECONOMICA DE LA POBLACION EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	115
1. Generalidades	115
1.1 Presentación	115
1.2 Diseño metodológico de la caracterización	116
1.3 Marco legal de la Reintegración	116
1.4 Población desmovilizada en el departamento de Santander	117
2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN	118
2.1 Aspectos Socio demográficos	118
2.1.1 Edad	118
2.1.2 Sexo	120
2.1.3 Documentación	121
2.1.4 Estado civil	121
2.1.5 Estructura Familiar	122
2.2 Vinculación, permanencia y desvinculación de los grupos armados ilegales	123
2.2.1 Motivaciones de vinculación a los grupos armados	125
2.2.2. Grupo armado al que pertenecía en el momento de la desvinculación	129
2.2.3 Tiempo de permanencia en el grupo armado	130
2.2.4 Motivo de la desmovilización	131
3. Condiciones de vida actuales de la población dentro de los procesos de reintegración en el departamento de Santander	132
3.1 Vivienda	132
3.2 Educación como estrategia en el proceso de Reintegración	134

3.2.1	Actividad educativa y nivel académico alcanzado para la reintegración a la vida civil	135
3.2.2	Escolaridad	136
3.2.3	Instituciones Educativas según los programas a los que acceden	137
3.2.4	Participación en programas educativos para la reintegración	137
3.2.5	Acceso a programas de formación para el trabajo	139
3.2.6	Necesidades de formación para el trabajo	140
3.2.7	Fortalezas y debilidades de los programas educativos	142
3.3	Actividad económica de la población en proceso de reintegración	144
3.3.1	Competencias laborales actuales	145
3.3.2	Ocupación productiva	146
3.3.2.1	Población empleada	147
3.3.2.2	Trabajadores por cuenta propia	149
3.3.3	Ingreso actual	150
3.3.4	Desempleo en la población en proceso DDR en Santander	151
3.3.5	Planes de negocio como estrategia para la reintegración económica	152
3.3.6	Fortalezas que presenta el proceso de reintegración económica	154
3.3.7	Debilidades del proceso de reintegración económica	154
3.4	Salud de la población desmovilizada	156
3.4.1	Condiciones actuales de salud y atención recibida	157
3.4.2	Atención psicosocial como parte del programa de reintegración	159
3.5	Ámbito organizativo	161
3.6	Seguridad de la población desmovilizada	163
3.6.1	Amenazas	164
3.6.2	Reincidencia	166
CAPITULO VI - ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE REINTEGRACIÓN Y LA POLITICA DDR EN SANTANDER		169
1.	Política de reintegración social y económica de personas y grupos armados al margen de la ley y el papel de la Agencia Colombiana para la Reintegración	169
1.1	Breve acercamiento al desarrollo institucional, cronología y normatividad jurídica para la Reintegración	169
1.2	Ruta de la desmovilización en Colombia	171
1.3	Política nacional para la reintegración social y económica	175
2.	Relaciones y vínculos institucionales en la política de DDR- Reintegración de los desmovilizados en Santander	177
2.1	La reintegración social y económica, frente al manejo centralista y desarticulado de los entes territoriales, o la justificación de alianzas institucionales vinculantes para la paz	177
2.2	Regionalización de la política de reintegración y la participación de empresas y gremios económicos	183
3.	Reintegración social y económica de la población desmovilizada a cargo de la ACR en Santander	186
3.1	Participantes activos y la ruta de reintegración	189
3.1.1	Perfil de los participantes en proceso de reintegración	191
3.1.2	Huellas de la guerra sobre las personas integrantes de grupos armados	193
3.1.3	Percepción de las mujeres sobre diferencias entre hombres y mujeres y violencia contra las mujeres	194
3.1.4	Consecuencias de la guerra sobre los y las integrantes de los grupos armados	195

3.2	Atención Psicosocial	196
3.2.1	Logros del proceso de atención psicosocial	196
3.2.2	Limitaciones detectadas en el proceso de atención psicosocial	197
3.3	Atención en Salud	198
3.3.1	Dificultades en el acceso a salud	199
3.4	Acceso a la educación formal	199
3.4.1	Dificultades identificadas para el acceso al sistema educativo	202
3.5	Formación para el trabajo	203
3.5.1	Problemas y obstáculos para el acceso a la formación para el trabajo	206
3.6	Reintegración económica	207
3.6.1	Dificultades para acceso a empleo	208
3.6.2	Planes de negocio y proyectos productivos	209
3.6.3	Situación económica de las mujeres desmovilizadas en relación a los hombres	213
4.	Percepción de los desmovilizados sobre seguridad y riesgos	214
4.1	Factores de vulnerabilidad a la reincidencia	216
CONCLUSIONES SURGIDAS DEL ESTUDIO - CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES		217
1.	Enfoques y criterios sugeridos para ajuste a las políticas y programas DDR	220
2.	Recomendaciones para mejorar los procesos y el programa de reintegración	220
3.	Recomendaciones al proceso de reintegración económica y social	222
4.	Recomendaciones a instituciones en materia de seguridad y protección a personas en proceso de reintegración	225
5.	Compromisos de los desmovilizados(as) en los vínculos sociales de convivencia y paz	226
ANEXOS		227
BIBLIOGRAFIA		241

LISTA DE MAPAS

Mapa Magdalena Medio colombiano
 Mapa División Política del Departamento de Santander
 Mapa Núcleos de Desarrollo Provincial
 Mapa Frentes AUC que delinquieron en Santander

LISTA DE TABLAS

Tabla.	Indicadores clave por rangos de NBI
Tabla.	Algunos indicadores de las provincias en el departamento de Santander
Tabla.	Hechos confesados y víctimas relacionadas
Tabla.	Principales delitos en hechos confesados
Tabla.	Transmisiones de versiones libres
Tabla.	Gestión exhumaciones
Tabla.	Participación de las víctimas
Tabla.	Garantías de no repetición
Tabla.	Casos compulsados a la justicia ordinaria
Tabla.	Jornadas generales atención a víctimas
Tabla.	Jornadas especiales de atención a familiares de desaparecidos
Tabla.	Postulados con imputación, formulación de cargos y legalización de cargos
Tabla.	Mapa de riesgos en Santander – 2012
Tabla.	Participantes activos en proceso de reintegración en el departamento de Santander por municipio de residencia
Tabla.	Distribución de la población en proceso de reintegración en Santander
Tabla.	Rango de edad de la población en proceso de reintegración en Santander
Tabla.	Población en proceso de DDR en Santander clasificada por sexo
Tabla.	Documentación de la Población en proceso de DDR en Santander
Tabla.	Conformación familiar de la población en proceso de DDR en Santander
Tabla.	Edad de ingreso al grupo ilegal de población en proceso de DDR en el departamento de Santander
Tabla.	Motivaciones para el ingreso al grupo armado ilegal de la población en proceso de DDR en Santander
Tabla.	Población en proceso de DDR que ha recibido subsidio para vivienda en Santander
Tabla.	Población en proceso de DDR según actividad educativa en Santander
Tabla.	Población en proceso de DDR en Santander según programa educativo
Tabla.	Formación para el trabajo por eje temático de la población en proceso de DDR en Santander
Tabla.	Población en proceso de DDR en Santander que ha participado con ACR en actividades de capacitación para el trabajo
Tabla.	Población en proceso de DDR en Santander que requiere mejorar su formación para el trabajo
Tabla.	Necesidades de formación para el trabajo y ejercicio de una profesión establecidas por la población en proceso de DDR en Santander
Tabla.	Fortalezas del programa educativo valoradas por la población en proceso de DDR en el departamento de Santander
Tabla.	Debilidades del programa educativo valoradas por la población en proceso de DDR en el departamento de Santander
Tabla.	Competencias laborales de la población en proceso de DDR en Santander
Tabla.	Actividad económica de la población en proceso de DDR de Santander
Tabla.	Actividad económica desarrollada según empleo por la población en proceso de DDR en Santander
Tabla.	Actividades económicas desarrolladas por cuenta propia de la población en proceso de DDR en Santander
Tabla.	Población en proceso de DDR de Santander según estado de salud
Tabla.	Población en proceso de DDR atendida por el sistema de salud con discapacidad o enfermedad grave o crónica
Tabla.	Población en proceso de DDR en Santander con atención Psicosocial

Tabla.	Participación de la Población en proceso de DDR en el ámbito organizativo y comunitario
Tabla.	Amenazas recibidas por la población participante en proceso de DDR Departamento de Santander
Tabla.	Reporte de las amenazas recibidas por la población desmovilizada
Tabla.	Población en proceso de DDR en Santander que ha recibido protección una vez denuncia las amenazas
Tabla.	Población en proceso de DDR en Santander que ha recibido propuestas de GAI para participar en acciones ilegales
Tabla.	Cifras de la desmovilización en Colombia, del 7 de agosto de 2002 al 13 de mayo de 2012
Tabla.	Total de desmovilizaciones individuales y colectivas, del 7 de agosto de 2002 y al 13 de mayo de 2012
Tabla.	Participantes activos en Santander, según año de desmovilización
Tabla.	Participantes activos en Santander, según rango de edad
Tabla.	Participantes activos en Santander, según municipios de residencia
Tabla.	Participantes activos en Santander, según etapa del proceso de reintegración
Tabla.	Participantes de Santander afiliados al Sistema de Salud
Tabla.	Acceso a la educación formal
Tabla.	Participantes en cursos del Sena, según número de cursos en que se inscribieron
Tabla.	Temáticas de interés para formación
Tabla.	N° de proyectos desembolsados por sector
Tabla.	Monto de los aportes realizados por sector

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica.	Diagnóstico de Desplazamiento Forzado en Colombia
Gráfica.	Personas Desplazadas por la violencia en Santander
Gráfica.	Población Santander / Población Desplazada
Gráfica.	Población total Santander / Víctimas del conflicto
Gráfica.	Población víctima desplazamiento / víctimas de otros hechos
Gráfica.	Víctimas Santander / Área Metropolitana
Gráfica.	Mujeres atendidas por la ACR. 2006 – 2010
Gráfica.	Estado Civil de la población en proceso de reintegración en Santander
Gráfica.	Motivaciones para el ingreso al grupo armado ilegal de la población en proceso de DDR en Santander
Gráfica.	Grupo Armado al que pertenecía la población en proceso de DDR en Santander en el momento de la desmovilización
Gráfica.	Tiempo de permanencia en el GAI de la población en proceso de DDR en Santander
Gráfica.	Motivos de la desmovilización de la población en proceso de reintegración en el departamento de Santander
Gráfica.	Tipo de vivienda de la población en proceso de DDR en Santander
Gráfica.	Entidades que otorgaron el subsidio de vivienda a la población en proceso de DDR en Santander
Gráfica.	Grado de escolaridad de la población en proceso de DDR en Santander
Gráfica.	Rango de ingreso de la población en proceso de DDR en Santander
Gráfica.	Aportes al ingreso familiar de la población en proceso de DDR en Santander
Gráfica.	Rango de tiempo de desempleo de la población en proceso de DDR en Santander
Gráfica.	Proyectos productivos apoyados por la ACR en el departamento de Santander
Gráfica.	Aporte de capital semilla recibido para proyectos productivos población en proceso de DDR en Santander
Gráfica.	Fortalezas del proceso de reintegración económica
Gráfica.	Debilidades del proceso de reintegración económico
Gráfica.	Espacios de participación organizativa y comunitaria de la población en proceso de DDR en Santander
Gráfica.	Tipo de amenazas recibidas por la población en proceso de DDR en Santander
Gráfica.	Desmovilizaciones individuales 2002-2012
Gráfica.	Participantes activos en Santander, según municipio
Gráfica.	Nivel alcanzado en formación para el trabajo
Gráfica.	Planes de negocio registrados en el Centro de Servicios de Barrancabermeja
Gráfica.	Percepción de Seguridad de la población en proceso de DDR en Santander
Gráfica.	Participantes encuestados del proceso DDR en Santander que han recibido amenazas

PRESENTACIÓN

La Corporación Compromiso, con apoyo de la gobernación de Santander, realizó durante seis meses un proceso de consulta y análisis desde el enfoque de la Investigación Acción Participativa, con el propósito de caracterizar la política departamental de apoyo a la población desmovilizada en el marco de la política nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y avanzar en la formulación de recomendaciones para la construcción de alianzas y acuerdos interinstitucionales que fortalezcan procesos de paz y reintegración.

La acción se desarrolló en los municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca, Piedecuesta, Lebrija, Barrancabermeja, Cimitarra, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí y Rionegro. El trabajo contó además con el apoyo de los Centros de Servicios de la Agencia Colombiana para la Reintegración en Bucaramanga y Barrancabermeja.

Los resultados de este proyecto han quedado consignados en dos documentos que esperamos sean un aporte al proceso de fortalecimiento institucional tanto en el departamento de Santander como en los municipios en donde se desarrolló la acción. Estos documentos son, por una parte, un video documental que recoge entrevistas de personas desmovilizadas y su percepción acerca del proceso así como opiniones de expertos que trabajan en el tema y, por otra, el texto que el lector tiene en sus manos el cual muestra la realidad del proceso de DDR en Santander y orienta acciones para la promoción de cultura de paz y reconciliación mediante el apoyo a los procesos de reintegración actuales y futuros.

Los resultados y las recomendaciones que aquí presentamos, son producto de un proceso de consulta de fuentes directas para lo cual se entrevistaron a 178 personas en proceso de reintegración quienes pertenecieron a diferentes grupos armados organizados al margen de la ley, tanto de paramilitares como de guerrillas, en procesos de desmovilización individuales y colectivos. También fueron parte de las fuentes directas, funcionarios y funcionarias de diferentes instituciones del Estado así como personas vinculadas con el sector privado, la academia, la iglesia católica, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales.

El estudio realizado precisa la necesidad que tiene el departamento y el país en general, de incorporar una política de largo plazo en materia de DDR, con enfoque transformador orientado a la construcción de la paz, la convivencia pacífica y la reconciliación de la sociedad colombiana; una acción política que convoque al conjunto de sectores gubernamentales y no gubernamentales, sociales y productivos,

sin distinguos. Asumirla como un proceso político y cultural, colectivo y progresivo, más allá de la reintegración individual de personas que deciden abandonar las armas para intentar articularse a la sociedad en condición de civilidad.

Uno de los elementos que surgen con fuerza en este proceso de consulta y análisis y que consideramos importante destacar, es la evidencia del fraccionamiento y la polarización entre desmovilizados, víctimas del conflicto, gobiernos locales y sociedad civil tanto en el país como en la región. Se mantienen barreras de prevención, de odio y de resentimientos que no se han tratado; es necesario superar la estigmatización como factor de exclusión laboral, crear condiciones de igualdad de oportunidades para desmovilizados y víctimas que experimentan a diario el fenómeno de la discriminación. En este sentido, se requiere flexibilizar la vinculación laboral. Considerar conocimientos, habilidades y condiciones de participantes, con requisitos que no limiten el acceso a oportunidades de reintegración económica legal y laboral.

Por otra parte, es prioritario sensibilizar a la comunidad sobre el significado, contenidos y alcances de una política de DDR, implementar procesos pedagógicos que vinculen a las personas desmovilizadas, a las víctimas, a las comunidades receptoras, a las instituciones (ACR, Gobernación, alcaldías, organismos de control), a los medios de comunicación, a los gremios económicos; en un marco de corresponsabilidad con la construcción de una sociedad libre del conflicto armado y las violencias.

El libro está compuesto por seis capítulos distribuidos en dos partes. La primera parte ubica el contexto geográfico, político y económico del departamento de Santander así como el marco conceptual y normativo del Desarme, la Desmovilización y la Reintegración. Esta primera parte tiene cuatro capítulos; en el capítulo primero se hace una descripción de los rasgos históricos, políticos y económicos del departamento de Santander, su ubicación geográfica y su relación con la región nororiental. El capítulo segundo se dedica al registro de lo que ha sido el conflicto armado en el departamento, el surgimiento de grupos de guerrilla y paramilitarismo, el fenómeno de la parapolítica, el desplazamiento forzado y las cifras de la victimización. En el capítulo tercero el lector se encontrará con el marco jurídico y conceptual del Desarme, la Desmovilización y la Reintegración; algunas experiencias de procesos de negociación con grupos armados en Colombia y la situación del DDR en Santander. La primera parte, cierra con el capítulo cuarto dedicado a los desafíos de la Justicia Transicional en Colombia, análisis de la ley de justicia y paz, los derechos de las víctimas y los riesgos que afectan a los desmovilizados.

La segunda parte de este documento contiene propiamente los resultados de la investigación consignados en dos capítulos y un espacio adicional dedicado a las consideraciones, conclusiones y recomendaciones generales del estudio. El capítulo quinto contiene la caracterización socioeconómica de la población en proceso de reintegración en departamento de Santander y el marco conceptual de la reintegración. Aquí el lector podrá encontrar, entre otros elementos, las motivaciones que llevaron a estas personas a vincularse a grupos armados así como las razones para tomar la decisión de desmovilizarse, su situación actual, las condiciones de seguridad y el fenómeno de la reincidencia. En el capítulo sexto se hace un análisis de los programas de reintegración y la política de DDR en Santander, la situación de las mujeres desmovilizadas, la situación de esta población frente al empleo y su percepción de seguridad y riesgos.

El documento termina con una serie de conclusiones y recomendaciones orientadas a ajustar y mejorar las políticas y acciones que se emprendan en materia de Desarme, Desmovilización y Reintegración. Desde nuestro punto de vista, se hace necesario revisar y ajustar el proceso de reintegración económico y social, garantizar la seguridad de las personas vinculadas al proceso y crear las condiciones necesarias para favorecer iniciativas de diversa índole que aporten a la transformación positiva de los conflictos, la convivencia pacífica, la construcción social de la paz, el goce efectivo de los derechos humanos, la construcción de confianzas y la reconciliación.

Finalmente insistimos en la necesidad que la sociedad colombiana logre avanzar hacia un horizonte de reconciliación, para ello se requiere el trazado y la implementación de políticas de Estado consistentes con la realización del derecho constitucional a la paz. Invertir en la paz es una prioridad, no es suficiente con señalar y castigar a unos cuantos culpables. Se hace necesaria una acción colectiva de construcción de un escenario diferente a la violencia, de superación del conflicto por medio de la acción política no violenta y la democracia.

La reconciliación es un camino que debe construirse y recorrerse bajo la responsabilidad de todos; del Estado y la sociedad, de las instituciones públicas y el sector privado, de las víctimas y los perpetradores, de los desmovilizados y las comunidades receptoras; de las organizaciones sociales, los empresarios, los medios de comunicación, los gobernantes, los funcionarios públicos; la reconciliación en un marco de corresponsabilidad de todos los actores sociales y políticos. Es un imperativo ético y político la superación del conflicto, la construcción de la paz y la creación de condiciones para la reconciliación.

Eduardo Ramírez Gómez
Director Ejecutivo
Corporación Compromiso

Bucaramanga, julio de 2012.

PRÓLOGO

Lecciones del conflicto, la búsqueda de la paz y la experiencia de reintegración en Santander

Álvaro Villarraga Sarmiento¹

Resulta muy positivo el esfuerzo de intercambio y cooperación presentado en Santander entre las autoridades departamentales, locales, estatales y organizaciones sociales de distintos ámbitos, orientado a nutrir las políticas públicas y propiciar medidas a favor de la paz. Existen antecedentes en tal sentido y ahora se ha planteado en los foros realizados recientemente en Bucaramanga y Barrancabermeja el compromiso por establecer alianzas a favor de la construcción de la paz. La agenda de la paz es múltiple, de dinámicas nacionales, departamentales y locales; de iniciativas institucionales y sociales necesariamente conjugadas; de búsqueda actual de nuevas fórmulas hacia el diálogo y la solución política del conflicto armado, de políticas mediatas aplicadas en un amplio espectro de asuntos y de movilización política y ciudadana como su asunto más determinante. En tal agenda, el tema de la política de reintegración y la búsqueda de su desarrollo coherente con los presupuestos del logro y consolidación de la paz es asunto de interés cardinal.

En tal contexto, la Corporación Compromiso, de reconocido trabajo regional en defensa de los derechos humanos ha realizado con apoyo de la Gobernación de Santander un proyecto de evaluación sobre la situación del conflicto armado, las posibilidades de la paz y el estado del programa de reintegración desarrollado en Santander que resulta de especial interés por cuanto entrega elementos de diagnóstico, revisión de políticas y acciones emprendidas y recomendaciones a tratar. El Centro de Memoria Histórica como parte de la institucionalidad creada a instancias de la Ley 1448 sobre

1- Director de Acuerdos de Verdad del Centro de Memoria Histórica, presidente de la Fundación Cultura Democrática y catedrático universitario.

reparación de las víctimas y restitución de las tierras, se ha hecho presente en la región y acompañó a través de la Dirección de Acuerdos por la Verdad el desarrollo de los foros, contribuyó de manera voluntaria a la revisión de los trabajos de la investigación y prevé el desarrollo actual en Santander y el Magdalena Medio de varias de sus acciones, enfocadas a alentar los trabajos de memoria histórica y la construcción de la verdad desde múltiples y diversas contribuciones. Ha sido ocasión también para destacar y comentar varios de los asuntos tratados en el informe del proyecto de investigación realizado que se titula “El hilo del laberinto”.

Santander y el Magdalena Medio: alto impacto del conflicto armado y la violencia

El informe comentado inicia presentando con cierto detalle los importantes rasgos económicos, históricos y políticos de Santander y del nororiente colombiano. Pone de presente su riqueza natural, energética -en especial petrolera-, agropecuaria y comercial. Su población tiene histórica vocación de trabajo, defensa de la libertad y de la soberanía nacional con relación a los recursos naturales y la nacionalización de la explotación petrolera que dio origen a Ecopetrol. Podemos agregar, tal condición se proyecta hasta el presente con hechos como la movilización social que supo defender recientemente el patrimonio ambiental del Páramo de Santurbán, frente al peligro de su afectación por el proyecto minero de una empresa multinacional.

Santander conjuga una mitad de su territorio como región andina, de la Cordillera Oriental, diversa en climas y recursos, con varios polos de desarrollo industrial y comercial pero también de marcadas diferencias sociales, desarrollo desigual de sus provincias en su mayoría de dedicación agropecuaria y epicentro altamente urbanizado alrededor de Bucaramanga y su área metropolitana. La otra mitad corresponde en cierto grado a la región del valle del Río Magdalena que tiene epicentro en Barrancabermeja; es parte del Magdalena Medio, región cuyo territorio comparte Santander con otros departamentos², su

potencial económico se centra en los hidrocarburos, 70%, cuenta con otros recursos mineros, latifundios ganaderos, empresas agroindustriales especialmente de la palma aceitera y franjas de campesinos medios y pobres que se resisten al empobrecimiento, y una tradicional explotación minera artesanal.

El conflicto armado tiene presencia en territorio santandereano desde sus inicios en los años 60, de forma que todas las guerrillas que consiguieron implantarse en varias regiones del país durante varias décadas desplegaron frentes especialmente en el Magdalena Medio. En particular las Farc y el Eln mantienen presencia hostil hasta la actualidad. De manera paralela a la incursión guerrillera en Santander y el Magdalena Medio existió también desde los años 60 influencia política y social de organizaciones políticas de la izquierda, con especial influencia social campesina en Cimitarra durante los 70, desde donde se desplegó el fuerte movimiento campesino del Carare. Luego también revisten presencia importante dinámicas reivindicativas regionales, sociales y laborales en Bucaramanga, Barrancabermeja y otros municipios. Esta situación precipitó acciones arbitrarias contra tales expresiones sociales y políticas que comprometió a instituciones del Estado y posteriormente a la actuación ilegal de los paramilitares que si bien representaron una reacción inicial de autodefensa ante desmanes violentos de las guerrillas en la región, atacaron de forma masiva y grave a organizaciones sociales y políticas relacionadas con vertientes de la izquierda.

En 1978 Ramón Isaza fundó el núcleo de autodefensa que luego se extendió y consiguió aliados institucionales, de sectores de élite regional y del narcotráfico que dio origen al grupo paramilitar denominado Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, que según varias versiones conocidas tuvo apoyo del Ejército en Puerto Boyacá, a partir de 1983, de la asociación gremial Acdegam y del Cartel de Medellín³. De tal forma, desde inicios de los 80 surgió el llamado paramilitarismo en la región, a partir de la alianza contrainsurgente entre hacendados, élites políticas y gremiales, militares e influjo determinante del narcotráfico que conseguiría

2- Antioquia, Cesar, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Caldas.

3- Ver: La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia, Carlos Medina y Mireya Téllez. Rodríguez Quito Editores. Bogotá, 1994.

luego expandirse a otras regiones y departamentos durante la segunda mitad de los 80. Como parte de tal proceso irrumpió en territorio santandereano el grupo de San Juan Bosco Laverde que se extendió por El Carmen de Chucurí, San Vicente y Cimitarra. Luego surgieron el MAS, los Tiznados y grupos con otras denominaciones eventuales. En este informe se reseña la participación en esta situación de propietarios rurales tradicionales, nuevos propietarios rurales provenientes de las esmeraldas y el tráfico ilegal de coca, militares del Batallón Rafael Reyes de Cimitarra y de la Brigada XIV de Puerto Berrío. Es de recordar que el entonces Ministro de Gobierno, César Gaviria, en 1989, declaró en un debate de control político en el Congreso de la República que existían en el país 140 grupos paramilitares, varios de los cuales afectaban directamente a Santander. Y se recuerda el famoso informe del Procurador General Carlos Jiménez que previamente había precipitado un intenso debate al reseñar una lista de más de un centenar de oficiales y miembros de la fuerza pública comprometidos con el MAS y otros grupos paramilitares, precisamente con epicentro en Santander y el Magdalena Medio⁴.

A mediados de los 80 la situación en el Magdalena Medio fue muy crítica; los campesinos fueron atacados de manera sistemática por los paramilitares por el hecho de convivir y supuestamente apoyar las guerrillas, de manera que sumaron varios centenares las víctimas de homicidio y desaparición forzada y miles la familias desplazadas; la guerrilla mantenía un notorio nivel de hostilidades con la fuerza pública pero a la vez las denuncias las comprometían con frecuentes casos de homicidios fuera de combate de reales o supuestos colaboradores de la fuerza pública así como con secuestros y extorsiones contra los hacendados; las marchas campesinas exigían garantías de vida, acceso a la tierra y otras reivindicaciones; simultáneamente el movimiento obrero y popular en Barrancabermeja demandaba reivindicaciones laborales, sociales y en contra de los atropellos sufridos. A finales de esa década se configuraron varios movimientos sociales de protesta que conjugaron demandas obreras, campesinas, populares y regionales que fraguaron paros y marchas de todo el nororiente colombiano,

al punto que consiguieron diálogos, negociaciones y compromisos de solución en negociación directa con el gobierno nacional. Sin embargo, fueron numerosas las víctimas entre los mismos dirigentes de estas protestas sociales.

Durante la tregua bilateral firmada por el Gobierno Betancur con las FARC, el EPL y el M19, a partir de 1984, tuvo una activa gestión política en la región la Comisión de Paz y al igual que en otras regiones en conflicto irrumpió con particular fuerza la Unión Patriótica y se hizo posible el diálogo y el tratamiento político con estas guerrillas durante varios años, en búsqueda de una solución negociada de la guerra irregular librada. En medio de ello, con labor muy destacada de la Subcomisión Veedora del Magdalena Medio, se suscribió un acuerdo especial humanitario entre autoridades estatales, frentes guerrilleros y voceros de los acuerdos, para evitar el desplazamiento forzado, posibilitar los retornos y cesar las desapariciones forzadas y ataques a dirigentes sociales atribuidas a fuerzas estatales y paramilitares y las extorsiones y secuestros atribuidas a las guerrillas, especialmente a los frentes de las FARC, de mayoritaria presencia en la región⁵. El EPL y el M19 luego pactaron la paz, a instancias de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que expidió una nueva Constitución Política, de manera que estas guerrillas desmovilizaron sus frentes en la región, pero persistieron las hostilidades con los del ELN y las FARC.

Varios estudios -y ahora este informe- concuerdan en afirmar que como reacción a los procesos de paz con las guerrillas se fortaleció una respuesta política opuesta a las reformas políticas y sociales planteadas, lo cual en buen grado se sustentó en la expansión del fenómeno paramilitar en varias regiones de tradicional presencia guerrillera y de particular influencia de los proyectos políticos de la izquierda⁶.

Se recuerda además que a mediados de los 90 las Convivir⁷ no cumplieron su función formalmente establecida, de vigilancia y control comunitario, sino que sirvieron de acicate al paramilitarismo, de manera que contribuyeron directamente a la consolidación y

4- Los documentos del procurador, 1982-1986. Carlos Jiménez Gómez, tomos I, II y III, Editorial Retina. 1987.

5- Ver: Tregua y Cese al Fuego Bitateral, FARC, EPL, M19 y ADO. Álvaro Villarraga (compilador). Fundación Cultura Democrática. Biblioteca de la Paz, 1982-2002, Bogotá, 2009.

6- Ver: Paramilitares y Autodefensas, 1982-2003, Mauricio Romero, IEPRI, Editorial Planeta, Bogotá, 2003.

7- Cooperativas de seguridad creadas mediante el Decreto 356, del 11 de febrero de 1994.

surgimiento de varias de sus estructuras en distintas regiones. Contaron con armamento bélico y actuaron en coordinación con la fuerza pública. En 1997 Human Right Watch en un informe afirmó que las Convivir, en el Magdalena Medio y en el sur del Cesar, estaban dirigidas por los paramilitares y que en Santander patrullaban con el Ejército. La V Brigada del Ejército creó la Convivir Las Colonias de Lebrija. Ese mismo año la Fiscalía General de la Nación adelantaba investigaciones contra más de 35 integrantes de las Convivir y la Corte Constitucional declaró parcialmente inconstitucional el decreto de su creación, con el cual buscó evitar que se dedicaran a actuaciones de inteligencia y que portaran material bélico restringido a las Fuerzas Armadas.

Las regiones consideradas fueron, por años, el primer y el principal escenario de la “guerra sucia” generalizada que propició el paramilitarismo durante los años 80. Serían muchos los casos destacados a referir, pero basta recordar situaciones como el exterminio sistemático de la UP que incluyó a valiosos parlamentarios y dirigentes de la región como Leonardo Posada; los ataques reiterados a los líderes sociales, entre ellos de la USO –Manuel Chacón entre muchos otros- y dirigentes de los trabajadores palmeros con centro en San Alberto (Cesar). Los casos del profesor Isidro Caballero y de María del Carmen Santana desaparecidos por sospecha de colaboración al M19⁸; las masacres de los 19 comerciantes, la de los funcionarios judiciales en La Rochela⁹, el asesinato de la periodista Silvia Duzán del CINEP y de los valerosos dirigentes campesinos de la ATCC que gestaron la resistencia pacífica y civilista frente a todos los actores de la guerra. Sin embargo, pareció no ser suficiente ante tales hechos la expedición de la Constitución Política de 1991 puesto que en el curso de esta otra década se profundizaron ataques contra las bases sociales campesinas que se suponían de apoyo a las FARC y ELN, hasta llegar a la horrenda y masiva masacre de pobladores de Barrancabermeja en 1998,

tras señalamiento de que supuestamente tenían nexos con milicias urbanas del ELN y el EPL¹⁰.

El relativo y complejo proceso de desmovilización de las AUC en Santander

En Santander los paramilitares se desplegaron por el río Magdalena, la troncal del Magdalena Medio y el río Carare-Opón, hasta llegar a las provincias de Vélez, Guanentá, Comunera y García Rovira. En los primeros años 2000 existían estructuras asociadas a las AUC en el Magdalena Medio y Santander tras haber sometido durante el lustro anterior a los grupos paramilitares locales, se presentó una reconfiguración regional liderada por los alias ‘Macaco’, Julián Bolívar y Ernesto Báez, al frente del Bloque Central Bolívar, con estructuras del sur de Bolívar, sur del Cesar, Magdalena Medio y Santander. Por su parte, las ACMM persistieron con cierta autonomía pero a la vez asociadas a las AUC. En la llamada parapolítica, irrupción de fuerzas políticas que capturaron poder estatal con apoyo en la acción violenta de los paramilitares en la región, las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia dan cuenta del procesamiento a dirigentes políticos y parlamentarios de los partidos Convergencia Ciudadana, Liberal y Conservador y al ex Gobernador Aguilar, ex militar, que ejerció entre 2003 y 2007.

Luego de desmovilizadas las estructuras de las AUC en Santander, entre 2005 y 2006, que se produjeron principalmente en departamentos aledaños dada su movilidad regional a través del Magdalena Medio, permanecieron algunos grupos en armas y se configuraron violaciones al cese al fuego que repercutieron en la prolongación de las acciones violatorias a los derechos humanos dirigidas contra la población. Sin embargo, de manera general se redujeron los espacios de dominio paramilitar en Santander y se registraron niveles de recuperación institucional en varias provincias. Pero así mismo,

8- El caso Caballero y Santana, Colombia en la Corte Interamericana. Comisión Andina de Juristas, Sección Colombiana, segunda edición, Bogotá, 1994.

9- La Rochela, memorias de un crimen contra la justicia, Informe del Grupo de Memoria Histórica de la CNRR. Taurus, Fundación Semana, CNRR-GMH. Bogotá, 2010.

10- En Barrancabermeja el ELN tenía notoria presencia urbana y el EPL aunque había firmado la paz surgió una disidencia armada que intentó reconfigurar varios de sus frentes, por lo cual mantenía milicias urbanas y rurales que de manera dramática asesinó a varios ex militantes del propio EPL, en municipios del Magdalena Medio, quienes estaban en la vida civil y en actividad política legal en cumplimiento del pacto de paz, al considerarlos “traidores a la revolución”. Ver: Los derechos humanos y el derecho humanitario en los procesos de paz, 1990-2000. Fundación Cultura Democrática-DGR. Bogotá, 2001.

han pervivido nichos del anterior poder paramilitar conjugado ahora con los rearmes y la configuración de los nuevos grupos armados ilegales posteriores a las AUC, que al igual que en otras regiones del país, establecen disputas por las herencias de tierras, negocios ilegales –entre ellos el narcotráfico– y legalizados y el aprovechamiento de poderes sociales y políticos consolidados mediante la coerción violenta, de forma que esto explica que a partir de 2008 de nuevo se incrementaron ciertas violaciones en la región como el desplazamiento forzado.

Entre otros aspectos, las AUC, con deliberado interés se presentaba como una fuerza irregular contrainsurgente organizada, pero que nunca fue una organización consolidada ni unificada, sino que sufrió permanentes disputas incluso violentas, aún en el trascurso de la negociación con el Gobierno, al punto que se recuerda en este informe de la Corporación Compromiso que realmente el gobierno Uribe, a través de su Alto Comisionado para la Paz, dialogó y negoció ciertos términos con cuatro estructuras distintas y paralelas: las AUC, el BCB de especial interés para la región considerada, la Alianza Oriente y las ACMM, con impacto también en la región. A lo que podríamos agregar que incluso con otras estructuras como las ACC, el Bloque Cacique Pipintá y el Frente Resistencia Wayúu, se intentó el diálogo y la negociación pero no se consiguió, de forma que prologaron sus actuaciones armadas y delictuales en distintas regiones del país.

Como parte del debate actual y coincidiendo con argumentos del informe comentado podemos afirmar que el proceso de desmovilización de las AUC tuvo una desventaja estructural y fue afectado por múltiples inconvenientes que llevaron hasta el cambio de sus términos, al haberse desarrollado sin respaldo en un acuerdo nacional e incluso sin un mínimo consenso político. Hecho que se hizo patente en los debates de control político y en los del marco jurídico, de forma que la mayoría gubernamental se impuso, en contra no sólo de distintas oposiciones políticas partidistas sino de sectores de opinión, entidades de derechos humanos, organizaciones de víctimas y entes de la comunidad internacional que presentaron posturas críticas y propuestas alternas, hecho que afectó a la misma coalición gubernamental, la cual antes que concertar propició desertiones a su seno de congresistas importantes. Este informe hace alusión a la ausencia de diálogo y consenso en el desarrollo

de la iniciativa gubernamental para el proceso con las AUC, lo cual se relaciona con el nivel de rechazo que produjo y las posturas negativas que trascendieron luego hacia el programa de reintegración y los propios desmovilizados.

Sobre el carácter del acuerdo con las AUC se afirma en el informe que fue finalmente de aplicación unilateral de un proceso DDR, en términos “no de un acuerdo de paz sino de entrega de armas y desmovilización”. A ello podemos agregar que efectivamente no eran dos contrincantes en la guerra (el Estado y los paramilitares) sino dos expresiones de la contrainsurgencia, que como lo revelan las versiones libres de Justicia y Paz por lo regular actuaban con formas de coordinación o permisividad en distintas regiones. Resulta loable por tanto la medida de desmontar la expresión armada del paramilitarismo tanto para la causa de los derechos humanos como para la generación de condiciones hacia la paz. Sin embargo, por diversos factores que no sería del caso detallar aquí, entre ellos la rectificación del marco legal hecha por la Corte Constitucional, la reacción de la justicia ante el altísimo nivel de impunidad y la reacción de diversos sectores de opinión interna e internacional, se produjo una senda distinta en el curso del proceso con las AUC, más allá de la orientación y decisión presidencial, de forma que se tornó principalmente en un proceso de sometimiento a la justicia que reivindica los derechos de las víctimas y de acogimiento paralelo a los compromisos del DDR de buena parte de los integrantes de estructuras paramilitares. Además, las AUC –a diferencia de las guerrillas insurgentes– se reveló incapaz de tramitar una agenda política, de forma que sus propuestas se redujeron a la búsqueda de beneficios jurídicos ante los graves crímenes cometidos y la no extradición ante cargos de narcotráfico.

El diagnóstico de este informe coincide con otros al explicar las resistencias, parcialidades y notorias dificultades del proceso con las AUC, en medio del complejo escenario de persistencia del conflicto armado, no tratamiento ni superación del tema del narcotráfico –consustancial al fenómeno paramilitar–, parcialidad e irregularidad en las desmovilizaciones, altos niveles de reincidencia en acciones delictuales por parte de desmovilizados, persistencia de estructuras armadas y advenimiento de nuevos grupos armados ilegales liderados por ex miembros de las AUC –no desmovilizados o desmovilizados– y malestar en sectores de la población

ante la no atención debida para con las víctimas, las comunidades afectadas y los pobres históricos, a la vez que se resienten por el alto nivel de apoyo y atención que perciben hacia los desmovilizados, vistos con desconfianza por las circunstancias referidas y por tratarse con frecuencia de los propios perpetradores de las más graves violaciones sucedidas y que al menos en parte continuaron con las mismas prácticas ilegales.

Resulta al respecto interesante el análisis hecho en el informe sobre los grupos armados que persisten con posterioridad a las AUC, de forma que se especifica su presencia en la región y sus relaciones con asuntos como el narcotráfico y el microtráfico, la seguridad privada ilegal, la penetración en negocios legales e ilegales y el control –cooptación o ataque– a las bandas delincuenciales, además de prolongar formas de coerción social y penetración, utilización de funcionarios y estructuras estatales en beneficio de sus objetivos, así como de mantener ciertas alianzas y redes tras propósitos compartidos –desde la ilegalidad–, con fracciones políticas y de determinadas élites gremiales y locales. Tal interpretación se relaciona con la consideración de las disputas territoriales y de las expresiones de la economía de guerra que han adoptado los grupos armados ilegales. Se reconoce entonces con validez que en el ámbito nacional se han impuesto los grupos llamados Urabeños y Rastrojos, que incluso consiguen penetrar zonas de presencia de los otros dos significativos Los Paisas y el ERPAC. Precisamente, en esta región se expresa la expansión de los primeros en zonas de Los Paisas, mientras que obran alianzas hacia las expresiones más regionales de las “Águilas Negras” y los “Botalones”.

Sobre estos grupos armados ilegales posteriores a las AUC se argumenta que más allá de una apuesta contrainsurgente, como en cierto grado la expresaron agrupaciones del anterior paramilitarismo, configuran ahora una “apuesta para el control territorial en términos económicos”, con relación a megaproyectos previstos, cultivos de uso ilícito y mantenimiento a su favor de estructuras económicas, de coerción social y políticas que impuso el anterior paramilitarismo. Pero también se advierte que lo anterior no indica el abandono de expresiones con sentido antisubversivo

como las amenazas y ataques contra líderes sociales, opositores de izquierda, defensores de derechos humanos y líderes de las víctimas, tal como se presenta de manera reiterada en Santander, Magdalena Medio y otras regiones¹¹.

Entre los grupos posteriores a las AUC y relacionados con el anterior paramilitarismo registra el informe el caso de los “Botalones” en el Magdalena Medio, dedicado al contrabando, la explotación ilegal de hidrocarburos y el narcotráfico. El de las “Águilas Negras” con actuaciones similares y la penetración con propósitos de expansión y alianzas o sometimiento de los anteriores de los “Rastrojos” y de los “Urabeños”. Se deja entrever en el análisis que si bien estos grupos posteriores a las AUC no tienen la dimensión ni el impacto en Santander que tienen en otros departamentos, su actuación no es ajena a las características de expansión y posicionamiento o disputa territorial. A la vez, en el contexto del conflicto armado, señala la persistencia de frentes guerrilleros de las FARC y del ELN, de forma que en cierto grado se expresa también la dinámica de cierta retoma de iniciativa por parte especialmente de las FARC.

El informe destaca la presencia de GAI pos AUC en varios municipios de Santander pero especialmente hacia el Magdalena Medio, con dinámicas de control de enclaves regionales, asociados al narcotráfico, al contrabando y a la explotación de otros renglones económicos desde su actuación ilegal. Especifica que el acceso a las ciudades busca formas de legalización de los capitales ilegales, a la vez que mantienen lugares rurales controlados por el rol de tales negocios –ilegales y legalizados– y el de zonas de refugio y de “reposo de sus jefes”. Se especifica que en Barrancabermeja se han presentado disputas recientes entre Rastrojos y Urabeños, de forma que tienden a imponerse los primeros, con proyección hacia el reconocido triángulo Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío, en alianza con los “Botalones” y las “Águilas Negras”. Entre tanto, se señala que los “Urabeños” lograron penetrar Barrancabermeja, el bajo Rionegro y conectarse con otras subregiones. Se analiza que tales circunstancias se mantienen, a pesar de los golpes propiciados por la fuerza pública a varios de los jefes e integrantes de estos grupos, siendo

11- Ver: informes del Observatorio de Derechos Humanos del Nororienté, Corporación Compromiso y los boletines periódicos del Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio –OPI–.

varios de los capturados reconocidos ex miembros de las AUC –desmovilizados o no desmovilizados–.

Se pone de presente que estos grupos logran infiltrar y en ocasiones cooptar instancias oficiales, situación evidenciada en hechos como la captura de varios integrantes de la Policía y el Ejército en 2011, que incluyeron altos mandos, señalados por la Fiscalía de estar al servicio de los “Botalones”, recibiendo pagos en dinero y en “especie” que incluían “favores sexuales” con niñas -menores de edad-, prestarse para perseguir servidores públicos por actuar con honestidad, e impedir o advertir sobre operativos estatales contra este tipo de grupos ilegales. También se hace referencia a un informe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga¹², que explica la reconfiguración de las redes delincuenciales a partir de la alianza entre desmovilizados de las AUC y bandas delincuenciales, de forma que para 2010 habían llegado los “Rastrojos”, y entre las acciones que los comprometen sobresalen homicidios, amenazas, extorsiones, porte de armas de fuego y redes de microtráfico. En tal contexto, se relaciona la captura de 21 desmovilizados en varios municipios de Santander, la pérdida de beneficios de la reintegración por otros 29 y la suspensión de los mismos a otros 8, con motivo de las investigaciones y procesos judiciales que los afectan por su presunta participación en tales hechos delictivos.

Con referencia a la aplicación de la Ley 975, principal marco legal del proceso con las AUC, el informe coincide con valoraciones críticas ante ineficiencia en logros referidos a la justicia y la reparación de las víctimas, a la vez que los aportes a la verdad se restringieron tras la extradición a los Estados Unidos de la mayoría de los principales jefes paramilitares. No obstante, al igual que otras opiniones se reconocen avances en términos de revelaciones favorables al esclarecimiento aportado por paramilitares postulados y ante la labor de la FGN que consigue altas cifras de revelación de delitos, de confesiones, de víctimas inscritas y participantes en audiencias así como la revelación de fosas e identificación de un margen alto aunque aún parcial de las víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, llama la atención la opinión con referencia a la Unidad de Justicia y Paz de Bucaramanga, que tiene

a cargo la investigación del BCB y el Frente Hector Julio Peinado, cuando se afirma que “los paramilitares que han actuado en Santander han sido los más renuentes a dar información y ha sido evidente su total negativa a colaborar con la justicia”.

Caracterización socioeconómica de la población en proceso de reintegración

El informe aborda el estudio de la situación de la población desmovilizada en materia económica, social, de su situación en atención de salud, educación, vivienda y condiciones de seguridad, con base en una muestra significativa considerada a partir de la colaboración ofrecida por la ACR, a través de sus Centros de Servicios en Bucaramanga y Barrancabermeja. Se incluyó una cobertura de 11 municipios, se realizaron entrevistas con 178 desmovilizaciones vinculados a los programas de reintegración que permitieron la resolución voluntaria de una encuesta, del total de 1.449 en Santander que incluye 248 mujeres. También menciona que se contó con la colaboración de la MAPP OEA, que como es conocido desde la desmovilización realiza seguimiento y acciones de acompañamiento al proceso de reintegración.

De los desmovilizados considerados el 79% procedían de estructuras de la AUC, el 14% de las FARC y el 7% del ELN. La mayoría de los desmovilizados se concentra en los municipios de Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, El Carmen de Chucurí y Rionegro. Tienden a ubicarse en las principales ciudades tanto en busca de oportunidades económicas, laborales y de capacitación como por motivos de seguridad. El estudio encuentra así una mayoría con ubicación urbana, 75.5%, y una minoría en regiones rurales, 24.7%, en pequeños municipios de donde son oriundos o tienen nexos familiares. El perfil socio-demográfico muestra una gran mayoría, 92.76%, en el rango entre 18 y 46 años, que corresponde a población económicamente activa, a la vez que el marcado predominio de la población joven. Aún presentan problemas de documentación un 10%; el 63% tienen pareja estable y familia constituida y 32% están solteros; a la vez un 20% viven solos y un 17% en casa de familiares.

12- Entregado en 2012 a la Corporación Compromiso, tras solicitud hecha por esta entidad de información relativa al desarrollo de la investigación realizada.

Resulta revelador que el 36% ingresó siendo menor de edad, de forma que el 6% lo hizo entre los 8 y los 12 años y el 30% entre los 13 y los 17 años. A la vez, el 40% ingresó siendo joven, considerados hasta los 27 años. Entre las motivaciones de ingreso en el 33% están las económicas, el 16% por las armas y el poder, el 15% por venganza, el 12% por influencia en la localidad del grupo armado ilegal, el 10% por abandono y violencia intrafamiliar y el 7% de manera forzada. Es de advertir que ahora se considera el ingreso de todos los menores de edad como una situación forzada por las circunstancias tanto subjetivas de ellos como objetivas de los mecanismos diversos de presión existente y el denominador común de victimización producido, lo cual amplía las formas de reclutamiento forzado y utilización de menores para la guerra. Entre tanto, en los jóvenes predomina la vinculación por interés económico, incluso algunos reconocen que no por falta de otras oportunidades sino por ser mejor opción de ingreso económico, lo cual indica -dada la composición mayoritaria de desmovilizados procedentes del paramilitarismo-, síntomas de conformación mercenario de estos grupos. Al respecto el 42% de quienes ya eran adultos reconoció que se había vinculado por motivación económica.

En los casos de vinculación de las mujeres se encontraron revelaciones de situaciones dramáticas como las del dilema manifestado como “me acosaban mucho y tenía dos opciones: la prostitución o vincularme al grupo armado”. En ellas también se encontraron al momento de la vinculación motivaciones como la cercanía a los jefes de los grupos armados ilegales, la búsqueda de “hacerse respetar”, “poder hacer lo mismo que los hombres” y la reacción ante los atropellos y la violencia intrafamiliar. También se registran casos de reclutamiento forzado a partir de amenazas del grupo armado que incluían posibles represalias contra sus familias, de forma que algunas personas aceptaban la vinculación “para evitar que se llevaran a los hermanos y hermanas menores”. Así mismo, se conocieron tipos de casos referidos en otros informes como los del engaño utilizado por los paramilitares con referencias a supuestos trabajos donde iban a “ganar buena plata”. Resulta a la vez dicente que sólo el 3% de los entrevistados hizo referencia a la motivación política para la vinculación.

El tiempo de permanencia en los grupos armados osciló entre unos meses y 30 años, pero el 50% está en el rango entre uno y cinco años. Entre los motivos de la desmovilización los ex paramilitares mencionaron en su orden en un 51% los acuerdos con el gobierno, en un 25% deseo de retornar con la familia, 22% cansancio ante la violencia y el 2% ante la captura. Para los desmovilizados de las guerrillas, que desertaron voluntariamente, pesan más los porcentajes sobre deseo de retornar a la familia y el cansancio ante la violencia.

Sobre las condiciones de vida actuales de los desmovilizados en proceso de reintegración en materia de vivienda se expresó que no había oferta en los programas ofrecidos; la mayoría vive en arriendo (57%), otros en invasiones o inquilinatos (17%), algo menos son los que han conseguido vivienda propia (14%) y luego se registran los que viven con familiares (12%). Varias entidades les han proporcionado programas de vivienda y en los últimos años la ACR considera la opción de vivienda entre desembolsos equivalentes a planes de negocios o ingresos, siendo en Santander 12 los casos registrados.

Se valora que la educación ha jugado un papel central en la reintegración pero se afirma que en 2002 el Programa de Reincorporación a la Vida Civil de las personas desmovilizadas “retomó el tema educativo de anteriores experiencias de reinserción desarrolladas en el país”, ante lo cual podemos discutir tal afirmación, por cuanto el programa de validación de bachillerato, orientado hacia valores ciudadanos, la resolución constructiva de los conflictos y la paz, de la reinserción de los 90 que tuvo vigencia hasta 2002 y soporte en un decreto, reconocimiento del Ministerio de Educación, numerosos convenios con municipios que concurrían con recursos y valiosas experiencias de proyección comunitaria y participación de sectores vulnerables... fue totalmente desechado, como lo fue en su momento el conjunto de la experiencia. Por el contrario, se procedió a crear “desde cero” una nueva iniciativa, sin aprovechar esta experiencia que llegó a ser valorada como la más significativa de la reintegración de los 90¹³. Posteriormente, la ACR al reformular el programa de reintegración concedió prioridad al acceso de los desmovilizados al tema educativo formal y a capacitación laboral.

13- Ver: La reinserción en Colombia: Experiencias, crisis humanitaria y política pública. Álvaro Villarraga (editor). Fundación Cultura Democrática-Asopropaz. Bogotá. 2006.

Entre los entrevistados en Santander el 48% estaba estudiando, el 22% había culminado estudios y el 17% buscaba iniciar otros procesos educativos o de capacitación. El Sena y varias universidades sobresalen con sus aportes, existen convenios con autoridades locales y los desmovilizados también valoran la contribución en procesos de formación ciudadana promovidos por la ACR de entidades como el mismo Sena, Cajasan, Ceta y varias alcaldías.

El mayor obstáculo señalado por los desmovilizados entrevistados se manifestó en la posibilidad de ingreso y de permanencia de las mujeres ante su rol laboral y de responsabilidad familiar y de atención a los hijos. Y entre las consideraciones críticas expresadas están la concordancia entre ofertas de capacitación y posibilidades laborales reales, la falta de horarios adecuados ante la condición de ser trabajadores y estudiantes, el no tratamiento de altos niveles de deserción, la no facilitación en las empresas donde laboran de permisos para estudio y el temor a la estigmatización.

En lo relativo a las actividades económicas en búsqueda de ingresos y la empleabilidad se puso de presente la existencia de limitaciones y notorias dificultades. Las escasas opciones laborales y sus términos precarios, con alto volumen de informalidad y riesgo de rechazo y estigmatización. El 60% se ubica en trabajos de baja calificación; el 34% en trabajos de dependientes, operarios, vendedores o vigilantes y escoltas; y el 6% en labores productivas del campo, por lo regular con ingresos que no superan el salario mínimo legal vigente. La MAPP OEA en sus informes ha expresado que estas condiciones son un riesgo para los procesos de reintegración socio económica. Por su parte, sobre los planes de negocios se reporta que entre 2004 y 2010 el Gobierno les dio respaldo con 1.413 millones de pesos que permitió apoyar distintas iniciativas. Sin embargo, en la investigación Compromiso no se logró información sobre el estado de los proyectos con la ACR y si bien los desmovilizados reconocen el apoyo oficial recibido manifiestan que los proyectos tienen problemas de sostenibilidad, acompañamiento y asesoría, falta de apoyo del sector privado y ausencia de oportunidades laborales.

En materia de salud los desmovilizados y sus familias son vinculados al régimen subsidiado, a través del Sisbén en los municipios, de forma que en Santander lo están 1.204, reconocidos en los estratos 1 y 2, mientras

que 450 cotizan en el régimen contributivo, al contar con vinculación laboral. No obstante, el servicio de salud tiene “dificultades de calidad y oportunidad” según el estudio referido, el cual especifica que no existe atención para patologías frecuentes en esta población como las derivadas del consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, para personas con discapacidad y con enfermedades de salud mental. Sobre la atención sicosocial, orientada a conseguir de los desmovilizados relaciones asertivas, solución no violenta de los conflictos y ejercicio de sus deberes y derechos, se encontró que asisten de manera regular y voluntaria un 37.8%. Una parte de ellos valoran lo conseguido y otros estiman que no les aportan lo necesario a sus problemáticas, por cuanto señalan que las sesiones se tornan repetitivas, genéricas y carentes de personal especializado. También se discute la dificultad para cumplir los horarios, el costo del transporte desde áreas rurales y la no garantía de atención individual en casos que requieren tratamiento confidencial.

En lo referido al ámbito organizativo y comunitario la investigación pone de presente que la mitad de los entrevistados manifestó resistirse a procesos organizativos y de proyección comunitaria y social, en busca de bajo perfil ante el temor al rechazo y la estigmatización. También advierten sobre riesgos de seguridad al incursionar públicamente en lugares donde actúan grupos ilegales y bandas. Expresan que existe hacia ellos “profunda desconfianza de las comunidades”. Se valora que los proyectos de reintegración comunitaria, aunque positivos, por lo regular no consiguen mayor impacto social y comunitario en tales condiciones.

En seguridad desde 2008 se implementa el Plan Padrinos por parte de la Policía Nacional que brinda acompañamiento a las actividades de los desmovilizados participantes en los programas de reintegración. Según la encuesta aplicada el 52% manifestó sentirse seguro, el 37.6% inseguro y el 6.2% en alto riesgo, a partir de señalar en este caso amenazas y presiones desde grupos armados ilegales. Estas situaciones se refieren principalmente en Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca, Rionegro, El Carmen de Chucurí, San Vicente, Girón y Piedecuesta. De los afectados sólo el 32.9% ha recibido algún tipo de protección que el 67.9% afirma no haber recibido.

Sobre la reincidencia resulta indicativo que el 39.4% de los desmovilizados en proceso de reintegración entrevistados haya recibido propuestas de grupos armados ilegales o de bandas delincuenciales para integrarse a sus actividades criminales. Revelan que con frecuencia les ofrecen ingresos mensuales del orden del millón de pesos o algo más y que la negativa a acceder les ocasiona problemas de seguridad y traslados con sus familias. Al igual a lo discutido por el II Informe sobre DDR de la CNRR, de 2010, es de advertir que esta situación no puede concebirse como simple traslado por riesgo sino que discutimos que es preciso reconocer que configura casos de desplazamiento forzado, que debería reconocerse y tratarse en tales términos.

Incentivar el debate constructivo sobre política de paz y reintegración

Se hace eco a la positiva discusión actual en el orden nacional hacia retomar una política de paz, explorar nuevas opciones para la salida negociada del conflicto armado y sumar todas las experiencias constructivas hacia la paz, incluidas entre otras las derivadas también de los procesos DDR. Podemos decir que desde Santander se han enseñado precedentes por la paz valiosos como el Movimiento contra la Guerra y por la Paz de los años 90 liderado desde San Gil por la Diócesis de la Iglesia Católica. La Asamblea Municipal Constituyente de Mogotes que fue pionera y modelo para otras experiencias en varios departamentos. El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, también pionero y valiente experiencia que desafió la guerra, los intentos violentos de acallarlo y entrega abonados importantes, con respaldo y apoyo en la base social. Y, entre otras la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la cual al igual que la anterior, han sido merecedoras del reconocimiento del Premio Nacional de Paz. Redepaz, la Asamblea Permanente por la Paz y diversas organizaciones han hecho lo propio y lo siguen haciendo.

Es constructiva a la vez la postura del informe al alentar, a propósito de la ineficacia por sus resultados de la

Ley 975 de Justicia y Paz, el debate sobre su posible reforma; el debate a partir de la propuesta de la FGN y de otros sectores hacia reestructurar la metodología de investigación hacia las causas y motivaciones de los hechos violatorios, el esclarecimiento de las dinámicas de violencia, patrones de conducta, estructuras institucionales e irregulares responsables, y complicidades con la realización y facilitación de los crímenes. Asimismo, se alienta el esfuerzo que con base en la Ley 1424 de 2010 compromete la realización de Acuerdos de la Verdad con población desmovilizada de las AUC, como ejercicio de construcción de verdad, satisfacción de las víctimas y aportación a la memoria histórica.

En la actualidad Santander, para 2010, muestra fortalezas regionales como la de ocupar en el país el tercer puesto entre los departamentos con relación al PIB, con destacada presencia de diversos renglones económicos¹⁴. Registra las tasas de desempleo más bajas. Pero así mismo, pesan la informalidad, la precariedad extendida en las condiciones de trabajo, la inequidad social y la pobreza y la indigencia, más notorias en las provincias de Mares, García Rovira y Vélez¹⁵. Sigue así mismo la tensión referida entre niveles de superación territorial del conflicto armado pero persistencia de él en otras zonas y secuelas de ilegalidad y debilidad institucional estructural aún no superada hacia el conjunto del territorio y en atención a las garantías constitucionales hacia el conjunto de la población.

En los intercambios con Compromiso consignamos el desarrollo positivo de otras discusiones generadas a partir de esta experiencia y de las lecciones que nos entrega la región. Referimos, entre otros asuntos, a la necesidad de profundizar en conceptos del DIH más a tono con nuestras circunstancias. Resulta discutible seguir afirmando, como se hace con frecuencia, que el contexto de conflicto armado colombiano es “cada vez más complejo y degradado”, pues si bien persisten frecuentes y sistemáticas violaciones que comprometen a las partes, no necesariamente ese es el panorama actual y el previsible por varios factores. Entre ellos, por ejemplo, el alto costo

14- Servicios 29%, industria 28%, comercio 11%, construcción 10%, transporte 7.7%, sector agropecuario 7.5% y minero 5.7%.

15- Mientras que el índice de NBI –Necesidades Básicas Insatisfechas– es de 14.3% en la Provincia de Soto que incluye a Bucaramanga y municipios del epicentro del departamento, en la Provincia de Vélez es de 28.5%.

político –internacional e interno- de las ejecuciones extrajudiciales masivas (falsos positivos) y los procesos judiciales que comprometen a fuerza pública. A la vez, el repliegue de las guerrillas y la alta tensión por los continuos operativos y confrontaciones han evitado la ocurrencia masiva anterior de varios tipos de infracciones, además de que por primera vez las FARC ofrecen un compromiso unilateral de no toma de rehenes civiles con fines extorsivos, a lo que se suma el alto rechazo social a los secuestros. Resulta también discutible plantear la posibilidad de una fase próxima de recrudescimiento del conflicto armado, en términos “otra espiral de violencia”, por cuanto puede afirmarse que han cambiado condiciones estratégicas en la relación de fuerzas, no existen posibilidades sociales, políticas ni militares de recuperación general de la insurgencia ni retoma de iniciativa al punto de cambiar la relación de fuerzas estratégicas ahora de desventaja. A la vez, la dinámica militar del paramilitarismo sufre debilitamiento estratégico y sus expresiones actuales, aunque logran cierto despliegue, tienen alto nivel de degradación delincriminal.

Conclusiones y recomendaciones presentadas

El informe de la Corporación Compromiso con el derecho insiste en consolidar para los programas de

reintegración un horizonte de paz y reconciliación. Analiza la parcialidad de los logros conseguidos y los riesgos de los procesos de DDR en contextos de conflicto armado, narcotráfico y persistencia de grupos armados ilegales, incluso posteriores a las estructuras de las AUC que buscan mantener dominios propios del fenómeno paramilitar. Señala que la labor del Estado se ve afectada por su fragmentación, de forma que coexiste su expresión democrática bajo presupuestos constitucionales democráticos con poderes ilegales asociados al paramilitarismo y la llamada parapolítica. Critica el bajo perfil y centralismo en las políticas y los programas de reintegración. Avala la importancia de correlacionar la reintegración con la defensa de los derechos de las víctimas y con los trabajos por el rescate de su memoria histórica. Agrega además, una serie de recomendaciones particulares a tono con las problemáticas, falencias y situaciones descritas en cada una de los tópicos referidos de la reintegración. Vale agregar que la positiva reivindicación del enfoque de género debería tener más implicación hacia la necesidad de políticas diferenciales y medidas afirmativas, que se extiendan también a otros temas de consideración diferencial por edad, etnia y condiciones de discapacidad y alta vulnerabilidad.

Bogotá, DC, agosto 6 de 2012.

PREÁMBULO

El prolongado conflicto armado interno que ha sufrido la sociedad colombiana, tiene en Santander un escenario de primer orden para explorar nuevos intentos de paz y reconciliación a partir de un examen participativo a los procesos y políticas adelantadas en la región comprometidas en el éxito del desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida civil y comunitaria, DDR, de las personas y grupos armados organizados al margen de la ley.

Cincuenta años de confrontaciones y guerra fratricida llama la atención de expertos, comunidad internacional y de la misma sociedad acerca de las dificultades que tenemos los colombianos para encontrar caminos de entendimientos democráticos en medio de diferencias, frustraciones repetidas en intentos de lograr la paz duradera y sostenible reclamada por todos.

En los últimos años diferentes instituciones y personalidades de la comunidad internacional han formulado recomendaciones acerca de enfoques y políticas que pudieran avanzar en la superación del conflicto armado interno y su doloroso impacto en la vida de familias víctimas, el tejido social y los costos sociales que factura la guerra.

Cobra primordial importancia en el actual momento que vive el país, la pertinencia del análisis sobre el DDR, como una política de desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil de los ex miembros de diversos grupos armados¹⁶, de guerrillas, paramilitares y autodefensas, mediante negociaciones, acuerdos colectivos o desercciones individuales. Las estadísticas oficiales reportan en estos procesos desde período 2002 a 2012, a 31.810 personas desmovilizadas de manera colectiva y 22.507 desmovilizaciones individuales especialmente guerrilleros de las Farc y del Eln.

Según la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR, adscrita a la Presidencia de la República, entre agosto de 2002 y octubre de 2010, 54.317 personas se desmovilizaron (el 59% producto de las negociaciones de paz con las Autodefensas). De ellas, 1418 son atendidas por la ACR en Santander.

16- En la década de los 90 y la primera década del siglo XXI, se adelantaron procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración DDR con el M-19; Epl; Partido Revolucionario de los Trabajadores; Quintín Lame; Corriente de Renovación Socialista; Milicias populares y el Movimiento Independiente y Revolucionario-Comandos Armados; el sometimiento a la justicia y la desmovilización parcial de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y los paramilitares de Carlos Castaño, y también se presentaron desvinculaciones y desmovilizaciones individuales de los grupos armados.

En cuanto a la política de reintegración, en diciembre de 2008 se aprobó el Documento Conpes 3554, que permitió articular los esfuerzos de 13 entidades de gobierno y estableció para su seguimiento bianual una matriz con 16 metas que buscan institucionalizar la Reintegración como herramienta de paz. Antes, en septiembre de 2006 el Gobierno Nacional crea la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración; posteriormente en el gobierno de Juan Manuel Santos, en 2011, se transforma en la Agencia Colombiana para la Reintegración.

La Agencia Colombiana para la Reintegración –ACR– es la encargada de diseñar, ejecutar y evaluar la política de Estado dirigida a la reintegración social y económica de las personas o grupos armados al margen de la ley, que se desmovilizan voluntariamente de manera individual o colectiva.

Una mirada de la ACR sobre su propio proceso y recorrido permite acercarse a esa institución, poco conocida en el panorama social:

“En los últimos años, se ha visto la efectividad de las desmovilizaciones para desarticulación de los grupos ilegales alzados en armas. Si bien las capturas y dadas de baja de estos miembros consolidan la legitimación del Estado de Derecho y del monopolio de la fuerza en manos del Estado, la Desmovilización legitima el Estado Social de Derecho al reconocer las causas estructurales del conflicto interno armado y al enfocar acciones encaminadas a la superación de condiciones de vulnerabilidad rompiendo, de esta forma, esos círculos de violencia que por décadas han azotado a nuestro país. Lo anterior bajo un marco de reparación, reconciliación y respeto a las víctimas”¹⁷.

Sin duda que compartir hallazgos, lecciones y análisis sobre los procesos, además de identificar debilidades en los marcos teóricos, técnicos y políticos de estas experiencias construidas, puede acercar a nuevas visiones de intervención y a los requisitos de consenso social que presuponen la legitimidad y respaldo de la sociedad al marco normativo de la reconciliación y la paz.

Un lugar social, político, plural y democrático indaga por las responsabilidades de las instituciones y de la sociedad civil, de todos nosotros, frente al país y de cara a las próximas generaciones, acerca del tipo de sociedad que estamos construyendo como entorno vital para el desarrollo integral y la vida digna de todos los colombianos y colombianas. Esta indagación está en las preguntas por las transformaciones políticas, sociales, culturales o económicas que suponen el reconocimiento de las causas del conflicto y su perspectiva de reconciliación y no repetición.

Sin embargo, el conflicto cada vez más complejo y degradado, continúa poniendo en discusión la eficacia del proceso de DDR como eslabón hacia paz y la reconciliación. Desde luego lo encontrado es un asunto poco reconocido por el conjunto social; se aprecian múltiples prevenciones y desconfianzas que son necesarias de superar.

Una reflexión primera que nos brinda este trabajo, es reconocer la marginalidad de la política de DDR en Santander, su bajo perfil y el gran desconocimiento que

17- Documento Agencia Colombiana para la Reintegración. Informe presentado a la Asamblea de Gobernadores. Departamento de Santander – 2012.

la sociedad civil, y la sociedad en general, tienen de esa institucionalidad, de sus aciertos y dificultades, de sus programas y sobre todo la indiferencia institucional territorial frente al desafío de un DDR exitoso para avanzar en perspectivas de paz.

Por diferentes circunstancias que es preciso analizar, esta política de DDR no ha logrado ocupar un lugar destacado en el entramado interinstitucional, que dinamice nuevos procesos de incidencia y transformación del conflicto y demuestre la prioridad y la voluntad política en la construcción de paz; tampoco es visible ni se registra en los discursos políticos, ni en las agendas de los partidos políticos y movimientos ciudadanos de paz.

Más allá del objetivo principal de la reintegración social, económica y comunitaria de las personas que se desmovilizan de los grupos armados ilegales, en forma individual o colectiva, la política de DDR tiene el reto de promover las condiciones en la sociedad local y regional para la reconciliación y la participación activa de toda la sociedad, incluidos los movimientos sociales y comunitarios, las víctimas, los excombatientes, las instituciones públicas, los gremios económicos, y otros, en la perspectiva de constituirse en movimiento social para la construcción de paz y en una estrategia importante para evitar la repetición de nuevos levantamientos armados.

Múltiples estudios demuestran que los diferentes conflictos armados en el mundo han implementado diversos enfoques o modelos de DDR para superar las guerras. Muchos de ellos han considerado incorporar acuerdos, beneficios y garantías más allá de los reconocimientos sociales, políticos y económicos a miembros de grupos desmovilizados, llegando a suscribir pactos y reformas institucionales que logran modificar las raíces de esos conflictos y benefician a la sociedad en su conjunto.

En el caso colombiano del proceso adelantado entre el Gobierno Nacional con las Autodefensas, su característica es que está centrado sólo en los líderes paramilitares desmovilizados, muy poco o nada en la sociedad y comunidades que se supone deben acogerlos. Tal vez esto explica las brechas existentes y las miradas polarizadas entre víctimas y victimarios que prevalecen en el ámbito local, con obvias desconfianzas y prevenciones. Pero también la distancia entre la sociedad civil en su conjunto y los procesos de desmovilización, escasos de instrumentos de integración y diálogo político con las comunidades, autoridades y otros sectores; carentes de espacios y tiempos de socialización para compartir las percepciones de seguridad y conocer los compromisos de los desmovilizados en su reintegración, en la reparación a las víctimas y el aporte a la memoria histórica, en su interés por ganar el espacio de credibilidad como hacedores de paz y reconciliación.

Tal vez el aspecto central de este trabajo es el análisis desde la importancia estratégica de construir una cultura de paz con derechos y deberes, con nuevas formas de transformación de los conflictos; procesos de aprendizaje colectivo con las capacidades construidas y hasta ahora poco desarrolladas en Santander para ofrecer a los desmovilizados de hoy y de mañana, un lugar de convivencia y paz con dignidad.

El lugar social de acogida después de la guerra para los desmovilizados es una responsabilidad colectiva. Tan inmenso reto está alimentado por el valor de la paz y el patrimonio que debemos cimentar para la vida digna y sin violencias de las próximas generaciones. La calidad de la política de DDR desde luego no resuelve todos los

aspectos de una paz integral, pero es un paso fundamental que mide la grandeza de la sociedad colombiana para conquistar el derecho a la convivencia pacífica, a la no reincidencia, al cierre de un proceso de violencias.

Por tanto es de elemental importancia valorar cómo en la política de DDR los ex miembros de grupos armados ilegales tienen reconocimiento, deberes y derechos para rehacer sus proyectos de vida en la civilidad, ser respetados como actores de la paz y la no violencia desde el compromiso asumido, trabajar por un país en paz y con espacios para la vida en comunidad. Por tanto el DDR reviste de prioridad en la agenda de los entes territoriales, las instituciones públicas, los diferentes sectores de la sociedad civil.

El texto “El hilo del laberinto” nos brinda la oportunidad de acercarnos en un intento explicativo a un análisis, contextualizado en el territorio santandereano, sobre las crudas realidades de la violencia armada en sus trayectorias, identificar las diferentes concepciones que están presentes en las experiencias de la desmovilización de los frentes paramilitares que actuaron en Santander y el Magdalena Medio, los desarrollos normativos que mueven el interés del DDR y los esfuerzos institucionales por darle sentido y función a una política pública oficial con escaso eco en una sociedad civil que desde la indiferencia, el desconocimiento y la escasa credibilidad mantiene la expectativa en una esperanza de paz y reconciliación que aun parece estar lejana.

Queda claro que el DDR, el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración de los ex miembros de los grupos armados ilegales a la civilidad, es un paso fundamental para lograr la paz, pero por sí mismo no es la paz. Se requiere unir este proceso con la voluntad política y el compromiso profundo de la sociedad colombiana para remover las causas de estas violencias como un eslabón indispensable; cambios integrados en una gran cadena al eslabón de la reparación de las víctimas, la verdad, la justicia y la reconciliación, en un reencuentro cierto y sólido con el camino de la paz para todos los colombianos.

Carlos Ibáñez Muñoz

Secretario del Interior – Gobernación de Santander

CAPÍTULO I

RAZGOS DE SANTANDER Y SU REGIÓN DE INFLUENCIA

Rasgos económicos, históricos y políticos

El departamento de Santander es reconocido en el concierto nacional como un territorio articulado a la región Nororiental, ubicado en el corazón de Colombia. Un lugar estratégico de primordial importancia en la economía nacional por su potencial energético petrolero, petroquímico, carbonífero, su gran riqueza natural diversa, su capacidad agropecuaria y comercial, su cultura de trabajo y libertad; tierra de grandes valores intelectuales con aporte político institucional para la región y el país.

La historia del Departamento, de sus comunidades y provincias da cuenta de una inmensa capacidad de superación y templanza en medio de los conflictos que la han cruzado, las limitaciones y difíciles condiciones del suelo y sus agrestes montañas. Desde el origen de nuestra nacionalidad, las luchas sociales en Santander han marcado hitos nacionales a lo largo de su proceso de desarrollo. Es memorable la gesta comunera contra la tiranía del imperio español por los sueños de libertad y justicia. Igualmente las luchas de mediados del siglo XIX, el estado soberano de Santander y la destacada movilización de los artesanos en defensa de las primeras industrias nacionales: signos de una raza pujante forjada con grandeza y deseos de ocupar un lugar digno en el desarrollo de una nación que emerge en medio de incertidumbres, conflictos violentos y búsqueda del horizonte de la democracia.

Las diferentes guerras sucedidas a lo largo del siglo XIX tuvieron en Santander episodios históricos en las definiciones institucionales del país, en las confrontaciones entre pensamientos y apuestas de sociedad por el reconocimiento de estados soberanos regionales y el autoritarismo centralista y presidencialista, que marcaron

la actual estructura constitucional y las instituciones ceñidas al presidencialismo centralista que finalmente se impusieron en detrimento de las regiones y sus gentes.

Posteriormente en San Vicente de Chucurí, cuyo patrimonio agrícola y natural anunció en los años 20 del siglo pasado el descubrimiento de la riqueza petrolera de la provincia De Mares y gestó a orillas del río grande de La Magdalena, en Barrancabermeja (la capital petrolera de Colombia) y El Centro las luchas de los trabajadores petroleros y sus primeras organizaciones en el mundo del trabajo, quienes con profundo sentido nacionalista en defensa de la soberanía nacional, a la postre, permitieron la reversión de los campos de la concesión De Mares, entregados a empresas internacionales, y la creación de Ecopetrol.

Santander ha aportado años de lucha y trabajo para el desarrollo del país. El mismo Departamento y su pueblo han contribuido como el que más a la edificación de la riqueza y del patrimonio nacional, al desarrollo de nuevas estructuras institucionales nacionales y a su economía con sus recursos humanos, petroleros, mineros, la agricultura del café, el cacao, la ganadería, las manufacturas, los centros de educación y formación académica, verdaderos soportes del orgullo santandereano.

A pesar de tantos esfuerzos y recursos, las relaciones de intercambio entre Departamento y nación tal vez no han sido equitativas para el beneficio del pueblo santandereano, por el contrario siguen siendo asimétricas, como lo demuestran los indicadores sociales en las provincias santandereanas, los altos índices de pobreza, la persistencia de imponer legislaciones centralistas que recortan recursos presupuestales sin importar la preocupante vulneración de derechos económicos, sociales y culturales.

Santander presenta grandes brechas de desigualdad social y exclusión que impiden a amplios sectores de población, especialmente de las provincias, el acceso a condiciones de desarrollo humano; otras dificultades no resueltas que profundizan la desigualdad y la precariedad social, como su pésima infraestructura vial, el deterioro ambiental y la pobreza estructural, advierten en los santandereanos, de temperamento fuerte y sincero, la lucha por la defensa del territorio, las

reivindicaciones y la visibilización de sus aspiraciones y esperanzas.

La guerra de guerrillas ha tenido fuertes impactos en nuestro Departamento desde los años 60, donde surgen grupos amados insurgentes del Eln y las Farc, con un cuadro de permanente violencia que ha producido graves daños a la infraestructura social y económica, y contra la población civil homicidios, secuestros, reclutamiento forzado, desplazamientos y crisis humanitaria generalizada que ha llamado la atención de la comunidad internacional por su degradación.

En respuesta, desde principio de los años 80, San Juan Bosco de la Verde, Carmen de Chucurí, San Vicente, Cimitarra, entre otras localidades santandereanas, también fueron gestas del surgimiento de grupos de autodefensas campesinas y grupos paramilitares contrainsurgentes, como el MAS (Muerte a Secuestradores) y ‘los tiznados’, animados y apoyados por las fuerzas armadas del Ejército para combatir a los grupos guerrilleros. Un proceso de altísimo costo político, económico y social para el Estado y la sociedad regional, cuyo actor conocido en la literatura sobre violencia en Colombia se denomina: AUC; que terminó cometiendo múltiples crímenes de lesa humanidad contra la población civil, con vínculos con el narcotráfico, políticos locales y regionales y actos de delincuencia común, tal como se ha conocido por versión de los mismos jefes paramilitares actualmente vinculados al proceso de Justicia y Paz y distintas sentencias de la Corte Suprema de Justicia.

Los escenarios de la paz también han encontrado en Santander un lugar de acogida y receptividad para los procesos de desarme, inserción y desmovilización de grupos y personas alzados en armas que voluntariamente han querido hacer parte de la vida civil y las fuerzas democráticas, aunque sus resultados han sido parcialmente exitosos, han contribuido a abrir el espacio político para aproximaciones a nuevos enfoque y marcos conceptuales y jurídicos sobre la paz como deber y derecho de todos los colombianos y colombianas. Al fin y al cabo, son parte de un largo proceso de construcción social e histórica con diálogos diversos que aún no alcanzan a encontrar el eco del entendimiento del país multicolor que se debate en el conflicto.

La gran conclusión de estas referencias es que en el escenario santandereano, las guerras sufridas no han

significado ninguna ganancia para el departamento de Santander, han sido éxitos parciales o fracasos a medias en sus propósitos de exterminar al bando contrario o lograr aclimatar e imponer la paz y la convivencia. Los costos de la guerra, humanos, políticos, sociales y económicos han sido altísimos; mientras el conflicto, los odios fraticidas y el desangre continúa. La guerra ha impedido un desarrollo para la democracia en la región y un mejor aprovechamiento de las potencialidades del territorio, ha generado frustración institucional además de la pérdida de inteligencias, de miles de colombianos muertos, discapacitados, víctimas y funcionarios atrapados en la tarea y las consecuencias de la guerra.

Localización geográfica, importancia política y económica

El departamento de Santander se localiza al noreste del país, forma parte de la Región Andina Nororiental, tiene una superficie de 30.537 Km², equivalente al 2,67% del territorio nacional; el 50% de este territorio está en el valle medio del río Magdalena y el otro 50% en el sistema Andino¹⁸.

Su variada geografía, conformada por pisos térmicos que van desde los 100 hasta los 4.000 msnm y temperaturas en el rango comprendido entre los 9°C y los 32°C, y su importante red hidrográfica, que incluye la cuenca del Río Grande de la Magdalena, proporcionan una amplia oferta ambiental y de ecosistemas, alternativas importantes para diversos sectores económicos, como el turismo, logística, energía, gas, entre otros, para la competitividad¹⁹.

Santander posee importantes recursos mineros petroleros, gas y carbón y sus derivados, también cuenta con amplios terrenos dedicados a la agroindustria en el piedemonte de la cordillera oriental y vastos predios de ganadería extensiva, sobre todo

en el valle. Su geografía resulta en un relieve quebrado producto de la Cordillera Oriental, con gran número de afluentes hídricos, entre ríos y quebradas (que facilitan la movilidad de los grupos armados ilegales –GAI– y dificultan el acceso de la fuerza pública)²⁰.

En el año 2009, Santander ocupó el tercer puesto nacional en el PIB por habitante²¹. En 2010, tuvo una de las tasas de desempleo más bajas y las tasas de ocupación más altas entre los departamentos del país, en medio de una tendencia creciente de la informalidad y fragilidad del mercado laboral que afecta las condiciones de vida de cerca del 62% de la población trabajadora. Adicionalmente, el Departamento presenta una distribución más equitativa del ingreso que el promedio de Colombia²². En términos generales, los indicadores de calidad de vida del Departamento son mejores que los del resto del país, pues tiene menos población en condición de pobreza, indigencia y necesidades básicas insatisfechas, como se mostrará más adelante.

Para el año 2009, el PIB departamental representó el 6,8% del PIB nacional. En cuanto a su estructura económica los sectores que mayor participación tienen dentro del PIB departamental son los servicios con 29,3% y la industria con 28,3%. Este último sector presentó un decrecimiento de -6,1% entre el año 2008 y el año 2009. Le siguen en orden de importancia el comercio con 11%, la construcción con 10,1%, el transporte 7,7%, el sector agropecuario con 7,5% y el sector minero con 5,7%²³. 2009 es el último año para el que se dispone de cifras de PIB departamental, de las cuentas departamentales del DANE.

Santander y la región Nororiental

El concepto de región no ha sido incorporado en el marco de la división política del territorio nacional, ni en el marco legal constitucional. Es más el producto de

18- GOBERNACIÓN DE SANTANDER. Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “El Gobierno de la Gente”.

19- Ídem.

20- PLANETA PAZ. Observatorio Nacional de Paz. “Escenarios, actores y dinámicas de la conflictividad socioterritorial en Colombia. Narrativas, miradas y percepciones desde la subalternidad”, Bogotá: abril 2011.

21- Plan de Desarrollo de Santander. 2009 es el último año para que se dispone de cifras de PIB Departamental, de las cuentas departamentales del DANE.

22- El Coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución de la riqueza y corresponde a 0 cuando la distribución es perfectamente equitativa (todos tienen el mismo ingreso) y 1 cuando la distribución perfectamente inequitativa (una sola persona tiene todo el ingreso y el resto no tiene nada). En el 2009, el coeficiente de Santander fue 0,52 y el de Colombia 0,57.

23- GOBERNACIÓN DE SANTANDER. Libro PIU Santander. p. 25.

construcciones culturales, académicas y sociológicas que intentan dar respuesta e interpretación a procesos de integración cultural y territorial de amplias zonas que encuentran lazos, afinidades, relaciones y procesos poblacionales y económicos que nutren unos rasgos de identidad y pertenencia. También es un concepto en boga para la planificación y el desarrollo territorial. Durante el siglo XIX y hasta 1910 la región nororiental era conocida como el Gran Santander. A partir de la Ley 25 del 14 de julio de 1910 se dividió en dos departamentos: Santander del sur y Norte de Santander.

La región Nororiental, está integrada actualmente por los departamentos de Santander y Norte de Santander y las subregiones del Magdalena Medio y el Catatumbo. La incorporación a los procesos nacionales se ha dado bajo unas condiciones históricas, económicas, políticas, culturales y sociales que la catalogan como zona de integración y confluencia entre el norte y el centro del país²⁴.

Norte de Santander por su carácter fronterizo presenta una gran dinámica funcional. Por el corredor vial Bucaramanga – Pamplona – Cúcuta – Venezuela, se moviliza la mayoría del intercambio comercial con el vecino país. El Departamento está compuesto por 40 municipios y una densidad de 66.8 Hab/Km. Según el último Censo Nacional (DANE, 2005), cuenta 1'265.006 habitantes. Sus principales ciudades son San José de Cúcuta, Pamplona y Ocaña, concentrándose en estos centros urbanos la mayoría de la población: 76%²⁵.

La importancia geoestratégica en el caso de Norte de Santander está –entre otras- dada por la existencia de áreas muy ricas en diversidad biológica tales como: el corredor biológico de Santurbán-Cáchira-Perijá Sur, que corresponde al ramal de la cordillera Oriental; el corredor del Páramo del Almorzadero-Tamá-Parque Nacional Natural Tamá con continuación en la cordillera de Mérida y un corredor que sigue la

dirección Parque Nacional Natural Tamá-Samoré hacia el departamento de Boyacá y en la parte nororiente del Departamento que permite identificar unas zonas planas como son los valles del río Zulia y un sistema de lomerío que constituyen las tierras de la cuenca baja del Catatumbo²⁶.

La economía del departamento de Norte de Santander es la sexta de toda Colombia, basada principalmente en la explotación de sus recursos naturales como el carbón y el petróleo, entre otros, y el comercio de los mismos a otras ciudades colombianas y países vecinos como Venezuela o Ecuador. Posee uno de los principales corredores estratégicos para el comercio de mercancías del oriente al interior del país: la vía Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga, es vista como arteria principal que conecta las dos fronteras suramericanas por vía terrestre.

De la misma manera, el departamento de Santander cuenta con una red de carreteras que conectan todos sus municipios. La carretera principal pasa por Barbosa, Socorro, Bucaramanga y otras poblaciones con ramales a casi todos los núcleos urbanos. De Barbosa se desprende la carretera del Carare que llega hasta Puerto Olaya, pasando por Vélez y Cimitarra; otras carreteras unen a Bucaramanga con Cúcuta, Barrancabermeja y Puerto Wilches; una vía – la más peligrosa del Departamento, por su inestabilidad geológica y nula pavimentación- cruza el oriente del Departamento pasando por las localidades de Capitanejo, San José de Miranda, Málaga, Concepción y Cerrito.

Por su localización geográfica Santander se convierte en el “eje central” en la unión entre el interior del país, los puertos del Caribe y la salida de Venezuela hacia el océano Pacífico. Además, cuenta con la explotación de recursos minerales tales como plomo, uranio, fósforo, yeso, caliza, cuarzo, mármol, carbón, oro, cobre y principalmente el petróleo²⁷.

-
- 24- INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – citado por Planeta Paz. Observatorio Nacional de Paz. En: “Escenarios, actores y dinámicas de la conflictividad socioterritorial en Colombia. Narrativas, miradas y percepciones desde la subalternidad”, Bogotá: abril 2011.
- 25- QUINTANA, Guillermo. Modelos de ocupación y zonificaciones territoriales en Norte de Santander, Colombia (Región Del Catatumbo). En: ACE© AÑO III, núm.7, junio. Bogotá, 2008. P. 2, 7. Disponible en: http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/5655/1/13_GUILLERMO-QUINTANA.pdf
- 26- GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER (2009) Información General. Disponible en: <http://www.nortedesantander.gov.co/infgeneral.php#seccion8>. Fecha de consulta: 23 de abril de 2012.
- 27- GOBERNACIÓN DE SANTANDER. Secretaría de Planeación Departamental (2010).

Como se puede ver, la región nororiental es un mosaico de alta complejidad y riqueza, no sólo por su extensión y disponibilidad de recursos naturales de primer orden para los procesos de acumulación sino por su localización estratégica. Esta situación explica en alguna medida la gran cantidad de megaproyectos así como las dinámicas de conflicto social, económico y político que han afectado la región.

Santander y el Magdalena Medio

Santander y la región del Magdalena Medio guardan un estrecho vínculo que rebasa la frontera política departamental e incorporan relaciones económicas, culturales, naturales y sociales que establecen la configuración de un territorio - región. En esta dinámica poblacional y territorial las fronteras de Santander y del Magdalena Medio se amplían a una intercomunicación nacional con los departamentos del occidente, centro, costa atlántica y oriente colombiano hasta Venezuela a través de distintas vías terrestres y fluviales, entre las cuales se cuentan las carreteras entre Bogotá y Medellín, Bogotá y la costa atlántica, así como el mismo río Magdalena que comunica regiones trascendentales para la explotación de recursos naturales y puntos de distribución nacional e internacional de los mismos, de igual forma que para el cultivo, producción y tráfico de estupefacientes²⁸.

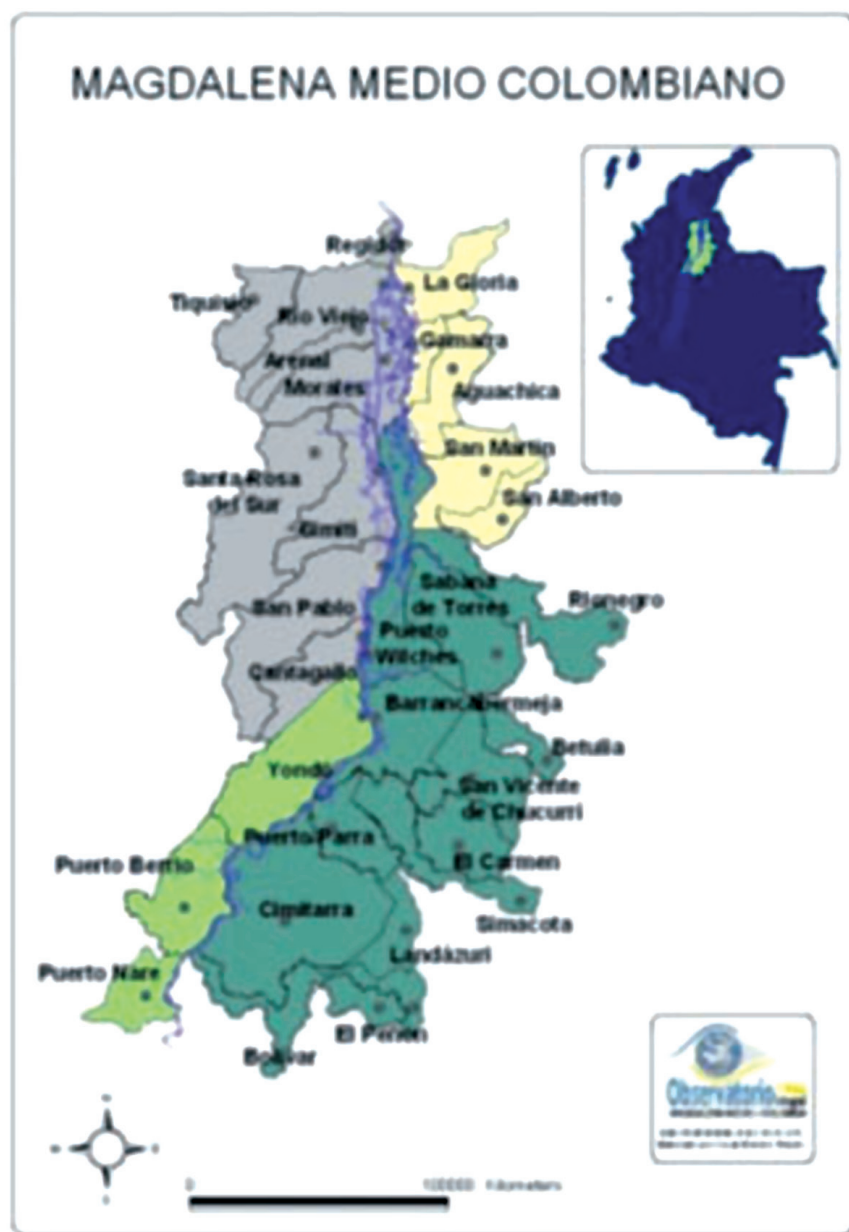
Barrancabermeja es el principal centro político y económico del Magdalena Medio. Es una ciudad cosmopolita, integrada por migraciones provenientes de todos los rincones del país y del departamento de Santander, atraídas desde principios del siglo XX por la explotación petrolera. Está ubicada a lo largo del río Magdalena y es sede del complejo industrial de la refinería de petróleo y petroquímica de Ecopetrol, la más grande de Colombia. Registra una población aproximada a los 300.000 habitantes, se encuentra en el corazón de la región del Magdalena Medio, que cubre territorios pertenecientes a los departamentos de Santander, Bolívar, Antioquia y Cesar²⁹.

El Magdalena Medio, corresponde a la zona geográfica ubicada en lo que puede considerarse como la región central del río Magdalena. Su delimitación geográfico-política es variada, pues no corresponde a condiciones departamentales sino que ha sido determinada por estrategias encaminadas a la consolidación de zonas de defensa y de protección de recursos minerales, del latifundio, la ganadería y de empresas privadas, en relación con la presencia e impacto histórico de la acción de grupos insurgentes³⁰.

28- VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, "Panorama Actual del Magdalena Medio", Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Fondo de Inversión para la Paz. Bogotá, Junio de 2001. Introducción. p. 1.

29- MARTÍNEZ GARNICA, Armando. Informe del Departamento de Santander, 2008. S.R. Disponible en: <http://www.globalexchange.org/countries/americas/colombia/SantanderReportESP.pdf>. "¿Puede seguir existiendo la historia regional?" en: Memorias, vol. 1, Bucaramanga, diciembre de 2003, p. 16. Fecha de consultado: 2 de abril de 2012.

30- TRUJILLO ESCOBAR, Alberto y Jorge ARIAS SEPÚLVEDA. "Guía Socioeconómica del Magdalena Medio", Publicidad Calda, Editorial La Patria, Manizales, 1991, p.4.



Fuente: OPI Observatorio de Paz Integral PDPMM

Por otra parte, el Magdalena Medio “es el centro norte vital del país. Base del combustible donde se refina la mayoría del petróleo. Eje de las carreteras que unen las ciudades andinas. Paso al Caribe, a Venezuela, a los valles del sur, a la ruta que unirá Caracas con el Pacífico, tierra del oro y de la diversidad ecológica”³¹.

31- DE ROUX, Francisco. “El Magdalena Medio en el centro del conflicto y la esperanza” En: Revista Controversia, Número 174. Junio de 1999. Bogotá: CINEP, 1999, p. 15. Disponible en: <http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/Contextoelmagdalenamedio.pdf>

La industria de hidrocarburos juega un papel fundamental en la actividad económica de la región generando el 70% de todo el valor producido. Su ubicación es estratégica para el desarrollo nacional y la comunicación entre el norte, el centro y el sur de Colombia, que es cruzada en su parte central por el río Magdalena.

“El Magdalena Medio se convertirá en uno de los principales generadores de energía y riqueza en el país. Reservas significativas de oro, carbón, petróleo y uranio, así como la producción de palma aceitera y la posibilidad de generar energía eléctrica, han hecho que inversionistas nacionales y extranjeros desplieguen importantes megaproyectos”³². El clima templado y el complejo hídrico de la región, ofrecen condiciones para el hábitat de una gran biodiversidad de flora, fauna y paisajes que se extiende por todo el Magdalena Medio y, a su vez, son elementos importantes que aportan a la diversidad cultural de la región. Los humedales y ciénagas, sustentan la existencia de infinidad de especies: aves, peces, mamíferos, lagartos y plantas, que permiten el sostenimiento y la seguridad alimentaria de comunidades rurales³³.

Llama la atención los altos índices de necesidades básicas insatisfechas de la población, especialmente en las provincias De Mares, García Rovira y Vélez, situación que denota un fuerte desequilibrio y desigualdad social. La región, a pesar de sus potenciales y proyectos de desarrollo económico con amplias ventajas por la presencia de recursos minero energéticos, tierras y oro, no ha podido reflejar esta condición en la superación de la pobreza y la miseria de la mayoría de los habitantes rurales y urbanos.

Santander, límites y municipios

Santander, con capital Bucaramanga, está conformado por 87 municipios que históricamente se distribuyen en seis provincias y en ocho Núcleos de Desarrollo Provincial, configuración que se concibe como instrumento de gestión para la promoción del desarrollo económico y social integral, como política de planificación gubernamental.

El Departamento limita al norte con Cesar y Norte de Santander; al sur, con Boyacá; al occidente, con Antioquia y Bolívar; al oriente, con Norte de Santander. Esta localización convierte a Santander en el centro geográfico entre el altiplano cundiboyacense, el sur del país, la costa Caribe y Venezuela.

Esta ubicación geoestratégica en el contexto nacional, más las facilidades ofrecidas por las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y el proceso de construir y desarrollar una agenda con países y organismos multilaterales, son fortalezas y actores claves para la internacionalización del Departamento en términos de negocios y plataforma de apoyo para la competitividad regional.

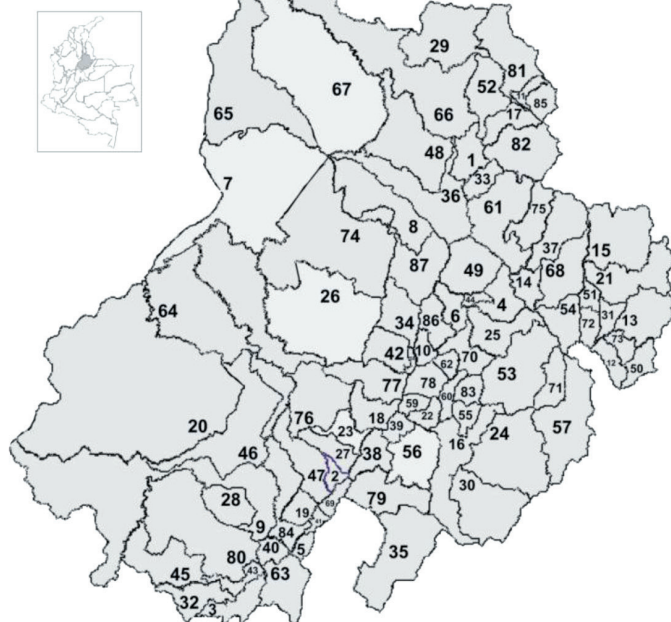
32- Diario La República, Junio 10 de 2008. Citado por MOLANO, Alfredo. En medio del Magdalena Medio. Bogotá: Cinep, 2010, p. 158.

33- LEÓN, Daniel Alfonso. Impactos ambientales de la expansión de la palma aceitera en el Magdalena Medio: Caso Las Pavas, Municipio El Peñón, Bolívar. Noviembre de 2009. p. 1. Disponible en: www.iniciativaambiental.net/descargas/download/fileid/35



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
"Fortalecimiento del Ministerio Público en Reparación Integral de Víctimas del
conflicto en restitución de Bienes"

DIVISIÓN POLÍTICA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

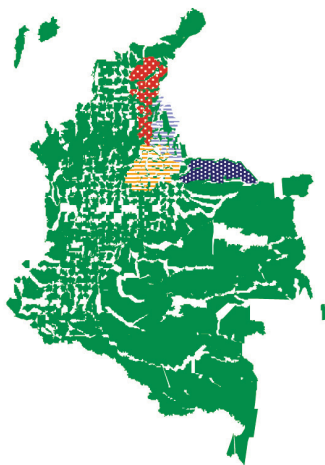


MUNICIPIOS

1. Bucaramanga	32. Florián	63. Puente Nacional
2. Aguada	33. Floridablanca	64. Puerto Parra
3. Albania	34. Galán	65. Puerto Wilches
4. Aratoca	35. Gambita	66. Rionegro
5. Barbosa	36. Girón	67. Sabana de Torres
6. Barichara	37. Guaca	68. San Andrés
7. Barrancabermeja	38. Guadalupe	69. San Benito
8. Betulia	39. Guapota	70. San Gil
9. Bolívar	40. Guavatá	71. San Joaquín
10. Cabrera	41. Guepsa	72. San José de Miranda
11. California	42. Hato	73. San Miguel
12. Capitanejo	43. Jesús María	74. San Vicente de
13. Carcasí	44. Jordán	Chucurí
14. Cepita	45. La Belleza	75. Santa Bárbara
15. Cerrito	46. Landazurí	76. Santa Helena
16. Charalá	47. La Paz	77. Simacota
17. Charla	48. Lebrija	78. Socorro
18. Chima	49. Los Santos	79. Suaita
19. Chipatá	50. Macaravita	80. Sucre
20. Cimitarra	51. Málaga	81. Surata
21. Concepción	52. Matanza	82. Tona
22. Confinés	53. Mogotes	83. Valle San José
23. Contratación	54. Molagavita	84. Vélez
24. Coromoro	55. Ocamonte	85. Vetas
25. Curití	56. Oiba	86. Villanueva
26. El Carmen	57. Onzaga	87. Zapatoca
27. El Guacamayo	58. Palmar	
28. El Peñón	59. Palmas del Socorro	
29. El Playón	60. Páramo	
30. Encino	61. Piedecuesta	
31. Enciso	62. Pinchote	

Fuentes: Página Web Departamento de Santander
Página Web IGAC.

Elaborado a partir de mapa básico extraído de la página web de
OCHA por: Fernando Vargas V. Investigador regional del proyecto.



Fuente: Corporación Compromiso.

Rasgos poblacionales de Santander

La población proyectada a 2011 fue de 2'020.664 personas³⁴, que representa el 4,38% del total de los colombianos y colombianas; la distribución por género sigue la tendencia nacional, así el 49,4% son hombres y el 50,6% mujeres.

Santander concentra el 74,6% de los habitantes en centros urbanos y el 25,4% restante en las áreas rurales, tendencia que se acentuará en el mediano plazo,

34- PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTANDER. Cifra proyectada a 2011 a partir del Censo de 2005.

previéndose que en el año 2018 la distribución será de 76% urbanos y 24% rurales; comportamiento que sigue la tendencia mundial.

Frente a la tendencia urbana, 1.276.384 personas, equivalente al 63% de la población departamental se localiza en Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Barrancabermeja; las 744.280 personas restantes lo hacen en los otros 82 municipios, con vocación rural.

Si bien esta tendencia no se revertirá, se presume que a partir de la relocalización de la base productiva santandereana en el valle del Magdalena Medio y la consolidación del turismo como renglón económico regional, además de la minería y la generación de energía, habrán nuevos centros de desarrollo territorial que articulan el Magdalena Medio con las poblaciones andinas de la cordillera Oriental, del sur de Santander y Boyacá.

En cuanto a indicadores de calidad de vida el Departamento ha mostrado progresos importantes, ya que la incidencia de la pobreza³⁵ pasó de 48,8% en el año 2002 a 33,3% para el año 2009 y la incidencia³⁶ de la indigencia pasó de 15,3% en el año 2002 a 9,1% para el año 2009³⁷. Respecto al índice de necesidades básicas insatisfechas NBI³⁸ el Departamento pasó de 31,7% para 1993 a 21,9% en 2005.

No obstante lo anterior, visto por municipios y tomando como variable de diferenciación el índice de necesidades básicas insatisfechas³⁹, calculado por el DANE con información del censo 2005, se muestra que en el Departamento se presentan importantes brechas sociales.

Tabla 6. Indicadores clave por rangos de NBI

SANTANDER	NBI≤27	27<NBI≤41	41<NBI≤56	56<NBI≤76	Total
Número de municipios	19	30	30	8	87
NBI TOTAL	14,3	35	47,2	60,6	21,9
Analfabetismo (% de adultos)	5,5	15,9	18,4	20,8	7,5
Capacidad institucional municipal	70,48	66,22	67,66	60,77	67,15
Ingreso x habitante (miles de pesos)	19.368	7.162	6.209	2.972	15.854

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014⁴⁰

35- Personas que tienen un ingreso inferior al valor monetario de una canasta de alimentos y otros bienes básicos de las personas como son vivienda, educación, salud, transporte y esparcimiento.

36- Personas cuyo ingreso esté por debajo de la línea de indigencia, el cual es el valor monetario calculado para adquirir únicamente la canasta de alimentos.

37- Cálculos: Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP)

38- El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI verifica el comportamiento de los hogares en el tiempo a través de: i) Hacinamiento crítico: Hogares con viviendas donde el número de personas por cuarto es superior a tres. Se consideran cuartos la sala, el comedor y los dormitorios. No son cuartos la cocina, los baños y el garaje. ii) viviendas con materiales inadecuados. iii) abastecimiento inadecuado de agua y carencia o deficiencia de los servicios sanitarios para el desecho de excretas. iv) Inasistencia de los menores a escuelas primarias: hogares con al menos un niño pariente del jefe de hogar, en edad escolar (7 a 11 años), que no asista regularmente a la escuela. V) Hogares con alta dependencia económica.

39- Aunque existen otros indicadores de pobreza el NBI es un indicador cualitativamente distinto ya que, por opción constitucional se toma como referencia como uno de los criterios para fijar el monto de las transferencias del gobierno central hacia las regiones artículos 324, 350, 357, y 366).

40- Cálculos por rangos de NBI por DNP - Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 pág. 30.

Así por ejemplo, por rangos de NBI se observa que mientras en el promedio departamental la tasa de analfabetismo en la población adulta es de 7,5%, en los municipios con un rango de población con NBI entre 56% y 76% la tasa de analfabetismo alcanza el 20,8%, y mientras el ingreso promedio por habitante⁴¹ en el Departamento es de \$15,854.000, para estos mismos municipios el ingreso promedio es de \$2.972.000, es decir 5,3 veces por debajo del promedio departamental.

Las disparidades al interior del Departamento y la asociación que puede existir entre NBI y otras variables como la extensión de los municipios, la distancia a la capital del Departamento, el índice de ruralidad y el tamaño de la población, se hacen aún más evidentes al observar el comportamiento de algunas variables por provincias.

Algunos indicadores de la Provincia en el Departamento de Santander.

	PROVINCIAS						
	COMUNERA	GARCÍA ROVIRA	GUANENTA	MARES	SOTO	VELEZ	Total
No municipios	16	12	18	6	16	19	87
Extensión en km ²	3.742	2.356	3.853	5.433	6.437	8.716	30.537
% del territorio total departamento	12.3	7.7	12.6	17.8	21.1	28.5	100
Total población (2010)	99.218	75.713	142.148	290.447	1.206.422	196.456	2.010.404
% de población total departamento	4.9	3.8	7.1	14.4	60.0	9.8	100
Densidad poblacional	27	32	37	53	187	23	66
Índice de ruralidad	55.4	57.7	50.6	26.1	12.0	63.7	25.7
% NBI	32.8	41.4	29.3	28.1	14.3	40.4	21.9
Distancia promedio de los municipios a la capital (km)	175	161	124	115	40	257	-

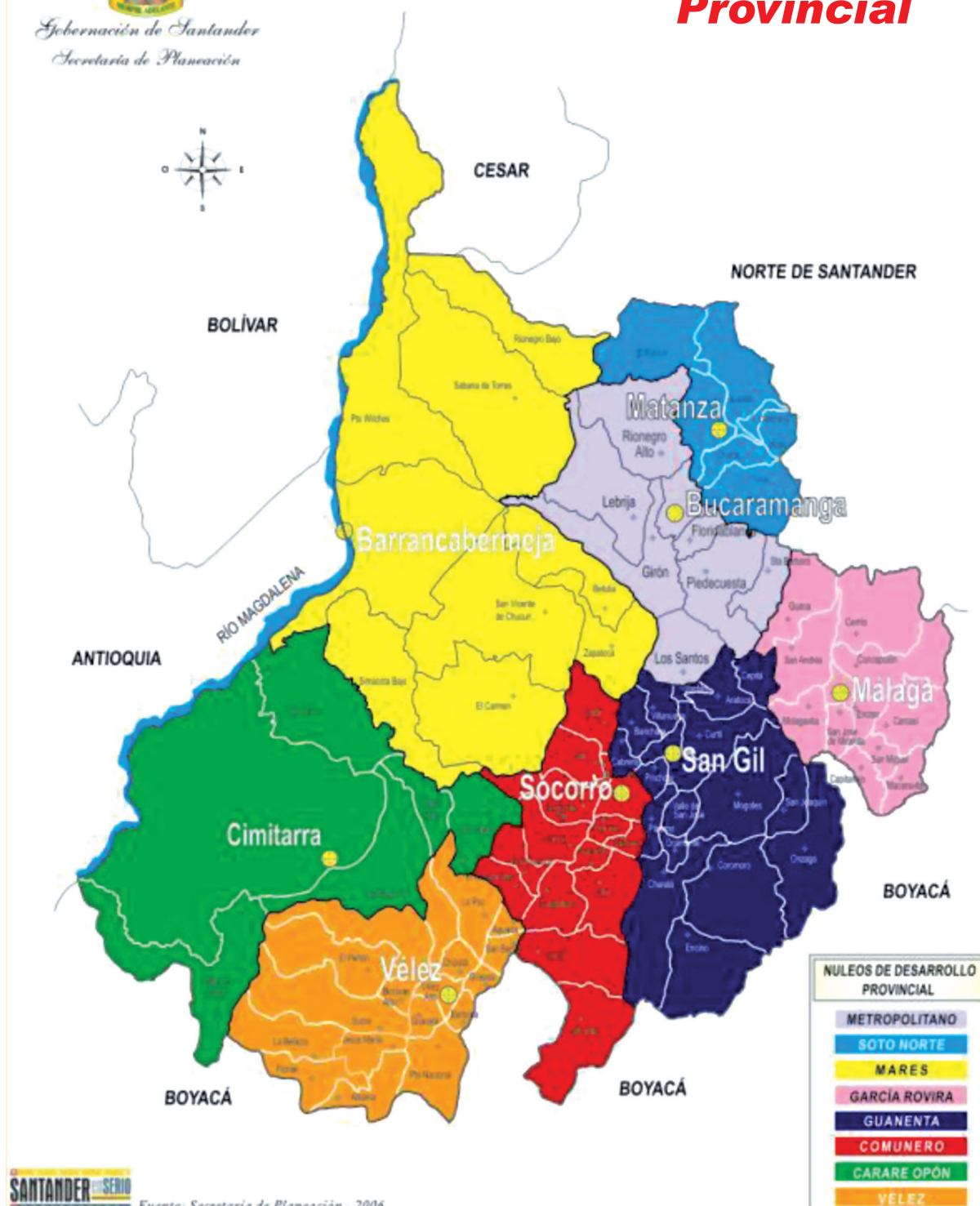
Fuente: Cálculos de Planeación Departamental a partir de Plan de Desarrollo Departamental 2008 – 2011.

Como se puede observar, la provincia de Soto en el 21,1% del territorio alberga al 60% del total de la población del Departamento, tiene el más bajo índice de ruralidad (12%) y el menor porcentaje de población en condiciones de pobreza medido por NBI (14,3%); mientras que la provincia de Vélez en el 28,5% del territorio alberga al 9,8% de la población del Departamento, con un índice de ruralidad del 63,7% y un 40,4% de su población en condiciones de pobreza, es decir 2,8 veces más alta que en la provincia de Soto.

En términos generales, se observa que a mayor distancia de la capital del Departamento y mayores índices de ruralidad, más altos son los porcentajes de población con NBI. Mientras que a mayor densidad poblacional se observan menores porcentajes de población con NBI.

41- Medido por el DNP con base en la participación de la recaudación tributaria municipal en el agregado departamental.

Núcleos de Desarrollo Provincial



CAPÍTULO II

SANTANDER Y EL CONFLICTO ARMADO INTERNO

La Constitución de 1991 fue en su momento un signo esperanzador para la paz de Colombia y sus regiones. Incorporó nuevas instituciones para fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho, la justicia y la participación ciudadana; creó una carta de derechos humanos y unos mecanismos de exigibilidad pronta para hacer cumplir los derechos fundamentales, abrió un régimen pluralista de partidos para el ejercicio de los derechos políticos, le dio autonomía y mayores recursos a los municipios, capacidades para elegir a sus dignatarios y adoptar sus planes de desarrollo. Parecía que la democracia se oxigenaba y se iniciaba un proceso de convivencia pacífica, un camino hacia la reconciliación y la paz. Pero no fue así. El modelo económico neoliberal en boga, por su parte, impuso su primacía y profundizó la desigualdad económica; y los problemas estructurales de la pobreza, la tierra y la distribución del ingreso quedaron nuevamente aplazados.

Por otra parte, las fuerzas paramilitares no cesaron en su empeño y continuaron avanzando en su estrategia de conformar un proyecto unificado de los grupos contrainsurgentes ilegales paramilitares para enfrentar las iniciativas de las guerrillas de las Farc y del Eln, y adelantar una campaña de exterminio contra los movimientos sociales, las organizaciones de izquierda y la población civil que consideraban eran aliados de la insurgencia.

Durante los años 90 mientras se estructuraba un nuevo sistema constitucional, se respiraba un aire de ciudadanía y la esperanza de un proceso democrático propio de un Estado Social de Derecho, el paramilitarismo desarrollaba una intensa actividad en la idea de estructurar una fuerza militar con capacidad criminal en regiones claves para provocar, a partir de profundizar el conflicto armado, una

regresión institucional e imponer por las vías de hecho un régimen autoritario de extrema derecha, con objetivos claros de exterminar el tejido social y los grupos sociales, los militantes de izquierda y combatir a la insurgencia en las zonas donde habían hecho presencia en el curso del conflicto. Particularmente así se vivió en la región nororiental: Magdalena Medio, Santander, Arauca, Catatumbo, centros urbanos de importancia económica, y en el sur del Cesar y sur de Bolívar, subregiones con las cuales el departamento de Santander ha construido sus vínculos económicos, comerciales, financieros, relaciones laborales y de servicios.

Los resultados de esta nueva oleada de violencias compleja que afectó a Santander fueron dramáticos y lamentables: hubo miles de víctimas civiles desplazadas, asesinadas o desaparecidas; despojo de tierras; amenazas y extorsiones; infiltraciones en instituciones del Estado y robos al patrimonio público.

Génesis paramilitar en Santander y el Magdalena Medio

El origen del paramilitarismo en Santander se remonta a la década de los años 70 – 80, cuando viejos propietarios rurales, víctimas de la guerrilla (dueños de fincas y ganaderos locales de Puerto Boyacá, Cimitarra, Landázuri, Puerto Parra, Simacota, Santa Helena del Opón, San Vicente) y nuevos propietarios rurales (esmeralderos de Boyacá y narcotraficantes) pactan alianza con el fin de neutralizar a las guerrillas y se mueven a copar los nichos de expansión territorial, ubicados en la vertiente media y cuencas del río Magdalena (zonas bajas y selváticas de periferia aptas para ganadería, agroindustria, minería, siembra y procesamiento de hoja de coca) en los departamentos de Santander y sus municipios vecinos de Antioquia y Boyacá.

Su origen también se halla asociado a la vinculación de militares activos, bajo control de las unidades militares recién creadas en esta zona, como el Batallón Rafael

Reyes con sede en Cimitarra y la Decimocuarta Brigada del Ejército con sede en Puerto Berrío (Antioquia), quienes prestaron su apoyo y colaboración para entrenar militarmente y armar grupos de campesinos, denominados de autodefensa, para neutralizar a la guerrilla⁴².

Pero la negra noche de los grupos paramilitares tiene antecedentes en Colombia desde los años 60, en los manuales de contrainsurgencia de las políticas militares, en los que se determina a la población civil como blanco fundamental de la estrategia contrainsurgente⁴³. Así lo reseña una investigación del Cinep sobre el origen del paramilitarismo en Colombia y Santander, que considera que en las circunstancias que dieron origen a los grupos paramilitares, como eslabón de la lucha contrainsurgente, hubo una política que comprometió a instituciones militares y funcionarios del estado.

La investigación tomó como fuente de análisis, entre otros documentos y aspectos, los manuales de 1962, 1963, 1969, 1979, 1982, 1997, y pudo rastrear una idea que se puede considerar reiterada en todos ellos: *“el crecimiento y continuación de una fuerza irregular depende del apoyo suministrado por la población civil(…)”*. Esta idea puede explicar porque la estrategia contrainsurgente ha contemplado a la población civil como blanco principal⁴⁴.

Según esa investigación, “no es extraño, entonces, que las diversas formas de protesta social de la sociedad civil queden etiquetadas como acciones de guerra, como lo hace el Manual de 1979 al encuadrar bajo el acápite de *“Cómo se presenta la guerra revolucionaria en el país?”*, los *“paros y huelgas”* y la *“motivación y organización de grupos humanos por la lucha revolucionaria, estudiantado, obrerismo, empleados de servicios públicos, etc.”* (pg. 195). Igualmente, el Manual de 1987, al describir la *“Organización de un Movimiento Guerrillero”*, pone en primer lugar: *“Desde el punto de vista militar (...) 1) Población civil simpatizante”*, de la que en seguida afirma: *“normalmente se organiza como movimiento sindical”* (pg. 115)”⁴⁵.

42- LESMES Libardo –Documento Marcos interpretativos para el análisis dinámicas de riesgo en territorio Santandereano. Bucaramanga. 2012.

43- Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP, “Deuda con La Humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988- 2003”. Bogotá, D.C., Diciembre de 2004. Capítulo: “La doctrina contrainsurgente del Estado y la población civil”.

44- Ibid., p. 1.

45- Ibid., p. 2.

En ese trabajo el CINEP presenta un registro bibliográfico histórico de los hechos que ponen de presente cómo el departamento de Santander y algunos de sus municipios fueron escenario del surgimiento del fenómeno paramilitar: *“La confesión del Mayor Óscar Echandía Sánchez relata que ‘en 1987(...) Henry Pérez le pide (...) que seleccione 10 campesinos de la Inspección de San Juan Bosco de Laverde, jurisdicción de Santa Helena del Opón (Santander), para que participen en un curso de combate en jurisdicción de Puerto Boyacá. Luego del curso los campesinos regresan a San Juan Bosco armados de fusiles y equipados con material de intendencia y radios’”*⁴⁶.

Muy probablemente esos campesinos participaron en los entrenamientos dirigidos por mercenarios ingleses e israelíes en Colombia. Ya desde antes, apoyada por el Comando Operativo No. 10 del Ejército, con sede en Cimitarra (precursor de la Brigada XIV, más tarde establecida en Puerto Berrío), se creó la primera base paramilitar en San Juan Bosco de la Verde (Santa Helena del Opón) en 1981.

De San Juan Bosco de la Verde esta estructura paramilitar se expandió hacia los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucurí entre 1986 y 1995 e incursionó en los últimos años en los municipios aledaños de Betulia, Simacota, Galán, Zapatoca, Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches. Las características que fue adquiriendo esta experiencia la convirtió en un proyecto piloto para las fuerzas armadas⁴⁷.

Las “Convivir”: legalización del paramilitarismo

El 11 de febrero de 1994 el Gobierno colombiano expidió el Decreto 356, por medio del cual autoriza la creación y funcionamiento de *“servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada”*, los cuales son definidos como *“la organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia*

y seguridad privada a sus cooperados o miembros, dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad”. A su vez, se autorizaba para que los integrantes de dichos servicios comunitarios fueran dotados de armas de uso restringido de la fuerza pública⁴⁸.

Estas disposiciones, tan solo revivirían un entorno legal para la existencia, desarrollo y expansión del paramilitarismo, como una clara política estatal, en esta oportunidad bajo un nuevo ropaje, el de CONVIVIR (Cooperativas de Vigilancia Rural - Convivir), asociaciones que públicamente se presentaban con un carácter ‘defensivo’, que actuarían bajo la coordinación de la fuerza pública y serían financiadas por los sectores público y privado.

El entonces ministro del interior Horacio Serpa Uribe, hacía una defensa de las mismas ante el Senado de la República, indicando que fueron autorizadas:

*“para que los ciudadanos pudieran cumplir una actividad de cooperación con la Fuerza Pública, en el propósito de brindar mejores márgenes de seguridad a los colombianos, particularmente en las zonas rurales... No pretende el gobierno de ninguna manera estimular el paramilitarismo. Son organizaciones que no pueden tener ningún carácter punitivo, que si están armadas solamente pueden tener armas de defensa personal... su misión fundamental es la de información a la autoridad”*⁴⁹.

Esta es la importancia de las Convivir, incorporar formalmente dentro del Estado, a quienes desde el paramilitarismo venían a través de amenazas, extorsiones e intimidaciones, prestando servicios de vigilancia en las áreas rurales.

Contrario a lo indicado por los voceros gubernamentales, sobre el carácter excepcional armado que tendrían las Convivir, se pudo establecer que durante el año 1996, 60 de estas organizaciones, habían sido dotadas de numeroso armamento. *“Como consta en las actas del Comité Consultor de la*

46- Ibíd. Capítulo: “El modelo chucureño del paramilitarismo”. p. 1.

47- Ibíd.

48- Ibíd., Capítulo: “Las convivir, legalización del paramilitarismo”. p. 1.

49- Ibíd.

Superintendencia, de enero a diciembre de 1996 esta entidad aprobó para las Convivir la compra de 422 subametralladoras, 373 pistolas 9 mm, 217 escopetas de repetición, 17 ametralladoras Miniuzi, 70 fusiles, 109 revólveres 38 largo y 41 armas de uso restringido -que pueden ir desde fusiles Galil hasta ametralladoras M-60, lanzacohetes, granadas de fragmentación, rockets y morteros⁵⁰.

Altos oficiales de la fuerza pública con claridad reconocían el papel de las Convivir, como estructuras paramilitares, cuando indicaban: *“Si queremos ganarle la guerra a la guerrilla hay que armar a la gente porque nosotros nunca podremos patrullar bien un país tan grande como éste”*⁵¹. En similar sentido se pronunciaba el entonces ministro de defensa Fernando Botero, reivindicando la articulación de la población civil a las labores de la fuerza pública: *“ningún país en la historia ha sido capaz de vencer el problema de la criminalidad rural sólo con el esfuerzo de las Fuerzas Armadas. Se requiere el aporte de la población civil organizada”*⁵².

La actuación de las Convivir, como organizaciones de carácter ofensivo, nueva expresión del paramilitarismo y sus riesgos para la vigencia de los derechos humanos, fueron siendo constatados por diversas instancias internacionales. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas concluía:

*“las asociaciones “Convivir”, hoy privadas de tal nombre (...) en nada han contribuido a clarificar las relaciones entre el Estado y el fenómeno paramilitar. En la práctica, para quienes observan la situación de los derechos humanos en el país, resulta muy difícil distinguir las acciones de los grupos paramilitares de aquellas de algunas asociaciones, “Convivir”, pues entre ellas se dan, en numerosos casos relaciones de coincidencia, convergencia, complementariedad y suplantación. Las víctimas de tales acciones son incapaces de distinguir a qué grupos pertenecen sus autores, y hablan indistintamente de los “paracos”(paramilitares en lenguaje popular) o de “los de la Convivir”. Informaciones fidedignas recibidas por la Oficina dan cuenta de la participación en asociaciones “Convivir” de reconocidos paramilitares, algunos con órdenes de captura pendientes”*⁵³.

En similar sentido Human Rights Watch, en el Informe Anual correspondiente al año 1998, concluyó en relación con las Cooperativas de Vigilancia Rural Convivir, que:

“En 1997, recibimos informaciones creíbles que indicaban que las CONVIVIR de las regiones del Magdalena Medio y el sur del Cesar estaban dirigidas por conocidos paramilitares y habían amenazado con asesinar a colombianos considerados

-
- 50- Revista Alternativa, N° 8, marzo 15 – abril 15 de 1997, página 12. Citado por CINEP, “Deuda con La Humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988- 2003”. Bogotá, D.C., Diciembre de 2004. Capítulo: “Las convivir, legalización del paramilitarismo”. p. 2
 - 51- Revista Cambio 16, 12 de febrero de 1996, N° 139, página 22. Citado por CINEP, “Deuda con La Humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988- 2003”. Bogotá, D.C., Diciembre de 2004. Capítulo: “Las convivir, legalización del paramilitarismo”. p. 2.
 - 52- Revista Semana, edición 657 diciembre 6-13 de 1994. Citado por CINEP, “Deuda con La Humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988- 2003”. Bogotá, D.C., Diciembre de 2004. Capítulo: “Las convivir, legalización del paramilitarismo”. p. 2.
 - 53- Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, al 54 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/1998/16 9 de marzo de 1998, E/CN.4/1998/16. Citado por CINEP, “Deuda con La Humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988- 2003”. Bogotá, D.C., Diciembre de 2004. Capítulo: “Las convivir, legalización del paramilitarismo”. p. 2.

simpatizantes de la guerrilla o que se habían negado a inscribirse en las cooperativas. El 3 de febrero, un grupo de CONVIVIR que al parecer patrullaba con la 14ª Brigada del Ejército en las cercanías de San Francisco, en Santander, ejecutó y desmembró los cuerpos de Norberto Galeano, Reynaldo Ríos y un anciano de setenta años. Dos meses antes, el mismo grupo había sido relacionado con la masacre de al menos siete personas en las aldeas vecinas de La Congoja y Puerto Nuevo, lo cual provocó el desplazamiento en masa de más de 700 residentes”⁵⁴.

Numerosos casos fueron objeto de denuncia, en relación con la participación activa de integrantes de las Convivir en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, entre otros. En el año 1997, la Fiscalía General de la Nación informaba de la existencia de más de 35 investigaciones penales en contra de integrantes de las denominadas Convivir, en razón de su participación directa en la ejecución de diversos crímenes de lesa humanidad.

Uno de dichos procesos, el relacionado con el General (r) Fernando Millán, ex comandante de la Quinta Brigada del Ejército, quien participó en la creación de la Convivir Las Colonias en Lebrija, Santander, finalmente sería remitido a la Justicia Penal Militar, en donde fue absuelto de todos los cargos, consolidándose así el círculo de la impunidad.

Las normas, al amparo de las cuales se crearon estos “servicios especiales de vigilancia y seguridad privada”, fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional en noviembre de 1997, dejando establecido que estaba prohibido a organizaciones de carácter privado desarrollar labores de inteligencia y hacer uso de armas restringidas, ordenando que las armas reservadas como de la fuerza pública y que se encontraban en poder de estas asociaciones fueran reintegradas al Comando General de las Fuerzas Militares.

De guerrillas, paramilitares y paraestado

La violencia propia del conflicto armado interno a partir de la insurgencia de las Farc y del Eln, tiene referencias en Santander desde los años 70 en el territorio del Carare Opón, importante zona de colonización, particularmente en municipios del sur de Santander como Cimitarra y Landázuri. Diversos hechos denotaron la intención de establecer un “nuevo orden político y militar de izquierda”, la presencia de las Farc con participación campesina en sus aparatos políticos y milicias en un entorno amplio y rural, el control de la guerrilla en un proceso de crecimiento de su influencia territorial, y por otra parte la estrategia electoral de la alianza entre el Partido Comunista y la Anapo en la Unión Nacional de Oposición UNO⁵⁵.

54- http://www.hrw.org/spanish/inf_anual/1998/colombia.html#derechos Citado por CINEP, “Deuda con La Humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988- 2003”. Bogotá, D.C., Diciembre de 2004. Capítulo: “Las convivir, legalización del paramilitarismo”, p. 3.

55- COMISION NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACION– Grupo Memoria Histórica – “El Orden desarmado, la resistencia de la Asociación de trabajadores campesinos del Carare ATCC”, p. 20.

En esta región se desató el conflicto en medio de una muy débil presencia social estatal y con precarias condiciones de infraestructura y vías de comunicación, haciendo de este territorio una isla de difícil acceso, donde el centro político pareció ser el municipio de Cimitarra. Aquella configuración insurgente pronto tuvo una respuesta contrainsurgente, que se conoció desde 1970 a 1982 como un proceso de represión militarista, bajo la orientación del Ejército. Una estrategia de control de todas las actividades públicas y privadas, práctica de detenciones arbitrarias y masivas, torturas, allanamientos sin orden judicial, toques de queda, retenes, torturas, etc., en una clara política de exterminio de la guerrilla y de la oposición que mantenía presencia destacada, visible y legal en el concejo municipal de Cimitarra.

Aunque se conoce que en 1978 Ramón Isaza fundó las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, es desde 1983, y ante la imposibilidad del Estado de extinguir las estructuras armadas de la guerrilla en la región, cuando emerge como un nuevo actor en el conflicto armado los grupos de autodefensas campesinas del Magdalena Medio, grupos paramilitares que tuvieron origen en Puerto Boyacá, asociados al narcotráfico y al Ejército Nacional y apoyados con actividades de tipo social por la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio ACDEGAM.

Las autodefensas campesinas y su estructuración como grupos paramilitares impusieron métodos criminales, violaciones de derechos humanos de grave impacto social como la desaparición forzada, los homicidios selectivos y las masacres⁵⁶.

La existencia y expansión de organizaciones paramilitares no podría explicarse si no se considera la estrategia de seguridad de las Fuerzas Armadas, que incluyó durante dos décadas y media la promoción y tolerancia de grupos privados que actuaron en asocio y coordinación con las fuerzas gubernamentales contra las guerrillas⁵⁷. Tampoco se explica si se ignora el papel cumplido por muchos dirigentes políticos con influencia nacional y regional, que también apoyaron la estrategia de promoción del paramilitarismo para usarlo contra los movimientos populares y los partidos políticos de izquierda, como ocurrió con la Unión Patriótica, exterminada en la segunda mitad de los años ochenta. Concurrió también al resultado final la disposición de muchos hacendados, empresarios, y aún de firmas multinacionales, que prefirieron contribuir con los paramilitares en vez de confiar en la precaria seguridad del Estado frente a la intimidación guerrillera⁵⁸.

El proyecto de expansión del proyecto paramilitar en la región muy pronto se alió a carteles del narcotráfico para su financiación como una estrategia funcional de integración y control territorial, en la cual la economía ilegal de la seguridad (prestación de servicios de seguridad a cargo de ejércitos privados) jalonó su presencia con actividades económicas (legales e ilegales) y en la dinámica de acumulación de poder económico y político en núcleos poblacionales urbanos de Santander.

Es sabido por diferentes investigaciones que los grupos paramilitares existentes desde 1982, como un proceso contrainsurgente con distintos desarrollos organizativos en todo el país, carecían de una

56- Ibid.

57- REYES POSADA, Alejandro. Documento Identificación de los agentes colectivos responsables del abandono de tierras en los municipios colombianos. Bogotá, Septiembre de 2007. p. 3. "La agencia de derechos humanos más influyente de Washington, Human Rights Watch escribió al respecto: "Los grupos paramilitares tienen sus raíces tan lejos como en "La Violencia" de los años 50s como parte integral de la estrategia de contrainsurgencia del ejército. En respuesta al intenso escrutinio internacional sobre el desempeño del ejército y el gobierno en derechos humanos, fuerzas civiles auxiliares fueron legalizadas en 1965 y 1968 y fortalecidas después a fines de los 1970s y especialmente a comienzos de los 1980s (AFADDES, 9 Septiembre 2005, pp. 8-9; National Security Archive, 16 Octubre 2005). Reportes bien documentados sobre desapariciones y el uso sistemático de la tortura de prisioneros políticos por el ejército nacional durante la presidencia de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) disparó la crítica internacional; esto llevó a la cúpula militar a camuflar y esconder el compromiso directo en violaciones gruesas de los derechos humanos al delegar mucho del "trabajo sucio" a grupos informales de civiles armadas que ellos entrenarían, coordinarían y equiparían. Los paramilitares aportaron al ejército -y al gobierno- dos elementos cruciales: una fuerza auxiliar brutalmente efectiva contra civiles percibidos como auxiliares de las guerrillas, y los medios para disociarse ellos mismos de los crímenes cometidos, de manera que evitaran la crítica internacional". (Traducción propia) ACNUR, Internal Displacement Monitoring Centre, Paramilitaries as integral part of a counter-insurgency strategy: special report, june 2006.

58- Ibid., p. 4

estructura unificada hasta que en 1997 aparece “una coordinación nacional con el propósito de expandir dominios territoriales y controlar los recursos de poder de las regiones, que se identificó como Autodefensas Unidas de Colombia –AUC”⁵⁹.

El mismo Gobierno Nacional fue denunciante de la ampliación del fenómeno paramilitar contrainsurgente, un fenómeno de ‘para – estado’ como poder armado que se oponía a los procesos de paz y a las negociaciones con las guerrillas, al reconocimiento de nuevas fuerzas políticas democráticas y de izquierda, o mejor a las reformas al sistema político y económico que afectaban los intereses de grupos privilegiados en el poder. Este hecho ha sido recogido así:

“En 1987 el ministro de gobierno César Gaviria denunció en el Congreso la existencia de 140 grupos paramilitares que operaban en gran parte de los territorios con alguna influencia guerrillera. La gran mayoría estaba financiada y dirigida por propietarios locales que rechazaban el dominio guerrillero en alianza con capos del narcotráfico que defendían intereses territoriales del negocio. Esta denuncia, formulada al comienzo del gobierno de Virgilio Barco, resumió uno de los efectos colaterales de la política de negociaciones de paz con las guerrillas por parte del gobierno anterior, presidido por Belisario Betancur (1982-86), que fue la proliferación de autodefensas privadas, estimuladas por las Fuerzas Armadas como alternativa encubierta para contrarrestar la suspensión del esfuerzo bélico implicada en la tregua que tuvo vigencia entre 1983 y 1985”⁶⁰.

Irrupción del paraestado⁶¹

Clausewitz expone en su tratado “De la guerra”, que la guerra es una continuación de la política, en el sentido que cuando los intereses y juegos de poder no se concretan y deciden en los espacios institucionalizados, la guerra es una herramienta para proteger e imponer los intereses que mediante la diplomacia no se hubieren logrado imponer. En este marco teórico, la guerra se utiliza contra un enemigo armado externo para proteger o reivindicar intereses comerciales y territoriales en un contexto, donde los únicos actores que pueden utilizar la violencia son los propios Estados, por y entre ellos.

Michel Foucault, con base en el estudio de la sociedad disciplinar de la Modernidad parafrasea la frase de Clausewitz, exponiendo que la política es una continuación de la guerra, entendiendo que ella se puede transformar en un instrumento más de la guerra, que se utiliza contra enemigos internos, en un régimen de dominación ratificado por las relaciones económicas y políticas de control de los sectores más poderosos dentro de la sociedad. Desde esta perspectiva, el orden legal y constitucional refleja un constante estado de lucha que busca eternizar las

59- *Ibíd.*, p. 3.

60- *Ibíd.*, p. 14.

61- “El concepto paraestado, está soportado en aquellos acontecimientos de tipo socio-político y cultural, que hacen que el estado pierda su directriz y, en cierto caso la gobernabilidad y funciones propias que le corresponden en su proceso histórico, así como el uso legítimo de la violencia en los términos planteados por Max Weber y aparezcan en el escenario otros grupos al margen de la legalidad política y ocupen el vacío de poder dejado por el Estado”. William Ortiz Jiménez. Disponible en: <https://www.eae-publishing.com/catalog/details/store/es/book/978-3-8443-4858-3/los-paraestados-en-colombia>. Fecha de consulta: 28 de mayo de 2012.

condiciones de vencidos y vencedores, y de paso legitimar el control sobre recursos económicos y políticos dentro de un territorio demarcado en esferas de influencia.

Colombia no ha sido ajena a esta situación. Tómese como referencia los diálogos de paz con las Farc, propuestos por el presidente conservador Belisario Betancur (1982 – 1986), que parecieron inicialmente abrir una ventana hacia la solución política del conflicto, dando en 1982 una amnistía general para los guerrilleros y generando una movilización social de banderas y palomas blancas en todo el país; al tiempo que promovió reformas legislativas que abrían la participación política a nuevas fuerzas o partidos políticos diferentes a los tradicionales Liberal y Conservador.

Sin duda ésta pareció ser una oportunidad desde el poder presidencial para buscar soluciones a multiplicidad de conflictos sociales y políticos en permanente agitación que reclamaban procesos de descentralización, democratización, mayores libertades políticas para la participación ciudadana con oportunidades para incursionar legalmente en el ejercicio de la lucha por el poder político, monopolizado por los dos partidos tradicionales. Este ambiente de movilización social estaba buscando oxigenar las ideas de un proceso amplio que favoreciera un cambio institucional en democracia; y ofreció el reconocimiento para que líderes de las fuerzas insurgentes de las Farc, en proceso de tregua y negociación política, emergieran en el terreno amplio electoral, con el emblema de la Unión Patriótica, la cual promovió candidatos y programas de elección popular en todo el país.

Otro signo de trascendental significación social y política del gobierno de Betancur fue el Acto Legislativo No. 1 de 1986, que ordenó una reforma democrática al régimen político colombiano para ampliar las bases de participación social en los territorios municipales y departamentos, adoptando la elección popular de alcaldes y gobernadores, acompañada de un proceso de descentralización a favor del fortalecimiento fiscal de los municipios y las competencias de gobernabilidad y desarrollo de su territorio.

Esa fue una reforma que respondía al clamor de las regiones abandonadas socialmente y a la

inconformidad acumulada frente a un estado centralista y autoritario que despertó numerosas y grandes movilizaciones y paros cívicos demandando atención a sus apremiantes necesidades de servicios públicos, mayor participación en el situado fiscal, infraestructura, saneamiento ambiental y representación en las decisiones políticas. Es claro que este reclamo provenía de todos los partidos y fuerzas sociales regionales y locales sin distinción, que unánimemente hacían común el sentimiento de las regiones y su identidad territorial por reclamar sus legítimos derechos al desarrollo, dada la condición de estar condenadas a un progreso desigual, al atraso y a una administración local sin autonomía para decidir sobre sus inmediatos problemas.

Estos aspectos de la reforma fueron asuntos claves en el debate político nacional por la democratización y modernización del régimen político, signos de voluntades en los diálogos de paz con los grupos insurgentes y el preámbulo de la desmovilización posterior, en el año 1990, del M-19 y otros grupos armados como el EPL, el Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista del Eln; estos antecedentes sin duda crearon un clima de esperanza para la paz de Colombia y generó las condiciones políticas para la Asamblea Nacional Constituyente que sentó las bases de la nueva carta política de Colombia, la Constitución del 91.

Sin embargo, fuerzas muy poderosas del sector privado y del establecimiento, con distintos orígenes, se opusieron, abierta o pasivamente, desde el principio a todo este proceso aperturista de democratización, y rechazaron los nuevos movimientos y partidos políticos de la izquierda, la participación ciudadana y los diálogos de paz con las guerrillas; así, se fueron gestando las condiciones y juntando los intereses para desarrollar una oposición armada a este proceso considerado, por ellos, como una entrega del país a las fuerzas izquierdistas y a los grupos guerrilleros.

Esa tendencia contra la apertura democrática se encontró con políticos, empresarios, ganaderos y grupos campesinos que guardaban el resentimiento por los abusos cometidos por las guerrillas, cansados del secuestro y de la amenaza de despojo de tierras, o del pago de una contribución extorsiva llamada ‘vacuna’; condiciones que a su vez se encontraron o convirtieron en el terreno abonado y justificación para la conformación, inicialmente en algunos territorios

de Santander, del Magdalena Medio y de otras regiones, de grupos campesinos de autodefensas y posteriormente de estructuras armadas ilegales con carácter contrainsurgente, que permitió configurar lo que posteriormente se conoció como el fenómeno paramilitar y la parapolítica.

Estructura e incidencia del paramilitarismo en Santander y la región

En la región el dispositivo paramilitar inicia en Puerto Boyacá y se va a extender por todo el territorio a través de 2 ejes viales: uno, el del río Magdalena y el de la troncal del Magdalena Medio, que les permitió llegar al sur de Bolívar, sur del Cesar y Barrancabermeja e internarse en las zonas altas de cordillera hasta copar los núcleos poblacionales más importantes del área metropolitana de Bucaramanga y la provincia santandereana; y dos, la del Río Carare – Opón que les permitió implantarse en el territorio del Carare - Opón y copar los núcleos poblacionales urbanos más importantes de las provincia de Vélez, Guanentina, Comunera y García Rovira⁶².

Por sus vínculos estrechos con el narcotráfico el proyecto paramilitar en la región se caracterizó desde sus inicios por una tendencia caudillista con expresiones de autonomía, que llevó al surgimiento de faccionalismos y pugnas internas entre jefaturas contrainsurgentes, por el control del poder y el manejo de rentas ilegales, territorios y presupuestos municipales.

En la región este fenómeno presentó manifestaciones distintas, propias de los diferentes intereses y visiones de sus jefes fundadores locales, en la lucha inicial promotores de grupos contrainsurgentes y ganaderos locales como Pablo Emilio Guarín, Henry Pérez y Ariel Otero, reconocidos comandantes contrainsurgentes de Puerto Boyacá financiados por el narcotráfico quienes conformaron estructuras armadas para combatir a la guerrilla.

También se reconoce en el desarrollo de este proyecto paramilitar la presencia activa de narcotraficantes y

nuevos jefes contrainsurgentes traídos de fuera de la región e impuestos, como es el caso del Bloque Central Bolívar dentro de la federalización de las AUC.

Fueron evidentes los conflictos entre los jefes paramilitares y facciones a su interior por diferencias en el manejo de recursos provenientes del narcotráfico y el abuso de poder de éstos entre las comunidades, siendo el caso más conocido el de alias ‘Camilo Morantes’, autor y determinante de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, y otros múltiples homicidios y desplazamientos forzados allí, quien terminaría asesinado por los mismos paramilitares en el año de 1999 por malos manejos de recursos provenientes del narcotráfico y los crímenes cometidos contra la población de Barrancabermeja y otros municipios del Magdalena Medio santandereano.

La disputa también surge entre nuevos jefes contrainsurgentes de las AUC y viejos jefes locales de autodefensa campesina que se resistieron a participar del proyecto confederado de las AUC en la región. Tal es el caso de alias ‘Nicolás’, comandante del Frente Isidro Carreño, quien militó en las filas de las autodefensas campesinas de San Juan Bosco de La Verde lideradas por el inspector de policía Isidro Carreño desde la primera mitad de la década de los 80; ‘Nicolás’ por su liderazgo contrainsurgente en las comunidades campesinas de San Vicente, El Carmen, Santa Helena del Opón, La Aguada, Simacota y Corregimiento El Centro en Barrancabermeja, logra conformar un cuerpo armado que lo va a llevar a mantenerse aislado del proyecto confederado de las AUC y a convertirse en blanco de persecución de los diferentes bloques que operaban en la región como el Bloque Central Bolívar y el Bloque Magdalena Medio.

La estructuración de las AUC bajo el mando de Carlos Castaño, reconoció al Bloque Central Bolívar para la región Magdalena Medio y parte del Nororiente, incluido Santander. Un documento de la Fiscalía de Justicia y Paz dentro de la formulación de cargos de Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, da cuenta que⁶³:

62- LESMES, Libardo –Documento Marcos interpretativos para el análisis dinámicas de riesgo en territorio Santandereano-2012. p. 2

63- Escrito de acusación Unidad Nacional de Fiscales para la Justicia y la Paz, Medellín, 30 junio de 2011, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias ‘Julián Bolívar’.

“El Estado Mayor del naciente BLOQUE CENTRAL BOLIVAR estuvo conformado por CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO alias “JAVIER MONTAÑES” o “MACACO”, como Comandante General, RODRIGO PEREZ ALZATE, alias “JULIAN BOLIVAR”, segundo comandante general IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, alias “ERNESTO BAEZ”, como comandante político... Conformado el bloque, se estructuraron los siguientes Frente por zonas:

Zona del Sur de Bolívar: Frente Combatientes de la Serranía de San Lucas, Frente Vencedores del Sur y Frente Libertadores del Río Magdalena.

Zona Santander: Frente Fidel Castaño Gil, Frente Walter Sánchez, Frente Alfredo Socarras, Frente Isidro Carreño, Frente Comunero Cacique Guanentá, Frente Patriotas de Málaga, Frente Lanceros de Vélez y Boyacá, Frente Pablo Emilio Guarín y Conquistadores de Yondó...”

“...Dominados los territorios del Sur de Bolívar y como consecuencia de la situación que se vivía en algunos municipios de Santander (Barrancabermeja y San Rafael de Lebríja), por los desmanes contra la población civil ordenados por GUILLERMO CRISTANCHO ACOSTA conocido como “CAMILO MORANTES” y teniendo como antecedente su falta de colaboración para el ingreso al Sur de Bolívar, en el mes de noviembre de 1.999, CARLOS CASTAÑO desde el Alto Sinú, imparte la orden de asesinarlo, hecho que fue perpetrado por hombres al mando de RODRIGO PEREZ ALZATE y GUSTAVO ALARCÓN.

Muerto MORANTES los hombres que estaban bajo su mando, quedaron dispersos en pequeños grupos por todo el departamento de Santander. JUAN FRANCISCO PRADA MARQUEZ alias “JUANCHO PRADA”, NELSON ZABALA VERGEL alias “MARIO ZABALA” y CIRO ANTONIO DIAZ AMADO alias “NICOLÁS” conservaron sus estructuras, pero fueron incapaces de controlar los hombres que quedaron a la deriva tras la desaparición de MORANTES.

Como consecuencia de esta situación, a comienzos del año 2000, CARLOS CASTAÑO dispuso que las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar -AUSAC- desaparecieran como organización autónoma. Así los frentes que estaban bajo el mando de CIRO ANTONIO DIAZ AMADO y de NELSON ZABALA, quedaron integrados a las autodefensas del Sur de Bolívar, como estructuras políticamente articuladas al Bloque, pero sin nexos de subordinación jerárquica. Las zonas que habían sido del dominio de GUILLERMO CRISTANCHO ACOSTA alias CAMILO MORANTES pasaron a ser comandadas directamente por RODRIGO PEREZ ALZATE y el grupo al mando de JUAN FRANCISCO PRADA MARQUEZ alias “JUANCHO PRADA”, se mantuvo independiente por algunos años, hasta cuando se incorporó orgánicamente a la estructura del Bloque Norte.

Hechas estas definiciones, se le asignó a JUAN FELIPE MONCADA conocido como el comandante “NIÑO ESCOBAR”, hombre que llegaría al Sur de Bolívar con los 20 hombres que dispuso “JUANCHO PRADA”, la responsabilidad de dirección y mando de los frentes que entrarían a operar en los municipios de Sabana de Torres, Puerto Wilches y toda la región del Bajo Rionegro, territorios que dominaba “CAMILO MORANTES”.

En febrero de 2001 PEREZ ALZATE abandona definitivamente el territorio del Sur de Bolívar para trasladarse al departamento de Santander y Puerto Berrío (Antioquia), quedando dichos territorios bajo el mando directo de CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO alias “Macaco”. Por su parte JHON FRANCIS ARRIETA alias GUSTAVO ALARCON permanece en estos territorios hasta comienzos del año 2002 cuando es designado comandante de la zona Santander.”

Frentes AUC que delinquieron en Santander

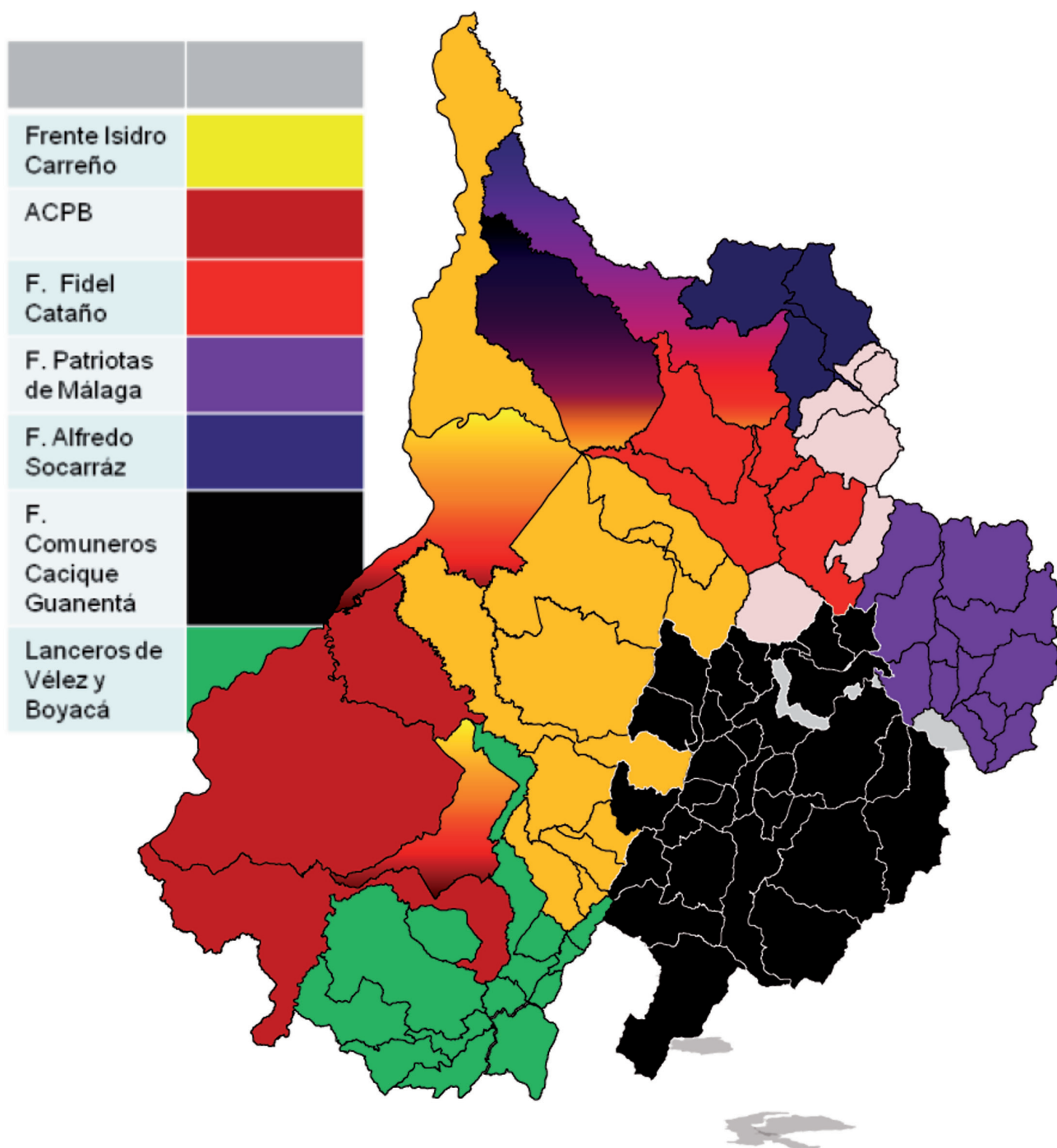
Las estructuras armadas paramilitares que hicieron presencia en Santander pueden identificarse en dos procesos fundacionales del paramilitarismo en Colombia, el conocido como el proceso paramilitar de San Vicente de Chucurí, posteriormente cooptado por las AUC a través del Bloque Central Bolívar- Sur de Bolívar; y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, así como las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) bajo el mando de Ramón Isaza.

La importancia estratégica de Santander en la región conocida como Magdalena Medio, que la ubica en el centro articulador de la industria petrolera, las plantaciones de palma africana, los distintos proyectos agroindustriales y el cultivo de coca, determinó la entrada de grupos armados que convirtieron los enclaves armados y geoestratégicos en zonas de disputa y posterior control territorial desde escenarios de subordinación, a través de los cuales se ejercía una progresiva expansión hacia corredores regionales que facilitaban el engranaje de la empresa criminal de explotación de los recursos existentes y el negocio del narcotráfico. Fue así como a partir del establecimiento de los grupos de las AUC en Barrancabermeja y Cimitarra, se fueron ubicando frentes que terminaron cubriendo casi la totalidad del departamento de Santander, copando regiones claves como el Bajo Rionegro, García Rovira, Guanentina, Comunera y la región de Vélez.

Todas las estructuras paramilitares con incidencia en las décadas de los 80 y 90 en la región, que funcionaban como ejércitos locales⁶⁴, con una amplia incidencia e involucramiento de la comunidad, terminaron sometidas en los procesos expansivos de las AUC entre los años de 1995 a 2000: las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, ACMM, terminaron como parte de la estructura de las AUC, aunque manteniendo cierta autonomía; mientras que el proyecto paramilitar San Juan Bosco de la Verde fue reemplazado por el Frente Juan Carlos Hernández del Bloque Central Bolívar BCB, en la región del bajo Simacota y El Carmen de Chucurí⁶⁵. Por su parte las Autodefensas Unidas de Santander y sur del Cesar (AUSAC) cedieron terreno en el departamento de Santander con la muerte de alias ‘Camilo Morantes’, repartiendo miembros entre los frentes Walter Sánchez, Lanceros de Vélez y Boyacá y Alfredo Socarras del BCB. Ya en el año 2001, el BCB había establecido control sobre las regiones geoestratégicas con diferentes estructuras distribuidas en el territorio santandereano.

64- Ver: BONILLA, Laura, “Magdalena Medio: De las Luchas por la Tierra a la Consolidación de Autoritarismos Subnacionales”, en: “Parapolítica. La Ruta de la Expansión Paramilitar y los Acuerdos Políticos.”, Corporación Nuevo Arco Iris, Editorial Intermedio, Segunda Edición, Bogotá, D.C., Colombia, Noviembre de 2007.

65- Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP, “Deuda con La Humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988- 2003”. Bogotá, D.C., Diciembre de 2004. Capítulo: “Puerto Boyacá. Una experiencia piloto de paramilitarismo”. Ver además artículo en: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/11-periodo-1/3556-muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo->



Fuente: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR

La presencia expandida de los grupos paramilitares tiene dos condiciones importantes para la comprensión del fenómeno en la región. La primera de ellas tiene que ver con una presencia activa de movimientos sociales por la defensa de los Derechos Humanos, con epicentro en Barrancabermeja, con un alto nivel de movilización social de la clase obrera y los sindicatos, así como de una fuerte presencia en la región del Carare, especialmente en Cimitarra, relacionada con el movimiento campesino, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y las luchas por la redistribución de la tierra para el campesinado.

De otra parte, la presencia de terratenientes, ganaderos y grandes empresarios que, acorralados por la presión guerrillera, el cobro de ‘vacunas’ y adicionalmente por los movimientos campesinos que avanzaban en la recuperación de las tierras, conformaron expresiones locales de ejércitos armados para proteger sus intereses, con fenómenos políticos que representaban a los mismos, tales como Movimiento de Restauración Nacional (Morena). El auspicio de las fuerzas militares en la región del Magdalena Medio, en especial de la Brigada XIV del Batallón Bárbula del Ejército, principalmente en Cimitarra, donde se realizaron labores conjuntas y se proporcionaron armas y entrenamiento militar a los grupos paramilitares, así como el apoyo del emergente Cartel de Medellín y la creación del MAS, fueron también determinantes para la penetración paramilitar en todas las regiones y la institucionalidad en el Departamento.

Las AUC en Santander y el Magdalena Medio contaron con influencia política y militar en el Congreso de la República y en la gobernabilidad nacional y regional; es así que promovieron distintas iniciativas legislativas y decretos para apoyar y legalizar los grupos de autodefensa, como en el caso de las cooperativas de vigilancia Convivir, y también apoyaron candidatos a elección popular en alcaldías y gobernaciones.

Su estrategia principal, a lo largo de los años 90, fue armar civiles que apoyaran la acción contrainsurgente de las fuerzas militares con acciones de guerra sucia paramilitar. Las fuerzas militares a través de comandantes facilitaron el entrenamiento, capacitación y dotación a estos grupos desde su inicio, en su labor de exterminio, homicidio selectivo,

masacres y desplazamiento forzado contra pobladores y comunidades señaladas de colaborar con las guerrillas, también de persecución política contra organizaciones de izquierda, inicialmente a la Unión Patriótica, el Partido Comunista y posteriormente a la Alianza Democrática M-19, y contra el sindicalismo, organizaciones sociales, comunitarias y de derechos humanos, líderes sociales e intelectuales, por considerarlos aliados de los grupos guerrilleros.

Graves hechos del paramilitarismo y el conflicto armado en Santander

El exterminio de la Unión Patriótica y la persecución desatada contra distintas organizaciones sociales, campesinas, sindicales y de derechos humanos arrojaron miles de homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, amenazas y otras graves violaciones de derechos humanos entre los años 1985 a 2002; y tuvieron el anuncio de la inusitada presencia y expansión de los grupos de autodefensa y paramilitares en Santander y la región del Magdalena Medio.

La desaparición y masacre de 19 comerciantes (1987) y la masacre en La Rochela de una comisión de investigación judicial integrada por jueces e investigadores (1989), ambas cometidas por los paramilitares en el Magdalena Medio santandereano, marcaron la característica violenta y criminal de un sector de la sociedad colombiana opuesto a cualquier cambio institucional del statu quo. En este caso se configura una alianza estrecha entre militares, paramilitares y narcotraficantes. La autoría material de estos hechos registrados fue comprobada en cabeza de Alonso de Jesús Baquero alias ‘Vladimir’, quien fue el autor de numerosos crímenes en los años 80 en el Magdalena Medio; ‘Vladimir’, desde muy joven hizo parte de las Farc de donde desertó, posteriormente ingresó al grupo MAS y fue hombre de confianza de Henry Pérez, comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Confesó trece años más tarde de ocurrida la Masacre de La Rochela: *“El mexicano nos dio la orden de matarlos a todos y dejarlos en la autopista. Ese trabajo me lo encargaron a mí. Me dieron orden de matarlos, no importaba como”*⁶⁶.

66- GONZÁLEZ, Diro César. Los días que estremecieron a Barrancabermeja. Barrancabermeja: 2011. p. 69, 71.

El exterminio de la Unión Patriótica por la muerte violenta, persecución y desplazamiento de sus principales dirigentes de Barrancabermeja y Santander constatan una campaña sistemática que inicia en agosto del año 1986 con el asesinato de Leonardo Posada, miembro de la Cámara de Representantes por la UP. A él se suma la muerte de Manuel Gustavo Chacón dirigente sindical de la USO en febrero de 1988 y meses después la de Orlando Higueta otro dirigente de la UP, la desaparición forzada de Cristian Roa dirigente sindical de la CUT, la desaparición y asesinato del poeta Chucho Peña, la desaparición forzada de Isidro Caballero dirigente sindical del magisterio santandereano, la masacre contra los trabajadores de la palma africana sindicalizados en San Alberto, sur del Cesar, y numerosos atentados ocurridos en este período, referenciados en distintos informes oficiales.

La ruta macabra de la muerte también se extendió en el Carare. El 26 de febrero de 1990 en el municipio de Cimitarra se perpetró la masacre de la periodista Silvia Duzán y los líderes de la asociación campesina ATCC, Josué Vargas Mateus, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas, quienes promovían la experiencia civilista de una comunidad de colonos y campesinos en un territorio olvidado socialmente por el Estado, en el que construían un espacio de desarrollo rural campesino, paz y no violencia que fuera respetado por los distintos actores del conflicto armado.

Estos hechos fueron el anuncio de un baño de sangre en el país, de una nueva etapa de confrontación y guerras contra las fuerzas democráticas que propugnaban la modernización del país y la edificación de la paz digna para la superación definitiva del conflicto armado, con garantías y espacios para la diversidad territorial y política. La muerte violenta de tres candidatos presidenciales de diferentes fuentes ideológicas en

la campaña presidencial de 1990, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo, fueron la confirmación del baño de sangre declarado contra la oposición y la apertura democrática promovida por el presidente Belisario Betancur.

Otro crimen de lesa humanidad tristemente célebre fue la masacre ocurrida el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, cometida por las AUC bajo órdenes de Carlos Castaño y 'Camilo Morantes' mando responsable del Bloque Central Bolívar de las AUC en la zona. Aquel día a sangre y fuego irrumpieron en Barrancabermeja, a los barrios del sector nororiental, con un contingente de paramilitares en camiones que fueron secuestrando al azar a 25 víctimas, a otras 7 personas las asesinaron in situ durante el recorrido. Las AUC hicieron una declaración, que se hizo pública el 6 de junio del mismo año, aceptando la responsabilidad de los hechos, y el asesinato posterior de los 25 desaparecidos. 'Camilo Morantes' en entrevista a la revista SEMANA del 24 de agosto de 1998, reconoció su participación en este ataque criminal contra la población civil de Barrancabermeja, aduciendo que tenían vínculos con las milicias populares⁶⁷ (argumento que ha sido plenamente desvirtuado por los familiares de las víctimas).

La subregión del Sur del Cesar se desarrolla en el marco del proceso de los proyectos agroindustriales de palma africana iniciados a mediados de la década del 60, también escenario de los primeros hechos violentos contra la población con el desalojo de las familias campesinas que habitaban estos territorios⁶⁸. En la década de los 70 ya sumaban 1.800 los trabajadores afiliados a la Asociación Sindical de Trabajadores de Indupalma⁶⁹, Asintraindupalma, mejorando los ingresos y la calidad de vida de la región⁷⁰. Así, el ascendente papel sociopolítico que ganó el Sindicato

67- Ibid., pág., 79, 80.

68- COMPROMISO- FUNDESVIC. 2011. Documento Memoria de las víctimas del sur del Cesar. En 1976, Indupalma tenía 5.500 hectáreas de tierra plantadas con palma aceitera; en el 95, 11.000 y para el 2007, 18.000 hectáreas. La proyección es unir los cultivos de palma de los municipios de San Alberto, Sabana de Torres y Puerto Wilches. Fedepalma, 1998.

69- Ibid. Indupalma pertenece al conglomerado familiar Gutt-Haime, de orígenes francés y judío, conformada por 20 sociedades. Desde el punto de vista productivo, el conglomerado aparece ubicado prioritariamente en el sector de grasas, aceites comestibles, y productos derivados, como jabones y alimentos concentrados para animales. Actualmente figura Carlos Haime Baruch y su esposa Sonia Gutt de Haime como propietarios de la empresa. El gerente es Rubén Darío Lizarralde Montoya, desde 1993.

70- Ibid. En el año 2000, después que San Alberto y el Sur del Cesar en general soportó la feroz incursión paramilitar, el número de afiliados al sindicato se redujo a menos de 200. Se impusieron las denominadas cooperativas de trabajo asociado controladas por el paramilitarismo, al igual que el sindicato. La empresa INDUPALMA actuó de hecho como cómplice de esta situación, en tanto favorecía sus intereses. Desde los primeros años de los 90, ya se denunciaba la actuación de los paramilitares como capataces en la vigilancia de las labores diarias de los trabajadores.

empezó a disputar el control de los tradicionales poderes económicos y políticos de la región del sur del Cesar, generándose una violenta respuesta por parte de distintos actores armados, que se manifestó al comienzo como acciones de sicariato, pero que después se recrudeció como estrategia paramilitar en toda la región.

La oleada criminal dejó como resultados más de 500 familias desplazadas de la región, 10 desapariciones forzadas, 124 homicidios, 10 familias en el exilio, la organización sindical con 1.400 asociados fue destruida a sangre y fuego y con la imposición del sistema de cooperativas de trabajo asociado. Al finalizar los años 90, un número de 82 líderes de San Alberto habían sido asesinados, entre ellos, cinco presidentes de Sintraproaceites: José Madrid Bayona en 1991, Marcos Vásquez espinel, torturado y asesinado en 1996, Jairo Cruz en 1998, Leonidas Moreno en 1998 y Juan Gómez el 1 de Mayo de 2002. Alrededor de 400 trabajadores de Indupalma fueron desplazados⁷¹. Hoy el sindicato solo cuenta con 230 afiliados, que viven en medio del temor y los riesgos de sufrir idéntica suerte.

Las investigaciones judiciales y estudios académicos adelantados posteriormente por diferentes entidades públicas y de derechos humanos, dan cuenta de que a lo largo de los últimos 30 años estos sectores armados se expresaron violentamente cometiendo toda clase de crímenes y violaciones de derechos humanos, con diferentes formas; fundamentados en una ideología anticomunista y militarista, en oposición con los procesos aperturistas hacia la negociación del conflicto para la paz y las reformas democráticas, por considerarlos enemigos de sus intereses. El proyecto paramilitar diseñó una red de relaciones políticas y económicas en todo el territorio, con capacidad de incidencia en los gobiernos municipales y departamentales, en las empresas privadas y públicas.

A la luz del marco constitucional, en la responsabilidad del Estado (Art. 2 de la C.P.N.)⁷² se constata una omisión

grave en cuanto al deber de garantía con los derechos fundamentales de miles de personas que fueron víctimas de los grupos armados (AUC, paramilitares y guerrillas) en el departamento de Santander y la región del Magdalena Medio. En la medida que el Estado colombiano tiene la responsabilidad política y jurídica, por la acción de las entidades y funcionarios correspondientes de haber promovido y apoyado los grupos paramilitares como fuerzas ilegales aliadas de la contrainsurgencia oficial, y de haber omitido sus acciones de protección y amparo para proteger la vida y los bienes de las víctimas, principalmente civiles, de este territorio.

Otra expresión de esas fallas del Estado, agravante de la crisis humanitaria en la región es el caso del despojo de tierras y el desplazamiento forzado de más de 149.342 personas⁷³ que acompañó toda la intervención violenta de los grupos paramilitares y guerrilleros en Santander, sin que mediara una eficaz política de prevención y protección. Así, en el estudio “La voz de las regiones”⁷⁴, adelantado por la Procuraduría General de la Nación sobre el despojo de tierras, señala que a junio de 2008, en lo referido al proyecto protección de tierras y patrimonio de la población desplazada, el rango del departamento de Santander es muy bajo en relación con áreas declaradas con medidas de protección individual (del 0 al 5% del área total reportada).

En ese mismo estudio se registra, con corte a 30 de septiembre de 2008, en los resultados de la protección individual de predios en Santander un total de 34.101,39 hectáreas, de 714 personas, ratificando que el porcentaje de protección es bastante bajo, comparado con las cifras del desplazamiento en Santander. Hasta mediados de 2012 el proceso de restitución de tierras y bienes, establecidos por Ley 1448 de 2011, sobre reparación integral a las víctimas y restitución de tierras, que obliga a los desmovilizados a favor de las víctimas, no se ha iniciado.

71- Ibíd. Un 80% de los desplazados forzosos tomaron como destino el departamento de Santander, especialmente a los municipios de El Playón, Rionegro, Lebrija, Girón, Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga, casi todos ellos alrededor del Área Metropolitana, a excepción del primero. El resto de trabajadores desplazados, un 15% se ubicaron en la Costa Atlántica y un 5% en el centro del país.

72- “... las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. CPN.

73- GOBERNACION DE SANTANDER. Informe presentado a la Mesa Departamental de Víctimas. Mayo 2012.

74- PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. La Voz de las Regiones. Bogotá, julio de 2009. p. 459, 460, 461.

Desplazamiento forzado, un hecho de graves consecuencias en Santander

Entre los años 1998 – 2002, el paramilitarismo tuvo su mayor auge con los indicadores de violencia contra la población civil en todo el país, con gran fuerza en Santander y el Magdalena Medio. El desplazamiento forzado se multiplicó, siendo el paramilitarismo su principal responsable, según los registros nacionales y regionales y municipales.

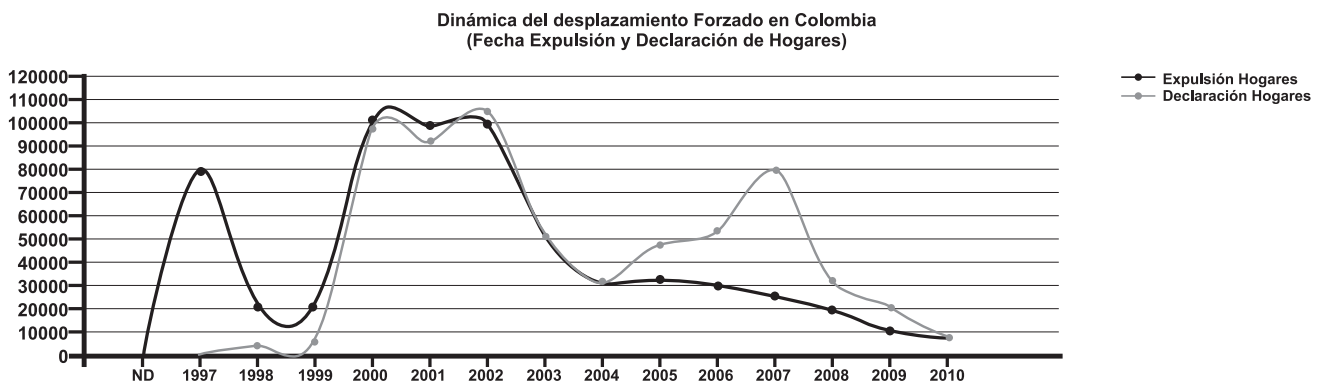
Entre 2005 y 2006, luego de las desmovilizaciones de grupos paramilitares de las AUC (2003-2006) se apreció una disminución significativa de los desplazamientos forzados y otras violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Sin embargo fue evidente que las desmovilizaciones fueron parciales y distintas estructuras armadas permanecieron en el territorio. Así, 2008 se caracterizó por la reanudación de los éxodos masivos. El desplazamiento que había disminuido en los anteriores años presentó un nuevo incremento, aunque las lógicas y motivaciones para producirlo cambiaron, según CODHES, “la razón de la nueva

ola de desplazamientos son ahora los intereses económicos sobre la tierra y no el control político”⁷⁵. La construcción de megaproyectos o el uso de la tierra para proyectos productivos de gran envergadura, parecen corresponder a las lógicas de expulsión de la población de sus tierras.

Entre los causantes del desplazamiento aparece el Estado, por las fumigaciones áreas y la intensificación del conflicto; las organizaciones paramilitares y el accionar de las guerrillas con el minado de campos, la extorsión y el reclutamiento forzado de la población.

Uno de los mayores problemas para la población desplazada, se ve reflejada en la diferencia de cifras que sostienen organizaciones no gubernamentales y Acción Social. Entre 2007 y 2008, para CODHES⁷⁶ hay un incremento del 41% (270.675), según el informe Tapando el sol con las manos; mientras que en Acción Social hay una disminución del 26%. Así, para Acción Social se habría reducido el desplazamiento pasando en el primer semestre de 2007, de 151.889 personas a 111.161 personas⁷⁷ (26%), mientras que para CODHES es al contrario.



Fuente: Acción Social

75- CODHES, Consultoría sobre los derechos humanos y el desplazamiento. En: <http://www.codhes.org>. Fecha de consulta: 20 de abril de 2012.

76- CODHES. Tapando el Sol con las Manos. Disponible en: http://www.codhes.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=89&Itemid=50 Fecha de consulta: 20 de abril de 2012.

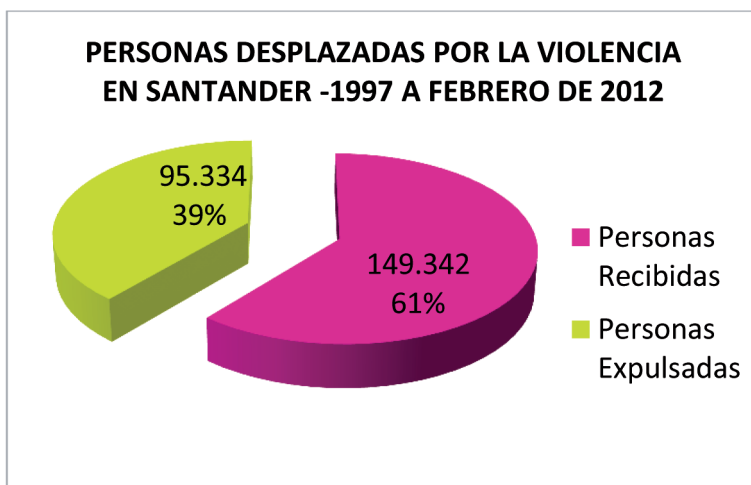
77- ÍNDICE GENERAL DE TABULADOS DE POBLACIÓN DESPLAZADA. Disponible en: <http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20feb%2028%20de%202009.htm>. Fecha de consulta: 05/03/08.

La grave situación de desplazamiento forzado conllevó a la Corte Constitucional, en su sentencia T-025 de 2004, a exponer un “estado de cosas inconstitucional”. Pero años después, en 2008, esta situación se mantenía inalterada: “el gobierno no ha garantizado los derechos de la población desplazada por lo cual el estado de cosas inconstitucional no ha sido superado”⁷⁸. Por su parte, el proceso de restitución de tierras ha sido ineficiente para devolver las tierras usurpadas, de un total de 6.8 millones de hectáreas, a finales del 2007, sólo se habían recuperado 4.762 hectáreas, según el Informe para el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos, esto correspondería únicamente al 0,007% del total de los bienes usurpados.

El desconocimiento del auto 022⁷⁹ por los derechos de los desplazados y del derecho de consulta formulado en el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas, al usarse sus tierras para construir infraestructuras o desarrollarse proyectos de explotación de recursos naturales⁸⁰, aumenta el riesgo de desplazamiento de población vulnerable o de ser expropiados.

Actualmente el país ha pasado deshonrosamente a ocupar el segundo lugar, después de Sudán, con mayor número de población desplazada, que se estima es muy superior a 3 millones. A pesar de esta escabrosa realidad, algunos de los sectores más reaccionarios durante el gobierno de Uribe Vélez sostuvieron: “Nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración en buena parte por el paramilitarismo y la guerrilla (...) esa gente se fue para las ciudades y allá están como migrantes”⁸¹, estas actitudes incentivan la impunidad y a que como lo indica ACNUR que “en sólo el 1% de los casos (por desplazamiento) se inicien investigaciones”⁸².

Víctimas del conflicto armado en Santander, en cifras



Fuente: UNIDAD NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A VÍCTIMAS

78- COORDINACIÓN COLOMBIA-EUROPA- ESTADOS UNIDOS. “Informe para el Examen Periódico Universal de Colombia”. Julio, 2008. p. 15.

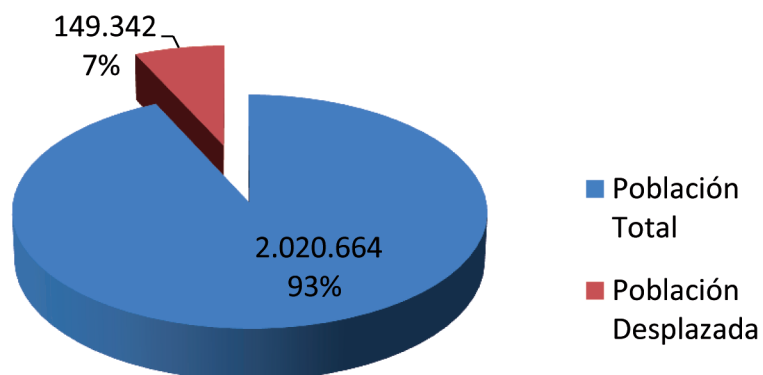
79- Tampoco se ha tomado en cuenta el Auto 092 que hace hincapié en los efectos devastadores del desplazamiento forzado en la vida de las mujeres, que se suman a la discriminación y la inequidad tradicionales.

80- COORDINACIÓN COLOMBIA-EUROPA- ESTADOS UNIDOS. op.cit. p. 16.

81- REVISTA CAMBIO. “El país según José Obdulio”. Noviembre 2 de 2008. Disponible en: http://www.cambio.com.co/portadacambio/789/4445405-pag-3_3.html. Fecha de consulta: 21 de abril de 2012.

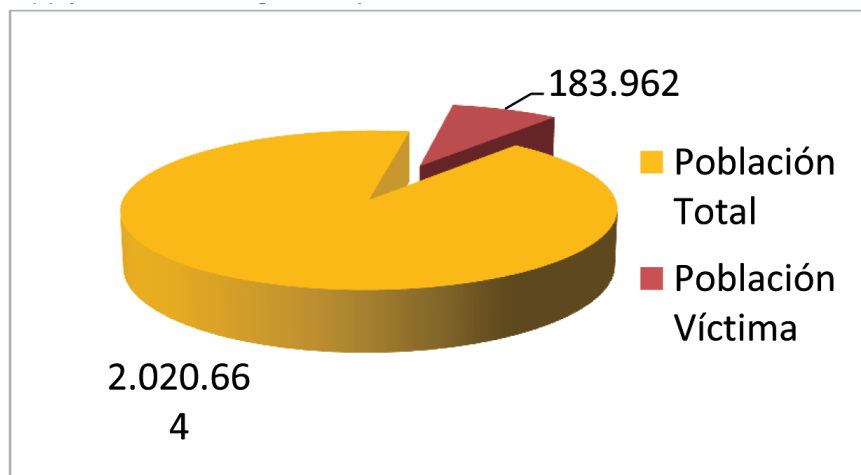
82- ACNUR. La situación de los derechos humanos en Colombia. Editorial CÓDICE LTDA, Bogotá D.C 2008. p. 16

POBLACION SANTANDER / POBLACIÓN DESPLAZAD - 1997 A FEBRERO DE 2012



Fuente: UNIDAD NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A VÍCTIMAS

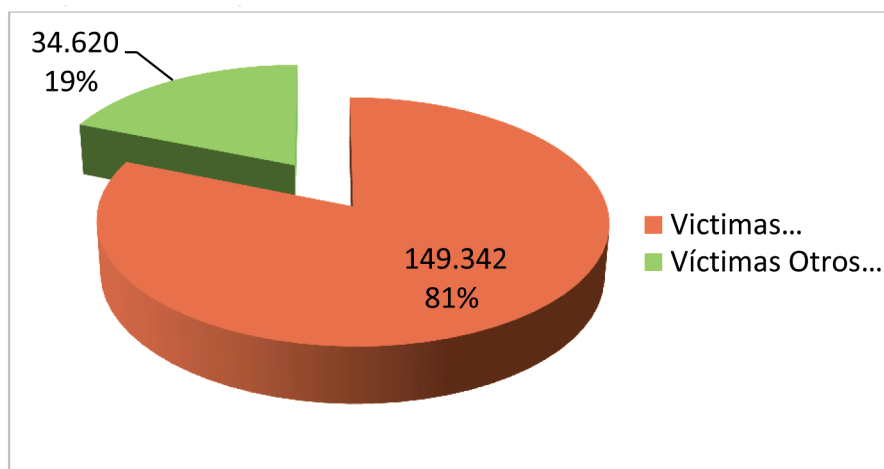
POBLACION TOTAL SANTANDER / VICTIMAS DEL CONFLICTO -1997 A FEBRERO DE 2012



Fuente: UNIDAD NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A VÍCTIMAS

La población víctima del conflicto en Santander corresponde al 9,10 % de la población total del Departamento.

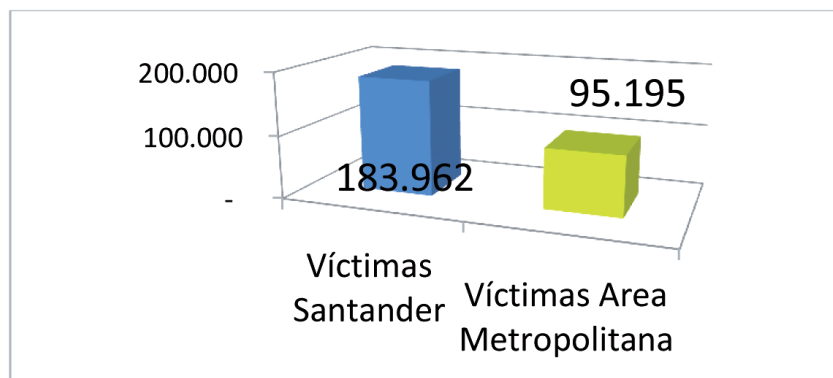
POBLACION VICTIMA DESPLAZAMIENTO / VICTIMAS DE OTROS HECHOS -1997 A FEBRERO DE 2012



Fuente: UNIDAD NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A VÍCTIMAS

La población víctima del conflicto en Santander corresponde al 9,10 % de la población total del Departamento, las víctimas del desplazamiento suman el 81% del total de esta población victimizada.

VICTIMAS SANTANDER / AREA METROPOLITANA -1997 A FEBRERO DE 2012



Fuente: UNIDAD NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A VÍCTIMAS

La población víctima del conflicto en el área metropolitana (Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta) corresponde al 52 % de las víctimas del conflicto en el Departamento.

La Parapolítica: un fenómeno que amenaza la vigencia del estado social de derecho

La teoría del estado democrático colombiano considera el bienestar general de la población y el interés común como uno de los fines esenciales de su existencia,

parte fundamental que orienta la razón de ser de las instituciones públicas, que se explican en la elección de sus gobernantes mediante el voto secreto respetando la libertad de partidos y candidatos, el mandato gubernamental del monopolio de la fuerza, la administración de justicia, la promoción y protección de los derechos humanos a todos los ciudadanos y el desarrollo de las leyes, facultades y principios que dan sentido colectivo, identidad, pertenencia y participación en igualdad de derechos a los ciudadanos colombianos.

El fenómeno de la parapolítica tiene una profunda significación jurídica y política que cuestiona la vida institucional colombiana en todas sus estructuras. Es la trasgresión de todos los principios de autonomía del poder público por medios ilícitos y violentos como el fraude electoral, la amenaza, la intimidación, la apropiación de los recursos y presupuestos públicos del poder estatal por parte de grupos de presión armados, en alianzas con líderes o agrupaciones políticas, con fines de interés particular, atentando contra la vigencia de los derechos fundamentales, la legitimidad de las instituciones y de sus actuaciones, las libertades y garantías individuales y colectivas y con ello, configurando un cuadro complejo de delitos contra los intereses generales de la comunidad.

La parapolítica es reconocida como el escándalo político desatado en Colombia a partir del año 2006, por la revelación hecha por los jefes paramilitares sobre los vínculos entre personajes de representación política en el Congreso de la República, alcaldías y gobernaciones con grupos paramilitares de las AUC, hechos conocidos luego de su desmovilización, en sus versiones libres ante la Fiscalía y tribunales de Justicia y Paz, que los juzga en el marco de la Ley 975 de 2005.

En julio de 2006 la Corte Constitucional condiciona la Ley 975 de Justicia y Paz, que había tramitado el Gobierno ante el Congreso para el proceso de desmovilización de paramilitares. La Corte estableció que para que los jefes paramilitares pudieran acceder a los beneficios judiciales debían: “hacer una confesión plena y sincera, revelar la ubicación de los cuerpos de los desaparecidos y pagar reparaciones económicas a sus víctimas con sus bienes legales y no sólo con los bienes ilícitos que ellos voluntariamente elijan entregar”, estableciendo que quienes no cumplan con estas condiciones y vuelvan a delinquir perderían los

beneficios jurídicos de penas blandas que establece dicha Ley para los postulados. Es entonces cuando los jefes paramilitares concentrados en cárcel de máxima seguridad comienzan sus revelaciones.

La verdad de la parapolítica emerge progresivamente generando un impacto de grandes proporciones en el entramado político institucional, la opinión pública y la clase política, situación que pone al descubierto hechos criminales de alta gravedad que comprometen a políticos de diferentes regiones del país.

Según las investigaciones de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado se habrían beneficiado de estas alianzas, por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil algunos habrían presuntamente alcanzado puestos y cargos en alcaldías, concejos, asambleas y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones delincuenciales de estos grupos con el objetivo de consolidar su poder en el territorio.

Las afirmaciones del jefe máximo de las AUC Salvatore Mancuso, en las que aseguraba que un 35 por ciento del Congreso “eran amigos” de su organización, dieron campanazos de alerta sobre la gravedad de estas aseveraciones. El escándalo se ha mantenido en diferentes medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones judiciales que han terminado con la detención de varios congresistas y otros políticos en ejercicio. Desde el año 2008 la Corte Penal Internacional está estudiando los procesos judiciales de la parapolítica.

Según investigaciones en curso, las consecuencias no han podido ser más graves para la sociedad colombiana y el estado democrático que se afectó en diferentes dimensiones como la legitimidad de sus gobernantes y parlamentarios, teniendo en cuenta los resultados electorales atípicos producto de supuestos delitos de intimidación y constreñimiento electoral, que habrían modificado el mapa político y la administración territorial con el manejo de los recursos y presupuestos públicos, en detrimento de la libertad ciudadana de elegir y ser elegido.

El juego con estas fuerzas violentas cuestiona la credibilidad, legitimidad y responsabilidad de partidos e instituciones, genera una corriente de antivalores donde “todo vale”, o como la ha llamado Antanas Mockus la “política del atajo”, de las conveniencias personales, en medio de un ambiente de indiferencia, desprestigio de la clase política y pérdida de liderazgo.

Así, le corresponde al Estado y a la sociedad civil asumir un proceso de rescate de la cultura política democrática como bien público, teniendo que asumir un proceso de esclarecimiento, depuración y justicia que aún no culmina ni logra restituir la confianza ciudadana en sus gobernantes e instituciones.

Santander escenario del surgimiento e incidencia de la parapolítica

Entre los años 80 y 90 las prácticas políticas de gobernabilidad en Santander se caracterizaron por su clientelismo y la pérdida de liderazgo de los partidos Liberal y Conservador, los cuales habían dominado y gobernado a su antojo las instituciones públicas. Un ambiente de corrupción progresiva y decadencia fue instalándose en el escenario de la administración pública y el poder electoral, consolidándose la vía

del enriquecimiento ilícito y el auge de los llamados barones electorales que convirtieron los recursos públicos en la disputa, por su control, para su permanencia y enriquecimiento.

Estas prácticas políticas corruptas condujeron al quiebre de la legitimidad territorial del régimen bipartidista, en cuyo seno surgió la estrategia de extinción violenta de todas las expresiones, organizaciones, líderes sociales y políticos de oposición que se plantearan reconstruir y desarrollar un modelo diferente y democrático de la política local y regional.

En este marco una nueva élite política y económica regional se incubó en Santander a partir de los años 90, provenientes de sectores que no se sentían representados en los viejos y decadentes partidos, ex sindicalistas, ganaderos, ex guerrilleros, nuevos ricos, comerciantes, etc. Con financiación de dudosa procedencia, se configuraron nuevas agrupaciones políticas como el movimiento MORENA, Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática, las cuales coparon progresivamente el espacio político de tradicional dominio liberal en esta región del país, dando paso a la configuración de una nueva geografía, un nuevo mapa político-electoral y económico de Santander.

CAPITULO III

Marco conceptual DDR: escenarios del DDR y Marco jurídico del proceso DDR con las AUC

Desarme, desmovilización y reintegración Marco conceptual y definiciones básicas

Los procesos conocidos como DDR, hacen referencia a cuatro etapas y definiciones básicas:

DESARME: Consiste en la entrega oficial del armamento pequeño, ligero y pesado; así como de las municiones y los explosivos, por parte de los miembros del grupo armado, y su posterior eliminación. Cuenta con un proceso minucioso de registro y documentación, apoyado en ocasiones por observadores de la comunidad internacional. Este proceso registra altos niveles de reciclamiento de material bélico para la entrega y correlaciones muy bajas entre hombre y arma entregada. Estas entregas son parciales y regularmente implican la utilización de caletas con armas y municiones posteriormente utilizadas por las disidencias, rearmes (si existen) o por la delincuencia común o el crimen organizado.

DESMOVILIZACIÓN: Es el momento en el cual la estructura armada se desintegra, como un acto voluntario de cada uno de sus integrantes de dejar la guerra y retornar a la civilidad. Este proceso puede conllevar un periodo de tiempo extenso, y la concentración de tropas en lugares de acantonamiento, campamentos, zonas o cuarteles, durante el cual de manera oficial y controlada se inscriben los que participan en los programas de apoyo inicial, denominado inserción.

REINSERCIÓN: Es la asistencia inicial que se ofrece a los desmovilizados y que a corto plazo permite solucionar de manera inmediata las dificultades que encuentran los

mismos en su regreso a la vida civil. Esta ayuda transitoria involucra a las familias de los desmovilizados y pretende suplir de manera rápida y efectiva sus necesidades básicas. Debe necesariamente hacer tránsito hacia un proceso de reintegración si se quiere garantizar la sostenibilidad del proceso.

REINTEGRACIÓN: Es un proceso a largo plazo que busca restablecer la condición de legalidad y civilidad de los desmovilizados, que permita el ejercicio de la ciudadanía plena de derechos, y la integración a las dinámicas sociales y comunitarias. Para tal fin, esta etapa se enmarca dentro de programas estatales que incluyen rehabilitaciones psicosociales y políticas para la reintegración económica, enfocadas en el desarrollo educativo y posibilidades de empleabilidad sostenible y generación de ingresos.

Adicionalmente, existen otros términos que se relacionan directamente con el DDR, y que sin embargo en ocasiones son utilizados de manera errónea o confusa. Lo relacionado con las concepciones básicas del Derecho Internacional Humanitario, ayudan a entender que tipo de sujetos son objeto de políticas de desarme, desmovilización y reintegración, y en qué contextos se llevan a cabo este tipo de acciones. Para la claridad conceptual del presente trabajo, se hace precisión respecto de los siguientes términos⁸³:

GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY: Esta definición se encuentra contemplada en el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y establece lo siguiente:

“...fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.”

Se entiende que los GAO son la parte no estatal dentro de los conflictos internos, pueden considerarse dentro de esta categoría a los Grupos Disidentes, que no son otros que parte de las fuerzas armadas del Estado que se vuelven contra el gobierno. Estos grupos están conformados, en ocasiones, por sectores de apoyo de la población civil y por fuerzas combatientes, sin embargo la definición de grupo armado organizado contempla en sentido estricto, solo la estructura armada militar en el sentido funcional.

En ese sentido, las fuerzas armadas en los conflictos armados no internacionales están conformados por miembros que participan directamente de las hostilidades de manera continuada y solo se entiende su No participación, en oposición de la población civil, cuando han depuesto las armas o son puestos fuera de combate. Dentro de lo que podía considerarse como DDR clásico, estas estructuras serían las únicas contempladas en el proceso.

83- Para mayor detalle y profundidad en las definiciones conceptuales aquí expuestas ver: Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, Nils Melzer, Asesor Jurídico, “Guía para Interpretar la Noción de Participación Directa en las Hostilidades Según el Derecho Internacional Humanitario.” Ginebra, Suiza, Diciembre de 2010.

PERSONA CIVIL: Este concepto entendido en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario refiere a todas aquellas personas que no son miembros de las fuerzas armadas de una parte en conflicto, con derecho a la protección contra los ataques directos producto de la confrontación, con la excepción de su participación directa en hostilidades mientras dure la misma.

Los distintos niveles de afiliación a una de las partes en conflicto, plantean dificultades para establecer la condición civil, sin embargo la definición en oposición a la de miembro de un GAOML, determina que si no existe una función continua correspondiente a la que asume el grupo de manera colectiva en la conducción de las hostilidades, entonces esta persona tiene condición de civil.

MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS Y PARTICIPACIÓN DIRECTA EN LAS HOSTILIDADES: El Comité Internacional de la Cruz Roja CICR, ha establecido distinciones específicas para las personas que se consideran parte dentro de las hostilidades. En este sentido y atendiendo a lo previamente especificado, los miembros de las fuerzas armadas estatales y de los grupos armados organizados de una parte en conflicto, son aquellos que participan directamente de las hostilidades en actos específicos ejecutados por personas de manera continua (función continua de combate). Aquellos que participan ocasionalmente de las hostilidades perderán el derecho a protección contra los ataques directos mientras dure tal participación, sin que lo anterior implique su inclusión dentro de la categoría de miembros. Según esta concepción la participación directa en las hostilidades debe cumplir los siguientes elementos constitutivos:

1. *Debe haber probabilidades de que el acto tenga efectos adversos sobre las operaciones militares o sobre la capacidad militar de una parte en un conflicto, o bien, de que cause la muerte, heridas o destrucción a las personas o los bienes protegidos contra los ataques directos (umbral de daño), y*
2. *Debe haber vínculo causal directo entre el acto y el daño que pueda resultar de ese acto o de la operación militar coordinada de la que el acto constituya parte integrante (causalidad directa) y*
3. *El propósito específico del acto debe ser causar directamente el umbral exigido de daño en apoyo de una parte en conflicto y en menoscabo de otra (nexo beligerante).*

La participación directa en las hostilidades inicia en la preparación de la ejecución del acto, continúa en el despliegue al lugar de su ejecución y la acción específica, y finaliza al término del regreso.

EL CONCEPTO DE COMBATIENTE: En el marco de los conflictos de carácter internacional, se entiende por Combatiente según lo establecido por el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I):

1. *Las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa Parte, aun cuando ésta esté representada por un gobierno o por una autoridad no reconocidos por una Parte adversa. Tales fuerzas armadas deberán estar sometidas a un régimen de*

disciplina interna que haga cumplir, inter alia, las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados.

2. *Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto (salvo aquellos que formen parte del personal sanitario y religioso a que se refiere el artículo 33 del III Convenio) son combatientes, es decir, tienen derecho a participar directamente en las hostilidades.*
3. *Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas armadas un organismo paramilitar o un servicio armado encargado de velar por el orden público, deberá notificarlo a las otras Partes en conflicto.*

De otra parte, el término se ha reconocido para garantizar los derechos de las personas protegidas por el derecho internacional humanitario, en cuanto a aquellas que dejan las armas o son puestas fuera de combate, y no en reconocimiento de la beligerancia en los casos de su accionar militar⁸⁴.

LOS MERCENARIOS: El mismo protocolo I, establece la categoría de mercenario en el contexto de conflictos internacionales para la persona que: a) que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, a fin de combatir en un conflicto armado; b) que, de hecho, tome parte directa en las hostilidades; c) que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una Parte en conflicto o en nombre de ella, de una retribución material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas de esa Parte; d) que no sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por una Parte en conflicto; e) que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y f) que no haya sido enviada en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas por un Estado que no es Parte en conflicto.

Esa claro que esta definición corresponde a la categoría de los conflictos de carácter internacional, empero,

en los conflictos internos el concepto se excluye para todo aquel que no cumpla con la condición relacionada con la nacionalidad o residencia en un territorio controlado por una parte del conflicto.

DESMOVILIZACIÓN INDIVIDUAL: La decisión individual de un miembro de un grupo armado de retornar a la vida civil, ha sido comúnmente identificada como una desmovilización, aun cuando algunos reconocen este caso como una deserción pues no implica la desintegración de la estructura armado. Pero si se considera la desmovilización como la decisión libre de dejar las armas y las dinámicas de la guerra, el proceso individual se circunscribe a estas especificidades. Sin embargo, si la desmovilización se considera como parte de un proceso desde las lógicas de las negociaciones y los acuerdos por la paz, como condiciones indispensables para la existencia de los procesos de DDR, la desmovilización individual implica elementos propios de estrategia militar, que contribuyen más al debilitamiento del otro que a una política estructural de diálogo y negociación con garantías reales de seguridad.

DESVINCULADO: Es toda aquella persona que siendo menor de edad haya sido reclutado, usado o utilizado por un grupo armado legal o ilegal, y que en cualquier condición deja de ser parte del grupo. Estas personas tienen la condición de víctimas del conflicto en cuanto existe vulneración a sus derechos fundamentales y como sujetos de especial cuidado y protección. La

84- Sentencia de la Corte Constitucional C-291/07: “Por otra parte, incluso si se interpretara en su acepción específica, el uso de este término en sí mismo no riñe con el bloque de constitucionalidad, por cuanto su incorporación al tipo penal que se estudia no reduce el ámbito de protección dispensado por la garantía fundamental de la prohibición del homicidio a quienes no participan de las hostilidades en un conflicto interno. Únicamente serían contrarias al bloque de constitucionalidad aquellas disposiciones legales que, al incorporar la noción de “combatiente” al ámbito de la regulación de los conflictos armados internos, disminuyan o reduzcan el campo de aplicabilidad o la efectividad de tal garantías, o impidan que éstas se constituyan en medios para la materialización de los referidos principios.”

desvinculación que ocurra posterior a la mayoría de edad no implica el desconocimiento de la vulneración de sus derechos.

REINTEGRACIÓN COMUNITARIA⁸⁵: La reintegración basada en comunidades es una estrategia más amplia que la que se implementa basada en las necesidades individuales de cada desmovilizado y pretende entregar a las comunidades herramientas y capacidades instaladas para el ejercicio de la reintegración de desmovilizados, en contextos de reconciliación regional y de recuperación del Estado Social de Derecho. Por tanto, implica esfuerzos sostenidos de acompañamiento, pero se distancia de las políticas asistencialistas, y pone énfasis en la atención no solo de los participantes del proceso sino de las comunidades receptoras.

Escenarios del DDR en el contexto de las nuevas guerras⁸⁶

Para Vicenç Fisas⁸⁷, existen 7 tipos de desarme y desmovilización de los cuales solo uno involucra procesos reales de reintegración:

- 1– Desarme, desmovilización y regreso a la sociedad civil, sin contraprestaciones.
- 2– Desarme, desmovilización, regreso a la sociedad civil y beneficios temporales para los principales mandos del grupo.
- 3– Desarme, desmovilización y regreso a la sociedad civil con un kit de vuelta (pago en metálico, comida y transporte) para todos los ex combatientes.
- 4– Desarme, desmovilización y regreso a la sociedad civil, con un pago mensual durante un tiempo para todos los ex combatientes.
- 5– Desarme, desmovilización e integración a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
- 6– Desarme, desmovilización y participación en un programa de reintegración a la sociedad (DDR)
- 7– Modelo mixto entre el tipo 5 y cualquiera de los otros.

Los modelos descritos anteriormente, además pueden caracterizarse por los niveles de compromiso con la justicia y los derechos de las víctimas. Procesos de regreso a la sociedad civil sin contraprestaciones implican normalmente altos niveles de impunidad, lo que finalmente se entiende como una contraprestación penal. De otra parte, la participación en un proceso de DDR (tipo 6) incluye escenarios de reconstrucción de las afectaciones de la guerra en los ex miembros de los grupos armados, y por ende se desarrolla comúnmente en escenarios de políticas de paz.

Las definiciones anteriores pueden desarrollarse en situaciones de conflicto armado internacional y no internacional, dentro de las cuales se reconfiguran los escenarios de guerra, a partir de la desarticulación y desintegración de estructuras armadas, reformas al sector de la seguridad o reducciones de la fuerza armadas del Estado⁸⁸; también se establecen en escenarios de transición hacia la paz, ya sea en situaciones de acuerdos negociados, así como en estrategias de mantenimiento de la paz o como parte de los planes de reconstrucción del tejido social en el pos conflicto.

En ese contexto, no solo se configuran en condiciones de negociaciones políticas entre partes en conflicto, sino que pueden consolidarse como iniciativas unilaterales de grupos armados organizados que deciden dejar las armas y someterse a programas de reintegración a la vida civil. De igual forma pueden resultar inmersos en procesos transitorios hacia la democracia.

Si bien estos procesos se han enmarcado por parte de las organizaciones internacionales como mecanismos propios del mantenimiento de la paz, la recuperación de la institucionalidad y el desarrollo de sociedades afectadas por conflictos internos, la experiencia contemporánea ha demostrado que los mismos han representado estrategias de restructuración de las fuerzas armadas regulares y escenarios de reconfiguración parcial de los conflictos armados

85- CARAMÉS, Albert. Escola de Cultura de Pau, Agencia Española de Cooperación Internacional, "La Reintegración Comunitaria." Disponible en: <http://escolapau.uab.cat/img/programas/desarme/informes/06informe022.pdf>

86- El concepto de nuevas guerras de Mary Kaldor (2001)

87- FISAS Vicenç, Escola de Cultura de Pau ECP, Quaderns de Construcción de Pau, "Introducción al Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes", Noviembre de 2011. p. 6.

88- Ver: GLEICHMANN Colin, Michael Odenwald, KeesSteenken, AdrianWilkinson, Cooperación Técnica Alemana GTZ, Centro Noruego para defensa Internacional FSS, Centro Pearson para el Mantenimiento de la Paz PPC y Colegio Sueco para Defensa Nacional FHS: "Desarme, Desmovilización y Reintegración. Guía teórica y práctica", Imprenta Hassmüller, Fráncfort, Alemania. 2004. p. 15.

internos, que no necesariamente se establecen en procesos de transición, ni en ausencia de la confrontación armada⁸⁹.

Dado lo anterior, las condiciones establecidas conceptualmente para el desarrollo de procesos DDR han sido reevaluadas por la Organización de las Naciones Unidas, encontrando dificultades para el cumplimiento de las mismas en diversos casos, relacionados en el estudio denominado “DDR de segunda generación”⁹⁰. El informe plantea los retos de los procesos de DDR en situaciones donde el desarrollo de los mismos no cuenta con las garantías mínimas de seguridad, donde no participan todas las partes del conflicto, en donde las estructuras trascienden lo militar y se imbrican en redes de ilegalidad, cooptación de Estado, falta de confianza entre las partes y posible ausencia de acuerdos negociados para la paz.

En concordancia, el estudio de Fisas⁹¹ identifica posibles beneficiarios de los procesos de DDR y amplía el listado a personas que no necesariamente participan de manera continua en las hostilidades, desde la definición clásica de los miembros de GAO y sus fuerzas armadas:

- 1– los hombres y mujeres adultos combatientes.
- 2– los menores soldados (con atención específica para las chicas).
- 3– las personas no combatientes asociadas a los grupos armados (desmovilizados con tareas de apoyo logístico).
- 4– los discapacitados y heridos.
- 5– los familiares dependientes de los combatientes (sólo en ocasiones).

Estas consideraciones corresponden entonces a escenarios de conflicto armado que escapan a las concepciones clásicas de la guerra de Clausewitz, y requieren de dinámicas inclusivas de las redes de ilegalidad que conforman partes del conflicto armado interno. A este respecto se refiere la ONU en cuanto

al DDR de segunda generación. Estos escenarios de aplicación del DDR, implican la adopción de medidas que permitan la estructuración de una política al interior de los procesos, que determine la resolución de las problemáticas para elevar las posibilidades de éxito, siempre y cuando éstas se midan desde la perspectiva maximalista de la consecución de la paz.

De otra parte, el éxito de los procesos puede ser considerado desde la idea concreta de la desintegración efectiva de las estructuras militares intervinientes en el proceso y la integración real y sostenible de la mayor parte de sus integrantes en la vida civil. Interpretando la paz como un objetivo a largo plazo, al cual se contribuye de manera directa, pero que en sí mismo no determina el éxito del proceso.

DDR en el contexto de acuerdos de paz

Las implicaciones de los procesos de DDR en el marco de negociaciones de paz y acuerdos negociados, constituyen un elemento importante para establecer los alcances de una política pública por la paz. Normalmente estos procesos determinan escenarios de transición, aun cuando en ocasiones, simplemente constituyan acuerdos entre algunas partes del conflicto, y no signifiquen la desaparición de la guerra. Estas negociaciones, en todos los casos, requieren de una serie de medidas que involucran modelos de justicias no ordinarias o transicionales para propiciar las desmovilizaciones y garantizar el acceso a los derechos de las víctimas de la confrontación armada. Esto implica el sacrificio en ocasiones de la justicia por otros derechos fundamentales como la verdad, la reparación y las garantías de no repetición⁹²

Como se observa, en estos casos el DDR es parte de un engranaje institucional que exige esfuerzos en el reconocimiento de las causas mismas de la guerra, en donde se identifica la importancia de la

89- Para ejemplificar tales situaciones observar el caso colombiano en los acuerdos con las guerrillas en los 90 y con las AUC en los 2000

90- UNITED NATIONS DEPARTMENT OF PEACEKEEPING OPERATIONS, Office of Rule of Law and Security Institutions, Disarmament, Demobilization and Reintegration Section, “SECOND GENERATION DISARMAMENT, DEMOBILIZATION AND REINTEGRATION (DDR).PRACTICES IN PEACE OPERATIONS. A Contribution to the New Horizon Discussion on Challenges and Opportunities for UN Peacekeeping”, Enero de 2010.

91- Fisas 2011. p. 6.

92- Ver: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración -ODDR-, “Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración: buenas prácticas y retos”, Bogotá D.C., febrero de 2010. p. 4.

desarticulación de los grupos armados, pero también la importancia del compromiso de las partes del conflicto con el resarcimiento de los daños causados y la restitución de los derechos de las víctimas, así como con la reconstrucción del tejido social y en general el compromiso con la paz.

El proceso por ende requiere de propiciar beneficios económicos, políticos y judiciales para aquellos que decidan apostar por la desmovilización, como forma indispensable de propiciar acuerdos, a la vez que un esfuerzo que integre a toda la sociedad por el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Adicionalmente y entendiendo que las dinámicas de los conflictos armados conllevan afectaciones de todo nivel en la consolidación de los Estados y la democracia este proceso debe contemplar la reestructuración de las fuerzas armadas legales y la depuración institucional como mecanismo idóneo para la recuperación de la confianza y el Estado Social de Derecho.

Los procesos de DDR que se consolidan en escenarios de transiciones negociadas hacia la paz, deben contar con una instancia de concertación nacional que implique el compromiso de la sociedad en el avance de procesos de reintegración hacia la legalidad, y que al mismo tiempo involucre las distintas instancias del Estado, desde los niveles locales y territoriales, hasta la responsabilidad de todos los sectores de la sociedad civil. No realizar labores para la concertación nacional puede conllevar dificultades de difícil resolución en el futuro, sobre todo en Estados federales o descentralizados, donde los gobiernos locales no asuman el proceso como propio y no entiendan el nivel de compromiso y responsabilidad frente al diseño de políticas públicas y la asignación efectiva de esfuerzos y recursos para los procesos de DDR y en general para la paz.

De igual forma, el no involucrar diálogos nacionales puede significar una alta probabilidad de rechazo frente a los desmovilizados y poco entendimiento en la ciudadanía y los diferentes sectores sociales y económicos frente a la necesidad de implementar programas y políticas de gran magnitud, cuando aún

existen problemáticas nacionales que se identifican como más propias y justas. De esta manera, programas que invierten recursos en los que se consideran aun victimarios pueden generar descontento en sociedades que no se encuentran involucradas en procesos reales de concertación, e incluso la misma asignación de recursos públicos para las víctimas puede significar molestias en sociedades que cargan desde décadas problemas serios de exclusión, marginalidad y pobreza.

Reincidencia, rearme, disidencias y emergentes⁹³

Los procesos de DDR suponen escenarios complejos de éxito y fracaso en la etapa de reintegración. Su aplicación y balance no puede considerarse en términos absolutos, por cuanto las dinámicas mismas de la guerra, implican incentivos perversos no resueltos para la continuidad de la guerra y la ilegalidad, así como los beneficios propios de la vida civil y democrática. En este contexto los procesos de DDR contemplan porcentajes aceptables de reincidencia en el delito, entre un 5% y 10%, en el entendido que esto no implique la reestructuración de los aparatos militares y un rearme generalizado.

Dentro de esta lógica, es común que existan disidencias dentro de los grupos armados organizados, que se separen de la desmovilización y continúen en la vida armada. Éstos pueden crear tensiones por el control de los territorios en donde se generen vacíos de poder, sobre todo en Estados que no puedan garantizar la presencia institucional requerida para la garantía del goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, y que comúnmente se corresponden con Estados con conflictos internos. Adicionalmente pueden existir grupos de crimen organizado que emerjan pos desmovilizaciones como aprovechadores de los vacíos dejados por los grupos armados organizados y que toman fuerza valiéndose del reclutamiento de personal desmovilizado, en claras situaciones de reincidencia y rearme.

Se identifican, entonces, posibles reincidencias en el delito por parte de los desmovilizados, grupos de

93- Ver: COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN, Área de Desmovilización, Desarme y Reintegración, "Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?". Bogotá D.C., agosto de 2007.

rearmados que retoman la vía armada y constituyen nuevamente aparatos militares en fenómenos de continuidad de la guerra, con formas de actuación y estructuras similares a las desmovilizadas, disidencias dentro del proceso como ejércitos que se mantienen en conflicto y no entran en los procesos de DDR y grupos emergentes que toman importancia en escenarios de vacíos de poder y poca capacidad del Estado para garantizar el uso exclusivo de las armas y la violencia.

Enzo Nussio, en la revista *Pensamiento Jurídico* N° 26⁹⁴, presenta las principales razones para la reincidencia dentro de los procesos de DDR, obstáculos claros para el éxito de la reintegración, a saber:

Las razones de tipo económico donde las economías nacionales están afectadas por los conflictos internos y en las cuales las posibilidades de empleabilidad formal son escasas y las condiciones de trabajo son indignas; la ilegalidad, en cuanto a economías de guerra, ofrece mejores ingresos, posibilidad de mando, reconocimiento y autoridad. Aquí juegan condiciones personales individuales de convencimiento y decisión, codicia y necesidad.

Las garantías de seguridad física de los excombatientes son un elemento clave. La percepción de que no existe un Estado garante de sus derechos puede desembocar en posibles rearmes frente a situaciones de supervivencia. En Colombia la existencia continuada del conflicto, es decir la persistencia de enemigos, o la presión y amenazas de nuevos grupos o incluso ex compañeros o ex comandantes para engrosar las filas de grupos emergentes, disidentes o rearmados, es un riesgo para los procesos de reintegración.

Otra razón encontrada es el rechazo social, y la pérdida del status adquirido en su participación en el grupo armado ilegal. Las comunidades receptoras pueden llegar a tener sentimientos de odio y rechazo hacia los desmovilizados, éstos en ocasiones sufren procesos fuertes de desarraigo al tener que establecerse en ciudades desconocidas para no ser reconocidos por la gente como victimarios. Algunos desmovilizados gozaban de autoridad por su pertenencia a los grupos

armados y como tal requieren ese reconocimiento nuevamente de la comunidad; en ocasiones las comunidades más vulneradas y controladas vuelven a estas personas exigiendo de ellos autoridad aun cuando ya éstos no hacen parte del grupo.

Finalmente, por sí solo la permanencia del conflicto en países donde se desarrollen procesos de DDR afecta directamente las posibilidades de éxito de los mismos. En estos contextos de conflicto armado se siguen moviendo intereses de guerra; información valiosa de los desmovilizados se convierte en arma y debilidad, en contra de lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario; la continuidad de la guerra, permite que se piense en la utilización de los desmovilizados en la lucha armada; los desmovilizados se convierten en aliados y enemigos, traidores y objetivo militar de los grupos que continúan en conflicto armado.

DDR en Colombia

Los procesos de DDR en Colombia no son nuevos ni exclusivos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, aunque es la experiencia más reciente y con el mayor número de desmovilizaciones. Durante los años 90 en el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, se presentó un proceso de DDR con miembros de los grupos guerrilleros M19, EPL, Quintín Lame, PRT, CRS, entre otros, en el marco de negociaciones y acuerdos de paz, traducidos en los esfuerzos de la Asamblea Nacional Constituyente y una nueva carta magna para el país en 1991.

Nuevamente desde las distintas visiones de éxito, la evaluación del mismo implica discusiones entre la concepción maximalista y minimalista del objetivo final buscado. La desarticulación de las estructuras militares es un hecho concreto, sin embargo la guerra en Colombia continuó e incluso algunas disidencias fueron desapareciendo entre finales de los 90 y el curso de los 2000, siendo notoria la imposibilidad de su proyección militar estratégica, y persistiendo sólo en condiciones muy particulares –siempre entre las FARC y el ELN– una pequeña fracción proveniente del EPL, en la zona del Catatumbo donde por décadas fueron aliadas las tres guerrillas, y en condiciones –según

94- NUSSIO Enzo, Revista *Pensamiento Jurídico* N° 26, Artículo: ¿Reincidir o no? Conceptos de la literatura internacional aplicados al caso de desarme, desmovilización y reintegración de las Autodefensas Unidas de Colombia. Noviembre 2009. p. 213- 235

distintos informes conocidos-, de alta degradación, y asocio al narcotráfico y a los grupos emergentes de las AUC en la zona.

De otra parte y ante la iniciativa de ley de punto final propuesta por el Gobierno Uribe en 2002, muchos participantes del proceso alzaron la voz para manifestar descontentos y dejaron ver serias dificultades en el proceso de reintegración a la sociedad⁹⁵.

Adicionalmente, en el marco NO de negociaciones ni de políticas de paz sino de la política de sometimiento a la justicia, enfocada en el debilitamiento y desestructuración de grupos narcotraficantes, por la misma época se presentó una modalidad de desarme y desmovilización (sin reintegración) de los grupos que se denominaban de autodefensas y que incluyó hombres que delinquirían en Cundinamarca bajo el mando de Rodríguez Gacha alias 'El Mexicano', parte de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y el Magdalena Medio, y hombres y mujeres de Fidel Castaño con influencia en la costa norte del país, principalmente en Córdoba y Urabá. Se habrían desmovilizado alrededor de 1.300 miembros.

Este proceso con los paramilitares finalmente fracasó; en los años posteriores los niveles de asesinatos en el país disminuyeron ostensiblemente, pero en el contexto de la violencia contra los desmovilizados, en especial del EPL, se dieron alianzas estratégicas que fueron constituyendo frentes de defensa y control, que derivaron posteriormente en la reestructuración de los aparatos militares de los grupos de paramilitares. En ocasiones estos grupos, como en el caso del Magdalena Medio, no habían realizado un proceso de desarme y desmovilización real, sino que utilizaban estrategias de control territorial de bajo impacto, que mantenían bajos índices de violencia pero no necesariamente ausencia de criminalidad⁹⁶.

Durante los años 1995 y 1996 los grupos armados organizados se encuentran nuevamente ejerciendo violencia sistemática en los territorios nacionales, con

puntos críticos especialmente en las regiones en las cuales se originaron los procesos de desarme: Córdoba y Urabá, en donde Fidel Castaño dirige las ACCU, y en el Magdalena Medio donde muchos mandos medios han asumido la comandancia y controlan los negocios ilícitos en la región. La expansión y reorganización del fenómeno paramilitar durante estos años implica el fortalecimiento en regiones de alto impacto como el Atrato y el Eje Cafetero, así mismo la entrada en las cabeceras municipales de las capitales departamentales del país, tales como Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, entre otras. La consolidación de un proyecto paramilitar nacional, las AUC (1997), pone punto final al fracaso del proceso de Desarme y Desmovilización en el marco del sometimiento a la justicia, e inicia el recrudecimiento de la guerra que azotaría al país hasta las nuevas iniciativas de DDR.

Iniciativas como la de las negociaciones de paz con las Farc, en el Caguán (1998-2002), que finalmente no lograron consolidarse como DDR ni como acuerdo de paz. Y años más tarde, la negociación entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia, que permitieron entre 2003 y 2006 el desarme, la desmovilización y reintegración a la vida civil de 31.671 de sus miembros, a través de un proceso lleno de vicisitudes, aprendizajes y controversias que aun no se han cerrado, como veremos en adelante.

El fracaso de los diálogos del Caguán y la solución militar contra la insurgencia

El presidente Andrés Pastrana (1998-2002) jugó sus cartas en la campaña presidencial a la negociación política con las Farc y luego de ganar las elecciones le abrió paso a los diálogos de paz con ese grupo insurgente; conversaciones que se adelantaron en medio del conflicto, sin pactar tregua.

Un proceso muy intrincado por las operaciones militares pero con una zona de distensión en el Caquetá, en un claro propósito de las Farc por

95- SANTOS Peñuela, Alberto, Universidad de Los Andes, Tesis de pregrado, Director Iván Orozco: "Las Enseñanzas del Proceso de Reinserción del M19: una Evaluación desde los Actores, Hacia las Nuevas Negociaciones de Paz. El Escenario Ideal para la Reinserción". Bogotá. D.C., Noviembre 2005.

96- Ver: VERDADABIERTA.COM: Reactivación: La tregua de los 90 (1992-1996). La historia. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/24-periodo-2/129-sometimiento-a-la-justicia-y-reactivacion-paramilitar-en-la-primera-mitad-de-los-anos-noventa> y SALAZAR, Gustavo. "Paramilitarismo: una aproximación a sus orígenes y evolución 1980 - 1999" Bogotá, 1999. Presidencia de la República.

fortalecerse militarmente. Por su parte el presidente Pastrana diseñó el Plan Colombia⁹⁷, apoyado por los Estados Unidos, para modernizar el Ejército y recuperar la iniciativa militar en la contención y derrota de las Farc, en la perspectiva de obligarlas a negociar. Es decir, mientras se continuaban explorando salidas políticas, el Gobierno y los militares buscaban ganar tiempo para la modernización y crecimiento de las fuerzas armadas, y se reestructuraba el poder bélico y la inteligencia militar.

Estos diálogos no podían llegar a ningún lugar pues ninguna de las partes estaba sinceramente dispuesta a superar el conflicto por vía negociada.

Los hechos permiten apreciar que las Farc en el Caguán no mostraron verdadero interés en la solución política al conflicto, habían subestimado las fuerzas militares del Estado y no estaban interesadas en ninguna negociación, solo pensaban en la toma del poder y la imposición de su proyecto. Diferentes acontecimientos, todos muy graves, entre ellos el secuestro de un avión comercial en Neiva y del senador Jorge Eduardo Gechem, uno de los pasajeros, fueron el detonante para la ruptura de los diálogos de paz y el cierre de la zona de despeje por parte de las fuerzas militares. El pueblo colombiano se sintió burlado por las Farc y no encontró mejor respuesta que el apoyo a una salida militar para intentar terminar con el conflicto armado interno.

Así, en el plano político el fracaso de las negociaciones de paz del Caguán, al final del gobierno de Pastrana, abrió el espacio político para propuestas de solución militar al conflicto, bajo una concepción de fuerza en las que predominaba la utilización de la guerra y la estructuración de una política belicista para generar la cohesión estatal y devolver al Estado el monopolio de las armas.

La polarización del país y el desencanto con la posibilidad real de una salida negociada al conflicto dieron fuerza a la candidatura de Álvaro Uribe Vélez, quien con una propuesta de gobierno basada en el

fortalecimiento de las fuerzas armadas legales y la recuperación militar del territorio nacional a partir de la promesa de la derrota a sangre y fuego de las guerrillas, logró llegar a la Presidencia, e implementar una ofensiva militar en contra de los grupos insurgentes, que implicó una serie de golpes y el repliegue táctico de la subversión.

Esta situación no acabó con el conflicto armado en el país pero sí entregó partes de victoria, a través de golpes de opinión auspiciados por la amplia cobertura de los medios de comunicación, en relación con las bajas y positivos de toda índole, en especial en contra de la guerrilla de las Farc. La percepción de seguridad, la recuperación de territorios tradicionalmente bajo el control de la guerrilla, la seguridad en las carreteras y en general la política de seguridad, permitió un ambiente de optimismo frente a la recuperación del Estado Social de Derecho en los territorios del país, que sin embargo se quedó solamente en presencia militar y no alcanzó a resolver los hondos problemas de desigualdad social y ausencia institucional.

Esta política en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), recibió el nombre de Seguridad Democrática y comenzó a ser implementada desde 2002. Sus principales objetivos fueron derrotar o debilitar a las guerrillas; atraer la inversión extranjera como motor para el desarrollo; el crecimiento de las fuerzas armadas y su capacidad operacional a lo largo del país, y combatir el narcotráfico en todo el territorio nacional. Dentro de dicha política se impulsaron estrategias de informantes, soldados campesinos, ampliación del pie de fuerza de soldados profesionales y cierre al reconocimiento del conflicto armado señalando a los grupos insurgentes como bandas narcoterroristas.

Lamentablemente tanto el paramilitarismo como los grupos guerrilleros persistieron en su proyecto armado, en la guerra como estrategia de imponer su orden; de esta manera encontró la política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe Vélez espacios funcionales para sus propósitos de confrontación

97- Estados Unidos ha considerado al Estado colombiano como un aliado estratégico a lo largo de la historia; el Plan Colombia fue su respaldo financiero y militar para resolver las dificultades de las fuerzas armadas, golpeadas por las Farc en diferentes confrontaciones a lo largo de la década del 90 haciendo uso de un poderío militar creciente, situación que debía ser resuelta por el Estado con nuevas capacidades y estrategias militares para garantizar sus mandatos de control y dominio territorial en el orden público y el sometimiento a los grupos armados ilegales.

y alianzas, con alto costo para las instituciones del Estado y la credibilidad en las fuerzas armadas.

La complejidad del conflicto con la presencia del narcotráfico y sus relaciones internacionales con los actores armados, marcan un crecimiento de los grupos armados ilegales GAI y su accionar en una tendencia de consolidación del dominio territorial local; en este entramado difuso, el Estado colombiano está muy cuestionado por la inocultable connivencia de paramilitares con funcionarios del Gobierno y miembros del Congreso, en general de los poderes públicos, situación que ha sido objeto de estudio, investigaciones y sanciones por parte de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en lo que se ha conocido como el fenómeno de la parapolítica.

Acuerdos en Ralito con las AUC: desmovilización incompleta

Los altos índices de criminalidad generados por la estrategia paramilitar y expresados en una crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia con desplazamientos masivos, homicidios, amenazas, desapariciones forzadas y masacres, produjeron miles de denuncias ante el Gobierno Nacional y la comunidad internacional demandando el desmante del paramilitarismo. Las diferentes plataformas de paz y derechos humanos de la sociedad civil y los mismos informes de la Vicepresidencia de la República y la Defensoría del Pueblo propiciaron una exigencia al cese y desmante del paramilitarismo y una política de reparación a las víctimas. En este escenario la comunidad internacional jugó un papel importante en el sistema interamericano y en el ámbito de los diferentes organismos de las Naciones Unidas presentes en Colombia, quienes apoyaron y recomendaron en diferentes momentos e instrumentos su combate y desmante, como primer responsable de miles de violaciones de derechos humanos en el país. Toda esta movilización de opinión fue un factor importante que contribuyó a

que en octubre de 2002 los paramilitares decidieran manifestar al gobierno de Uribe Vélez el interés en un “acuerdo de paz” para su desmovilización.

El proceso comenzó con la declaratoria de un cese unilateral de hostilidades por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, cumpliendo así el requisito del Gobierno para el inicio de conversaciones. Como respuesta a este gesto, el 23 de diciembre de ese mismo año se designó una Comisión Exploratoria de Paz, con la tarea de realizar contactos con grupos de Autodefensa.

Apoyándose en la Ley 782 de 2002, el Gobierno Nacional expidió la Resolución No. 185 de 23 de diciembre de 2002, por la cual se constituía dicha Comisión. La labor de informar sobre los desarrollos y avances del proceso quedó en manos del Alto Comisionado para la Paz⁹⁸. Al momento de iniciar los diálogos con las Autodefensas en las primeras semanas de 2003, el Alto Comisionado para la Paz y la Comisión Exploratoria debieron atender 4 mesas de diálogo paralelas. Una mesa con las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–, otras dos mesas con el Bloque Central Bolívar –BCB– y la Alianza Oriente, y una cuarta mesa con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio –ACMM–, que se negaron a compartir mesa con las anteriores⁹⁹.

Los días 14 y 15 de julio en Tierralta (Córdoba), el Alto Comisionado para la Paz, los miembros de la Comisión Exploratoria y delegados de la Iglesia Católica se reunieron con los representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, suscribiendo el 15 de julio de 2003 el Acuerdo de Santa Fe Ralito para contribuir a la paz de Colombia. Gobierno Nacional y AUC acordaron “dar inicio a una etapa de negociación”.

El primer punto del Acuerdo es el siguiente: “Definir como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado.”¹⁰⁰

98- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Misión de apoyo al proceso de paz en Colombia / MAPP-OEA. “Diagnostico de Justicia y Paz en el Marco de la Justicia Transicional en Colombia”. Bogotá. Octubre, 2011. p.17

99- *Ibíd.*

100- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Documento “Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia”.

Disponible en: http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2003/julio/15/09152003.htm. Fecha de consulta: 25 de enero de 2012.

Lo anterior implica necesariamente un proceso de DDR, que queda contemplado en el segundo punto así: “las Autodefensas Unidas de Colombia se comprometen a desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que comenzará con las primeras desmovilizaciones antes de terminar el presente año (2003) y que deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2005. El gobierno se compromete a adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil”¹⁰¹.

El proceso se adelantó de manera gradual en los años siguientes, hasta agosto de 2006, y en distintas zonas de concentración con garantías jurídicas que permitieran las negociaciones y la posterior desmovilización. La desmovilización y el desarme de casi la totalidad de los bloques y frentes de las AUC contó con algunas excepciones en los llanos orientales con las ACC, y disidencias importantes en los bloques, debido a la incidencia del narcotráfico y a la lejanía y la falta de control de algunos grupos que no se encontraban en la zona de concentración¹⁰².

Para tales fines y como forma culmen del proceso, se dictaron leyes que permitían establecer mecanismos incipientes de justicia transicional, en especial atinentes a garantizar beneficios judiciales para los desmovilizados en el marco de su contribución a la paz y a la concreción de los derechos de sus víctimas.

Sin embargo, las negociaciones entre gobierno y paramilitares, no constituyeron un acuerdo de paz, sino de entrega de armas y desmovilización de miembros, en el acuerdo tácito relacionado con la recuperación de los territorios por parte de la fuerza pública, y en el debilitamiento del enemigo común: la guerrilla. En este sentido los acuerdos no fueron políticos sino militares, donde no se establecieron solicitudes propiamente dichas de las partes en cuanto a situaciones concretas del sistema económico o el régimen político, o las políticas socioeconómicas, ni se discutió en cuanto a acercar posiciones estructurales encontradas, sino todo en relación con las posibilidades de garantizar los beneficios jurídicos, evitar la extradición y

posibilitar la reintegración efectiva de los hombres y mujeres pertenecientes a los grupos. Es claro, que las negociaciones no se daban propiamente entre partes en conflicto, sino entre partes con objetivos similares desde ámbitos distintos: la legalidad y la ilegalidad.

En este caso y a pesar de los enfrentamientos entre unos y otros durante la negociación, podemos pensar en un proceso de DDR, determinado por la decisión unilateral de un grupo armado ilegal, de corte paramilitar, frente a la posibilidad real y concreta de entregar los territorios a las fuerzas armadas legales, en contextos de fortalecimiento del aparato militar del Estado y con la posibilidad de amarrar beneficios legales atractivos. Fue así como entre imprecisiones en cuanto al número de miembros de estos grupos, que en los estimados más generosos calculaban entre 15 mil y 17 mil miembros, 31.671 hombres y mujeres de las AUC se desmovilizaron colectivamente entre 2003 y 2006.

Justicia transicional y Ley de Justicia y Paz

La Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz, nace de un acuerdo establecido entre el gobierno de Álvaro Uribe y los paramilitares con los cuales se adelantó el proceso de negociación. Este proceso incluyó una acción de desmovilización de 34 frentes de paramilitares¹⁰³, cuyas desmovilizaciones se sustentaron en el marco jurídico de la Ley 782 de 2002 y el Decreto 128 de 2003, marco jurídico que resultó insuficiente para algunos miembros de estas organizaciones, en especial para altos y medios mandos quienes venían siendo investigados por crímenes de lesa humanidad, o en quienes recaía la responsabilidad de los mismos.

De allí, la necesidad de crear una ley que posibilitara que estos miembros de grupos paramilitares pudieran recibir beneficios jurídicos a cambio de su desmovilización. En primer lugar la Ley busca que los paramilitares ya identificados como responsables de crímenes de lesa humanidad reciban beneficios jurídicos y penales, de 5 a 8 años de prisión, a cambio

101- *Ibíd.*

102- Ver: SEMANA.COM: “EXCLUSIVO SEMANA divulga unos casetes en los que por primera vez se muestra cómo el gobierno negocia con las autodefensas y revela cómo la mafia se está adueñando del paramilitarismo en Colombia. La negociación secreta finalmente sale al aire.” Septiembre 24 de 2004. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/revelaciones-explosivas/82024-3.aspx>. Fecha de consulta: 5 de febrero de 2012.

103- Comisión de seguimiento al proceso Londres Cartagena. “Lucha contra la impunidad”. Junio de 2008.

de la confesión de sus delitos, el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido y la reparación de las víctimas.

Sin embargo, la mayoría de miembros de los grupos paramilitares podrían continuar con sus actividades normales y sin asumir ningún tipo de responsabilidad frente a los hechos que se cometieron. Esta norma pasó por el filtro de la Corte Constitucional y tuvo unos cambios significativos en materia de protección de los derechos de las víctimas, que han posibilitado su participación, aunque limitada, en el proceso judicial.

El fundamento de la Ley 975 de 2005 y de su existencia, es la consideración de que se trata de un instrumento de justicia transicional. La justicia transicional hace referencia a los mecanismos jurídicos que se implementan cuando una sociedad ha tenido que vivir bajo un régimen dictatorial o bajo una sistemática vulneración de los derechos humanos de sus ciudadanos y cuyas estructuras se empiezan a eliminar para pasar a una situación democrática y de garantías de protección de los derechos.

Los mecanismos de justicia transicional establecen los procedimientos de desmonte de las estructuras que facilitaron y permitieron la comisión de las violaciones así como los mecanismos a través de los cuales las víctimas pueden ejercer sus derechos.

De esta manera, en Colombia a los organismos estatales se les reiteró y enfatizó sobre sus obligaciones en materia de atención a víctimas y se crearon nuevas instancias para que coordinaran los mandatos de las instituciones y formularan políticas públicas en materia de atención y garantía de derechos. Este enfoque de justicia transicional, que hoy se encuentra en duda, es el que ha dirigido el desarrollo de la Ley y el funcionamiento de las instituciones.

Esta Ley ha incluido un total de 4.643 desmovilizados de las AUC y 506 de distintos grupos guerrilleros. Sin embargo un gran número de desmovilizados, llamados genéricamente como “paramilitares rasos”, que se acogieron a otros mecanismos legales como la Ley 782 de 2002 en el entendido de que respondían solo por delitos como concierto para delinquir simple o agravado por su participación en el grupo, han recorrido un camino de incertidumbre legal que a penas empieza a resolverse con el surgimiento de la Ley 1424 de 2010, como veremos más adelante.

Corte Suprema de Justicia: paradigma de la reconstrucción institucional y del estado democrático de derecho

Dos decisiones de la CSJ levantaron la imagen institucional que parecía resquebrajarse por las decisiones del Ejecutivo quien proponía conceder amplios beneficios a los paramilitares desmovilizados:

- En primer lugar la providencia del 15 de febrero de 2007 de investigar a los congresistas de la bancada uribista por “concierto para delinquir y constreñimiento” para las votaciones que los llevaron al Congreso y a la reelección del presidente Uribe.
- En segundo lugar, la providencia del 11 de julio de 2007 que hizo un análisis del artículo 71 de la Ley de Justicia y Paz, que consideraba los crímenes de lesa

humanidad cometidos por paramilitares desmovilizados y detenidos como “delito político”, situación que dejaba sin verdad judicial y sin reparación a las víctimas, al tiempo que les beneficiaba con penas blandas de cárcel hasta 8 años. En esta sentencia a partir de la teoría del delito, la Corte Suprema de Justicia deja claro en el ordenamiento jurídico que los delitos de los paramilitares, congresistas, funcionarios públicos y gobernantes encarcelados, como “concierto para delinquir”, en ningún momento pueden llegar a ser considerados como delitos políticos.

Surgimiento de la Ley 1424 de 2010

El mecanismo de la Ley 782 de 2002 y el Decreto 128 de 2003 que la reglamenta, incluía una reforma al régimen penal en lo sustantivo y en lo procedimental, específicamente en los delitos contra el régimen legal y constitucional vigente, en el tipo penal de sedición, y permitía la inhibición de la investigación para los desmovilizados que no estuvieran incurso en indagaciones judiciales por casos de graves crímenes de lesa humanidad, considerando que la actuación general de los grupos paramilitares y la pertenencia a los mismos cabían en los delitos políticos, los cuales, a su vez, podían ser objeto de formas de indulto o amnistías. Sin embargo, y a pesar que las discusiones jurídicas en cuanto al carácter político de estos grupos paramilitares no se agotaron, dado que el pronunciamiento de la Corte fue de forma y no de fondo, esta intención quedó solo en el papel luego de la Sentencia 26.945 del 11 de julio de 2007 de la CSJ, que declaró inconstitucional la aplicación del Decreto 128 a los paramilitares desmovilizados, mas no a los guerrilleros desertores que se acogen a la reintegración. Así, aunque se dieron alrededor de 124 inhibitorios a miembros de las AUC, se impidió la aplicación generalizada de dicha Ley.

La Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto dejando claro que el delito político:

“(…)tiene ocurrencia cuando se atenta contra el régimen constitucional y legal vigente en búsqueda de un nuevo orden, resultando un imposible jurídico predicar de tales conductas su adecuación al delito de concierto para delinquir”, añadiendo en concordancia que: “Los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, como es el caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, bajo ningún pretexto alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al concepto delito político” (Segunda instancia, radicado número 26945, 11 de julio de 2007.)

Ante esta circunstancia se intentó aplicar, por parte del Gobierno Nacional, el principio de oportunidad para los miembros de los grupos de las AUC que no estuvieran incurso en delitos de lesa humanidad. Sin embargo, nuevamente se estableció por parte de las altas cortes que el delito de concierto para delinquir implicaba un delito de lesa humanidad en sí mismo, en cuanto el ánimo de concertarse podía realizarse para cometer este tipo de crímenes, toda vez que los tratados incorporados al ordenamiento jurídico nacional, permiten identificar concierto para crímenes como el genocidio y la tortura, todo en el marco del bloque de constitucionalidad; en tal sentido se hacía imposible aplicar el principio de oportunidad (Sala De Casación Penal, Proceso N° 29472, 10 de abril de 2008).

En este contexto legal, se creó un vacío jurídico para la gran mayoría de desmovilizados que se encontraban en el proceso de reintegración y quienes además no estaban postulados a la Ley 975 de 2005, unos 29 mil ‘desmovilizados rasos’, que implicaba que debían ser investigados y condenados, sin ningún atenuante, por los delitos cometidos¹⁰⁴.

Finalmente, luego de varios años de ‘limbo jurídico’, la Ley 1424 de 2010 intenta resolver la situación y desarrolla una normatividad específica para el avance de la reintegración de los ex miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, sin implicar amnistías ni indultos, sino a través de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y en concordancia con la transición hacia la paz, la reconciliación nacional y los derechos de las víctimas, así:

Artículo 1: “La presente ley tiene por objeto contribuir al logro de la paz perdurable, la satisfacción de las garantías de verdad, justicia y reparación, dentro del marco de justicia transicional, en relación con la conducta de los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, que hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos, así como también, promover la reintegración de los mismos a la sociedad.”

Esta Ley a diferencia de las anteriores, implica la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación de cada uno de los desmovilizados, la imposición de una condena y la suspensión de la ejecución de la misma, en cuanto que los desmovilizados cumplan efectivamente con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley (citado en el párrafo anterior) y lo establecido en el artículo 7° de la misma:

1. *Haber suscrito el Acuerdo de Contribución a la Verdad y la Reparación, así como estar vinculado al proceso de reintegración social y económica dispuesto por el Gobierno Nacional y estar cumpliendo su ruta de reintegración o haber culminado satisfactoriamente dicho proceso.*
2. *Ejecutar actividades de servicio social con las comunidades que los acojan en el marco del proceso de reintegración ofrecido por el Gobierno Nacional.*
3. *Reparar integralmente los daños ocasionados con los delitos por los cuales fue condenado dentro del marco de la presente Ley, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo.*
4. *No haber sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha en que haya sido certificada su desmovilización.*
5. *Observar buena conducta en el marco del proceso de reintegración.*

Como se observa es requisito para la suspensión de la ejecución de la pena, el aporte a la efectividad de los derechos de las víctimas a la Verdad, la Reparación y las Garantías de no Repetición, en el marco del derecho inalienable de la sociedad a la paz.

104- Concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos.

En otras palabras, en el caso de la 1424 de 2010, los desmovilizados que estén en proceso de reintegración y que no estén incurso en investigaciones o procesos por crímenes de lesa humanidad, podrán acceder a la suspensión condicionada de la ejecución de pena siempre y cuando, además de llevar a cabo un trabajo social ligado con la reparación de las víctimas y la culminación satisfactoria de su proceso de reintegración, contribuyan efectivamente con la verdad histórica y la reparación.

Esto último implica que los desmovilizados de las AUC deberán afrontar un proceso de versión no judicial de esclarecimiento de la verdad sobre sus actuaciones, en el cual la entidad que acopie y analice la información entregada, en este caso el Centro de Memoria Histórica, a través de su Dirección de Acuerdos por la Verdad, podrá definir a través de unos criterios de valoración objetiva, si cada una de estas personas realmente está contribuyendo a la verdad, lo cual determinará la suerte judicial en cada caso particular.

En Santander, 1322 ex miembros de las AUC, firmaron el formato que permitía la verificación de antecedentes para poder, previo filtro de la Fiscalía General de la Nación, firmar los Acuerdos por la Verdad Histórica y la Reparación, e iniciar el proceso. Lo anterior corresponde a un porcentaje del 5,36% del total de 24.680 firmantes del formato de verificación de antecedentes en el país.

La aparición en el panorama de la justicia transicional desde la perspectiva del modelo Surafricano en Colombia, es decir formas de amnistía o indulto por reconocimiento de hechos o contribuciones a la verdad, claramente con un matiz mucho más punitivo en nuestro país, se puede ver con mucha más claridad en la Ley 1424 de 2010 que en la 975 de 2005.

Cumplimiento de los acuerdos: entre la extradición y el rearme

En cuanto al cumplimiento de los acuerdos establecidos desde Ralito, uno de los puntos más debatidos es la extradición de los jefes paramilitares. Un debate que se da desde dos perspectivas distintas: Una, la perspectiva de los desmovilizados de las AUC, y en especial de los altos mandos y postulados a Justicia y Paz, que la consideran una traición del gobierno de Uribe Vélez, en cuanto dentro de los acuerdos se establecía como condición la posibilidad de pagar las penas en el país, e incluso vincular el delito de narcotráfico como conexo a la sedición en su momento y al concierto para delinquir posteriormente¹⁰⁵. La otra, la de los defensores de derechos humanos, las víctimas del conflicto armado y en especial víctimas de los grupos de paramilitares, que consideran que esta decisión afectó directamente la posibilidad de conocer la verdad, e incluso esclarecer y vincular a otros responsables que tuvieron incidencia directa en la violencia paramilitar, también considerando que esta ausencia obstaculiza la reparación de las víctimas y la aplicación de la justicia en el país¹⁰⁶.

De la misma manera, en cuanto al cumplimiento de los acuerdos, las garantías de seguridad para la población desmovilizada han sido insuficientes, registrando altas tasas de homicidios de desmovilizados, lo que ha generado desconfianza en el proceso y preocupación institucional. Estas circunstancias sumadas a la continuidad del conflicto armado y la permanencia de redes de criminalidad y economías de guerra, han dificultado el avance del proceso, incluso desde la perspectiva minimalista de la paz.

Si bien es cierto que las estructuras militares desaparecieron, también lo es que no todos los miembros de las AUC se desmovilizaron, y que la consolidación de grupos armados al servicio del narcotráfico valiéndose de estructuras paramilitares

105-Ver: ELUNIVERSAL.COM.CO: “Ex paramilitar alias “El Alemán” se siente traicionado por Uribe”. Agosto 24 de 2009. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/ex-paramilitar-alias-%E2%80%99Cel-aleman%E2%80%99D-se-siente-traicionado-por-uribe>. Fecha de consulta: 14 de marzo de 2012. Ver también: Corporación Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo, “La reglamentación jurídica de las leyes 782 de 2002 y 975 de 2005 anunciada por el Gobierno colombiano, desconoce abiertamente la Constitución Política y la normativa internacional en materia de Derechos Humanos”, Federación Internacional de Derechos Humanos –FIDH Bogotá, Colombia –Paris, Francia. 6 de septiembre de 2006.

106- COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, “La extradición de jefes paramilitares favoreció la impunidad”. Mayo 19 de 2011. Disponible en: <http://www.colectivodeabogados.org/Extradicion-de-jefes-paramilitares>. Fecha de consulta: 12 de abril de 2012.

disidentes o de desmovilizados con experiencia en el control de territorios valiosos para el negocio ilícito han permitido la degradación del conflicto y la multiplicación de actores que se valen de las dinámicas de la guerra, y terminan constituyéndose en fenómenos expansivos de carácter militar. Alrededor de 25 grupos¹⁰⁷ surgidos pos desmovilización, y que contaban en mayor o menor medida con participación de rearmados o disidentes del proceso con las AUC, se han reagrupado desde 2007. En 2011 se pueden identificar 4 grandes grupos ('Urabeños', 'Rastrojos', 'Paisas', 'Erpac') que se disputan el control territorial de las regiones más importantes del país: en cuanto a lo estratégico, a vacíos de poder y poca presencia del Estado y a la existencia de economías legales e ilegales como la minería y el narcotráfico.

Adicionalmente otros grupos se consolidan como parte de las redes de ilegalidad y aparecen en consonancia con la actividad de los grupos antes mencionados; es el caso de Águilas Negras, que representan en ocasiones grupos locales que son cooptados por los grupos armados expansivos, con la finalidad de establecer escenarios de terror y control que permitan el establecimiento posterior de las estructuras criminales organizadas. También el caso del grupo armado paramilitar los 'Botalones', en la región del Magdalena Medio, que representa a las estructuras criminales encargadas del contrabando y explotación de hidrocarburos y narcotráfico, entre otros.

Si bien la denominación oficial de estos grupos como "bandas criminales", desestima su capacidad militar operativa, los mismos vienen en expansión por el país. Tal como en el caso de los 'Urabeños', que ya ha demostrado su capacidad militar y operativa al haber impuesto un paro armado en 6 departamentos del norte del país, en los primeros días de enero de 2012, incluyendo municipios del área rural como en el sur de Bolívar y capitales departamentales como Santa Marta¹⁰⁸.

Estas manifestaciones armadas en el país han puesto en evidencia la continuidad del conflicto armado, con visos de rearme y reincidencia, y procesos de degradación que debilitan cada vez más la línea que separa a los actores del conflicto, la delincuencia común, el crimen organizado, e incluso a la población civil.

Otro de los inconvenientes más trascendentes para el cumplimiento efectivo de los acuerdos y el seguimiento al proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, que puede considerarse como un aspecto que ha incidido en la continuidad del conflicto y la dificultad para el control y el monitoreo del proceso de reintegración tiene que ver con los mecanismos de registro, verificación y control de las desmovilizaciones. Según se conoce, de acuerdo a declaraciones e investigaciones de las autoridades competentes, se presentaron irregularidades en las desmovilizaciones de algunos bloques de las AUC, dentro de las cuales se vincularon personas civiles, entre campesinos, indigentes, desempleados, etc., que nunca participaron de las fuerzas armadas ilegales y que fueron convocadas atraídas por los incentivos de los beneficios del programa de reintegración¹⁰⁹. En este sentido la evaluación de la reintegración debe estar supeditada al número real de personas que dejaron las armas para incorporarse nuevamente a la vida civil, situación que no puede considerar unos porcentajes de éxito sobre un número total sobrestimado, y así mismo al considerar los niveles de reincidencia.

Por último, es de resaltar que el proceso no se adelantó como un gran diálogo nacional, no se construyó como un consenso de país e incluso no convocó a lo territorial como parte definitiva del acuerdo. Ello ha implicado serias dificultades para el compromiso de la sociedad en general con el proceso, y también sobre la responsabilidad en el mismo de las entidades del orden local y regional. Situaciones que implican obstáculos para la paz, resistencia hacia las políticas de reintegración, estigmatización de la población

107- Ver: ELNUEVOSIGLO.CO: "Persecución a Bacrim requiere ajustes: Pérez", 15 de enero de 2012. Disponible en: <http://www.Elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2012-persecuci%C3%B3n-bacrim-requiere-ajustes-p%C3%A9rez.html>. Fecha de consulta: 12 de abril de 2012.

108- CARACOL RADIO, Judiciales, "Así transcurre el paro armado de Los Urabeños en todo el país". Enero 5 de 2012. Disponible en: <http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/asi-transcurre-el-paro-armado-de-los-urabenos-en-todo-el-país/20120105/nota/1602482.aspx>. Fecha de consulta: 12 de abril de 2012.

109- EL ESPECTADOR. "Luis C. Restrepo sabía de las falsas desmovilizaciones: Mancuso". Mayo 11 de 2012. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/audio-345443-luis-c-restrepo-sabia-de-falsas-desmovilizaciones-mancuso>. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2012.

desmovilizada y de las víctimas, poca participación del orden local y desarrollo coyuntural de políticas públicas para ello en lo territorial.

Sin embargo y a pesar de lo anterior el proceso avanza. En ese sentido deben identificarse los riesgos para el proceso y atacar las debilidades con el fin de fortalecerlo, desde una política pública convocante y estructural de paz, los esfuerzos por la recuperación del Estado Social de Derecho y la reconstrucción del tejido social dañado.

DDR en Santander, rutas de la desmovilización¹¹⁰

Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá: Se desmovilizan en Puerto Boyacá, en la vereda El Marfil, el 28 de enero de 2006, bajo la representación de Arnubio Triana Mahecha, alias 'Botalón', con 742 miembros y 316 armas.

Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio: Se desmovilizan en el departamento de Antioquia, en el municipio de Puerto Triunfo, corregimiento La Merced, el 7 de febrero de 2006, bajo la representación de Ramón Isaza Arango, alias 'El Viejo', con 990 miembros y 757 armas.

Bloque Central Bolívar- Sur de Bolívar: Los frentes Fidel Castaño¹¹¹, Cacique Guanentá y parte del Frente Alfredo Socarras, formaron parte de las desmovilizaciones llevadas a cabo en el sitio "La Granja", en el corregimiento de Buena Vista, en Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, bajo la representación de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias 'Macaco', con 2519 miembros de varios frentes del sur de Bolívar y Cesar. Se entregaron 1904 armas.

Bloque Central Bolívar- Frente Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio: También bajo la representación de alias 'Macaco', se desmovilizaron los

miembros de los frentes Lanceros de Vélez y Boyacá, parte del Alfredo Socarras y el Frente Patriotas de Málaga, los cuales pasaron por Puerto Berrío antes de concentrarse en el municipio de Remedios, en la vereda San Cristóbal, del corregimiento de Santa Isabel, en el departamento de Antioquia, lugar en el cual, el 12 de diciembre de 2005, se desmovilizaron 1922 miembros y se entregaron 1386 armas.

Como se observa, la dispersión de las desmovilizaciones de los distintos frentes que operaron en el departamento de Santander, agrupados en el conglomerado del Bloque Central Bolívar, dividido además en dos estructuras que agrupan frentes de 4 departamentos, ha dificultado la identificación de estas estructuras, el número de miembros con los que contaba cada una de ellas, los desmovilizados, los disidentes, e incluso poder establecer niveles reales de reintegración a la vida civil de aquellos que hicieron parte del proceso de DDR.

A la vez, la débil estructura de las AUC, dado su caudillismo, no daba cabida a coordinación ni subordinación de un mando conjunto, su funcionamiento operaba sobre acuerdos y dinámicas de grupos regionales con una alta tasa de relevo de mandos, asesinato de comandantes y surgimiento de nuevos liderazgos. En estas condiciones, la desmovilización de los principales bloques paramilitares, efectuada entre 2003 y 2006, no significó el fin del paramilitarismo pues los comandantes desmovilizados no tuvieron instrumentos de poder suficientes para impedir la reproducción de nuevos grupos y aún la continuación de los grupos anteriores. Es notable que la aparición de las bandas emergentes y los conflictos entre bloques tiendan a ocurrir en las regiones fronterizas más activas en el narcotráfico, lo que estaría indicando la reorganización de las estructuras de seguridad y control territorial del negocio de las drogas.

110- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Oficina del Alto comisionado para la Paz, "Proceso de Paz con las Autodefensas. Informe ejecutivo", Diciembre de 2006.

111- Parte de la información se obtuvo a través de entrevistas a desmovilizados que identificaron los lugares de desmovilización de sus frentes, además de información de prensa recolectada.

CAPÍTULO IV

COLOMBIA FRENTE AL DESAFIO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL

Cambios políticos en el contexto internacional

El accionar de los Estados Unidos durante los años de la administración de George Bush (2001-2009) configuraron el paradigma teórico y práctico de seguridad, la Guerra Preventiva o Guerra contra el Terrorismo, que implementó prácticas como la “intervención preventiva” en la guerra de Afganistán e Irak y flagrantes violaciones al DIH (tortura, detenciones ilegales, falta de procesos judiciales). La elección de Obama a la presidencia de Estados Unidos generó un drástico cambio en la política internacional del país del Norte, especialmente en el paradigma de la seguridad y la guerra preventiva, el cual significó ajustes en las relaciones con los países aliados.

Una de las primeras señales de este cambio para Colombia fue la no aprobación en 2008 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, que a pesar de contar con todo el apoyo de la administración republicana fue hundido en el Congreso americano por los crímenes contra sindicalistas y la violación constante de los Derechos Humanos ocurridos en nuestro país. Aunque los demócratas, indudablemente, están defendiendo unos compromisos de los grupos de interés que los respaldan, las constantes críticas que el gobierno colombiano recibió demuestran la revalidación del respeto por los Derechos Humanos como un eje estratégico dentro de la política internacional, que marca las relaciones comerciales y políticas entre los estados y Colombia.

El PAL¹¹², Plan de acción laboral, suscrito entre el presidente Obama, el presidente Santos y sectores sindicales colombianos y norteamericanos, establece un

112- Revista Cultura y Trabajo No 84. ENS- Escuela Nacional Sindical. Diciembre 2011.

monitoreo sobre reformas laborales en Colombia que se responsabilizaron a realizar como compromiso para agilizar la firma y puesta en marcha del TLC. La creación del ministerio del trabajo, la investigación de crímenes contra sindicalistas, la abolición de las cooperativas de trabajo asociado, el respeto a las libertades sindicales, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la penalización de la violencia antisindical, entre otras medidas, configuran un nuevo marco de relaciones entre los Estados Unidos y Colombia, que incorpora la vigilancia sobre el cumplimiento de derechos humanos y el rechazo a la impunidad de crímenes, incluido el paramilitarismo.

Una de las consecuencias más importantes es la renovada importancia que adquiere el multilateralismo en las relaciones internacionales, en este caso el gobierno colombiano ha interpretado el contexto internacional y ha tenido que cambiar radicalmente su estrategia, reconoce la existencia del conflicto armado interno y la aplicación del DIH. Y en este nuevo escenario la diplomacia colombiana retoma las relaciones con otros actores internacionales y ante todo mejora las deterioradas relaciones con vecinos como Venezuela y Ecuador.

A nivel internacional las condiciones que facilitaban la política de guerra y el abandono de los derechos humanos por parte del Gobierno Nacional han cambiado significativamente. Las prácticas sistemáticas de connivencia, apoyo o complicidad con grupos paramilitares, o la omisión de sus responsabilidades en combatirlos, o la evasión de su deber de garantía en la protección de la población civil, son conductas que están bajo observación rigurosa de instancias internacionales poderosas.

La consolidación de la Corte Penal Internacional CPI, la presencia permanente de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia y la labor de organizaciones como el Human Rights Watch han decantado en una mayor observación y vigilancia internacional hacia las dinámicas violentas y la continua violación de los DDHH y del DIH. El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional penal en los últimos años ha establecido nuevas instituciones que demandan justicia y no impunidad en los crímenes de lesa humanidad que se presentan en distintas regiones del mundo.

Este nuevo contexto obliga a los estados miembros de la CPI, como Colombia, a incorporar estas normas y sus responsabilidades. De manera que ya no es posible una amnistía amplia y sin condiciones para los grupos armados al margen de la ley, llámese guerrillas o paramilitares; es necesario una investigación sobre los hechos y crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios públicos o grupos de particulares en armas, que ponen en peligro la existencia misma de la sociedad y que desde el derecho internacional exigen sanción y no repetición. La CPI, está diseñada como una justicia subsidiaria en caso de que la justicia interna no brinde garantía de justicia para la protección de los derechos humanos y el cumplimiento del DIH, esta justicia internacional podrá intervenir, investigar, juzgar y sancionar en tribunales internacionales.

Gobierno Santos y la justicia transicional

Terminado el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe en agosto de 2010, después de años de aplicación intensiva de la política de solución militar, el presidente Santos se encontró con un panorama desolador como resultado de la misma. El conflicto armado lejos de haberse superado está degradado, es más complejo con nuevas expresiones de bandas criminales y grupos armados posdesmovilizados de las AUC, con características ambiguas que han sido motivo de controversias y apreciaciones conflictivas entre distintas instituciones y organizaciones de derechos humanos sobre la difusa relación y caracterización entre paramilitares y narcotraficantes, bacrim y delincuencia común.

Estos grupos durante el periodo 2005 – 2010, según distintas fuentes, mantuvieron estructuras de mandos y control de territorios; haciendo el conflicto armado interno muy irregular, intermitente, más intenso y cobrando víctimas civiles y desplazamientos. Como expresión del conflicto armado en Santander, además de capturas y muertes por acción de la fuerza pública, se debe resaltar la presencia y el accionar de diferentes actores armados en este territorio, especialmente de grupos como ‘Águilas Negras’, ‘Rastrojos’, ‘Urabeños’, Eln y Farc, principalmente en las poblaciones rurales y en Bucaramanga y Barrancabermeja.

La presencia de observadores internacionales para el tema del conflicto y los Derechos Humanos

es un síntoma que preocupa sobre el curso de la profundización de la guerra o la solución definitiva al conflicto armado.

En el inicio de 2010, Colombia presenta un panorama sombrío y se mantiene como uno de los países que registra los índices más altos en violaciones de DDHH y DIH; con una de las mayores poblaciones desplazadas del planeta, con diversos grupos armados ilegales pos desmovilizados que hacen presencia activa en 32 departamentos, Santander no es la excepción, una ley de justicia y paz que no arroja resultados en materia de sentencias y justicia a favor de las víctimas; al tiempo que se hace notar la expansión acelerada de las bacrim y nuevas ofensivas de las guerrillas de las Farc.

Dentro del manejo del conflicto, el gobierno de Uribe Vélez y su política de “seguridad democrática” también fue objeto de múltiples recomendaciones de Naciones Unidas para el respeto de los Derechos Humanos, ante denuncias de “falsos positivos” referidas a ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate, hechos que comprometen a militares activos en diferentes guarniciones y zonas de conflicto armado, con procesos judiciales en curso en la Fiscalía General de la Nación, sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y altos índices de impunidad.

Desarrollo de la Ley de Justicia y Paz

En cuanto a la Ley de Justicia y Paz, el trabajo de la Fiscalía General de la Nación comenzó en el año 2006 con la compilación de la documentación e información sobre 34 grupos de autodefensas conocidos en el país (tanto las características del grupo, los lugares en los que actuó, los hechos delictivos cometidos, etc.) y sobre casos de desmovilizados bajo la Ley 782 de 2002. A cada fiscal le fue asignado el conocimiento de 3 ó 4 bloques.

La primera lista de postulados presentada por el Gobierno nacional el 17 de agosto de 2006 contenía 2.695 desmovilizados. Para agosto de 2011 la cifra

ascendió a 4.895 postulados (4.253 de las AUC y 642 de otros grupos); situación que debería conducir a un aumento de fiscales. Sin embargo, actualmente aun resulta insuficiente el número de fiscales pertenecientes a la Unidad de Justicia y Paz¹¹³.

Teniendo en cuenta el apartado anterior, es destacable que aunque se desmovilizaron alrededor de 32.000 paramilitares en el proceso de Justicia y Paz se encuentran postulados una mínima parte, menos del 15% de los responsables de las violaciones de los derechos humanos realizadas por el paramilitarismo. Y según datos de la Fiscalía General de la Nación a 2012, solo 1.000 están en la cárcel.

Como se puede apreciar, son muy pocos los paramilitares que en este momento se encuentran vinculados a un proceso judicial, lo que impide garantizar los derechos de las víctimas; por el contrario la mayoría de los paramilitares tienen procesos archivados porque fueron cesados o precluidos y no se han cumplido las órdenes de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de reabrirlos para garantizar una verdadera justicia. El Gobierno insistió fallidamente en su propuesta de precluir estas investigaciones, por el contrario, se tramitó y aprobó la Ley 1424 de 2010 para el esclarecimiento de la verdad y aplicación de principios de justicia transicional a los desmovilizados no postulados a Justicia y Paz.

De otra parte, a agosto de 2011, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado 2.777 versiones libres, habiéndose concluido 1.390 y estando 1.387 en curso. En las versiones se han enunciado más de 57.000 hechos, de los 291.341 documentados (principalmente homicidio, desplazamiento, desaparición forzada, reclutamiento, extorsión, secuestro y masacres) en los cuales había 69.373 víctimas.

Del desarrollo de la Ley, la Fiscalía General de la Nación muestra dentro de sus resultados la enunciación de otros hechos que han dado pie a nuevas investigaciones penales en justicia ordinaria, 11.821 casos.

Así mismo, sobre bienes que se han constituido para la reparación a las víctimas se encuentran 99 inmuebles,

113- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Misión de apoyo al proceso de paz en Colombia / MAPP-OEA. “Diagnostico de Justicia y Paz en el Marco de la Justicia Transicional en Colombia”. Octubre 19 de 2011. p. 17- 32.

4 sociedades, 10 vehículos, 5.166 semovientes, \$3.293 millones en efectivo, 4 motores fuera de borda y 722 mercancías para boutique¹¹⁴.

Frente a este panorama de resultados presentados por la Fiscalía es de resaltar la existencia de 187.000 víctimas registradas¹¹⁵ a agosto de 2008.

Gestión Unidad Nacional de Fiscalías para Justicia y Paz, a 31 de marzo de 2012¹¹⁶.

HECHOS CONFESADOS Y VICTIMAS RELACIONADAS	
Total Hechos Confesados	35.430
Total Víctimas Relacionadas en Hechos Confesados	46.106

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 2012

PRINCIPALES DELITOS EN HECHOS CONFESADOS	
Masacres	894
Homicidio	23.092
Reclutamiento Ilícito	1.487
Desaparición forzada	3.272
Desplazamiento forzado	10.264
Extorsión	997
Secuestro	1.535
Violencia Sexual	79
Tortura	713
Tráfico, fabricación o porte de Estupefacientes	62

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 2012

TRANSMISIONES DE VERSIONES LIBRES	
Municipios a donde se ha llevado la transmisión en directo de las versiones libres	702
Días de Transmisiones en Directo	2.491

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 2012

114- Según informe de la Fiscalía General de la Nación en agosto de 2008. Ver también: VERDADABIERTA.COM "Balance de la entrega al fondo de reparación". Agosto 24 de 2008. Disponible en: <http://verdadabierta.com/component/content/article/208-restitucion-de-bienes/155-del-ahogado-el-sombrero->. Fecha de consulta: junio 12 de 2012.

115- FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Respuesta a derecho de petición. Agosto 22 de 2008.

116- Disponible en: <http://www.fiscalia.gov.co:8080/justiciapaz/Index.htm>

GESTIÓN EXHUMACIONES

Fosas exhumadas	3.649
Cadáveres encontrados	4.503
Cuerpos con identificación indiciaria (con muestra de ADN y esperando resultados de laboratorio)	866
Cuerpos plenamente identificados por pruebas de ADN o Carta Dental	1.651
Cuerpos entregados a familiares	1.714
Cuerpos identificados y pendientes de entrega a familiares	144

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 2012

PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Víctimas que han participado en versiones libres	75.927
Víctimas que han realizado preguntas a los postulados en versión libre	27.714
Número de preguntas realizadas por las víctimas a los postulados en las versiones libres	31.189

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 2012

GARANTIAS DE NO REPETICIÓN

Postulados que mediante declaración pública han restablecido la dignidad de la víctima	309
Postulados que han pedido perdón a las víctimas	1.107
Postulados que han manifestado públicamente su arrepentimiento	1.010
Postulados que han prometido no repetir las conductas punibles	1.081

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 2012

CASOS COMPULSADOS A LA JUSTICIA ORDINARIA

Políticos	999
Miembros de las Fuerzas armadas	916
Servidores Públicos	337
Terceras Personas y Desmovilizados	9.596
Total	11.821

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 2012

JORNADAS GENERALES ATENCIÓN A VÍCTIMAS

AÑO	No. JORNADAS	No. VÍCTIMAS
2006	18	1.802
2007	89	15.704
2008	104	24.865
2009	162	42.456
2010	188	28.868
2011	179	26.606
2012	5	1.063
Total	745	141.364

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 2012

JORNADAS ESPECIALES DE ATENCIÓN A FAMILIARES DE DESAPARECIDOS

No. de Jornadas	244
No. de Personas Atendidas	42.043
No. de Muestras Biológicas tomadas	17.031

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 2012

POSTULADOS CON IMPUTACIÓN, FORMULACIÓN DE CARGOS Y LEGALIZACIÓN DE CARGOS	
Postulados a quienes se presentó escrito de solicitud de audiencia de Imputación	811
Postulados a quienes se presentó escrito de solicitud de audiencia de formulación de Cargos	302
Postulados que terminaron formulación de cargos en espera de realización de Audiencia de Control de Legalidad	107
Postulados a quienes se les ha realizado audiencia de Legalización de Cargos	50
Postulados en Incidente de Reparación	11
Postulados con Sentencia en Justicia y Paz	11

Fuente: Fiscalía General de la Nación. 2012

Acercamiento a un balance de la Ley 975 y la desmovilización

A finales de 2011, al hacer un diagnóstico del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y el desmonte de esas estructuras, tras el Acuerdo de Ralito, y sobre el marco normativo de Justicia y Paz como mecanismo de justicia transicional con beneficios de penas alternativas para los desmovilizados a cambio de verdad, justicia, reparación y no repetición, se puede afirmar que los resultados no son los esperados.

Su lento transcurrir, por la ausencia de voluntad política por parte de los ex paramilitares para dar a conocer la verdad y la escasa agilidad de los procesos, explican de alguna manera porque a fecha de mayo de 2012 no se ha emitido una sola sentencia sobre hechos criminales cometidos por los diferentes grupos, frentes o bloques paramilitares que delinquieron en Santander y en la región del Magdalena Medio. Desde luego tampoco se ha avanzado en la reparación de las víctimas, las cuales cruelmente sobreviven en condiciones de alta vulnerabilidad social, en medio del miedo y esperanza.

La MAPP-OEA y la misma Fiscalía General de la Nación han emitido diferentes informes y recomendaciones al Gobierno Nacional para realizar una reforma de la Ley 975 de 2005, ante la necesidad de agilizar los procesos, priorizar y seleccionar casos y establecer nuevos enfoque de investigación criminal por parte de la Fiscalía.

- Versiones libres y su escasa contribución a la verdad

El desarrollo de las versiones ha permitido que algunas víctimas y la sociedad en general conozcan de las actuaciones de los grupos paramilitares y sus dinámicas de violencia en algunas regiones. Sin embargo no han contado toda la verdad que las

víctimas y la sociedad esperan, además en muchos casos han convertido el escenario de las versiones en una vitrina política de apología de sus delitos, al expresar los motivos de sus crímenes han hablado de una estrategia de contrainsurgencia e incluso de control social y de la criminalidad en las localidades donde actuaban. La información sobre sus redes de apoyo, sus vínculos con empresarios de la región, miembros de la fuerza pública o políticos es escasa. Los paramilitares que han actuado en Santander, ha sido los más renuentes a dar esta información y ha sido evidente su negativa a colaborar con la justicia. En este sentido se requiere mayor exigencia a los postulados frente a las exigencias de la Ley y su aporte a la verdad.

i) El proceso de esclarecimiento de la verdad, ii) el desplazamiento como estrategia de guerra y el despojo de tierras, iii) la violencia sexual y el reclutamiento de menores, son aspectos aun incipientes en las versiones libres y la Fiscalía debe ahondar más para determinar las responsabilidades en estos asuntos. La metodología de la investigación llevada a cabo se ha dirigido y concentrado en el establecimiento de responsabilidades individuales sobre los crímenes, pero aún le faltan mecanismos y estrategias para determinar patrones y móviles que permitan establecer la sistematicidad de las violaciones de los derechos y den una respuesta más coherente con los estándares internacionales en materia del derecho a la verdad.

Además de la poca verdad que se ha logrado establecer sobre responsabilidades en materia de violaciones de derechos humanos, como se aprecia en miles de casos que no son reconocidos por los victimarios en las versiones que se adelantan en la Unidad de Justicia y Paz de Bucaramanga donde se hallan las investigaciones del Bloque Central Bolívar y del Frente Héctor Julio Peinado, la atención a las víctimas es precaria: en esta Unidad, se encuentran registradas una cifra cercana a las 5.000 víctimas, las cuales cuentan solamente con 10 Defensores Públicos que acompañan las versiones y una psicóloga adscrita a la Defensoría del Pueblo que hace atención en crisis en estas sesiones. Esto muestra como los derechos de las víctimas a tener asistencia jurídica y psicológica

dentro del proceso no están siendo realmente garantizados por el Estado, pues idéntica situación se vive en el resto de país: Las víctimas hacen un recorrido enorme, versión tras versión, buscando información y justicia sobre su hecho y esta iniciativa se ve frustrada por el alto nivel de violencia y la falta de mecanismos idóneos que ofrezcan reales garantías.

- Derecho a la reparación en la perspectiva del proceso de Justicia y Paz

La Ley de Justicia y Paz se encuentra ante perspectivas poco claras para la garantía de los derechos de las víctimas en la medida que el Fondo de Reparación es insolvente. Los victimarios han sido renuentes a entregar bienes, tierras y recursos financieros usurpados a las víctimas y al Estado, limitándose a entregar algunos bienes cuya cuantía es inferior; además que la responsabilidad del Estado en esta obligación está en entredicho, pues la reparación integral está condicionada a la capacidad fiscal de la Nación, y se hace saber informalmente que el Gobierno quiere incluir en la reforma a la Ley 975 que la reparación esté limitada a los montos fijados para las indemnizaciones económicas establecidas para reparaciones administrativas por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1448 de 2011.

En torno al Fondo de Reparación, Eduardo Pizarro, quien fue el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación- hasta 2010, reconoció desde un principio que “los bienes de los jefes paramilitares, que aún no sabemos cuántos son, van a ser insuficientes para reparar a las víctimas de esos grupos”¹¹⁷. Diferentes ONG han expresado que la mayoría de los bienes no están siendo incautados y los ‘paras’ evaden su entrega por medio de testaferros. Tampoco ha habido restitución de bienes y tierras apropiados de forma ilícita por los paramilitares a las familias desplazadas y demás víctimas del despojo.

Aunque se sostiene que la reparación no sólo debe ser económica sino integral (el concepto de integral incluye otras dimensiones como la restitución de tierras y bienes; las medidas de satisfacción que las víctimas formulen; medidas de rehabilitación

117- “Reparación a víctimas de ‘paras’ no será de la noche a la mañana”. Disponible en: <http://www.cnrr.org.co/noticias/entrevistas/oct8-06>. Fecha de consulta: 26 de febrero de 2012.

emocional, mental, psicosocial, laboral y físicas; la simbólica; la reparación colectiva sobre el daño causado a las comunidades y organizaciones para la estabilización y reconstrucción del tejido social y su memoria histórica) se hace necesario un enfoque que aborde un ajuste institucional reestructurante en la administración del Estado, que haga viable la implementación de las medidas reparadoras y que el Estado reconozca la obligación social con las víctimas.

Si bien es reconocido que el proceso de discusión política sobre la desmovilización paramilitar comenzó en 2003 y la Ley 975 tiene vigencia desde julio de 2005, la verdad es que a la fecha en Santander todavía no hay víctimas reparadas; a nivel nacional ocurre similar situación, a pesar de considerar los primeros fallos y sentencias de Justicia y Paz como el caso de Mampuján y San Cayetano, e incluso otros que fueron ya fallados en primera instancia, allí las víctimas siguen demandando una reparación integral.

Este problema ha sido de amplia reclamación nacional, por lo cual el Gobierno promulgó el Decreto 1290 de 2008¹¹⁸, que busca reparar a las víctimas por medio de la vía administrativa. Por otra parte, el Congreso aprobó la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, de reparación integral y restitución de tierras, y sus decretos reglamentarios, normas que tienen vigencia y aplicación en el curso de 2012 para establecer e implementar las vías de reparación y la forma en que el Estado actuará por medio de la validación y el cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Miles de víctimas enfrentan un panorama muy difícil en el orden social, económico, emocional y moral pues se enfrentan a escenarios de nuevos riesgos e impunidad (uno de los casos graves es de los reclamantes de tierras, aunque no el único) que fueron prometidos de corregir. La sociedad colombiana deberá asumir el desafío de cerrar el episodio de la guerra sin olvidar a las víctimas y sin perder de vista el horizonte del interés superior de la paz, para lo cual se requiere una estrategia más integral del Estado desde lo político, lo jurídico y lo social que realmente contribuya a la superación definitiva del conflicto armado.

- Ley de Justicia y Paz en la encrucijada: ¿fracaso o reforma?

Cumplidos casi siete años de implementación de la Ley 975 de 2005, ya es posible formular algunos análisis e hipótesis acerca de la percepción generalizada en la opinión pública sobre su eficacia. ¿La Ley de Justicia y Paz ha sido un fracaso? Desde el punto estrictamente judicial, a partir de los resultados que se muestran a nivel nacional en el avance de los procesos, cuyos resultados hasta ahora son: siete condenas, la mayoría apeladas y sólo una confirmada en segunda instancia, se constata una profunda crisis de esta norma de justicia transicional y se puede concluir que dicha Ley no ha cumplido con los objetivos propuestos, ni paz ni justicia, ni reparación judicial a las víctimas.

Este debate ha dado pie a la propuesta de reforma a la Ley para dinamizar los procesos. En el curso de 2011 y 2012 la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional tomaron la iniciativa de promover la reforma, pues a juicio del Gobierno se considera que al ritmo actual el proceso tomará aproximadamente un siglo, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía.

Según datos de la Fiscalía en su informe de gestión 2011, una gran dificultad que atraviesa la Ley de Justicia y Paz, es la calidad de la lista de postulados por el gobierno para ser beneficiarios de la misma. Esta lista incluye a 4643 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia y 506 desmovilizados de grupos subversivos. No obstante se considera que por lo menos dos mil de estos postulados no participen efectivamente en el proceso de justicia y paz. El cuadro de posibles participantes se reduce, como se aprecia en los informes, con 1342 postulados que han rechazado la oportunidad de participar en este proceso judicial. Adicionalmente, 1301 postulados no se han acercado al sistema judicial a ratificar su interés en participar y un número similar han fallecido, según registros de las mismas autoridades. El cuadro final de postulados incluidos participantes del proceso apenas llega a 2.800; de ellos, según la Fiscalía 1.000 están detenidos.

118- MELENDEZ, Jorge Enrique. "A examen, solicitudes de reparación". En: El Tiempo. Septiembre 22 de 2008. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3103945>. Fecha de consulta: 24 de febrero de 2012.

No menos preocupante es la consideración que han hecho diferentes analistas al identificar que la mayoría de los postulados actualmente en Justicia y Paz fueron patrulleros rasos, de los grupos paramilitares desmovilizados, quienes no pueden ser considerados prioritarios, pues en su accionar armado estaban subordinados a mandos y estructuras; existen razones para afirmar que muchos de ellos nunca participaron en la planificación ni decisión de cometer crímenes, aunque algunos sí participaron en su ejecución.

Teniendo en cuenta el análisis de contexto y la discusión sobre la vigencia de la justicia transicional, se hace notoria la percepción de frustración y fracaso frente a hechos de grave preocupación, como la existencia de bandas emergentes posdesmovilización de las AUC, el desplazamiento forzado, las amenazas, la revictimización, la extradición de victimarios, la ausencia de sentencias, de reparación a las víctimas y la falta de una política coherente de atención, que llaman a reflexionar sobre alternativas o profundas reformas a la Ley 975.

Reflexiones sobre la propuesta de reforma a la Ley 975

Según el Centro Internacional de Justicia Transicional ICTJ, un asunto de principal preocupación es que los métodos implementados en la aplicación de esta Ley parecen demostrar que perdieron de vista la oportunidad y las expectativas que fueron su sustento y origen, cual era la de develar, dismantelar y asegurar la desmovilización del fenómeno paramilitar, con especial énfasis en la no repetición de esta estructura criminal en el país y contribuir eficazmente en fortalecer el estado social y democrático de derecho.

Los operadores de justicia, jueces y fiscales, abogan por defender algunos avances parciales de la Ley y proponen reformas; ya se hizo pública y cursa en el Congreso de la República la iniciativa de la ex Fiscal General Viviane Morales, la cual propone introducir cambios a la metodología de implementación de las audiencias con enfoques colectivos, superando la dispersión y fraccionamiento del análisis por casos individuales, así mismo promover cambios en la

priorización y selección de casos por responsabilidades de comandantes y mandos de estructuras de bloques y frentes, esperando que contribuyan a la aceleración de los procesos.

Por su parte el ICTJ, institución que ha estado presente apoyando la implementación de la justicia transicional en Colombia, considera que es necesario reorientar el proceso hacia la identificación de los máximos responsables de dicho fenómeno, entre ellos los que establecieron y mantuvieron estructuras...“partir de aquellos casos que hacen aportes significativos al esclarecimiento del fenómeno y de sus vínculos con la sociedad”.

Interesantes correctivos se debaten y proponen actualmente en distintos escenarios académicos, jurídicos y legislativos sobre la reforma a la Ley 975¹¹⁹, en ellos se destacan algunas consideraciones para evitar el colapso total de la Ley y salvar su vigencia. Es una controversia entre la simple descongestión de la justicia y del proceso para mostrar resultados con mayor número de sentencias como principal preocupación del Gobierno y la Fiscalía, y por otra parte, recuperar el verdadero sentido de la justicia transicional y con ello los principios insoslayables del conocimiento de la verdad, la pronta y eficaz justicia con la sanción a los responsables de los crímenes, el reconocimiento de las víctimas y la reparación integral producto de la valoración del daño causado, y finalmente las garantías reales del desmonte de las estructuras que posibilitaron el funcionamiento de la estrategia criminal para garantizar la no repetición.

En tal sentido el ICTJ propone defender la reforma en dirección a *“maximizar mecanismos de rendición de cuentas para recuperar la confianza ciudadana. Abordar el fenómeno socio-político del paramilitarismo como parte del conflicto armado en su conjunto y de manera colectiva priorizando a los principales responsables de bloques y frentes en su accionar y articulación criminal”*, superando el enfoque individual y fragmentado que se ha privilegiado hasta el momento.

Es evidente que la principal preocupación que asiste a las instituciones y a la sociedad colombiana es garantizar la no repetición del ciclo de violencia

armada, por lo que es importante identificar el principal desafío, en el que coinciden propuestas de diferentes actores, retomar la prevalencia del objetivo de dismantlar efectivamente las estructuras de poder de facto en las que los paramilitares estaban involucrados y sobre las cuales hay preguntas sobre su persistencia. Esta apreciación en el marco de los propósitos de la justicia transicional significa avanzar en las investigaciones y en la verdad sobre las redes de financiación y apoyo, y conocer y juzgar a los beneficiarios de las estructuras más allá de los miembros de estructuras armadas paramilitares.

La magistrada de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, Uldi Teresa Jiménez¹²⁰, coincide en estos propósitos y con el deber de reconocimiento para cumplirles a las víctimas en la verdad y la reparación, principios que no pueden dejarse en segundo plano en aras de priorizar sentencias a los victimarios, contrario a posiciones que llaman a que el incidente de reparación a las víctimas se deje para un momento posterior a la ejecutoria de la sentencia.

La Comisión Colombiana de Juristas CCJ junto a otras organizaciones de derechos humanos colombianas, representadas en la vocería de Gustavo Gallón¹²¹, considera los resultados de la Ley 975 un fracaso completo en la medida que no cumplió con los propósitos señalados por la misma Corte Constitucional en materia de contribución a la verdad, justicia, reparación y transición hacia la paz, condiciones jurídicas que no se están dando en la aplicación de la Ley. Además de considerar el daño que causó la extradición de los comandantes de las AUC bajo acusaciones de narcotráfico, cuando se extradita la verdad no hay proceso de paz, en la medida que se pierde la posibilidad de realizar audiencias que garanticen en calidad y cantidad la información y la verdad de los mandos y determinadores de miles de crímenes.

En un balance desde las víctimas y los derechos humanos se puede afirmar que hasta ahora, el tema de la reparación ha sido otra frustración. Son derechos de difícil solución en la medida en que los versionados no entregaron los bienes, dinero y recursos despojados, se remitieron a ceder un mínimo de cosas que no

hace posible la reparación de los daños causados; a esto se agrega que el Gobierno no está interesado en asumir la reparación judicial de las víctimas, dejando entrever que acudiendo a la figura de la sostenibilidad fiscal ella se limitará a los montos establecidos para las reparaciones administrativas en dinero de acuerdo con la Ley 1448, negando la autonomía a la justicia para la valoración de los daños y su capacidad de ordenar los montos correspondientes.

A juicio de expertos, funcionarios públicos, jueces y fiscales, la Fiscalía debería reestructurar su metodología de investigación y acercarse a los “por qué” de los hechos, a las dinámicas de violencia, a los patrones de conducta y a las estructuras institucionales que facilitaron la comisión de los crímenes.

Igualmente las diferentes instituciones deben reestructurar su mirada hacia las víctimas y crear mecanismos de políticas públicas que fortalezcan su participación y la satisfacción de sus derechos. La sociedad en general debe desarrollar acciones de solidaridad con las víctimas que potencien procesos de inclusión social. Por su parte los victimarios desmovilizados deberían manifestar públicamente su compromiso con la sociedad a la no repetición de los hechos, en reconstruir una vida productiva en democracia, la renuncia definitiva a la violencia, haciéndose dignos merecedores de los beneficios de la ley, la libertad y la acogida que les brindan las comunidades para su proceso de reintegración a la vida civil.

Dinámica del conflicto armado: tendencias actuales posdesmovilización

Un aspecto de amplia y compleja controversia que se ha destacado con fuerza en el contexto nacional y regional entorno del conflicto son las supuestas alianzas que se vienen presentando entre los nuevos grupos paramilitares y las guerrillas, con el fin de proteger los cultivos ilícitos y los laboratorios para la producción de droga. Esto marcaría una nueva dinámica que señala lo que diferentes analistas han considerado como la degradación del conflicto armado. Lo cual no puede ser entendido, como lo ha

120- Ponente en el Foro Retos y oportunidades de la reforma a la ley de justicia y paz, -MAPP-OEA-ICTJ- Bogotá, mayo 14 de 2012.

121- *Ibíd.*

señalado el Gobierno, como un signo de la debilidad de los grupos alzados en armas, sino que sería producto de la reconfiguración de nuevas lógicas armadas más eficientes¹²², en torno al control territorial y a la concreción del negocio del narcotráfico que cada día da una mayor rentabilidad, por lo cual se estaría ad portas de un nuevo recrudecimiento del conflicto armado interno, que podría desencadenar otra espiral de violencia en el país.

Los grupos paramilitares ‘Urabeños’, ‘Rastrojos’, ‘Paisas’ o ‘Águilas Negras’, más que tratarse de bandas de delincuentes o residuos del paramilitarismo, como es la hipótesis del Gobierno Nacional, son organizaciones que demuestran una capacidad operativa creciente y una organización derivada de los grupos paramilitares que parcialmente se desmovilizaron.

A pesar que el presidente Álvaro Uribe sostuvo que la captura de los cabecillas era inminente “la lógica con la que se mueven estos grupos”¹²³... “da para pensar que siguen creciendo a sus anchas”, ya que según el Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos los grupos cuentan con una estructura y jerarquía militar que les permite ejercer control territorial y crecer significativamente¹²⁴.

Entre los principales objetivos de estos grupos armados se han identificado el control que ejercen sobre actividades económicas, especialmente el negocio del microtráfico a nivel urbano, la prostitución, la prestación de servicios de seguridad y los juegos de azar; actividades como el narcotráfico y actividades relacionadas con el crimen común. Se ha detectado que en las zonas donde tienen control desarrollan actividades de ‘limpieza social’ y “en general sus operaciones obedecen a disputas por el control de zonas y el ajustes de cuentas por razón

de actividades con el narcotráfico”¹²⁵. Esto explica la rápida multiplicación y expansión y control urbano de los grupos emergentes bacrim, a expensas de grupos de delincuencia común también cooptados y sometidos al mando y a las políticas de su estructura. Estas prácticas de control económico y social en los territorios dominados recuerdan las prácticas ejercidas para estructurar inicialmente su dominio, la realización de estas actividades se basa en la necesidad de ganar legitimidad social en las poblaciones donde se empiezan a diagramar o consolidar sus redes de poder, ya que las personas los pueden considerar como un mal necesario para asegurar la estabilidad social¹²⁶.

- Grupos armados ilegales pos desmovilización: Distribución territorial y captura del territorio nacional

Posterior a la desmovilización de los grupos paramilitares en el país, se viene registrando un fenómeno que evidencia dos procesos inversos de reorganización criminal a partir de los Grupos Armados Ilegales- GAI- (menos grupos nominalmente identificados) y captura de los espacios dejados por los ejércitos de las AUC (más municipios con presencia de GAI), que a su vez implica un escenario de disputa por el control de las economías de guerra que siguen funcionando en el territorio nacional.

En 2007, el país contaba con un estimado de 25 grupos armados, operando en distintas regiones del territorio nacional, especialmente consolidadas en la costa norte, Antioquia, la costa del Pacífico y Norte de Santander, sin embargo para esta fecha ya se evidenciaba una disminución en el número de agrupaciones criminales que se contaban desde 2006 cuando se estimaba que para ese año podían identificarse 35 bandas en el país¹²⁷.

122- EL TIEMPO, sección Nación: “Seis frentes de las FARC y ex “paras” unidos para el narcotráfico: policía”. Junio 20 de 2008. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2995416>. Fecha de consulta: 13 de mayo de 2012.

123- EL ESPECTADOR, sección Nación: “Alarma por rearme paramilitar”. Octubre 24 de 2008. Disponible en: <http://www.elespectador.com/node/85934>. Fecha de consulta: 13 de mayo de 2012.

124- Cuadro comparativo de informes sobre nuevos grupos paramilitares 2008. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=169:cuadro-comparativo-de-informes-sobre-nuevos-grupos-paramilitares-2008&catid=59:paras&Itemid=74. Fecha de consulta: 21 de abril de 2012.

125- Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Febrero de 2009. p. 15.

126- Cfr: DUNCAN, Gustavo. Los señores de la guerra de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia. Editorial Planeta. Colombia. Bogotá, 2007

127- SEMANA.COM: “¿Qué son las Águilas Negras?”, 18 de agosto de 2007. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/aguilas-negras/105663-3.aspx>. Fecha de consulta: 22 de marzo de 2012

En 2011, por su parte, se identifican 4 grandes grupos armados ilegales: ‘Rastrojos’, ‘Paisas’, ‘Urabeños’ y ‘ERPAC’, con una tendencia marcada a la consolidación de 2 estructuras armadas en el país: ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’. Los ‘Paisas’ y el ‘ERPAC’, si bien mantienen presencia en zonas como la región Caribe y Antioquia y Llanos Orientales, respectivamente, las dinámicas de disputa por los territorios, del Caribe y Oriente, parecen abrir el espacio para la entrada de los grupos antes mencionados. Otros grupos identificados como ‘Águilas Negras’, ‘Botalones’, entre otros, parecen ser parte de las redes organizadas de tráfico de estupefacientes, contrabando de hidrocarburos, sicariato y otras modalidades locales de cooptación criminal y estructuras de apoyo.

Los informes de 2011, tanto de Indepaz como de la Corporación Nuevo Arco Iris, apuntan a la expansión del fenómeno de los grupos armados ilegales pos desmovilización. Indepaz en su VII Informe, muestra que estos grupos han pasado de tener presencia en 259 municipios del país en 2008 a 406 en 2011¹²⁸, mientras que Nuevo Arcoiris en su Informe Política y Violencia en 2011¹²⁹, afirma que en 2010 y 2011 han mantenido el mismo impacto en cuanto a presencia (209 municipios) y que la verdadera expansión se presentó en los primeros 3 años (2007, 2008 y 2009) que se consideran de agrupamiento o absorción.

Por otra parte, la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, informa que para 2011 los ‘Rastrojos’ harían presencia en 166 municipios, mientras que los ‘Urabeños’ en 176, el ‘ERPAC’ en 28, los ‘Paisas’ en 61, las ‘Águilas Negras’ serían identificadas en 44 y otras expresiones locales como los ‘Botalones’ en 39 municipios del país¹³⁰. El concepto “narcoparamilitares” – “neoparamilitares” debe analizarse a la luz de la compleja reestructuración del conflicto armado y sus actores, a sus intereses evidentes por remarcar el peso ahora más

abiertamente delincuencial, narcotraficante y distante de una expresión política contrainsurgente en tales grupos, aunque funcional a la extrema derecha en su objetivo de control territorial.

Los informes coinciden en que las regiones de mayor afectación son las del Caribe colombiano, especialmente Cesar, Córdoba y Bolívar, así como Antioquia, Chocó y Valle.

Si bien las capturas de varios de los jefes de estas estructuras se han acontecido en los últimos años, como la de Maximiliano Bonilla alias ‘Valenciano’, las mismas cuentan con una configuración criminal flexible y en red que permite el fácil remplazo de los mandos, o la aparición de enfrentamientos internos que pueden finalizar en subdivisiones de la estructura criminal o en el debilitamiento y posterior absorción de los hombres por parte de otro grupo que se encuentre en disputa por el territorio.

Estas dinámicas determinan una guerra más mafiosa, difusa y urbana, con herencias claras del accionar paramilitar en cuanto al uso de los territorios rurales, a través del ejercicio de la autoridad armada en las comunidades para el establecimiento de la subordinación y el orden en clave del control territorial (rutas, recursos naturales, cultivos ilícitos, etc.). Por lo tanto, se han observado alianzas coyunturales de diversos tipos para el control de territorios, y que van desde acuerdos para la distribución de la actuación criminal del narcotráfico -cultivos- procesamiento-distribución- narcomenudeo-, hasta acuerdos militares de contención de grupos en expansión y en disputa de territorios. Estos acuerdos o alianzas no necesariamente coinciden en todo el territorio nacional, precisamente, porque se presentan en situaciones específicas de distribución territorial que no siempre se repiten en todos los lugares.

128- INSTITUTO DE ESTUDIO PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ, INDEPAZ. “VII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en el 2011”, 2011.

129- CORPORACION NUEVO ARCO IRIS. Observatorio del Conflicto Armado, Informe Anual de la Corporación Nuevo Arco iris, “Política y Violencia en 2011. Las Cuentas no son tan Alegres. (Dinámicas de las FARC, Bacrim, ELN, y riesgos a la restitución de tierras)”, Informe ejecutivo, 2011.

130- COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN, 3er informe de DDR, “Síntesis Regional Presencia de GAI por Municipios CNRR Consolidada Colombia Presencia GAI”, CD room, 2011.

-Semántica del conflicto: bacrim, narcoparamilitares, neoparamilitares o GAI

El Gobierno Nacional ha optado por darles el nombre de Bandas Criminales¹³¹, algunas organizaciones de la sociedad civil las han llamado “Neoparamilitares” y otras “Narcoparamilitares”, la academia aun no toma una determinación clara en cuanto a su denominación, aun cuando algunos simplemente los identifican como Grupos Armados Ilegales.

La discusión por la denominación no es de carácter meramente lingüística, en su contexto implica una condicionante para entender el conflicto. Por una parte utilizar una expresión como Banda Criminal, aboga por una ruptura clara y determinante con el fenómeno paramilitar, es establecer de antemano que el fenómeno no conlleva en sí mismo sino un carácter delincuencial de menor impacto que la estructura armada paramilitar, que al mismo tiempo es un tipo de asociación criminal con formas de actuación distintas y con un propósito menor. Esto, entonces, imbrica una estrategia de confrontación que excluye la vía militar y prioriza la estrategia policiva. Sin embargo, esta estrategia ha sido insuficiente y el gobierno del presidente Santos ha reconocido la necesidad de establecer tareas conjuntas a través de la estrategia D6, que incluye a todas las fuerzas militares en la lucha contra estos grupos.

Por otra parte nombrarlas como Narcoparamilitares es el lado opuesto. Este nombre permite establecer una continuidad del fenómeno paramilitar, de hecho haciendo énfasis en la incidencia del narcotráfico en él, que da cuenta entonces no de un elemento adicional, sino que resalta la importancia en el contexto de una permanencia. Cabe decir, que el narcotráfico, como bien lo muestra esta denominación, no es una novedad en el paramilitarismo, en sí mismo ha sido en algunos casos el origen y la consolidación de proyectos de este tipo, como en los conocidos casos del MAS y el Cartel de Medellín, Micky Ramírez en el Cartel de la Costa o el mismo Rodríguez Gacha. Sin embargo, establecer continuidades absolutas en un proceso que evidentemente finalizó una estructura militar como las AUC puede ser demasiado precipitado y no

percibir cambios significativos en las dinámicas del conflicto, incluso reconfiguraciones de los actores en disputa y modificaciones en los escenarios de guerra.

Neoparamilitares, por su parte, es un término que reconoce una ruptura, pero en términos de la continuidad del conflicto y de los actores. La ruptura se presenta entonces únicamente en el entendido del actor específico y su cambio hacia un nuevo escenario de disputa, con un proceso de reciclaje de miembros y mandos, y la posibilidad de establecer distintas estrategias desde los nuevos contextos de confrontación armada. Pero este cambio representa modificaciones desde la forma y no desde la esencia, por tanto se considera que las formas, muchas de sus formas de actuación, permanecen y en el marco del conflicto armado el actor con sus propios intereses se mantiene, para la Corporación Nuevo Arco Iris se identifican 4 continuidades¹³² concretas:

- La persistencia del narcotráfico y las relaciones estrechas que tuvieron narcotraficantes con las AUC, y que continúan ahora con las llamadas bacrim, lo cual asegura su financiación.
- La continuidad entre los mandos medios y bajos de los frentes de las AUC y los ahora jefes de los grupos reorganizados, quienes han reconstruido parte de las relaciones institucionales que funcionaron efectivamente en el pasado.
- Corrupción en las agencias estatales y la representación política local, resultado de la persistencia del narcotráfico. Esto es latente en los territorios con actividades extractivas y en zonas rurales y urbanas en donde la venta de protección es rentable.
- Las fisuras entre los contextos políticos locales de las zonas de influencia de las antiguas AUC y la coalición de fuerzas políticas que jalonan al Gobierno Nacional. Los quiebres entre centro y región son el resultado de la política anticorrupción y de restitución de tierras a las familias despojadas por las AUC.

131- GONZÁLEZ, Camilo, “El Debate de las Bacrim”. 2011. Disponible en: <http://www.indepaz.org.co/?p=1241>. Fecha de consulta: 22 de marzo de 2012.

132- SEMANA.COM: “Una radiografía a las llamadas bacrim”, 31 de marzo de 2011. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/radiografia-llamadas-bacrim/154287-3.aspx>. Fecha de consulta: 23 de mayo de 2012

Finalmente, el término Grupos Armados Ilegales, no determina el carácter del grupo e implica una concepción amplia en cuanto lo considera en el marco de las convenciones de Ginebra como un actor del conflicto, con mando responsable, control territorial y capacidad de operar de manera concertada y sostenida en el tiempo. Esta definición no establece si es una continuidad del fenómeno paramilitar, si es un grupo con características totalmente distintas o si mantiene algunas características del paramilitarismo, aun cuando se reconoce que la estructura de las AUC desapareció.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, estableció, en su Primer Informe¹³³, 3 distinciones: Rearmados, Disidentes y Emergentes que daban cuenta de estos grupos pos desmovilización y que estaban determinadas por su composición, pero que no comprendían, más allá de esas definiciones, una categoría basada en su forma de actuación; sin embargo, los posteriores informes del área de DDR¹³⁴ de esta Comisión, hicieron énfasis en una comprensión del fenómeno entendido bajo el concepto de Grupos Armados Ilegales, pero reconociendo rupturas con las AUC y formas de reciclaje de su *modus operandi* y miembros.

- Bacrim en Santander: enclaves territoriales y zonas de descanso

Para Indepaz en Santander hacen presencia los Grupos Armados Ilegales pos desmovilización en los municipios de: Barrancabermeja, Bucaramanga, Cimitarra, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Vicente del Chucurí y Santa Helena del Opón. Según este informe los ‘Rastrojos’ harían presencia en Barrancabermeja, Bucaramanga, Cimitarra, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de

Torres, San Vicente del Chucurí y Santa Helena del Opón, mientras que los ‘Urabeños’ en Barrancabermeja, Bucaramanga, Cimitarra, Floridablanca y Puerto Wilches. Por su parte, las ‘Águilas Negras’ estarían en Bucaramanga, Floridablanca y Girón; y los ‘Paisas’ tendrían alguna presencia en Bucaramanga¹³⁵.

Según el informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, en Santander los GAI harían presencia en 16 municipios¹³⁶, y la CNRR identificaba en Santander la presencia de ‘Urabeños’, ‘Rastrojos’, ‘Águilas Negras’ y ‘Botalones’ en 18 municipios, especialmente en las regiones del Magdalena Medio santandereano, el bajo Rionegro y en los límites con el departamento de Boyacá y Antioquia¹³⁷. La presencia de los mismos ha correspondido con las dinámicas de control de los enclaves regionales, con ubicaciones geoestratégicas indispensables para la movilidad de miembros en los corredores hacia otros departamentos, así como para el control de las rutas del narcotráfico y la explotación de recursos naturales. De otra parte, la posibilidad de invertir en ciudades como forma de lavar el dinero del narcotráfico y al mismo tiempo convertir estos sitios en lugares de descanso, o zonas rurales apartadas como espacios de reposo de los jefes de las estructuras, ha precipitado una dinámica de disputa territorial entre los distintos grupos armados, que ha generado inestabilidad hegemónica y cambios significativos, repliegues y avances en zonas como Puerto Wilches y Cimitarra.

Barrancabermeja ha sido un municipio de alta importancia regional, no solo por los recursos petroleros sino por su ubicación estratégica como capital comercial del Magdalena Medio. Sus altos índices de inequidad, la presencia de la guerrilla durante los años 80 y el activo movimiento sindical y de derechos humanos, lo convirtió en uno de los escenarios más apetecidos por el paramilitarismo en los años 90, siendo éste el eje regional sobre el

133- COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN, Área de Desmovilización, Desarme y Reintegración, “Disidentes, rearmados y Emergentes: ¿Bandas Criminales o Tercera Generación Paramilitar?”, Bogotá, 2007.

134- COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN, “La reintegración: logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas”, Área de DDR, 2010. Disponible en: www.verdadabierta.com/archivos.../8-documentos-sobre-rearme?... Y 3er Informe nacional de DDR, CD room, 2011.

135- INSTITUTO DE ESTUDIO PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ, INDEPAZ. “VII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en el 2011”, 2011.

136- CORPORACION NUEVO ARCO IRIS. Observatorio del Conflicto Armado, Informe Anual de la Corporación Nuevo Arco iris, “Política y Violencia en 2011. Las Cuentas no son tan Alegres. (Dinámicas de las FARC, Bacrim, ELN, y riesgos a la restitución de tierras)”, Informe ejecutivo, 2011.

137- 3er Informe de DDR de la CNRR, Alberto Santos Peñuela, Monografía Nororiente y Magdalena Medio, CD Room, 2011

cual se fueron constituyendo posteriormente los frentes que coparon el territorio santandereano. Así mismo, las disputas entre los ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’ se concentraron en el Puerto, para posteriormente expandirse por la región del bajo Rionegro y hacia el Carare, donde los ‘Rastrojos’ intentan retener el control de ese enclave regional constituido por el triángulo formado por Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío, en alianza con los ‘Botalones’ y las ‘Águilas Negras’. Por su parte, los ‘Urabeños’ han logrado ganar espacio en Barrancabermeja, y la región del bajo Rionegro, importante por ser un corredor hacia la región del Catatumbo en Norte de Santander y así mismo hacia el sur de Cesar y el sur de Bolívar, donde también mantienen control.

Los ‘Rastrojos’ por su parte en 2010, recibieron varios golpes por parte de la fuerza pública que los debilitaron en su lucha por mantener el control de la región del Magdalena Medio y Santander, como en el caso de la captura de su jefe militar para el Magdalena Medio y Santander alias ‘Yarledex’ o ‘el Primo’ en San Rafael de Lebrija, quien era desmovilizado del BCB, el 15 de abril de 2010¹³⁸. Así mismo los ‘Urabeños’ que ya entraban en la disputa del territorio durante ese año, el 17 de octubre, sufren también la captura de su jefe militar para la región del sur de Bolívar y el Magdalena Medio, Carlos Everto Higueta Úsuga alias ‘Chejo’ o ‘Gonzalo’, quien estaría entrando en la zona y comandando las acciones para establecerse en el Magdalena Medio santandereano¹³⁹.

Es importante resaltar, que estos grupos han mantenido una incidencia importante en la institucionalidad local, logrando infiltrar las autoridades con el fin de ejercer libremente sus actividades ilícitas, pero también como mecanismo de cooptación del Estado, en una herencia propia del paramilitarismo en la región. En diciembre de 2011, 7 miembros de la policía y el ejército, entre los cuales se encontraban dos coroneles, uno era

segundo de la Policía del Magdalena Medio, el otro, comandante del Batallón Bárbula del Ejército, fueron capturados. La Fiscalía indica que los uniformados recibían sueldos por parte del GAI ‘Botalones’ para el cuidado de cocinas y laboratorios. Adicionalmente, este GAI pagaba a los oficiales con favores sexuales que según las informaciones incluían a menores de edad, también pedían la salida de miembros de la institución que se convertían en piedras en el zapato para el grupo, e impedían los operativos en su contra¹⁴⁰.

Muchos de estos grupos actúan como empresas criminales con capacidad de absorber pequeños grupos delincuenciales locales, como pandillas, bandas de narcomenudeo, entre otras, y que sirven para abrir el espacio a la llegada de las estructuras con mayor presencia armada. Este caso se ha identificado grupos de ‘Águilas Negras’ y otras expresiones locales que no responden a dinámicas regionales de presencia sostenida, sino que se presentan esporádicos e intermitentes en lugares donde luego entran otros grupos como los ‘Urabeños’ o los ‘Rastrojos’.

De acuerdo con informe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga del 6 de junio de 2012 “ (...) en el año 2010, las redes criminales en la ciudad de Bucaramanga, surgieron como alianza entre algunos desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC y bandas delincuenciales, que estarían al servicio de la banda criminal de “Los Rastrojos”. Estas redes se caracterizan por desarrollar actividades delictivas como homicidios selectivos, amenazas (mediante panfletos) extorsiones, control del microtráfico de estupefacientes y el porte ilegal de armas de fuego”¹⁴¹.

El mismo informe de la Policía referencia una relación de 21 personas desmovilizadas que fueron capturadas en los municipios de Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Lebrija, Girón. Además se registran 29

138- ELTIEMPO.COM: “Capturan a jefe militar de ‘Los Rastrojos’ en San Rafael de Lebrija (Santander)”, 15 de abril de 2010. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7603911>, Fecha de consulta: 22 de mayo de 2012.

139- VANGUARDIA.COM: “Capturado jefe militar de la banda de ‘Los Urabeños’”, octubre 17 de 2010. Disponible en: <http://www.vanguardia.com/historico/79172-capturado-jefe-militar-de-la-banda-de-los-urabenos>. Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012

140- ELTIEMPO.COM: “Escandalosas grabaciones de coronel en líos por relación con bandas”, diciembre 9 de 2011. Disponible en: <http://m.eltiempo.com/justicia/casos-de-policas-y-militares-corruptos/10914589>. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2012.

141- Comunicación oficial enviada a COMPROMISO por el subcomandante de Policía Metropolitana de Bucaramanga, Coronel William Alberto Boyacá Zambrano. Bucaramanga, junio de 2012.

personas investigadas, con pérdidas de beneficios, y 8 suspendidos, de un total de 876 personas en proceso de desmovilización-reintegración de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija y Los Santos.

La situación del área metropolitana de Bucaramanga es de especial interés pues refleja la presencia de todos los grupos mencionados, con mayor impacto en los barrios marginales, como la Cumbre, donde además se registra un alto número de población desmovilizada, también en Piedecuesta, con situaciones de reclutamiento forzado de menores por parte de los GAI¹⁴² y un progresivo aumento de capturas en Floridablanca, que están relacionadas con jefes especialmente de los ‘Urabeños’, con centros de operación en otros departamentos del país¹⁴³. Si bien muchos grupos disputan barrios estratégicos para la distribución de los estupefacientes, también es importante reconocer que estos municipios cobran especial impacto para el lavado de activos bajo distintas formas de fachada en general de tipo empresarial¹⁴⁴; así como también como lugares de paso y descanso.

- Alerta sobre riesgos que afectan la desmovilización

Otro aspecto de estas nuevas formas paramilitares es que, si bien las organizaciones que surgieron en los años 80 fueron concebidas como una estrategia contrainsurgente, implementada por sectores de las elites económicas, del ejército y de las mafias, estos nuevos grupos más que corresponder a una dinámica contrainsurgente se configuran como apuestas para el control de territorios claves en términos económicos, donde se espera la construcción de grandes megaproyectos, hay presencia de cultivos ilícitos y

además “estarían beneficiándose de las estructuras económicas y políticas que las antiguas estructuras paramilitares crearon”¹⁴⁵.

También favorece el nuevo auge de grupos armados ilegales la presencia de un gran número de personas desmovilizadas de diferentes grupos armados en el país, población flotante con entrenamiento militar en uso de armas cortas y largas, en medio de un alto nivel de desempleo y bajos ingresos circunstancia que puede incidir en el proceso de crecimiento de estos grupos, más rápido que el de sus antecesores. La táctica empleada por el Gobierno de apresar o dar de baja a las cabezas de las organizaciones¹⁴⁶, está desencadenando un efecto hydra, es decir, no se logra la desarticulación de la organización, sino que retoman el mando dos o más jefes menores que siguen delinquiendo¹⁴⁷.

Un elemento a tener en cuenta, es la preocupación que se denuncia desde distintos lugares sobre el rearme y reorganización de grupos paramilitares, que el Gobierno llama bandas emergentes o bandas criminales. Lo cierto es que se ha cometido un alto número de homicidios en todo el país, se han multiplicado las amenazas a líderes sociales, religiosos, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y también a personas que habitan en la calle, delincuentes, prostitutas, consumidores y expendedores de alucinógenos e indigentes. Como se expuso anteriormente el principal móvil de estas organizaciones ha dejado su énfasis político ideológico y ha pasado a ser el control de sectores legales e ilegales de la economía del país, sin embargo no han abandonado las amenazas contra sectores de la sociedad, que tienen una mirada crítica del país y están en oposición al gobierno.

142- 3er Informe de DDR de la CNRR, Alberto Santos Peñuela, Monografía Nororiente y Magdalena Medio, CD Room, 2011.

143- Ver: Vanguardia.com: “La DEA y la Dijín capturan a un ‘Urabeño’ en Floridablanca”. Junio 12 de 2011. Disponible en: <http://www.vanguardia.com/historico/108399-la-dea-y-la-dijin-capturan-a-un-urabeño-en-floridablanca>. Fecha de consulta: 10 de abril de 2012.

144- Ver: Vanguardia.com: “Bucaramanga, escondite de capos de la mafia”. Noviembre 16 de 2008. Disponible en: <http://www.vanguardia.com/historico/13186-bucaramanga-escondite-de-capos-de-la-mafia>. Fecha de consulta: 23 de marzo de 2012

145- Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. 19 de febrero de 2009. p. 16.

146- VANGUARDIA LIBERAL. “Víctor Manuel Mejía Múnera alias “Chespirito” fue abatido”. Marzo 30 de 2007.

147- PLANETA PAZ. Observatorio Nacional de Paz. “Escenarios, actores y dinámicas de la conflictividad socioterritorial en Colombia. Narrativas, miradas y percepciones desde la subalternidad”, Bogotá: abril 2011.

En zonas del Nororiente colombiano como Barrancabermeja, Puerto Berrío, Cúcuta, Ocaña, Tibú, área metropolitana de Bucaramanga han aparecido amenazas escritas firmadas por el grupo ‘Águilas Negras’ en unos casos y otros por ‘Águilas Azules’ o ‘Autodefensas Gaitanistas’. Las ‘Águilas Negras’ nacieron en Norte de Santander en el año 2006 y según un informe de la CNRR, estaban integradas al inicio de 2007 de por lo menos 4 mil hombres en armas¹⁴⁸. Este grupo armado, en el Nororiente ha hecho presencia en las subregiones del Catatumbo, área metropolitana de Bucaramanga, área metropolitana de Cúcuta, Magdalena Medio y en el departamento de Arauca, zonas de dominio paramilitar antes de la desmovilización.

Más recientemente, aparecieron las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas’, inicialmente en el Urabá antioqueño y luego se han extendido hacia el Magdalena Medio y otros municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander. Este grupo se dio a conocer a través de un comunicado del llamado Frente Carlos Vázquez en el que señalaba:

“Le queremos informar a la opinión pública nacional que en vista de los incumplimientos del gobierno en el proceso de paz que adelantó con las autodefensas unidas de Colombia, y el avance de la guerrilla en busca de controlar zonas donde ha ejercido control la autodefensas durante muchos años, nos vimos obligados a continuar con nuestra lucha antisubversiva y en defensa de los intereses de las comunidades más vulnerables víctimas del abandono estatal producto de la corrupción político-administrativa.

“Que le hemos dado el nombre a nuestro movimiento el nombre de: Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en homenaje a ese gran líder asesinado por defender a las clases más desprotegidas del país.

Nuestros esfuerzos irán encaminados a luchar contra la guerrilla, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, los crímenes de estado, la politiquería, la violación a los derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia participativa. En busca de una Colombia madre patria para todos”.

Por su parte, un panfleto que apareció en Santa Rosa y otros municipios del Sur de Bolívar señalaba:

“LAS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA, INFORMAMOS A LAS COMUNIDADES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, LA PRESENCIA DE NUESTROS HOMBRES EN ESTA REGION DEL TERRITORIO NACIONAL, YA QUE AL IGUAL QUE OTRAS ESTA FUE EN EL PASADO OBJETO DEL ACCIONAR DE LOS GRUPOS SUBVERSIVOS Y ASENTAMIENTO DE FRENTE DE LAS DESMOVILIZADAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA RAZON POR LA CUAL SUS HABITANTES HAN VIVIDO EN CARNE PROPIA LOS ESTRAGOS OCASIONADOS POR EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA.

148- COMISION NACIONAL DE REPARACION Y RECONCILIACIÓN. “Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?” CNRR, Bogotá. 2007

HOY, AL IGUAL QUE OTRAS REGIONES DEL PAÍS, SUS HABITANTES LUEGO DEL FRACASADO PROCESO DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS A.U.C. VUELVEN A VIVIR LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD Y ACRECENTAMIENTO DE LOS GRUPOS SUBVERSIVOS QUE EXISTEN EN LA REGIÓN; ESTA SITUACIÓN CREA EN NOSOTROS LA NECESIDAD IMPERIOSA DE COBIJAR Y RESPALDAR A AQUÉLLOS EXCOMBATIENTES Y CIUDADANOS DE BIEN CON NUESTRA PRESENCIA, A FIN DE DEFENDER SUS DERECHOS Y LOS DE SUS COTERRÁNEOS, PARA QUE TODOS CUENTEN, CON EL CONCURSO DE NUESTROS MODESTOS ESFUERZOS POR LA CONSECUCCIÓN DE LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD DE ESTAS COMUNIDADES”.

Santander y su zona de influencia tiene características estratégicas para los grupos armados ilegales, las cuales han determinado su afán por permanecer en la región, mediante la disputa territorial ya sea contra el Estado o contra el actor armado ilegal que represente los intereses contrarios de uno u otro grupo. Representa grandes oportunidades de poder y dominación muy fuertes acordes con el valor estratégico de los territorios en términos militares, económicos y políticos.

MAPA DE RIESGOS EN SANTANDER – 2012¹⁴⁹

Lugar:	Situación	Tipología:	Actor	Población	Factores de	Tipo de acción	Comités y
Municipio	Fáctica	Conflicto armado, infracción	Posiblemente	Posiblemente	Vulnerabilidad	requerida	Autoridades que deben
Corregimiento,		al DIH, tensión o disturbio	Involucrado:	Afectada			intervenir
Vereda, Barrio,		interno, violación generaliza-	GAOML, bacrim,	(cantidad			
Comuna		da de DDHH, circunstancias	delincuencia co-	Aprox.			
		que alteren o puedan alterar	mún	Personas)			
		el orden público					
PROVINCIA SOTO							
BUCARAMANGA:							
Barrios María Paz, Villa Rosa,	Amenazas,	Violación	Bacrim, los llamados		Desconocimiento del proble-	Fortalecimiento de las	Mesa de prevención y
Café Madrid, Los Colorados,	homicidios	generalizada de derechos hu-	"parches"		ma por parte de las autori-	capacidades de las per-	protección, Comité inte-
Villa Helena, José Antonio	sistemáticos,	manos.	urbanos		dades.	sonas en materia de pro-	rinstitucional de alertas
Galán, Caminos de Paz, Re-	Desplazamientos				Desconocimiento de meca-	moción y protección de	tempranas, Consejos de
gadero Norte, El Pablón, El	intraurbanos.				nismos de protección de	los derechos humanos y	seguridad, Defensoría
Nogal, Bavaria 1 y 2, Villas de					mecanismos de solución de	los derechos humanos y	del Pueblo, Secretaría de
San Ignacio					conflictos por parte de los	mecanismos de resolu-	seguridad, Defensoría
					habitantes.	ción de conflictos.	del Pueblo, Secretaría de
					Debilidad de políticas	Fortalecimiento de las or-	Gobierno Municipal, Fis-
					públicas de empleo, educa-	ganizaciones sociales de	calía seccional y Policía
					ción y trabajo para la juven-	la localidad.	Nacional
					tud.	Identificación de sectores	
						críticos de violencia y	
						expendios de drogas (ac-	
						ción focalizada).	
LEBRIJA							
Corregimiento Uribe Uribe,	Amenazas, des-	Violación	Frente 20 de las FARC,		Aslamiento y lejanía de las	Fortalecimiento e	Mesa de prevención y
veredas Chuspas, Vanegas,	plazamientos for-	generalizada de derechos	entre Sabana de Torres y		veredas, mal estado de las	las	protección, Comité inte-
Palanquero, Conchal, Monte-	zados.	humanos, infracciones al De-	Lebríja.		vías, escasa presencia del	pesinos en materia de	rinstitucional de alertas
video, La Girona, Villa María,	Secuestros, hur-	recho Internacional Humani-	Paramilitares 'los Ras-		Estado (inspector de policía,	promoción y protección	tempranas, consejos de
cerro La Aurora, Centenario,	tos, ocupación	tario en el marco del conflicto	trojos' principalmente.		promotora de salud, puestos	de los derechos humanos	seguridad, Defensoría del
Corrales, Libano, Canoas,	ilegal y violenta	armado.			de salud, mal estado de las	y mecanismos de resolu-	Pueblo, Secretaría de
Cristales, La Estrella, Chiri-	de predios.				escuelas), violencia intrafa-	ción de conflictos.	Gobierno Municipal, Fis-
gua, Río Sucio Alto y Bajo,	Abandonados por				miliar, carencia de señal para	Fortalecimiento de las	calía seccional y Policía
Cútiga, San Silvestre, Sala-	la violencia.				comunicaciones, reducida	JAC de las veredas.	Nacional.
maga y Angosturas	Venta de alucinó-				cobertura de servicios so-	Fortalecer los mecanis-	
	genos.				ciales, pobreza y abandono	mos de comunicación de	
					de las comunidades campe-	las veredas, propiciar el	
					sinas, escasa presencia de	acceso a estos medios	
					la policía y del ejército en	por parte de la población.	
					algunas zonas, poca atención	Mejoramiento de infraes-	
					e intervención de la autoridad	tructura vial.	
					administrativa municipal en		
					las comunidades más ex-		
					puestas a riesgos.		

149- GOBERNACION DE SANTANDER. Libro PIU 2012. Mapa de Riesgos. p. 48, 49, 50, 51, 52, 53.

Lugar Municipio Corregimiento, Vereda, Barrio, Comuna	Situación Fáctica	Tipología: Conflicto armado, infracción al DIH, tensión o disturbio in- terno, violación generalizada de DH, circunstancias que alteren o puedan alterar el orden público	Actor Posiblemente Involucrado (GAOML, BACRIM, delincuencia co- mún)	Población Posiblemente Afectada (cantidad Aprox. Personas)	Factores de Vulnerabilidad	Tipo de Acción requerida	Comités y Autoridades que deben intervenir
PIEDECUUESTA SECTOR RURAL: Asentamientos humanos de Guatiquará, zona alta Pla- nadas, Sevilla, La Loma, La Mata, Granadillo y Faltrique- ra) SECTOR URBANO: Barrios Divino Niño, San Car- los, La Argentina, El Refugio, La Feria, Villanueva, Cabe- cera del Llano, Villas de San Juan, Granadillo, Brisas de Primavera y Portal del Valle)	Amenazas, inti- midación, homicidios selectivos, amenazas contra líderes de orga- nizaciones de población des- plazada.	Violación generalizada de derechos hu- manos	Bacrim, guerrillas.		Existencia de grandes redes para expendio de drogas, presencia de vigilantes in- formales, pobreza, falta de empleo, control por venta de estupefacientes	Intervención policial localizada junto con Fiscalía seccional. Fortalecimiento de programas locales de empleo. Programas recreativos hacia la juventud	Mesa de prevención y protección, Comité inte- rinstitucional de alertas tempranas, consejos de seguridad, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Go- bierno Municipal, Fiscalía seccional y Policía Nacio- nal.
RIONEGRO Corregimiento de San José de los Chorrros, corregimien- to de San Rafael de Lebrija, corregimiento de La Tigra, vereda Tambo Quemado.	Amenazas, des- plazamiento for- zado, extorsión.	Violación generalizada de dere- chos humanos	Los 'rastros'		Precariedad en medios de comunicación, malas ca- rreteras, zonas sin señal de teléfono, precariedad eco- nómica de los habitantes, violencia intrafamiliar.	Fortalecimiento de los medios de comunica- ción, mejoramiento de la red vial, fortale- cimiento de las orga- nizaciones sociales, formación en derechos humanos instituciones y comunidades.	Mesa de prevención y protección Comité inte- rinstitucional de alertas tempranas, consejos de seguridad, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Go- bierno Municipal, Fiscalía seccional y Policía Nacio- nal.

PROVINCIA DE MARES							
Lugar	Situación Fáctica	Tipología:	Actor Posiblemente Involucrado (GAOML, BACRIM, delincuencia común)	Población Posiblemente Afectada (cantidad Aprox. Personas)	Factores de Vulnerabilidad	Tipo de Acción requerida	Comités y Autoridades que deben intervenir
BARRANCABERMEJA Comunas 1,2,3,5,6 y 7	Homicidios Selectivos Amenazas desplazamiento forzado Reclutamiento forzado	Violación generalizada de derechos humanos.	'Rastrojos', los 'Urabeños'		.Necesidades básicas insatisfechas, falta de empleo, corrupción de funcionarios públicos.	Fortalecimiento de políticas de empleo, mejoramiento de los programas sociales, investigación y depuración de entidades públicas.	Mesa de prevención y protección Comité institucional de alertas tempranas, consejos de seguridad, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Gobierno municipal, Fiscalía seccional y Policía Nacional
PUERTO PARRA Corredor La India, Militosa, el Opón, Las Montoyas, Bocas del Carare.	Amenazas, Desplazamiento forzado, Reclutamiento forzado.	Violación generalizada de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario.	Farc, Eln, Bacrim		Poca presencia estatal alto índice de desempleo, no hay proyectos de desarrollo rural, precaria malla vial, falta de capacitación en derechos humanos.	Mejoramiento de programas de desarrollo rural y de la malla vial. Fortalecimiento de las organizaciones sociales, capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario.	Mesa de prevención y protección, Comité institucional de alertas tempranas, consejos de seguridad, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Gobierno municipal, Fiscalía seccional y Policía Nacional
PUERTO WILCHES Casco urbano, barrio Bellavista, Puerto Cayumba, Soga-moso, vereda La Línea.	Amenazas, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado.	Violación sistemática de derechos humanos.	Bacrim, 'Urabeños'		Falta de presencia de fuerza pública en la zona rural, desempleo, violencia intrafamiliar	Mejorar la presencia de la fuerza pública en las zonas rurales, programas de prevención del reclutamiento, fortalecimiento de los programas sociales	Mesa de prevención y protección, Comité institucional de alertas tempranas, consejos de seguridad, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Gobierno municipal, Fiscalía seccional y Policía Nacional.

PROVINCIA VELEZ							
Lugar	Situación Fáctica	Tipología	Actor Posiblemente Involucrado (GAOML, BACRIM, delincuencia común)	Población Posiblemente Afectada (cantidad Aprox. Personas)	Factores de Vulnerabilidad	Tipo de Acción requerida	Comités y autoridades que deben intervenir
CIMITARRA Casco urbano, Puerto Olaya, corregimiento San Fernando.	Homicidios, amenazas, reclutamiento forzado, intimidación electoral.	Violación sistemática de derechos humanos.	Bacrim		Falta de credibilidad en las denuncias, desempleo.	Mejoramiento de programas sociales, fortalecimiento de organizaciones sociales.	Mesa de prevención y protección, Comité interinstitucional de alertas tempranas, consejos de seguridad, Delegación del Pueblo, Secretaría de Gobierno municipal, Fiscalía seccional y Policía Nacional
GARCIA ROVIRA							
Málaga, Pantano Grande, salida a Concepción, Alto Málaga	Amenazas, desplazamiento forzado.	Violación sistemática de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario	Guerrillas		Falta de solidaridad de la comunidad hacia la PSD. Desempleo, jóvenes sin apoyo, pobreza y vulnerabilidad débil atención de necesidades básicas.	Mejoramiento de los programas sociales. Campañas por los derechos de la población desplazada. Capacitación en derechos humanos	Mesa de prevención y protección, Comité interinstitucional de alertas tempranas, consejos de seguridad, Delegación del Pueblo, Secretaría de Gobierno municipal, Fiscalía seccional y Policía Nacional
SAN ANDRES: Vereda carbali, sector Alto de James, Pire, Tuno, Antala en límites con el municipio de Cepita y Guaca, por la parte alta veredas Cairasco, Anca, Queragadas sector Playitas y Listara en límites con Cerrito, Concepción y Guaca. Vereda Mogotocoro y Santodomingo en límites con Guaca, veredas de Pangote el Palmar, Pangua, el Volcán, Tanqueva, Cupaga, Hato de las Caballero, vereda Santacruz, Ramada, Laguna de las Orices en límites con los municipios de Molegavita y Málaga.	Reclutamiento forzado, extorsiones, amenazas, homicidios, Desplazamiento forzado	Infracciones al derecho internacional humanitario.	Eln, Frente Pabón, Comisión Mario Ramírez Ortiz		Aislamiento de muchas veredas localizadas en las zonas altas de páramo y retiradas de la cabecera municipal. Dificultad de las comunidades residentes en la zona alta de páramo para comunicarse vía telefónica dada la ausencia de antenas receptoras de los operadores de telefonía celular. Pésimo estado de las vías de comunicación terrestre interveredas.	Mejoramiento de las comunicaciones de la comunidad y de la malla vial del territorio. Fortalecimiento de las redes sociales, capacitación en derecho internacional humanitario.	Mesa de prevención y protección, Comité interinstitucional de alertas tempranas, consejos de seguridad, Delegación del Pueblo, Secretaría de Gobierno municipal, Fiscalía seccional y Policía Nacional

Conflicto armado y desarme, desmovilización y reintegración –DDR– de grupos armados ilegales en Santander

SEGUNDA PARTE

INTRODUCCIÓN

La segunda parte del Hilo del Laberinto está dedicado a presentar los hallazgos de caracterización socioeconómica de la población en proceso de reintegración en el departamento de Santander, además del análisis de resultados e impactos de los programas y proyectos ejecutados por la Agencia Colombiana para la Reintegración para atender a esta población, identificando en ambos casos factores de éxito y de dificultad, en una perspectiva de mayor eficacia y mejor calidad de los procesos de reintegración económica, social y comunitaria; al final se formulan recomendaciones al respecto de acuerdo a las competencias, dificultades y posibilidades identificadas en el marco del trabajo investigativo y de interlocución política.

Esta investigación hace parte de los productos acordados entre la Gobernación de Santander, bajo la dirección del doctor Horacio Serpa Uribe en su mandato como gobernador durante el período 2008 – 2011 , en el marco del contrato titulado “Apoyo a la promoción de alianzas y acuerdos institucionales que fortalezcan a procesos de paz y reintegración en el departamento de Santander”, iniciativa aprobada dentro de las metas de la Secretaría del Interior, en su componente de apoyo a la reintegración socioeconómica de población reinsertada y desmovilizada en el departamento de Santander.

Su principal propósito está orientado por el espíritu de fortalecer la política pública de paz y derechos humanos y como tal es un trabajo que tiene implicaciones territoriales a futuro, el cual sin duda, debe comprometer la voluntad institucional a nivel departamental. De esta manera la Gobernación de Santander quiere contribuir con este trabajo en el proceso de reintegración en el Departamento, que dirige la Presidencia de la República a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración, en coordinación con las entidades competentes.

Como se pudo analizar en la primera parte del texto, el conflicto armado ha sido un obstáculo para el desarrollo humano del país, de nuestro departamento de Santander y de la región Nororiental. Pese a los esfuerzos realizados por construir procesos de paz con diferentes actores armados ilegales el conflicto interno persiste. Luego de casi medio siglo de conflicto armado en Colombia es evidente un proceso de reconocimiento de la profunda crisis de sociedad y la búsqueda de salidas humanitarias y democráticas de paz a esta tragedia violenta, haciéndose notoria la estrategia del DDR como una política pública que debe fortalecerse para avanzar en un proceso de reencuentro y reconciliación entre los colombianos.

Ya se ha dicho hasta el cansancio que el conflicto armado interno lejos de solucionar problemas estructurales de desigualdad e injusticia social se ha convertido en otro factor de profundización de la problemática social y la pobreza; con dolor, la ruptura del orden de convivencia pacífica muestra un alto registro de violaciones generalizadas a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Hoy la sociedad colombiana, incluidos sectores y miembros de los grupos armados ilegales, expresan su cansancio por esta situación de conflicto armado y violencias, y deciden muchos de ellos desmovilizarse individualmente, mientras otros plantean propuestas de diálogos hacia soluciones negociadas colectivas.

La región ha sido testigo de múltiples expresiones y distintos momentos de movilización social por la paz, pero que por ausencia de políticas adecuadas y mayores esfuerzos y voluntades hacia la reconciliación y la reintegración con el paso del tiempo han perdido la oportunidad transformadora y la credibilidad, generando frustraciones ante la incapacidad de lograr el consenso regional y nacional.

Uno de esos hechos lo constituyó la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, a partir del año 2003. El Desarme, la Desmovilización y la Reintegración de los excombatientes paramilitares sembraron alguna esperanza, especialmente en las víctimas, de lograr la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y entre la sociedad colombiana de poder avanzar ciertamente en la construcción de la paz y la reconciliación nacional.

La creación de una nueva institucionalidad en el marco de la Ley 975, llamada Ley de Justicia y Paz, también abrió caminos para transitar hacia ese propósito de la mayoría de la sociedad colombiana: la paz y la convivencia pacífica. La normatividad aprobada en este marco a la vez obliga a las administraciones municipales y departamentales a implementar acciones y destinar recursos propios para contribuir a consolidar los procesos, especialmente de paz, reintegración y reconciliación, lo cual finalmente es responsabilidad de toda la institucionalidad estatal competente y por corresponsabilidad también de la sociedad en general.

Desde esta perspectiva, y en la idea de generar una acción que aporte a la comprensión y consolidación de los actuales y futuros procesos de DDR en Santander, la Corporación para el Desarrollo del Oriente COMPRPOMISO ha desarrollado este trabajo, en dos propósitos definidos así:

- Por una parte, una acción investigativa que ofrezca información actualizada y confiable sobre la población en proceso de reintegración, sus familias y su

proyección; que dé cuenta de resultados e impactos de los programas y proyectos ejecutados en Santander para atender a esta población; que identifique factores de éxito y de dificultad, y además, que formule recomendaciones pertinentes a las instituciones de acuerdo con sus competencias en el territorio de Santander.

- El segundo propósito, es llamar la atención de diferentes actores y sectores acerca de la importancia y necesidad de promover la creación de alianzas institucionales, identificar potencialidades en las articulaciones con la participación activa de dependencias estatales con mandato y competencia en políticas de DDR, paz, convivencia y reconciliación.

Ubicación geográfica de la investigación

El proyecto de investigación se ejecutó en el departamento de Santander, específicamente en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, Lebrija, Barrancabermeja, Cimitarra, Sabana de Torres, San Vicente de Chucuri, El Carmen de Chucurí y Rionegro

Objetivo general

Caracterizar la política departamental de apoyo a población desmovilizada dando cuenta de sus impactos, resultados y aportes al logro de la paz y la reconciliación mediante la promoción de alianzas institucionales que den sostenibilidad a estos procesos.

Objetivos específicos

- Producir información y análisis acerca de los resultados logrados por programas institucionales que apoyan procesos de reintegración en el Departamento de Santander.
- Caracterizar las actuales condiciones socio económicas de la población reinsertada en nueve (9) municipios del departamento de Santander.
- Presentar recomendaciones para la implementación de políticas de desarme, desmovilización y reintegración en el departamento de Santander.

Metodología: Investigación participativa con personas desmovilizadas participantes en programa de reintegración; funcionarios reintegradores y líderes de Centros de Servicio de la ACR; funcionarios públicos, gremios económicos, actores sociales.

Técnicas: i). Talleres de grupo focal con participantes; ii). Grupos de discusión con funcionarias(os) reintegratoras(es) de la ACR; iii). Entrevistas a líderes de Centros de Servicios de la ACR; iv). Entrevistas a gremios económicos, funcionarios públicos, iglesias, ONG; v). Encuesta de caracterización socioeconómica.

Tiempo de ejecución: Siete meses – diciembre 2011 – julio 2012

Actividades realizadas

- Grupos focales.
- Entrevistas estructuradas.
- Interlocución con instituciones, funcionarios públicos, administraciones municipales y actores del orden nacional.
- Encuentros con expertos en DDR.

- Elaboración, socialización, validación y publicación de documentos sobre análisis y caracterización de programas y población participantes de los procesos de DDR en Santander, mapa de grupos armados ilegales (vigentes), recomendaciones.
- Encuentros de validación y foros de socialización de hallazgos con diversos actores y responsables del tema.
- Blog, boletín virtual e impreso sobre DDR en Santander.

Resultados y productos de la investigación

- Publicación sobre DDR en Santander.
- Video documental sobre DDR en Santander “Salir del Laberinto, de la desmovilización a la reconciliación.”

Ficha técnica de la encuesta de caracterización socioeconómica

Universo de población	1.449 participantes del programa de reintegración
Muestra de la encuesta	178 personas
Nivel de confianza	95%
Margen de error	Error estadístico
Técnica aplicación	Entrevista directa a la persona
Fecha aplicación	5 de Marzo a abril 20 de 2012
Características población:	De 178 personas entrevistadas, 42 eran mujeres (23,6%), y 136 hombres (76,4%). De 178 personas, 44 residen en áreas rurales (24,7%) y 134 residen en las cabeceras municipales (75,6%).

Consideraciones iniciales sobre los resultados de la investigación

Este trabajo pudo abordar la complejidad de las relaciones institucionales departamentales y municipales e indagar acerca de la apropiación y sus vínculos con la política de DDR, los cuales son esenciales para la prospectiva de una política de alianzas en un asunto tan estratégico como la construcción de la paz desde el territorio.

Por estas razones, es necesario adelantar una lectura juiciosa sobre el estado actual de los procesos y programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración DDR en Santander, especialmente el desarrollado a partir de la Ley 975 de 2005 con grupos paramilitares, proceso que inauguró la incorporación de nuevos enfoques de justicia transicional y principios de derechos para las víctimas en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La Agencia Colombiana para la Reintegración, adelanta el acompañamiento en Santander a 1448¹⁵⁰ personas desmovilizadas, vinculadas a procesos de reintegración, es decir, este mismo número de familias viven una situación especial con múltiples retos a superar al albergar entre sus miembros a un excombatiente, ya sea del paramilitarismo o de la guerrilla. También se conoce que un alto número de estas personas que abandonaron las armas pasan por situaciones de rechazo, con impactos psicosociales de aislamiento social y económico, que no encuentran lazos de confianza ni canales de integración y reconciliación con las comunidades receptoras. Se presentan casos graves de riesgos por situaciones de inseguridad.

Es de una alta responsabilidad institucional procurar procesos de reintegración exitosos y avanzar en experiencias de reconciliación, son acciones fundamentales en el marco de la construcción de paz y convivencia.

Por tal razón se consideró importante profundizar los análisis de estos procesos en los contextos locales con nuevos elementos de conocimiento, que contribuyan a una mejor comprensión y respuesta en las trayectorias del proceso con la población desmovilizada. Muchas conjeturas se hacían del DDR pero solo hasta ahora con este trabajo se cuenta con una información documentada con el debido nivel de rigurosidad que permite valorar con precisión y fundamentación el tema y avanzar en recomendaciones para lograr mejores políticas de reintegración hacia la reconciliación en el departamento de Santander.

En tal sentido este trabajo podrá contribuir a gestar nuevos y mejores procesos de reintegración, reconciliación, desarme y desmovilización en el corto y mediano plazo; superar el riesgo de la repetición de errores en decisiones y enfoques políticos que, por no haber sido valorados ni analizados, corren el riesgo de su implementación con resultados precarios y lejanos a los propósitos en materia de contenidos y alcances de la paz.

También puede considerarse un logro de este trabajo, el acercamiento entre instituciones públicas, la Agencia Colombiana para la Reintegración, el sector privado empresarial y los desmovilizados en un diálogo inicial que requiere continuidad y escenarios de concertación para la paz y la reconciliación en las localidades, municipios y Departamento, teniendo claro que el Estado requiere la complementariedad del sector privado y empresarial, quienes deben ser corresponsables en la construcción de la paz creando condiciones de empleo, capacitación y orientación a los desmovilizados para facilitar su reintegración a la sociedad.

Otra es la situación de las comunidades receptoras, las cuales deben recibir un fuerte apoyo social estatal en la medida que asumen un papel muy importante en la acogida de los excombatientes, apoyo que genere las condiciones de apertura necesarias y garantías en el cumplimiento de acuerdos; hoy existen problemas de desconfianza, estigmatización y rechazo, en medio de condiciones de violencia compleja.

150- Cifra a enero de 2012.

Es evidente que el regreso de los excombatientes a sus familias y su reintegro a la sociedad, es algo que lleva un buen periodo de tiempo y que requiere el apoyo de las autoridades competentes y la asignación de los recursos necesarios para que la transición se dé con los mejores resultados. De la misma manera hay que diseñar planes y programas para crear condiciones favorables a la reintegración en las comunidades receptoras.

El estudio realizado advierte sobre lo conveniente de conocer de otras experiencias nacionales e internacionales que pueden ayudar a cualificar las políticas y programas de reintegración. De acuerdo con analistas internacionales, el DDR constituye uno de los pasos más importantes en todo proceso de paz. El Banco Mundial ha definido un programa exitoso de DDR como “el factor clave en una transición efectiva de la guerra a la paz”. Un proceso de DDR que no alcance niveles satisfactorios de éxito, pone en riesgo todo el proceso hacia una paz sostenible en el largo plazo.

Promoción de alianzas institucionales para la reintegración en Santander

La estrategia de investigación participativa y las visitas a las instituciones fueron el medio principal para lograr acercamientos entre instituciones e iniciar intercambios sobre la importancia de fortalecer el DDR en Santander. Estos vínculos facilitaron la recolección de información cualitativa actualizada y directa con fuentes primarias, con las personas desmovilizadas, con funcionarios públicos y con otros actores de la sociedad civil.

Para lograr el contacto directo y las condiciones de participación de los desmovilizados y otra información pertinente se contó con el apoyo, la cooperación y la participación de instituciones como los Centros de Servicios de la ACR de Bucaramanga y Barrancabermeja, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, MAPP – OEA, la Secretaría del Interior de la Gobernación de Santander, las alcaldías de Bucaramanga y Barrancabermeja, la Policía Nacional y otras entidades.

Es de destacar la amplia participación de población desmovilizada de los diferentes municipios visitados, su disposición libre a brindar sus opiniones y percepciones y la asistencia altamente representativa a foros, eventos, talleres, encuestas y entrevistas.

Igualmente es de resaltar la conformación de la Mesa de apoyo a la reintegración en Barrancabermeja, integrada en el mes de mayo de este año en el marco de la formulación del Plan de Desarrollo municipal de Barrancabermeja, con vivo interés de concertación de una alianza institucional local entre la Oficina de Paz y Convivencia de la Alcaldía de Barrancabermeja, la MAPP–OEA, el Centro de Servicios de la ACR para el Magdalena Medio y la población desmovilizada. Este espacio ha determinado concertar una agenda con temas y reuniones periódicas a favor de la política de DDR.

Fue sobresaliente la convocatoria y realización de los Foros regionales realizados en Barrancabermeja y Bucaramanga como primeros espacios de diálogo territorial e interlocución, en un escenario de deliberación pública para la promoción de acuerdos y alianzas institucionales y creación de mesas permanentes con la población desmovilizada, con relacionamiento amplio que incluya además del Estado a instituciones privadas, empresariales y comunitarias.

Sin embargo, la promoción de alianzas institucionales para la reintegración a nivel departamental es un proceso que aún no da muestras de articulaciones sostenidas que avancen en concertaciones permanentes entre los entes territoriales y la ACR, pero ha quedado un primer momento de encuentro con recomendaciones de continuidad y cooperación.

Al examinar las conclusiones y recomendaciones, estos espacios sugeridos y creados inicialmente podrán ser un punto de encuentro en el que se privilegie el diálogo como herramienta para la construcción de acuerdos y confianzas entre los diferentes actores: Estado, comunidades receptoras, sociedad civil, desmovilizados, quienes en su conjunto entienden su nivel de corresponsabilidad en el proceso. Se pueden identificar nuevas actitudes y disposición a construir confianzas y voluntad política en algunos actores gubernamentales, empresariales, sociales y políticos en la propuesta de Construcción de Alianzas Institucionales, teniendo en cuenta que dicha construcción se fundamenta en un elemento de participación activa con sostenibilidad y garantías para cimentar desde lo local una nueva cultura de paz y la convivencia pacífica.

La responsabilidad de las agencias del Estado, de las administraciones territoriales y la corresponsabilidad del sector privado y la sociedad civil son fundamentales para el proceso. Se ha recomendado concertar una agenda departamental y establecer reglas del juego, responsabilidades, asumir compromisos y rendir cuentas de ello públicamente. De la misma manera debe haber una institución responsable de coordinar y hacer seguimiento a los acuerdos interinstitucionales para asegurar el cumplimiento de los mismos.

La sociedad santandereana está a la expectativa de que el nuevo escenario de posibilidades de construcción social de paz se consolide. Por esta razón, la institucionalidad debe fortalecer su capacidad de respuesta y de propuestas en este ámbito particular, logrando de forma progresiva ir aumentando el impacto de las políticas y la eficacia de los recursos invertidos en el apoyo a las políticas de DDR y paz.

Finalmente, el estudio posibilitó recoger una serie de recomendaciones y conclusiones dentro de una mirada analítica y propositiva que buscó interesar al conjunto de actores regionales de la sociedad, especialmente a las instituciones públicas locales como principales gestores de la construcción de un proceso integrador de alianzas institucionales a favor de la paz, la convivencia y la plena reintegración.

CAPITULO V

CARACTERIZACION SOCIO ECONOMICA DE LA POBLACION EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

1. Generalidades

1.1 Presentación

Asumiendo la complejidad de los procesos de DDR en el país, el abordaje técnico y ético del tema, con estricto respeto a la fidelidad de la información y de sus fuentes, especialmente las apreciaciones y valoraciones de las personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales participantes en la presente investigación y el apoyo de fuentes institucionales, se logra contar con el estudio “Caracterización socioeconómica de la población en proceso de reintegración en el departamento de Santander”.

Esta caracterización ofrece un análisis crítico, comprensivo y con rigor metodológico, de las actuales condiciones socioeconómicas de la población desmovilizada de grupos armados ilegales, que actualmente viven en el departamento de Santander; abordando avances y dificultades en el proceso de reintegración, siempre con la mirada puesta en identificar factores que inciden en la generación de propuestas y recomendaciones a la política de DDR en el Departamento.

El desarrollo de la investigación establece un análisis de los derechos a la vida, educación, salud, vivienda, protección y seguridad de los jóvenes y adultos desmovilizados, atendidos en los programas de la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR. Para tal efecto se partió del análisis de factores socioeconómicos personales y familiares y de la dinámica del conflicto, concluyendo con la identificación de factores que inciden o afectan los procesos de reintegración social y económica dentro del modelo de atención de la ACR.

1.2 Diseño metodológico de la caracterización

La Caracterización es el resultado de una investigación cuantitativa de corte descriptivo, transversal, que permite reseñar rasgos, condiciones, características socioeconómicas de la población desmovilizada en la última década (2002-2012), que actualmente viven en el departamento de Santander. Logra profundizar el análisis en nueve variables que generan información en aspectos sociodemográficos como edad, sexo, estado civil, además de información sobre estructura familiar, lugares de residencia, vinculación, permanencia y razones de vinculación y desvinculación del grupo armado ilegal a los cuales pertenecieron.

El presente documento ofrece el panorama situacional de la población desmovilizada en cuanto a actividad económica, educación, salud, vivienda; las características de atención recibidas, la participación de beneficios en el marco de los programas de la ACR; y establece las razones, percepciones, valoración de la seguridad personal en perspectiva de su nueva condición de ciudadanos y su proyecto de vida productivo y comunitario.

La investigación participativa se desarrolló en el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2011 y el 26 de junio de 2012, en once (11) municipios del departamento de Santander: Bucaramanga, Girón, Floridablanca, Piedecuesta, Lebrija, Rionegro, Barrancabermeja, Cimitarra, San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí y Sabana de Torres. Tomó para su estudio una muestra de 178 personas, de un universo poblacional de 1449 personas desmovilizadas vinculadas a la ACR en el departamento de Santander, participantes de diferentes procesos de desarme, desmovilización y reintegración, tanto individuales como colectivos, ex miembros de grupos paramilitares y grupos guerrilleros¹⁵¹.

La muestra se estableció con base en un diseño probabilístico para población finita, quedando definida en 178 elementos a estudiar de todo el universo. Para su estudio se diseñó y aplicó como instrumento de investigación una encuesta dirigida.

La aplicación de la encuesta se realizó previa socialización del Proyecto a grupos de personas en proceso de reintegración en cada uno de los municipios objeto de la investigación y con las personas que voluntariamente quisieron responder el cuestionario.

Para la ubicación y contacto con la población se contó con el apoyo de los Centros de Servicio de Bucaramanga y Barrancabermeja de la Agencia Colombiana para la Reintegración, y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP-OEA.

1.3 Marco legal de la Reintegración

Los procesos de desarme, desmovilización y reintegración entendidos como DDR, tienen tres objetivos fundamentales: participación política de miembros de los grupos desmovilizados; de seguridad ciudadana y convivencia; y el retorno a la vida productiva de los desmovilizados y excombatientes.

151- Según cifras entregadas por la Agencia Colombiana para la Reintegración en Bucaramanga en enero de 2012..

El marco normativo en Colombia ha evolucionado y tiene antecedentes desde 1990, cuando se crean los mecanismos para permitir a los GAI la dejación de las armas y hacer tránsito a la vida civil generando condiciones sociales, económicas y de seguridad. De igual manera se define el esquema institucional de atención. Hoy en día la normatividad relacionada con la desmovilización individual y colectiva se resume en la Ley 418 de 1997.

“Esta norma le dio facultades especiales al Gobierno nacional para realizar negociaciones de paz con los GAI y para otorgar beneficios jurídicos por hechos constitutivos de delitos políticos a miembros de estas organizaciones, que individual o colectivamente, demostraran su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Esta ley fue prorrogada sucesivamente por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006”¹⁵².

Adicionalmente con los Decretos 128 de 2003, 3043 de 2006 y 395 de 2007 se reglamenta la oferta de servicios del Estado, se crea la Alta Consejería para la Reintegración-ACR- hoy Agencia Colombiana para la Reintegración; se ordena crear las estrategias de reintegración, se extiende la fecha límite para el logro de la reintegración de las personas desmovilizadas y se expide el Documento Conpes 3554 en 2008, el cual traza las políticas, competencias y directrices institucionales para atender los procesos de reintegración en Colombia.

1.4 Población desmovilizada en el departamento de Santander

Según datos suministrados por la ACR, entre el año 2003 y el 31 de enero de 2012 se han desmovilizado de los grupos armados y organizaciones al margen de la ley 54.409 personas; de las cuales se encuentran activas en el programa de reintegración el 59,88% correspondiente a 32.581 personas¹⁵³.

Del total nacional, 1.449 corresponden a participantes activos del departamento de Santander, de éstos 248 son mujeres y 1.201 son hombres, quienes residen en municipios como Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Carmen de Chucurí, Rionegro, San Vicente, Lebrija, Sabana de Torres y en menor porcentaje en municipios como Barbosa, San Gil, Málaga.

152- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Consejo Nacional de la política económica y social, República de Colombia, Documento Conpes 3554- 2008.

153- Sistema de Información para la Reintegración SIR. Corte a enero 31 de 2012.

Tabla 1. Participantes activos en proceso de reintegración en el departamento de Santander por municipio de residencia

Municipio Residencia	N° de personas	Porcentaje de la población
Barrancabermeja	388	26,78%
Bucaramanga	304	20,98%
Floridablanca	127	8,76%
Girón	107	7,38%
Piedecuesta	88	6,07%
El Carmen de Chucurí	78	5,38%
Rionegro	73	5,04%
Otros	284	19,60%
Total general	1.449	100,00%

Fuente: SIR - Corte
Enero 31 de 2012.

En la Tabla 1. Participantes activos en procesos de reintegración por municipio de residencia, se evidencia la tendencia mayoritaria de la población desmovilizada de ubicarse en ciudades capitales o municipios económicamente productivos, las razones al decir de la población están fundamentadas en las mayores oportunidades para estudiar, trabajar y vivir con su familia de manera más segura y tranquila.

Se destaca de igual manera la residencia en municipios pequeños, de origen rural, justificable por cuanto es allí donde tienen sus familias y vínculos afectivos, a pesar de que ponen en consideración las limitaciones para laborar y estudiar y los posibles riesgos en su seguridad frente a la persistencia y presencia de grupos armados ilegales.

El proceso investigativo logró establecer la distribución de la población según lugar de residencia, al respecto se determina que el 24,7% de la población reside en zona rural y el 75,5% en el casco urbano de los municipios.

La Tabla 2. Distribución de la población en proceso de reintegración en Santander, establece a los municipios El Carmen de Chucurí, Barrancabermeja, Rionegro y Cimitarra como aquellos donde se concentra el 77,35% de la población desmovilizada que reside en zona rural en el departamento de Santander, el restante 22,67% viven en municipios como Girón, Piedecuesta, San Vicente, Lebrija.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

2.1 Aspectos Socio demográficos

2.1.1 Edad

La población adulta desmovilizada en el departamento de Santander se encuentra en un rango de edad entre 18 y 70 años, con una mayoría, 92,76%, concentrada en

Tabla 2. Distribución de la población en proceso de reintegración en Santander

Municipio	Rural		Urbano		Total	
	F	Porcentaje %	F	Porcentaje %	F	Porcentaje %
Barrancabermeja	8	4,5%	42	23,6%	50	28,1%
Bucaramanga	1	0,6%	39	21,9%	40	22,5%
Floridablanca	0	0,0%	17	9,6%	17	9,6%
El Carmen	12	6,7%	3	1,7%	15	8,4%
Girón	4	2,2%	10	5,6%	14	7,9%
Rionegro	8	4,5%	3	1,7%	11	6,2%
Piedecuesta	3	1,7%	7	3,9%	10	5,6%
Cimitarra	6	3,4%	2	1,1%	8	4,5%
San Vicente	1	0,6%	5	2,8%	6	3,4%
Lebrija	1	0,6%	3	1,7%	4	2,2%
Sabana de torres	0	0,0%	3	1,7%	3	1,7%
Total	44	24,7%	134	75,3%	178	100,0%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de la población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012.

rangos de edad entre los 18 y 46 años, considerada en Colombia como de población económicamente activa.

Las cifras evidencian la necesidad de esfuerzos y presupuestos adicionales del Estado que permitan procesos de corto, mediano y largo plazo orientados a reintegrar social y económicamente a este grupo población, que dada su edad y proyección exige mayor atención en su desarrollo.

El restante 6.21% corresponde a población entre los 47 y 60 años y 1,03% población adulta mayor y sin identificar el rango.

Llama la atención el marcado porcentaje de población desmovilizada joven, entre 18 y 32 años, 724 personas, equivalentes al 50%. Teniendo en cuenta lo anterior, sumado al número de años que estuvieron vinculados al grupo armado y el tiempo en proceso de reintegración, es posible afirmar que la mayoría de esas personas fueron vinculadas al grupo armado siendo menores de edad. Estas cifras concuerdan con los datos obtenidos en el estudio realizado por Natalia Springer¹⁵⁴ sobre el uso de niños, niñas y adolescentes para los propósitos del conflicto armado en Colombia, en el cual señala entre otros aspectos que, el 65,67% de menores desvinculados del conflicto armado ingresó a los grupos entre los 6 y los 14 años, y que la edad promedio de vinculación es a los 12,9 años.

De lo anterior se desprende la importancia y la necesidad de realizar campañas en los establecimientos educativos encaminadas a prevenir la vinculación y el uso de niños, niñas y adolescentes con propósito de conflicto armado.

154- SPRINGER, Natalia. "Prisioneros combatientes". Informe sobre el uso de niños, niñas y adolescentes para propósitos del conflicto armado en Colombia. Bogotá. Abril de 2012.

Tabla 3. Rango de edad de la población en proceso de reintegración en Santander

Rango	Participantes	Porcentaje	%Acumulado
18-25	205	14,15%	14,15%
26-32	519	35,82%	49,97%
33-39	443	30,57%	80,54%
40-46	177	12,22%	92,76%
47-53	63	4,35%	97,11%
54-60	27	1,86%	98,97%
Mayor a 60	8	0,55%	99,52%
Sin información	7	0,48%	100,00%
Total	1449	100%	

Fuente: SIR - Corte Enero 31 de 2012.

2.1.2 Sexo

De acuerdo a las cifras de la ACR la mayoría de la población de adultos que se encuentran en proceso de reintegración son hombres 82,88%, el restante 17,12% son mujeres. Al respecto las cifras registran coincidencia con los resultados del trabajo de campo realizado en los once municipios y donde se evidencia un predominio del sexo masculino.

Tabla 4. Población en proceso de DDR en Santander clasificada por sexo

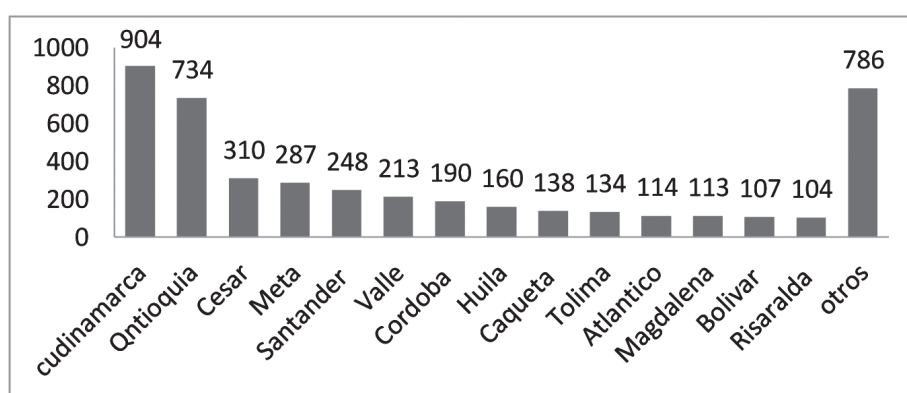
Municipio	Femenino		Masculino		Total	
	F	Porcentaje %	F	Porcentaje %	F	Porcentaje %
Barrancabermeja	13	7,3%	37	20,8%	50	28,1%
Bucaramanga	5	2,8%	35	19,7%	40	22,5%
Floridablanca	8	4,5%	9	5,1%	17	9,6%
El Carmen	2	1,1%	13	7,3%	15	8,4%
Girón	4	2,2%	10	5,6%	14	7,9%
Rionegro	2	1,1%	9	5,1%	11	6,2%
Piedecuesta	2	1,1%	8	4,5%	10	5,6%
Cimitarra	1	0,6%	7	3,9%	8	4,5%
San Vicente	2	1,1%	4	2,2%	6	3,4%
Lebrija	0	0,0%	4	2,2%	4	2,2%
Sabana de torres	3	1,7%	0	0,0%	3	1,7%
Total	42	23,6%	136	76,4%	178	100,0%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

La presencia de mujeres desmovilizadas en el departamento de Santander presenta la misma tendencia nacional, de 54.409 desmovilizados, 6.244 son mujeres y representan el 11,47% del total de desmovilizaciones, de éstas existen 4.542 mujeres que se encuentran en proceso de reintegración en veintinueve departamentos del país. En Santander reside el 5.5% de ellas¹⁵⁵.

155- UNIVERSIDAD NACIONAL. Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. Desmovilización, desvinculación y reintegración de mujeres en Colombia. 2002 – 2011

Gráfica 1. Mujeres atendidas por la ACR. 2006 – 2010



Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración, 2010. Recomposición de datos por el ODDR.

La presencia de las mujeres en los procesos de reintegración conlleva retos como transversalizar la perspectiva de género y establecer acciones diferenciales en la intervención que permitan disminuir las brechas existentes entre hombres y mujeres en la vida diaria y por ende los procesos de reintegración.

2.1.3 Documentación

La Tabla 5. Estado de documentación de la población DDR en Santander. Establece que el 99% de la población posee cédula de ciudadanía y un 79% posee libreta militar.

El 1% que no posee cédula corresponde a personas que no han realizado el trámite, existen dificultades por falta de documentos como registro civil o doble cédulación. El 21% de los hombres que no poseen libreta militar establece como razones: No han realizado el trámite ante las entidades correspondientes 45%; se les perdió o se les dañó 24%; en trámite o están a la espera de la llegada del documento 21%; el restante 10% presenta dificultades en el proceso especialmente por falta de documentos.

Tabla 5. Documentación de la Población en proceso de DDR en Santander

Documento	Si posee		No posee		Total	
	F	Porcentaje %	F	Porcentaje %	F	Porcentaje %
Cédula de ciudadanía	176	99%	2	1%	178	100%
Libreta militar	107	79%	29	21%	136	100%

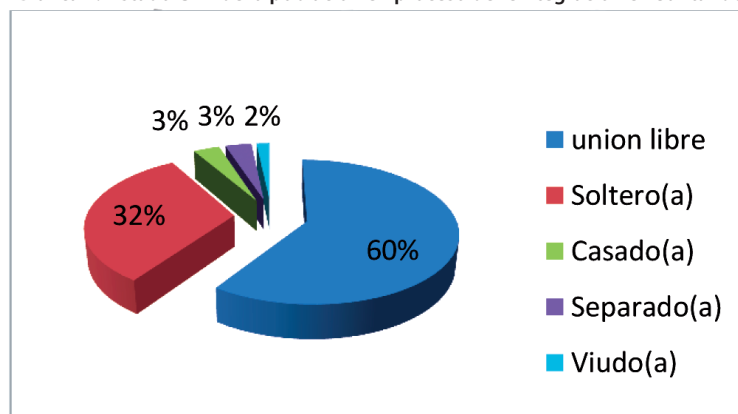
Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012.

2.1.4 Estado civil

La investigación realizada en la población desmovilizada en once municipios del departamento de Santander encontró que un 63% cuentan con pareja permanente actual, en unión libre principalmente, o casados; un 32% están solteros o viven solos; y el restante 5% se encuentran separados o viudos.

Es muy importante una política de reintegración que recupere el enfoque familiar y los factores que permitan una adecuada atención social de estos núcleos a nivel de ingresos, educación de los hijos, salud y vivienda, más allá de la reintegración individual.

Gráfica 2. Estado Civil de la población en proceso de reintegración en Santander



Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012.

2.1.5 Estructura Familiar

Al indagar por la conformación de la familia se logró establecer que el 63% de las personas en proceso de reintegración cuenta con una familia constituida por su conyugue, los hijos e hijas y en algunos casos la madre o hermanos. En promedio se estableció cuatro miembros por hogar, entre ellos dos hijos(as) por familia.

Existe un 17% de la población desmovilizada que está soltera y vive con su familia, conformada por la madre, en algunos hogares el padre, hermanos o hermanas y abuelas, con predominio de hogares con madre como cabeza de hogar. Existen en el 10% de los hogares presencia de un miembro adicional, relacionados como amigos, sobrinos, primos y allegados.

El 20% de la población viven solos, explican que sus familias están lejos, que no existen condiciones para estar con ellos, en algunos casos prefieren que estén lejos hasta que se defina su situación, especialmente la jurídica.

Tabla 6. Conformación familiar de la población en proceso de DDR en Santander

Familia con la que vive actualmente	F	porcentaje %	Actividad						Total
			Trabaja	porcentaje %	Estudia	Porcentaje %	Hogar	Porcentaje %	
Padre	10	2,27%	8	1,79%	0	0,00%	2	0,45%	10
Madre	28	6,35%	9	2,01%	1	0,22%	18	4,03%	28
Hermanos	17	3,85%	15	3,36%	10	2,24%	-	0,00%	25
Hermanas	11	2,49%	9	2,01%	1	0,22%	1	0,22%	11

Conyugue	111	25,17%	62	13,87%	14	3,13%	35	7,83%	111
Hijos	115	26,08%	5	1,12%	77	17,23%	33	7,38%	115
Hijas	131	29,71%	1	0,22%	75	16,78%	55	12,30%	131
Abuelo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-	0,00%	-
Abuela	1	0,23%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,22%	1
Otros	17	3,85%	8	1,79%	7	1,57%	2	0,45%	17
Total	441	100%	117	26,17%	185	41,39%	145	32,89%	447

En cuanto a la dependencia económica del grupo familiar de la persona en proceso de reintegración, la Tabla 6. Conformación familiar de la población en procesos DDR en Santander, permite apreciar que el 74% de los miembros del hogar dependen en su totalidad de su ingreso y solo el 26% aportan económicamente pues se encuentran laborando. El porcentaje de dependencia es alto en la medida en que el 55% de los miembros del grupo familiar lo representan los hijos e hijas y de éstos el 37% son menores de seis años, el 36% se encuentra en edades entre los 7 y 12 años, el 22% entre 13 y 17 años y tan solo un 5% son mayores de edad. Sumado a los hijos está el 44% de los conyugues, especialmente mujeres que no laboran pues están al cuidado de niños pequeños y de los quehaceres del hogar.

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

En cuanto a la actividad escolar de los miembros de la familia, es importante manifestar que el 42% del total de miembros se encuentran cursando educación formal, culminando básica primaria, secundaria, bachillerato, en menor proporción cursan un nivel técnico universitario.

2.2 Vinculación, permanencia y desvinculación de los grupos armados ilegales

La vinculación a los grupos armados es el resultado de 50 años de conflicto en Colombia, asociada con diversos problemas estructurales como la pobreza que trae consigo carencias socioeconómicas y simbólicas que facilitan el acceso y permanencia de niños, jóvenes, mujeres y personas adultas en grupos armados, a pesar de los riesgos a la vida que esto conlleva.

Hablar de la violencia en Colombia está ligado al tema de los grupos armados ilegales, de su participación en este fenómeno y por ende, del papel de la fuerza pública. Dentro de cada uno de estos grupos existen características particulares que defienden sus apuestas, ideales y que hacen que cada uno de sus miembros tenga las motivaciones para su ingreso, su permanencia o que tomen la decisión de abandonarlo¹⁵⁶. Lo cierto es que el país ha visto como un sin número de niños, niñas, jóvenes, adultos y mujeres son o han sido parte de ellos durante más de cuatro décadas, y la población civil ha vivido las consecuencias de la violencia de un conflicto interno que parece no acabar.

156- VALENCIA Olga lucía, “Vinculación a grupos armados: un resultado del conflicto armado colombiano”. Universidad del Bosque, revista Diversitas, perspectivas en Psicología, 2009.

Los resultados del estudio de caracterización realizado en los once municipios seleccionados establece que el 36% de las personas en procesos de reintegración ingresaron al grupo armado ilegal siendo menores de edad, en rangos entre los 8 y los 12 años de edad el 6% y entre los 13 y los 17 años el 30%; estadísticas que demuestran que el conflicto ha involucrado y afectado a los niños(as) y jóvenes, los cuales se han visto inmersos desde muy temprana edad en el mundo de la guerra y cómo los grupos armados organizados al margen de la ley, indistintamente, han violado el derecho internacional humanitario al vincular y reclutar en filas e involucrar en sus actividades de guerra a menores de edad.

En cuanto al ingreso de hombres y mujeres mayores de edad a los grupos armados ilegales, se destaca que el 40% fueron vinculados al grupo armado ilegal siendo jóvenes, según la legislación colombiana, en rangos de edad así: entre los 18 y 22 años un 24% y en el rango 23 a 27 años el 16%. Situación que deja al descubierto otras problemáticas de la población joven en Colombia, especialmente la más pobre, en la que se concentran la exclusión, la falta de oportunidades, el acceso a la educación y recreación.

“Los jóvenes padecen altos índices de muertes violentas, muchos de ellos, están marginados de la ciencia y la tecnología, de las posibilidades de trabajo, la participación política, la recreación y las posibilidades de expresión, aspectos que han generado mayor vulnerabilidad para su ingreso a los diversos circuitos de ilegalidad: grupos armados (guerrilla, paramilitares, delincuencia común), redes del narcotráfico y contrabando, prostitución, etc. Siendo de esta manera violados todos sus derechos a la integridad personal”¹⁵⁷.

El restante 25% de la población ingresó al grupo armado ilegal entre los 28 y 44 años, en rangos de edad así: de 28 a 32 años el 10%, de 33 a 37 años un 8% y más 38 años el 7%; considerados dentro de la legislación colombiana como económicamente activos, es decir donde una persona define su vida laboral de acuerdo a las oportunidades que le brinda el mercado laboral.

Tabla 7. Edad de ingreso al grupo ilegal de población en proceso de DDR en el departamento de Santander

Rango de Edad (en años)	Frecuencia	Porcentaje	Acumulado
8 a 12	10	6%	6%
13 a 17	53	30%	35%
18 a 22	43	24%	60%
23 a 27	28	16%	75%
28 a 32	17	10%	85%
33 a 37	14	8%	93%
38 a 43	7	4%	97%
44 a más	6	3%	100%
Total	178	100%	

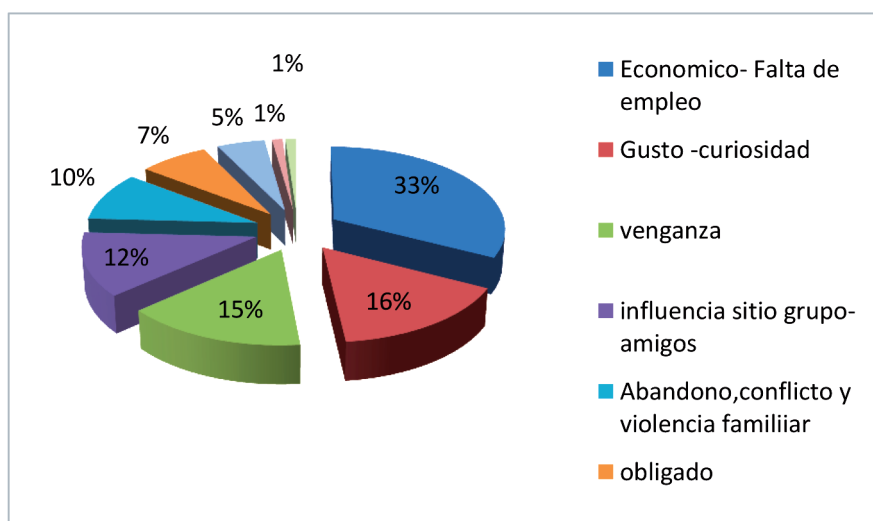
Fuente: Corporación Compromiso, encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012.

157- MINISTERIO DE CULTURA. Caracterización y situación actual de la población infantil, adolescente y juvenil, 27 julio de 2010.

2.2.1 Motivaciones de vinculación a los grupos armados

Cuando se preguntó a hombres y mujeres, participantes en los procesos de reintegración, por los motivos para vincularse y hacerse parte del grupo armado, cada persona registra su propia historia, que al integrarse consolidan 6 móviles principales: económico, ligados a la pobreza de la población y la falta de oportunidades; el gusto por las armas, articulado al poder; la venganza por las pérdidas de familiares cercanos; la influencia en el sitio de residencia de grupos armados, o de amigos y familiares pertenecientes a los grupos armados ilegales; la familia por abandono, conflicto, violencia; y el reclutamiento forzado de los grupos armados ilegales.

Gráfica 3. Motivaciones para el ingreso al grupo armado ilegal de la población en proceso de DDR en Santander



Fuente: Corporación Compromiso, encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

Al profundizar el análisis se establece que estos móviles se modifican en su orden de acuerdo a la edad de vinculación y pertenencia al grupo armado ilegal. Es así como para el 27% de los participantes en el proceso de reintegración que ingresaron siendo niños, niñas y jóvenes al grupo armado ilegal el primer móvil fue la guerra en sí misma, muchos de ellos no buscaban la guerra sino que nacieron en ella o la tenía muy cerca, en un entorno marcado por la ausencia social del Estado, la inseguridad y desprotección, donde la cotidianidad giraba alrededor de modelos militares susceptibles de imitar, autoritarios y violentos que imponían sus normas, sus lógicas y el poder; allí los únicos referentes de autoridad y justicia eran los grupos armados que operan en su territorio y de quienes tenía una valoración positiva que los convertía en multiplicadores de esas prácticas propias de una cultura de violencias. Lo anterior lo manifiestan quienes lo vivieron con expresiones relacionadas con el momento de su ingreso al grupo armado:

“Me gustaban las armas y además tenía aprecio hacia la guerrilla”¹⁵⁸

“Me gustaban las armas y por seguirle los pasos a un tío”¹⁵⁹

158- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

159- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

“Ganas de portar un arma y un camuflado, ser respetado por todos”¹⁶⁰

“El sentirme parte de un grupo y experimentar”¹⁶¹

“la causa de la vinculación con el grupo fue mi gusto y afición a las armas”¹⁶²

Expresiones que muestran cómo para ellos ese momento se concebía como opción de vida y parte de su realidad.

La segunda de las motivaciones, considerada para el 18% de la población, está ligada con la familia; la tradición militar que aumentaba la probabilidad de ingreso pues los hijos de quienes militaban eran dejados al cuidado de familias de la región y posteriormente vinculados a muy temprana edad al grupo, en roles específicos, algunos comentan que en actividades de información, preparación de alimentos, cuidados de otros miembros del grupo. Dentro de este móvil se encuentra la violencia intrafamiliar que se vivencia en niños y jóvenes con maltrato, abuso de padres u otros miembros del hogar y abandono, lo anterior se hace evidente cuando afirman:

“Me fui de mi casa porque me maltrataban y un día la guerrilla hizo recogida y como nadie sacó la cara por mí, me llevaron”¹⁶³

“Me faltó guía familiar, vivía solo desde muy pelado, fue mi única opción de supervivencia”¹⁶⁴

“Ingrese al grupo de las autodefensas por defenderme de los maltratos de mi pareja y porque quería ser como él: portar un arma y tener poder”¹⁶⁵

“Cosas de la vida, cuando se cierran las puertas de la familia, se deja llevar uno más fácilmente”¹⁶⁶

La tercera causa de ingreso al grupo armado ilegal la establece 15% de la población y está relacionado con el factor económico, especialmente las condiciones de pobreza, falta de oportunidades y una opción para generar ingresos; lo económico está puesto con mayor fuerza por quienes ingresaron siendo adolescentes y jóvenes, quienes no encontraron en los territorios donde vivían opciones diferentes para su subsistencia y la de su familia, al respecto comentan:

“Me fui al grupo por falta de plata, aunque mi abuela me daba el estudio, pero le tocaba muy duro y no quise más eso, por eso me vinculé”¹⁶⁷

“Impulsado porque iba a ganar un poco más de dinero y eran tantas las necesidades”¹⁶⁸

160- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

161- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

162- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

163- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

164- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

165- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

166- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

167- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

168- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

“Habían matado a un hermano, yo estaba sola con mi mamá de un lado para otro, me sentía abandonada y también me acosaban mucho, tenía dos opciones a la mano: la prostitución o el grupo armado, por eso entré”¹⁶⁹

Como éstas, muchas voces dejan entre ver realidades de un país donde existen miles de niños, niñas y jóvenes que no disponen de oportunidades para desarrollarse y lograr un buen vivir.

La cuarta motivación, relatada por un 19%, es el reclutamiento forzado o el engaño, práctica utilizada por todos los grupos armados para ponerlos en combate con las fuerzas contrarias; práctica que persiste en Colombia a pesar de ser considerada como un delito de lesa humanidad. Al respecto manifiestan que ingresaron presionados a cambio de no matar a su familia, para que no se llevaran sus hermanos o hermanas menores, algunos manifiestan que vivían en zonas de guerra donde la práctica era normal y quien se resistía se tenía que ir o pagar las consecuencias. Al respecto algunos testimonios recogidos lo registran así:

“Yo nací en un lugar donde estaba el conflicto, tenía que escoger alguno de los bandos, ellos no lo obligaban pero le daban a uno a entender que le tocaba”¹⁷⁰

“Por vivir en la zona en que mandaban los paramilitares, ellos no contemplaban la edad que tenía, solo que necesitaban hombres”¹⁷¹

“Ingresé engañado, porque iba a ganar buena plata y que podía ver a mi familia”¹⁷²

Para el 21% aparecen otras razones como la influencia que ejercían los miembros de los grupos armados en la zona donde se vivía, el influjo de amigos, la venganza y la visión política. Respecto de la visión política es importante establecer que solo un 3% de la población encuestada la relacionó como la motivación para el ingreso al grupo armado.

Para quienes ingresaron siendo mayores al grupo armado ilegal las motivaciones sin ser diferentes cambian la prioridad: para el 42% el motivo principal lo constituye el factor económico, expresado por cada uno de ellos como falta de empleo, carencia de oportunidades para lograr un ingreso que les permitiera subsistir junto con su familia, búsqueda de un cambio de vida pues se vivía en extrema pobreza y había necesidad de permitir la subsistencia de la familia, se carecía de servicios públicos, salud, educación, posibilidades de alimento.

Para el 19% la venganza fue la motivación para el ingreso al grupo armado ilegal. Lo expresan en los atropellos de los actores armados contra la población civil donde tenían centrados sus lazos afectivos, necesidad de cobrar venganza por la muerte de familiares cercanos como cónyuges, hijos, hermanos y por desplazamiento o persecución de que fueron víctimas.

169- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

170- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

171- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

172- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

La tercera motivación fue definida por el 14% como la influencia del grupo armado que operaba en la zona donde vivían, de los amigos y familiares que hacían parte del grupo, sumado a la inexistencia de un Estado que garantizara la ley y la justicia; otros afirman que por haber prestado el servicio militar fueron considerados por la comunidad como personas que “fueran la ley” o que defendieran a los demás, eso les gustó y el grupo armado los reclutó.

La cuarta motivación la expresa el 9% como el gusto por las armas, que no es otra cosa que la expresión del poder personal que dan las armas en entornos marcados por inseguridad y carencia de un orden estatal de derechos e instituciones. El restante 16% manifiestan que ingresaron al grupo por obligación, engaño, conflictos familiares especialmente de su pareja, llama la atención que ninguno menciona la visión política del grupo.

En general, en los adultos están marcadas las necesidades prácticas como motivaciones principales.

Tabla 8. Motivaciones para el ingreso al grupo armado ilegal de la población en proceso de DDR en Santander

MOTIVACION	niños, niñas, jóvenes		MOTIVACION	Mayores	
	Frecuencia	Porcentaje		Frecuencia	Porcentaje
Gusto – curiosidad	17	27%	Económico-Falta de empleo	49	42%
Abandono, conflicto y violencia familiar	11	18%	Venganza	22	19%
Económico-Falta de empleo	9	15%	Influencia sitio grupo-amigos	16	14%
Obligado o engañado	12	19%	Gusto – curiosidad	11	9%
Influencia, sitio grupo-amigos	7	11%	Abandono, conflicto y violencia familiar	6	5%
Venganza	3	5%	Obligado y engañado	11	9%
Visión política	2	3%	Otras	1	1%
Otras	1	2%	Visión política	0	0%
Total	62	100%	Total	116	100%

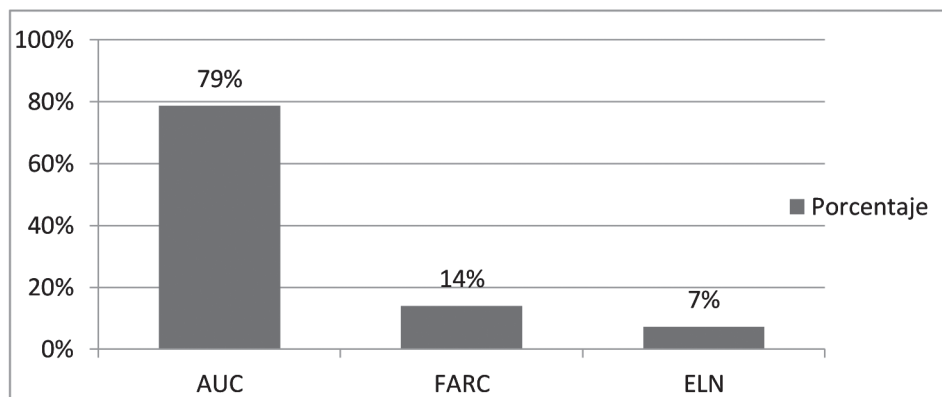
Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

Aunque la investigación no profundizó en los motivos de vinculación de las mujeres desmovilizadas, el resultado logra identificar aspectos característicos generales: La admiración y respeto por quienes lideraban los grupos armados (los comandantes); el hacerse respetar, pues ellas eran capaz de realizar lo que se les pedía e incluso hacer lo mismo que los hombres hacían; varias mujeres en el desarrollo de la investigación manifiestan que el ingreso se dio por defenderse de los atropellos y violencia intrafamiliar de padres, pareja o familiares cercanos.

2.2.2. Grupo armado al que pertenecía en el momento de la desvinculación

El proceso de DDR ha permitido que a nivel nacional más de 54.000 personas entre jóvenes, hombres y mujeres regresen a la vida civil e inicien su proceso de reintegración a la sociedad. Dentro del conjunto de las personas que decidieron dejar las armas y hoy se encuentran participando en procesos de reintegración en el departamento de Santander, se pudo establecer que el 79% de ellas pertenecía a los grupos de las AUC, 14% a la Farc y un 7% al Eln.

Gráfica 4. Grupo Armado al que pertenecía la población en proceso de DDR en Santander en el momento de la desmovilización



Fuente: Corporación Compromiso, encuesta de caracterización socioeconómica población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

Las personas desmovilizadas en forma colectiva, de las AUC, resultado del proceso de paz negociado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez que hoy participan la reintegración en Santander, al indagar sobre su pertenencia a grupos armados, se reconocen provenientes de diferente bloques y frentes de todo el país, entre ellos: (sic) Bloque Magdalena Medio, el Libertador del Sur, Centauros, Frente Hector Julio Peinado, Frente Ramon Danilo, Bloque Central Bolivar: Héroes Martires de Guatica, Lanceros de Velez, Frente de Castaño, Pablo Emilio Guarín, Comandante 5-5, del Magdalena Medio, Bloque Catatumbo, Frente Puerto Boyaca: Botallones, Conquistadores del Minero, Heroes del Peñon, Isidro Carreño, Bloque Resistencia Tayrona, Vencedores de Arauca, Bloque Resistencia Motilones, Frente Cesar, Bloque Norte de Valledupar de Jorge 40. La desmovilización se ha dado despues de permaner en la organización armada en un rango de tiempo que va desde 1 año a 14 años, entre los años 1990 a 2006.

Quienes se han desmovilizado de la Farc manifiestan que hicieron parte de diferentes estructuras, frentes y columnas de la organización que operan en el territorio nacional. Según la encuesta individual se recoge este registro, entre ellos los frentes: (sic) Séptimo, 12, 15, 16, 20, 24, 29, 49, 57, José María Cordoba, el Bloque del Magdalena Medio, la Columna Arturo Ruiz, el Frente de Pastor Alape, el Frente Teofilo Forero, el Frente Sur. Es importante destacar que la desmovilización se ha dado en forma individual después de permanecer en el grupo en un rango de tiempo que va de 4 años hasta 30 años. Sus desmovilizaciones se han dado desde el año 2001 hasta 2011.

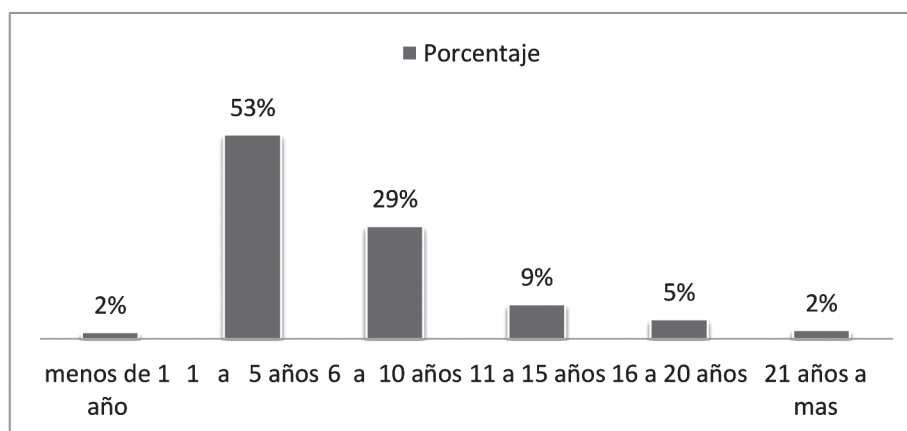
En forma individual se han desmovilizado miembros del Eln entre el año 2006 y 2009, quienes pertenecian a diferentes frentes de esa organización guerrillera, entre ellos: (sic) Frente Adonai Ardila Padilla, Camilo Torres Restrepo, Compañero Tomás,

Frente de Guerra Occidental Ernesto Che Guevara, Frente Domingo Laín, Guillermo Ariza y el Frente Luis Solano Sepulveda. La desmovilización se ha dado después de permanecer en el grupo entre 2 y 25 años.

2.2.3 Tiempo de permanencia en el grupo armado

Al consolidar la información referente al tiempo de permanencia en los grupos armados de las personas desmovilizadas de grupos armados ilegales en el departamento de Santander, se logró establecer un rango de tiempo de permanencia que va de 8 meses a 30 años. Al respecto la Gráfica 5. Tiempo de permanencia en el GAI de la población en proceso DDR en Santander, ilustra cómo más del 50% de la población fue parte de estos grupos armados entre uno y cinco años, porcentaje que coincide con el promedio establecido de permanencia en las AUC, de donde proviene el 79% de la población desmovilizada del Departamento. En el rango de 6 a 10 años se clasifica un 29% de la población, rango que coincide con el promedio de permanencia en las Farc y el Eln. Los rangos posteriores de 11 a más de 21 años, correspondientes al 16% de la población, se distribuyen en todos los grupos pero especialmente los guerrilleros, donde se clasifican personas de más de 20 años en la organización, de igual manera se tienen casos aislados en la AUC de tiempos de permanencia que alcanzan los 14 años; el 2% restante corresponde a personas que no lograron cumplir un año dentro del grupo armado y tuvieron que desmovilizarse por los acuerdos con el Gobierno.

Gráfica 5. Tiempo de permanencia en el GAI de la población en proceso de DDR en Santander



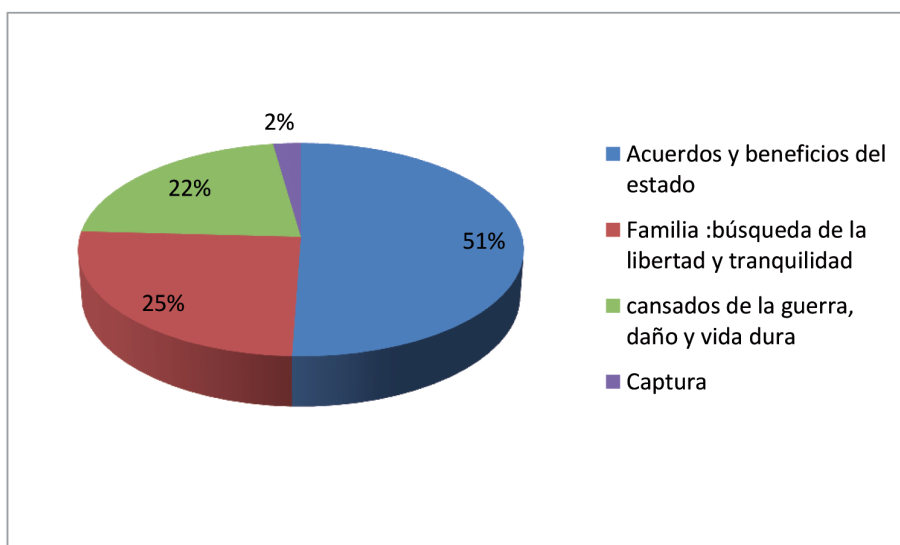
Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

El tiempo de permanencia en los grupos armados ilegales, es una marca no solo para las personas que hoy hacen parte de los procesos de reintegración sino para las comunidades que han vivido los peores impactos de la guerra, y es parte de la historia del conflicto colombiano. Ello reta a encontrar caminos que conduzcan a la superación definitiva, y no parcial, del conflicto armado, mediante procesos de solución negociada con renovados esfuerzos para continuar promoviendo procesos de desarme, desmovilización y reintegración colectivas a la sociedad de los grupos combatientes que aún permanecen en la lucha armada, como pasos necesarios para lograr la seguridad humana, la democracia y asegurar la sostenibilidad del país dentro de la perspectiva de la paz y la reconciliación.

2.2.4 Motivo de la desmovilización

Sobre los motivos y fechas de desmovilización de la población en proceso de reintegración en Santander se pueden establecer cuatro aspectos que caracterizan la desmovilización de las personas en procesos de reintegración en el departamento de Santander: El primero de ellos, ligado a la desmovilización de las estructuras, bloques y frentes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC acordadas con el Gobierno Nacional dentro de lo que se conoce como el Acuerdo de Ralito, entre los años 2003 y 2006; la segunda motivación es la familia, al decir de éstos el deseo de volver a estar con los padres, su pareja y sus hijos. El tercer motivo, el manifiesto de un cansancio por la guerra: ligada a las iniquidades contra la población civil y los malos tratos, las amenazas de ajusticiamiento, la falta de libertad; lo anterior lo expresan como “una vida dura”, expresión que recoge miedo, temor de morir, carencias afectivas y materiales. Existe un cuarto aspecto, aunque un poco aislado, como temor a las capturas, y del cual no se logra mayor información.

Gráfica 6. Motivos de la desmovilización de la población en proceso de reintegración en el departamento de Santander



Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

Los resultados de la investigación permiten establecer que el primer móvil está ligado al 51% de la población, especialmente a quienes participaron en las AUC, pues la desmovilización fue para los paramilitares rasos una orden que se tenía que cumplir independiente de su deseo de hacerlo o no. Aun así, algunos consideran que ello significó la oportunidad de volver a una vida en libertad y el regreso a sus hogares, en contraste con aquellos que sienten que fueron obligados o presionados pues no querían desmovilizarse. En este grupo aparecen quienes manifiestan que fue una oportunidad, pues estaban “cansados de estar allá”, al respecto no entran en más detalles que el deseo de volver a estar con los hijos, especialmente.

La segunda y tercera de las razones, manifiesta por el 25%, la expresan con mayor fuerza quienes pertenecieron a grupos armados como el Eln y las Farc, quienes comentan que después de un tiempo de permanecer en el grupo extrañaban los hijos, los padres y que además no querían que ellos fueran parte del grupo armado. En cuanto al cansancio por la guerra expresan que no les gustaba el daño que se hacía a la población, que existía mucha violencia que hizo que se perdiera el sentido

de estar allí; de igual manera algunos expresan el miedo y el temor permanente por morir, ser ajusticiado por errores cometidos en la organización armada o tener que enfrentar un día a la justicia; sumado a lo anterior el mal trato y las reglas del grupo, que en determinada edad, por ejemplo, afectaban a las mujeres especialmente en su derecho a la maternidad. Lo anterior, al decir de los desmovilizados, los motivó a acogerse a la ley y ser parte hoy del programa de reintegración ofrecido por el Gobierno.

Respecto a la fecha de desmovilización del grupo ilegal se tiene que el 79% de la población se desmovilizó entre 2003 y 2010, registrándose la mayor desmovilización en el año 2006.

Por su parte la población perteneciente a las Farc se ha venido desmovilizando en forma individual desde 2001, y se registra un incremento de desmovilización entre los años 2005 y 2011.

En cuanto a quienes pertenecen al Eln, las desmovilizaciones se logran registrar por la presente investigación desde 2005 a la fecha, desmovilizaciones individuales y voluntarias de sus miembros.

Finalmente es importante destacar que las fechas de las mayores desmovilizaciones coinciden con los tiempos de los acuerdos de paz entre las AUC y el Gobierno Nacional y las desvinculaciones de más de 3.000 niñas, niños y adolescentes de los grupos armados ilegales, en el periodo de agosto de 2002 a mayo de 2008.

3. Condiciones de vida actuales de la población dentro de los procesos de reintegración en el departamento de Santander

Como se ha dicho antes, el presente análisis se realiza con población desmovilizada que ha participado del Programa de Reintegración en once municipios del departamento de Santander, aspecto que permite caracterizar su condición actual y concluir sobre los efectos e impactos de los programas de reintegración económica y social en sus vidas, familias y entorno, al igual que realizar una valoración de los resultados por quienes participan en ellos.

El análisis se enmarca en un enfoque de derechos, gracias al cual la persona desmovilizada es considerada como un ciudadano, reconocido como sujeto social y en proceso de reintegración con su familia y comunidades donde es acogido. De igual manera toma como referente de análisis la Política Nacional de Reintegración¹⁷³, coordinada y desarrollada por la ACR.

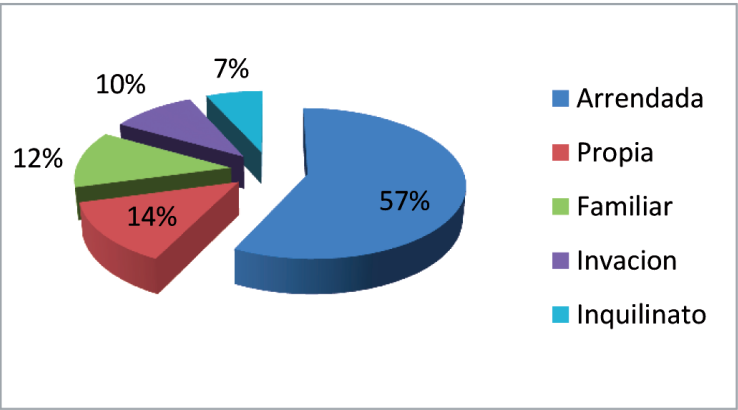
3.1 Vivienda

La vivienda no fue contemplada dentro de la política de la ACR como oferta de servicios de reintegración del Gobierno a las personas que abandonan los grupos armados ilegales, por tanto la solución de vivienda tienen que lograrla por sus propios

173- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Consejo Nacional de la política económica y social, República de Colombia, Documento Conpes 3554-2008.

esfuerzos y medios como cualquier colombiano o colombiana. Es importante destacar que la vivienda es una de las necesidades más sentidas de la población en proceso de reintegración en el departamento de Santander, toda vez que tan solo existe un 13% que cuenta con una vivienda propia, el restante porcentaje de población vive en vivienda arrendada el 57%, familiar el 12%, en invasiones e inquilinatos el 17%.

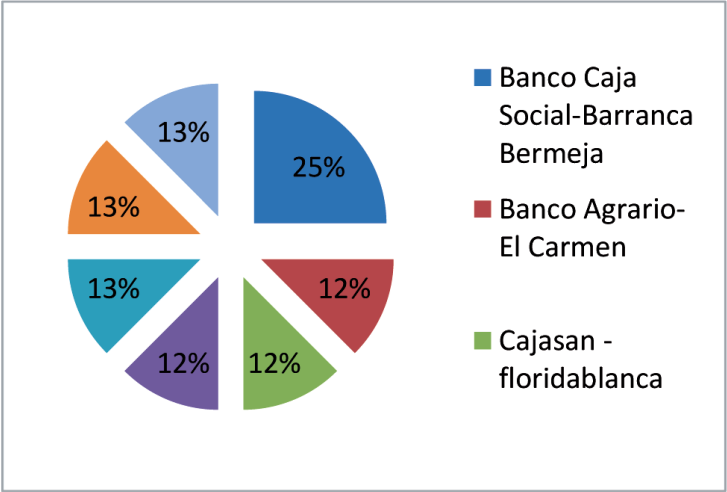
Gráfica 7. Tipo de vivienda de la población en proceso de DDR en Santander



Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012.

En la búsqueda de lograr una vivienda las personas en proceso de reintegración participan en programas de socialización de ofertas de ahorro programado para acceder y financiar planes de vivienda para estrato uno y dos, realizada por entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, el Banco Caja Social, Banco Agrario, caja de compensación Confenalco, Cajasan y las secretarías de gobierno de Girón y Floridablanca. Al respecto dentro de la muestra se identificaron 8 familias que acceden a subsidios de entidades como Banco Agrario en El Carmen; Banco Caja Social de Barrancabermeja; Cajasan, Floridablanca; Colmena, Bucaramanga; Fondo Nacional del Ahorro, Bucaramanga; y subsidio a la vivienda a damnificados de la ola invernal otorgado por Secretaría de Gobierno de Floridablanca.

Gráfica 8. Entidades que otorgaron el subsidio de vivienda a la población en proceso de DDR en Santander



Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012.

De acuerdo con información de la ACR en el departamento de Santander se han desembolsado para vivienda sólo 12 proyectos por valor de \$117.000.000.

En la Tabla 9, se registra una demanda de vivienda actual del 95% de las personas en proceso de reintegración.

Tabla 9. Población en proceso de DDR que ha recibido subsidio para vivienda en Santander

Ciudad	Ha recibido subsidio		No ha recibido subsidio		Total	
	F	Porcentaje %	F	Porcentaje %	F	Porcentaje %
Bucaramanga	3	1,7%	37	20,8%	40	22,5%
Floridablanca	1	0,6%	16	9,0%	17	9,6%
Piedecuesta	0	0,0%	10	5,6%	10	5,6%
Girón	1	0,6%	13	7,3%	14	7,9%
Lebrija	0	0,0%	4	2,2%	4	2,2%
Barrancabermeja	1	0,6%	49	27,5%	50	28,1%
Cimitarra	1	0,6%	7	3,9%	8	4,5%
Rionegro	0	0,0%	11	6,2%	11	6,2%
San Vicente	0	0,0%	6	3,4%	6	3,4%
Sabana de Torres	0	0,0%	3	1,7%	3	1,7%
El Carmen	1	0,6%	14	7,9%	15	8,4%
Total	8	4,5%	170	95,5%	178	100%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012.

Respecto al tema de vivienda queda la claridad que la población participante en los procesos de reintegración tiene que esforzarse como cualquier colombiano para poder tener vivienda digna.

3.2 Educación como estrategia en el proceso de Reintegración

En los programas de DDR el componente educativo ha construido una línea de tiempo que ha marcado los diferentes procesos de desmovilización, reinserción y reintegración a la vida civil de personas que han sido parte de grupos armados ilegales. En el caso colombiano a la educación se le ha dado un papel trascendental en cada uno de esos momentos definidos por diversos factores de la coyuntura política nacional y que se han convertido en la ruta de quienes han ingresado a los programas después de salir de los grupos armados ilegales.

El proceso de desmovilización de grupos armados ilegales marca cuatro momentos históricos, cada uno con sus particularidades, el primero en la década del 90 en el marco de los acuerdos entre organizaciones guerrilleras y el Gobierno, instituciones que diseñaron programas de básica primaria, secundaria y algunas iniciativas de educación superior para apoyar los procesos de reinserción a la vida civil de los excombatientes. Un segundo momento 1999 a 2003, el tema educativo lo abordó la Dirección General para la Reinserción llevando a cabo la labor educativa de los que se desmovilizaron en los 90. De 2003 a 2006 el “Programa para la reincorporación a la vida civil de personas y grupos alzados en armas” retomó el tema educativo para

quienes se desmovilizaron de manera individual, al igual que con los que lo hicieron en forma colectiva resultado de los acuerdos gubernamentales de paz con las AUC.

De septiembre de 2006 a la fecha la responsabilidad del tema educativo recae en la Agencia Colombiana para la Reintegración. En este contexto el tema educativo presenta un cambio de enfoque al incluirse “la reintegración” como concepto en el marco de DDR que implica procesos que tengan una estabilidad en el tiempo. Para que esto sea posible, se asume al excombatiente como “participante” ya no como “beneficiario”, que lo implica como un sujeto responsable y activo en su proceso de reintegración. El conjunto de la educación en el marco de la ACR se asumió desde dos escenarios. Un área de educación, responsable de la administración de los servicios académicos de educación básica primaria, básica secundaria y superior universitaria; y por otro lado, un área de formación para el trabajo responsable de los servicios de educación técnica y tecnológica y la formación en oficios semicalificados.

3.2.1 Actividad educativa y nivel académico alcanzado para la reintegración a la vida civil

De acuerdo a las cifras presentadas a marzo de 2012 por ACR, el 60% de la población participante en el Programa de Reintegración se encontraba estudiando, el 17% no contaban con curso asignado y el 23% culminaron su bachillerato.

Según la Tabla 10. Población en proceso DDR según actividad educativa en Santander, al analizar los resultados de esta variable se logra establecer que el 48% de la población se encontraba estudiando y el restante 52% no contaba en ese momento con actividad educativa; las razones expuestas fueron: el 22% de esta población había culminado su bachillerato y se encontraba explorando ofertas técnicas o tecnológicas, 17% estaban realizando la inscripción para iniciar el proceso y el restante 13% no tenía decidido realizar estudios durante el primer periodo de 2012.

Tabla 10. Población en proceso de DDR según actividad educativa en Santander

Ciudad	Estudia	Porcentaje %	No Estudia	Porcentaje %	Total	
Bucaramanga	15	8,4%	25	14,0%	40	22,5%
Floridablanca	9	5,1%	8	4,5%	17	9,6%
Piedecuesta	7	3,9%	3	1,7%	10	5,6%
Girón	8	4,5%	6	3,4%	14	7,9%
Lebrija	3	1,7%	1	0,6%	4	2,2%
Barrancabermeja	29	16,3%	21	11,8%	50	28,1%
Cimitarra	3	1,7%	5	2,8%	8	4,5%
Rionegro	3	1,7%	8	4,5%	11	6,2%
San Vicente	1	0,6%	5	2,8%	6	3,4%
Sabana de Torres	0	0,0%	3	1,7%	3	1,7%
El Carmen	8	4,5%	7	3,9%	15	8,4%
Total	86	48,3%	92	51,7%	178	100,0%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012.

Quienes habían decidido no estudiar en el año 2012 aducen como razones principales: La familia, especialmente las mujeres, quienes no cuentan con el apoyo de otras personas que cuiden sus hijos y su casa. Otra razón es el trabajo: la actividad que desempeñan no les permite sacar el tiempo para el estudio, los horarios no se pueden combinar con el trabajo, generalmente desarrollan actividades laborales como construcción, operarios, servicios domésticos o como independientes. Otro obstáculo son las distancias y la disponibilidad de transporte del sitio de residencia a los lugares de estudio, este caso se presenta en quienes residen en zonas rurales.

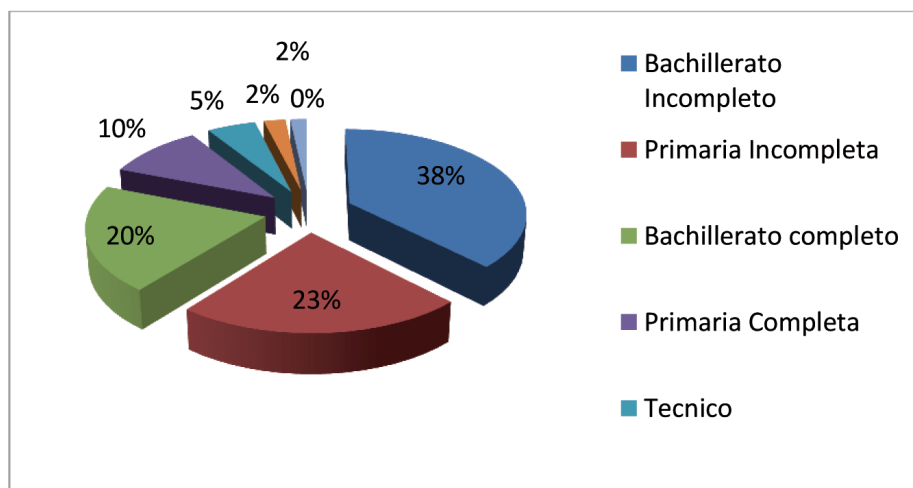
3.2.2 Escolaridad

En las cifras reportadas por el Centro de Servicios de Bucaramanga de la ACR, se observa que el 43,55% de participantes se encuentra inscrito en cursos del nivel primario, que el 15,18% realiza estudios secundarios y el 24,09% lo hace en la media vocacional. En la provincia de Mares, el 26,30% realiza estudios primarios, el 25,49% en básica secundaria y el 27,22% estudia la media vocacional.

De otro lado, los datos de la Encuesta de caracterización socioeconómica muestran que el 1,69% de encuestados no sabe leer y escribir, el 23,03% tiene primaria incompleta, el 10,11% tiene primaria completa, el 37,64% tiene bachillerato incompleto, en tanto el 20,22% es bachiller, el 5,06% son técnicos y el 2,25% tiene estudios universitarios incompletos. Al tiempo que el 48% de las personas encuestadas en los 11 municipios de Santander no adelanta estudios en la actualidad.

La Gráfica 9. Grado de escolaridad de la población en proceso DDR en Santander, establece que el 2% de la población no sabe leer ni escribir, 33% de la población se encuentra en primaria, el 58% se encuentran en bachillerato, de los cuales un 20% son bachilleres, 5% se encuentran en nivel técnico y un 2% en nivel universitario sin concluir.

Gráfica 9. Grado de escolaridad de la población en proceso de DDR en Santander



Fuente: Corporación Compromiso, encuesta de caracterización socioeconómica población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012.

Las anteriores cifras permiten valorar los esfuerzos del Gobierno colombiano y de la población desmovilizada por ofrecer y aprovechar las oportunidades de acceso a procesos educativos, logrando que más del 50% de la población se encuentren en secundaria, con un 20% que hoy estén aspirando a niveles técnicos y tecnológicos, aportando a su desarrollo personal, al mejoramiento de oportunidades laborales y condiciones de vida.

3.2.3 Instituciones Educativas según los programas a los que acceden

La educación se realiza en instituciones educativas públicas del Departamento y los municipios en jornadas regulares y en jornadas para formación de adultos, que generalmente se realizan en las noches y fines de semana. La formación para el trabajo la reciben especialmente en los centros educativos del Sena o en espacios dispuestos para el desarrollo de la acción educativa en cada uno de los municipios de acuerdo a la temática desarrollada.

3.2.4 Participación en programas educativos para la reintegración

Al indagar con la población participante sobre la educación para la reintegración y las áreas de capacitación en las que han sido parte, se establece en la Tabla 11 que el 75% de la población en reintegración ha participado en programas de educación formal de básica primaria, bachillerato y formación tecnológica. Al respecto es importante mencionar que el porcentaje más elevado de participantes se logra en las de ciudades de Barrancabermeja y del área metropolitana de Bucaramanga por concentrar al mayor número de personas en el proceso de reintegración. Sobresale un 24.7% de la población que no ha sido parte de procesos educativos formales.

Tabla 11. Población en proceso de DDR en Santander según programa educativo

Ciudad	Educa- ción Formal	Porcen- taje %	Forma- ción para el trabajo	Porcen- taje %	Forma- ción humana	Porcen- taje %
Bucaramanga	26	14,6%	15	8,4%	30	16,9%
Floridablanca	13	7,3%	4	2,2%	7	3,9%
Piedecuesta	9	5,1%	4	2,2%	7	3,9%
Girón	9	5,1%	6	3,4%	8	4,5%
Lebrija	4	2,2%	1	0,6%	2	1,1%
Barrancabermeja	41	23,0%	33	18,5%	19	10,7%
Cimitarra	4	2,2%	4	2,2%	4	2,2%
Rionegro	9	5,1%	6	3,4%	8	4,5%
San Vicente	4	2,2%	2	1,1%	2	1,1%
Sabana de Torres	1	0,6%	3	1,7%	2	1,1%
El Carmen	14	7,9%	9	5,1%	11	6,2%
No ha participado	44	24,7%	91	51,1%	78	43,8%
Total	178	100,0%	178	100,0%	178	100,0%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

En formación para el trabajo un 49% de la población manifiesta haber participado en capacitación técnica, cursos de formación en oficios semicalificados en instituciones como el Sena, Federación de Cacaoteros, Sistemas Interactivos, Minuto de Dios, Universidad Tecnológica de Cartagena, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, entre otras.

La investigación identificó en los 11 municipios, 47 temas de formación para el trabajo realizados por los participantes en el proceso de reintegración; clasificados en manufactura e industria, empresariales, agropecuarios, servicios domiciliarios, construcción, formación humana, los cuales se relacionan en la Tabla 12. Formación para el trabajo por eje temático.

Tabla 12. Formación para el trabajo por eje temático de la población en proceso de DDR en Santander

Eje temático	Clase curso	Ciudad	%
Manufactura e industria	Ebanistería, confecciones, panadería, mecánica automotriz, soldadura, operario de máquina pesada, corte de lámina, seguridad industrial, mecánica de motos.	Bucaramanga, Floridablanca	33%
Empresariales	Emprendimiento, planes de negocio, mercadeo y ventas, comercio, servicio al cliente, logística, secretariado, legislación comercial, cooperativismo.	Barrancabermeja, Bucaramanga, Piedecuesta, Rionegro, El Carmen de Chucurí	23%
Agropecuarios	Huertas, abonos orgánicos, piscicultura, especies menores, elaboración de lácteos, cacao, ganadería, alimentación bovina, buenas prácticas agrícolas, técnico guadañador, cultivo de guanábana, fertilizantes.	Cimitarra, Barrancabermeja, El Carmen de Chucurí, Piedecuesta, Bucaramanga	23%
Servicios domiciliarios	Electricidad, belleza, culinaria, cosmetología.	Barrancabermeja, El Carmen, Rionegro, Floridablanca	12%
Construcción	Técnico en construcción y andamio.	Barrancabermeja, Bucaramanga, Girón	7%
Sistemas	Ofimática, arreglo de computadores.	Bucaramanga, Barrancabermeja	2%
Total			100%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

En la Tabla 11 se resalta el hecho que el 51% de la población no ha participado en capacitación para el trabajo, aspecto que limita el desarrollo de competencias laborales, la estabilización socioeconómica y el avance en el proceso de integración, siendo éste uno de los aspectos más críticos que registra este estudio y las preocupaciones de los desmovilizados; la estrategia educativa y la formación para el trabajo productivo son pilares de la reintegración exitosa sobre la cual se tendrá que dar mayor atención en el rediseño o ajuste de programas de la ACR y entidades educativas dentro del proceso de reintegración.

El 56% de la población destaca sus procesos de formación humana en temas de principios, valores, relaciones de familia, deberes ciudadanos, educación para la paz y la convivencia, impartidos por el equipo de profesionales reintegradores de ACR, y funcionarios del Sena, Cajasan, Ceta, Alcaldías, entre otros.

3.2.5 Acceso a programas de formación para el trabajo

De acuerdo a la información suministrada por la ACR, entidad que realiza la gestión de acceso de las personas en proceso de reintegración, en el departamento de Santander han accedido a capacitación para el trabajo 624 personas, que equivale a un 43% de la población en reintegración del Departamento. Existen 825 personas que aun no acceden a este beneficio y representan un 57%.

Estas cifras no difieren de los datos y resultados de la presente investigación, realizada en el primer semestre de 2012, donde se destaca la población de Barrancabermeja como la de mayor participación en formación para el trabajo, seguida por Bucaramanga, Rionegro, El Carmen de Chucurí, Cimitarra y Girón; se hace evidente la necesidad urgente de fortalecer este componente en la población, de manera que se garantice el desarrollo de competencias laborales, necesarias en la reintegración económica, al conjunto de los participantes, teniendo en cuenta el alto porcentaje de personas que no han podido acceder a este beneficio.

Tabla 13. Población en proceso de DDR en Santander que ha participado con ACR en actividades capacitación para el trabajo

Ciudad	Participa		No Participa		Total	
	Frecuencia	Porcentaje %	Frecuencia	Porcentaje %	Frecuencia	Porcentaje %
Bucaramanga	12	6,7%	28	15,7%	40	22,5%
Floridablanca	6	3,4%	11	6,2%	17	9,6%
Piedecuesta	4	2,2%	6	3,4%	10	5,6%
Girón	6	3,4%	8	4,5%	14	7,9%
Lebrija	1	0,6%	3	1,7%	4	2,2%
Barrancabermeja	30	16,9%	20	11,2%	50	28,1%
Cimitarra	6	3,4%	2	1,1%	8	4,5%
Rionegro	9	5,1%	2	1,1%	11	6,2%
San Vicente	2	1,1%	4	2,2%	6	3,4%
Sabana de Torres	2	1,1%	1	0,6%	3	1,7%
El Carmen	9	5,1%	6	3,4%	15	8,4%
Total	87	48,9%	91	51,1%	178	100,0%

Fuente: Corporación Compromiso, encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012.

3.2.6 Necesidades de formación para el trabajo

Si bien queda establecido que en formación para el trabajo está pendiente el acceso de más del 50% de la población para el fortalecimiento de sus competencias laborales y su fuente de generación de ingresos o proyecto económico, también se identifica una demanda de los participantes superior al 90%; lo que representa un alta inconformidad de personas que no sienten que sus necesidades de capacitación han sido satisfechas, que lo aprendido a pesar de ser positivo no logra mejorar su condición laboral salvo en casos aislados.

Al analizar cada uno de los municipios estudiados se observa que las mayores demandas pertenecen a los municipios que comprenden el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja, como principales ciudades donde se concentra la población desmovilizada en reintegración, al igual que en municipios como Cimitarra, Sabana de Torres, El Carmen de Chucurí y San Vicente.

Tabla 14. Población en proceso de DDR en Santander que requiere mejorar su formación para el trabajo

Ciudad	Requiere		No requiere		Total	
	Frecuencia	Porcentaje %	Frecuencia	Porcentaje %	Frecuencia	Porcentaje %
Bucaramanga	39	21,9%	1	0,6%	40	22,5%
Floridablanca	16	9,0%	1	0,6%	17	9,6%
Piedecuesta	10	5,6%	0	0,0%	10	5,6%
Girón	14	7,9%	0	0,0%	14	7,9%
Lebrija	4	2,2%	0	0,0%	4	2,2%
Barrancabermeja	47	26,4%	3	1,7%	50	28,1%
Cimitarra	8	4,5%	0	0,0%	8	4,5%
Rionegro	10	5,6%	1	0,6%	11	6,2%
San Vicente	6	3,4%	0	0,0%	6	3,4%
Sabana de Torres	3	1,7%	0	0,0%	3	1,7%
El Carmen	12	6,7%	3	1,7%	15	8,4%
Total	169	94,9%	9	5,1%	178	100,0%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012.

Frente a las necesidades de formación, la población de cada uno de los municipios identificó y solicitó seis líneas productivas en las que requieren desarrollar sus competencias, tanto en oficios, nivel técnico y profesional. La primera de ellas en manufactura e industria, demandado por el 56% de la población. Las demandas y expectativas de formación laboral, técnica y profesional están puestas en el desarrollo de ingenierías como industrial, civil, alimentos, mecatrónica, arquitectura; en actividades técnicas: soldadura y mecánica automotriz; y en oficios: panadería, joyería y ebanistería.

Una segunda línea temática, solicitada por el 18%, se precisa en la prestación de servicios domiciliarios como belleza, electricidad, culinaria, enfermería y modistería.

El 12% de la población requiere formación empresarial para su desempeño en administración de empresas, asesor de ventas, atención al cliente, comercio, contabilidad, emprendimiento.

El 13% restante tiene su interés en la formación laboral para fortalecer conocimientos en la actividad agropecuaria, en temas que han definido como administración de empresas agropecuarias, agronomía, ingeniería ambiental, botánica, ganadería y alimentación bovina. Se destaca en esta línea que la solicitud es a nivel de profesionalización, más que técnica o tecnológica; mientras el 7% lo propone en actividades formativas de construcción y sistemas, que son más de carácter técnico.

Tabla 15. Necesidades de formación para el trabajo y ejercicio de una profesión establecidas por la población en proceso de DDR en Santander

Eje temático	Capacitación	Ciudad	%
Manufactura e industria	Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería de alimentos, arquitectura, mecatrónica, ingeniería de sistemas, joyería, ebanistería, panadería, mecánica automotriz, soldadura, seguridad industrial, mecánica de motos, diseño gráfico, redes eléctricas.	Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, El Carmen de Chucurí, San Vicente, Cimitarra, Lebrija, Rionegro, Sabana de Torres.	56%
Servicios	Electricidad, belleza, culinaria, conducción, enfermería, modistería, cosmetología.	Barrancabermeja, El Carmen, Rionegro, Floridablanca, Bucaramanga, Piedecuesta, Sabana de Torres.	18%
Empresariales	Administración de empresas, asesor de ventas, atención al cliente, comercio, contabilidad, emprendimiento.	Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja	12%
Agropecuarios	Administración de empresas agropecuarias, agronomía, ingeniería ambiental, botánica, ganadería y alimentación bovina.	Cimitarra, Barrancabermeja, Bucaramanga, Rionegro, San Vicente, El Carmen	6%
Construcción	Técnico en construcción y andamiero.	Piedecuesta, Girón, Barrancabermeja, Rionegro	6%
Sistemas	ofimática, arreglo de computadores	Bucaramanga, Barrancabermeja	1%
Total			100%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

Llama la atención que en los resultados de la encuesta los desmovilizados coinciden con la oferta existente en las instituciones que apoyan el sistema, sin embargo empiezan a aparecer nuevas demandas de formación en carreras profesionales como ingeniería civil, ambiental, industrial, agronomía, arquitectura, administración de empresas, especialmente en quienes culminaron sus estudios de bachillerato y que están más orientadas a una profesión que a la realización de oficios. La demanda mantiene la tendencia en formación industrial y manufacturera, seguida de servicios domiciliarios y formación empresarial.

Para finalizar, el 5,1% de la población en reintegración que manifiesta no necesitar formación, sustentan que se encuentran saturados de actividades de capacitación, priorizan la necesidad de acceder a recursos de capital de trabajo para iniciativas productivas y para poner en práctica los conocimientos adquiridos; otros aducen sobre su situación que están viejos para ponerse a estudiar, o que se encuentran desarrollando actividades como conducción o acarreo que no requieren formación.

3.2.7 Fortalezas y debilidades de los programas educativos

Al indagar a las personas desmovilizadas encuestadas acerca de sus percepciones y opiniones sobre los programas educativos en que han participado dentro del proceso de reintegración, sus respuestas brindan el reconocimiento a diferentes fortalezas del programa orientado por la ACR, destacándose principalmente los aportes a su educación y cualificación; la califican como de calidad y enfatizan en los aprendizajes que les deja: los enriquecen los aprendizajes sobre valores y principios como personas, el manejo de su comportamiento, afincamiento de nuevas relaciones en la convivencia con otras personas; resaltan que el proceso les ha permitido apropiarse de conocimientos que los hace mejores personas, poseedores de competencias que les abren oportunidades laborales.

Otro grupo de población define como la mayor fortaleza la oportunidad para aprender a leer y escribir; otros, el hecho de haber podido terminar la primaria, o la culminación del bachillerato que hoy los hace pensar en su profesionalización como ingenieros, administradores, o con su propio negocio. Por su parte existe quienes centran la fortaleza en su proyecto de vida, en la autonomía que han logrado, en el ejemplo que sus vidas pueden representar para los jóvenes, el poder llevar una vida como la de cualquier persona con autonomía y tranquilidad y sobre todo en libertad al decir de cada uno de ellos.

Tabla 16. Fortalezas del programa educativo valoradas por la población en proceso de DDR en el departamento de Santander

Fortalezas	Frecuencia	Porcentaje %
Educación recibida de calidad, buenos docente	99	36,3%
Convivencia en sociedad, siendo mejor persona	71	36,2%
Posibilidad de Conseguir un mejor trabajo	54	19,9%
Terminar el bachillerato	16	5,9%
Aprender a leer y escribir	5	1,8%

Los aportes de los talleres psicosociales	6	2,2%
Terminar primaria	4	1,5%
Poder desarrollar un oficio autónomamente	4	1,5%
Dar un mejor ejemplo a los hijos y a la juventud	6	2,2%
Tener un proyecto de vida	4	1,5%
Trabajo en equipo	1	0,4%
Incentivos económicos	2	0,7%
Total	272	100,0%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012.

Cuando se exploró sobre las debilidades del programa educativo con la población en proceso de reintegración se logran establecer seis grandes debilidades. La primera de ellas definida por el 26% de la población, relacionada con los horarios de los programas establecidos por las instituciones educativas; al decir de la población, no son flexibles a su doble condición de estudiantes-trabajadores, en el programa de reintegración no se han comprendido ni tratado factores y condiciones que son generadores de deserción o impiden el acceso educativo, más aun cuando las jornadas laborales se imponen en prioridad y no son flexibles y no pueden ser controladas por los participantes.

Es una constante que las políticas laborales de las empresas donde trabajan los desmovilizados no facilitan los permisos para la capacitación laboral o la educación formal, mucho más cuando la mayoría de sus empleadores desconocen que pertenecen al programa de reintegración, es decir: desconocen que son desmovilizados, pues el temor al rechazo y la estigmatización genera una actitud preventiva que los obliga a ocultar su condición de desmovilizado. Las experiencias vividas constatan esa realidad, lo que hace muy sentido el temor al señalamiento y al despido. Al respecto manifiestan que se encuentran en dificultades dilemáticas pues deben decidir entre trabajar o estudiar, y la respuesta no permite alternativa pues si no trabajan la subsistencia de la familia está en riesgo, si no estudian su proceso de reintegración se detiene.

La segunda debilidad, definida por el 25% de la población, está relacionada con los beneficios del programa, específicamente a los auxilios de transporte y pone bastante fuerza en la falta de apoyo para cursar educación superior.

La tercera de las debilidades, establecida por el 19% de la población, está centrada en la oferta educativa, al decir de la población está fundamentada en oficios que no se adaptan a las necesidades, no se contempla una oferta técnica, tecnología y universitaria diferente a la propuesta por el Sena. Según los resultados del estudio se puede afirmar que no se han establecido acuerdos institucionales para suplir las demandas de la población, al respecto manifiestan que las valoraciones de sus expectativas y necesidades versus las ofertas se encuentran distantes y no son definidas participativamente antes de ser ofertadas e implementadas a la población desmovilizada.

La cuarta debilidad la manifiesta el 17% de la población, está relacionada con el acceso al trabajo; aquí manifiestan, que existe un punto de tensión pues no se facilitan oportunidades a las vida laboral de acuerdo a los estudios realizados y al

final terminan haciendo lo que pueden y lo que consiguen, todos con su propio esfuerzo. En este punto existen quienes destacan que se han realizado los cursos, especialmente en emprendimiento, pero no se cuenta con acceso a capital de trabajo adecuado para ejecutar el plan de negocio.

Para un 6% de la población las debilidades están en la comunicación con ACR, manifiestan dificultades en cuanto a la falta de claridad en relación al proceso de reintegración, especialmente en lo referente a la salida del mismo.

El porcentaje restante define como debilidades del proceso, especialmente mujeres, las dificultades de no tener con quien dejar el cuidado los hijos para asistir a los estudios; y otro aspecto: los contenidos de los talleres psicosociales son repetitivos, dicen unos, o muy teóricos al decir de otros.

Tabla 17. Debilidades del programa educativo valoradas por la población en proceso de DDR en el departamento de Santander

Debilidades	Frecuencia	Porcentaje %
Horarios: salidas tarde, carencia flexibilidad de horarios, no existe permiso laboral	32	26%
Falta de beneficios como auxilio de transporte y apoyo para la educación superior	30	25%
Oferta educativa no se adapta a las necesidades	23	19%
Trabajo: no existe acceso al trabajo, se estudia pero no se pone en práctica, se requiere capital de trabajo	21	17%
Comunicación con ACR: poca claridad en el proceso, no se entienden problemas personales	7	6%
Contenidos psicosociales: son repetitivos	6	5%
Familia: compromisos familiares, como el cuidado de los niños(as), dificultan la participación en actividades educativas	3	2%
Total	122	100%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012.

3.3 Actividad económica de la población en proceso de reintegración

La reintegración económica se ha considerado dentro de los procesos de DDR un aspecto de vital importancia y una de las mayores dificultades; ha tenido diversas etapas tanto técnicas como políticas, que tienen su explicación en las condiciones del contexto y los acuerdos suscritos con el Gobierno, los grupos guerrilleros y las AUC.

Desde el inicio del proceso en sus diferentes etapas se han implementado cuatro estrategias: proyectos productivos para desmovilizados individuales, proyectos productivos para desmovilizados colectivos, vinculación laboral y finalmente el servicio preparatorio. Cada estrategia, con sus fortalezas y debilidades, ha marcado el camino en la orientación de la política nacional en referencia a la reintegración económica. Por su parte, la población desmovilizada enfrenta la situación y busca

una alternativa viable, bien a través de un empleo o del trabajo por cuenta propia, que le permita generar los ingresos que garanticen la subsistencia y bienestar de su familia y sean el soporte de su proceso de reintegración.

Este documento logra descubrir, caracterizar y analizar las difíciles condiciones actuales de generación de ingresos de la mayoría de población desmovilizada, se detiene en las capacidades de que disponen los participantes para la generación de ingresos, identifica las actividades económicas que desarrollan, los rangos de ingreso por la actividad económica y el aporte familiar. De igual manera describe las dificultades que tiene una parte de los desmovilizados de integrarse a una actividad laboral estable.

Lo anterior transversaliza en su análisis los apoyos que se brindan desde el proceso de reintegración y finaliza presentando la valoración de fortalezas y debilidades que hace la población desmovilizada en el departamento de Santander, donde, al igual que en otras regiones del país la situación de generación de ingresos se torna en un obstáculo difícil para la reintegración económica y social de las personas desmovilizadas.

3.3.1 Competencias laborales actuales

En cuanto a conocimientos y habilidades que poseen los participantes en el proceso de reintegración para desempeñarse autónomamente en un entorno laboral próximo, se logró determinar más de 60 actividades en las que pueden trabajar, dispuestas en los cuatro sectores de la economía: 27% en manufactura e industria, 22% en comercio y servicios, 22% agropecuario, 21% en construcción y 9% en la gestión empresarial, lo anterior se detalla en la Tabla 18. Competencias laborales de la población en proceso DDR en Santander.

Tabla 18. Competencias laborales de la población en proceso de DDR en Santander

Sector	Conocimientos y habilidad	Ciudad	%
Manufactura e industria	Ebanistería, confecciones, panadería, mecánica automotriz, soldadura, operario de máquina pesada, corte de lámina, seguridad industrial, mecánica de motos, aserrador, preparación alimentos, carpintero, mecánica industrial, estampador, instalador de puertas, pintor automotriz, sastrería, tapicería y zapatería.	Municipios del área metropolitana de Bucaramanga, Barrancabermeja, Lebrija y Cimitarra.	27%
Comercio y servicios	Electricidad, belleza, culinaria, conductor, jardinero, oficios varios, montallantas, pintor doméstico, cuidado de niños, guarda de seguridad, supervisor, vigilante, escolta, despostado de carne, reciclaje, mensajería, salvavías.	Barrancabermeja, El Carmen, Rionegro, Floridablanca.	22%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

Agropecuario	Huertas, abonos orgánicos, piscicultura, instalador de cercas, ganadero, avicultor.	Cimitarra, Barrancabermeja, El Carmen de Chucurí, área metropolitana de Bucaramanga, Rionegro.	22%
Construcción	Técnico en construcción, albañil, andamiero, instalador.	Barrancabermeja, Bucaramanga, Girón.	21%
Gestión Empresarial	Asesor de ventas, servicio al cliente, logística, secretariado, recepción, auxiliar de bodega.	Barrancabermeja, área metropolitana de Bucaramanga, Rionegro, El Carmen de Chucurí.	9%
Total			100%

Las actividades relacionadas coinciden en parte con las adquiridas en los procesos de formación para el trabajo relacionadas en la Tabla 13. Formación para el trabajo por eje temático de la población en proceso DDR en Santander.

En las actividades manufactureras e industriales se destacan la mecánica industrial y el corte de láminas, donde existe capacidades del 9.5% de la población; en gestión empresarial, actividades de ventas con el 4,5%; en actividades agropecuarias, instalador de cercas con el 5.5%; en comercio y servicios, la actividad de guarda de seguridad, supervisor de vigilancia y escolta con el 10%, conductor 9%, oficios varios 9%; y en actividades relacionadas con la construcción 21%.

Lo anterior, deja ver avances en los procesos formativos de la población en proceso de reintegración, el reto está en que logren poner en práctica los diferentes conocimientos, habilidades y valores en forma integral en el ámbito personal, social y laboral; pero esto no solo depende del devenir de cada uno ellos, requiere esfuerzos del Estado y el sector empresarial, además de un acompañamiento cercano que permita impactos reales en la reintegración socioeconómica.

3.3.2 Ocupación productiva

En este acercamiento a la población en procesos de reintegración se ha optado por analizar la situación sociolaboral, partiendo para su análisis de variables que permitan una aproximación al conocimiento de las condiciones de vida de este grupo de población, el indicador se ha establecido teniendo en cuenta la combinación de la formación para el trabajo, las competencias actuales, la ocupación laboral y el ingreso.

Una lectura de los datos recogidos en la Tabla 19. Actividad económica de la población en proceso DDR de Santander, permite observar que una parte importante de la población (76%) está ocupada, bien a través de un empleo formal o por cuenta propia. De igual manera identifica un grupo de población desempleada equivalente a un 24.2%. En este aparte vale decir que la ocupación identificada dista mucho de la calidad del empleo, cuya condición es la que permite una verdadera inserción socioeconómica.

Tabla 19. Actividad económica de la población en proceso de DDR de Santander

Ciudad	Empleado		Cuenta propia		Desempleado	
	Frecuencia	Porcentaje %	Frecuencia	Porcentaje %	Frecuencia	Porcentaje %
Bucaramanga	18	10,1%	16	9,0%	6	3,4%
Floridablanca	8	4,5%	5	2,8%	4	2,2%
Piedecuesta	6	3,4%	3	1,7%	1	0,6%
Girón	7	3,9%	5	2,8%	2	1,1%
Lebrija	0	0,0%	3	1,7%	1	0,6%
Barrancabermeja	16	9,0%	18	10,1%	16	9,0%
Cimitarra	5	2,8%	0	0,0%	3	1,7%
Rionegro	4	2,2%	4	2,2%	3	1,7%
San Vicente	2	1,1%	2	1,1%	2	1,1%
Sabana de Torres	0	0,0%	0	0,0%	3	1,7%
El Carmen	1	0,6%	12	6,7%	2	1,1%
Total	67	37,6%	68	38,2%	43	24,2%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

3.3.2.1 Población empleada

La Tabla 20. Actividad económica desarrollada según empleo por la población en proceso de reintegración en Santander, establece tres grupos de empleo: el primero, empleos de baja calificación con contratos laborales a término, por lo general a 3 meses, en este grupo se ubica un 60% de la población con actividades como obreros, oficiales de obra o instaladores, algunos en pintura, instalaciones menores, conductores, oficios varios, lavado de carro, recolectores, cajeros, aquí se incluye el servicio doméstico. Reciben un ingreso promedio de un salario mínimo legal.

Los del segundo grupo requieren cierta calificación, sus ingresos están en un rango superior al salario mínimo legal, prestan sus servicios a empresas de diferentes sectores con un grado mayor de estabilidad laboral, por lo general con contratos entre seis meses y un año. En este grupo encontramos el 34% de la población, se desempeñan como vigilantes, escoltas, supervisores de vigilancia, operarios de fundición, ventas, auxiliares de sistemas, administradores, operarios, soldadores, mecánicos.

El tercer grupo que representa un 6% de la población empleada, realizan actividades propias del campo, desempeñándose como obreros, administradores de fincas ganaderas, palmeras, cacaoteras de la región; su contratación es más permanente y registran prebendas adicionales como comida y dormida; el ingreso promedio se equipara a un salario mínimo legal.

Tabla 20. Actividad económica desarrollada según empleo por la población en proceso de DDR en Santander

Actividad Laboral	Frecuencia	Porcentaje	ingreso promedio \$	Ciudad
Campo	4	6%	534.081	Cimitarra, Girón Barrancabermeja, Bucaramanga
Conducción, ayudantes	7	10%	478.674	Girón, San Rafael, Piedecuesta, Barranca
Domésticas, oficios varios	7	10%	523.478	Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, Cimitarra
Operario fundición, soldadura, mecánica	5	7%	821.950	Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, Bucaramanga
Lavadero carros	2	3%	480.000	Girón, Bucaramanga
Vigilante, escolta	6	9%	636.000	Girón, San Rafael, Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca
Ventas	2	3%	700.000	San Rafael
Construcción	16	24%	614.381	Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca, El Carmen de Chucurí
Proactiva	4	6%	630.000	Bucaramanga, Floridablanca
Belleza, cajera, servi club	5	7%	574.000	Barrancabermeja, Yarima, Floridablanca
Administrador fuente soda	1	1%	1.700.000	Yarima
Auxiliar de sistemas	1	1%	566.700	Floridablanca
Ecopetrol, SIKA, Éxito	3	4%	800.000	Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca
Otras	4	6%	600.000	Girón, Bucaramanga, Floridablanca
Total	67	100%	689.947	

Fuente: Corporación
Compromiso, Encuesta
de caracterización
socioeconómica de
población en proceso de
DDR en Santander, marzo
de 2012

Al respecto es importante manifestar que los trabajadores participantes en los procesos de reintegración desempeñan cargos y oficios de baja remuneración y responsabilidad en la escala sociolaboral; son empleados en trabajos manuales en los que se requiere baja o ninguna cualificación. La estructura sociolaboral que aquí se registra no solo refleja la posición, sino el papel que desempeñan las personas desmovilizadas en la economía. En la explicación de esta situación se deben considerar al menos tres factores determinantes: 1) Su situación de llegada al entorno local, 2) las condiciones estructurales de la población desmovilizada, 3)

Las condiciones institucionales, políticas y sociales en las que se produce la inserción laboral de la población desmovilizada. Aspectos que complejizan la integración al contexto por la prevención, la estigmatización y el rechazo de la sociedad.

Otra realidad que se puede leer de esta situación está relacionada con la calidad del empleo, que se mide en el número de contratos, la temporabilidad de los mismos y la intermitencia de encontrarse sin empleo; al respecto hay que tener en cuenta que actividades como la construcción son las de más alta temporabilidad a nivel de empleo, junto con actividades agrícolas, pues están ligadas al desarrollo de la obra o a la labor contratada.

3.3.2.2 Trabajadores por cuenta propia

Los participantes en los procesos de reintegración en su condición de trabajadores por cuenta propia representan el 38,4%, presentan como características vínculos con trabajos de baja calificación, actividades de rebusque y unos niveles precarios de ingreso, en algunos casos inferior al mínimo legal vigente. Por esto, no es de extrañar que muchos de ellos estén rayando la línea de indigencia o afectados con las duras condiciones de la pobreza. Dentro de sus actividades se identifican jornaleros en fincas, mototaxismo, oficios varios, mensajería y servicio doméstico, servicios eléctricos, ventas informales de comida rápida, ventas por catálogo, cotereros, monta llantas, montadores y cortadores de calzado, ayudantes de mecánica, ayudantes de construcción. Estas actividades se detallan en la Tabla 21. Actividades por cuenta propia población en procesos DDR en Santander.

Tabla 21. Actividades económicas desarrolladas por cuenta propia de la población en proceso de DDR en Santander

Actividad	Frecuencia	Porcentaje	Ingreso promedio \$	Ciudad
Jornaleo en fincas	18	26%	476.117	Girón, San Rafael, Piedecuesta, Lebrija, El Carmen de Chucurí
Conducción, mototaxismo	4	6%	625.000	San Rafael, Lebrija y Bucaramanga
Oficios varios	6	9%	313.340	Barrancabermeja, El Carmen Bucaramanga
Mecánica y pintura automotriz.	8	12%	613.332	Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, Bucaramanga
Servicios eléctricos, domiciliarios	4	6%	550.000	Barrancabermeja y Yarima
Comidas rápidas	2	3%	600.000	Floridablanca
Ventas	10	15%	586.670	Floridablanca, El Carmen de Chucurí, Barrancabermeja

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

Construcción	8	12%	661.429	Floridablanca, Bucaramanga, Barrancabermeja y Girón
Calzado, chatarrerías	8	12%	483.750	San Rafael, Barrancabermeja, Bucaramanga y Floridablanca
Total	68	100%	545.515	

La mala calidad de la ocupación laboral que afecta a los participantes ha sido motivo de preocupación del propio Gobierno, pues además de lo dicho, la mayoría de ellos están clasificados en la informalidad, situación que pone en riesgo los procesos de una verdadera reintegración económica y social. Al respecto se pronuncia la MAPP-OEA en su informe de 15 de marzo de 2012:

“La Misión quiere hacer énfasis nuevamente en la gran dificultad que tienen muchos desmovilizados y desmovilizadas de integrarse a una actividad laboral estable. A pesar de los notables esfuerzos que han hecho el Gobierno y la ACR por involucrar al sector privado a través de distintos mecanismos como foros, o la ratificación de la “Ley de formalización y primer empleo” de febrero 2011, la situación en algunas regiones del país como Urabá, Santander, Putumayo, Bolívar y Córdoba, es crítica”

De igual manera se debe tener en cuenta que en Colombia, según cifras del DANE a marzo 31 de 2012, la tasa de trabajador por cuenta propia corresponde al 48% y la tasa de desempleo para los jefes de hogar en Colombia fue del 5,8%, aspectos que permiten argumentar razones de orden estructural pero que agravan la situación de la reintegración económica de la población desmovilizada en un país marcado por la inequidad, la pobreza y la falta de oportunidades para quienes están en edad de ser productivos.

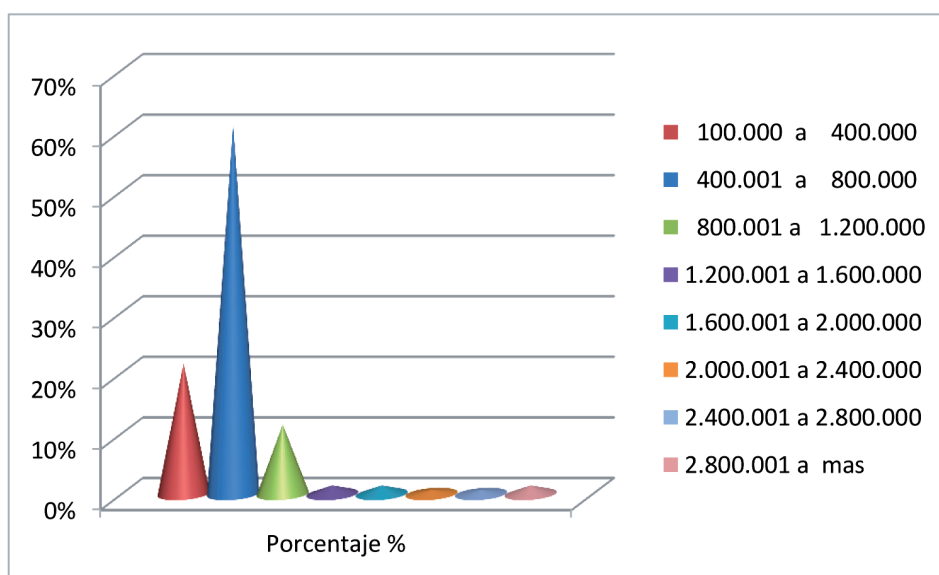
3.3.3 Ingreso actual

El ingreso hace relación a las entradas de dinero que tiene una persona en un periodo de tiempo, está directamente relacionado con la actividad laboral y la calidad del empleo, además de condiciones de orden macroeconómico del país y la región.

En poblaciones en reintegración es considerado como un punto estratégico en la sostenibilidad del proceso, pues una vez el desmovilizado logre un nivel de ingresos adecuado no solo se garantiza la subsistencia y calidad de vida de él y su familia, sino el rompimiento de la dependencia de los programas de apoyo y la atracción hacia ofertas ilegales.

La Gráfica 10. Rango de ingreso de la población en proceso DDR en Santander, establece que los ingresos de la población desmovilizada producto de su actividad laboral, vía empleo o cuenta propia, se encuentran en rangos que van de \$100.000 a \$400.000 para el 22% población; de \$400.001 a \$800.000 el 61%; de \$800.001 a \$1.200.00 el 12%; y el restante 5% superan el \$1.200.000. Se aclara que la información fue tomada de las personas que en el momento desarrollaban una actividad productiva y no contempla los ingresos recibidos por los apoyos de reintegración.

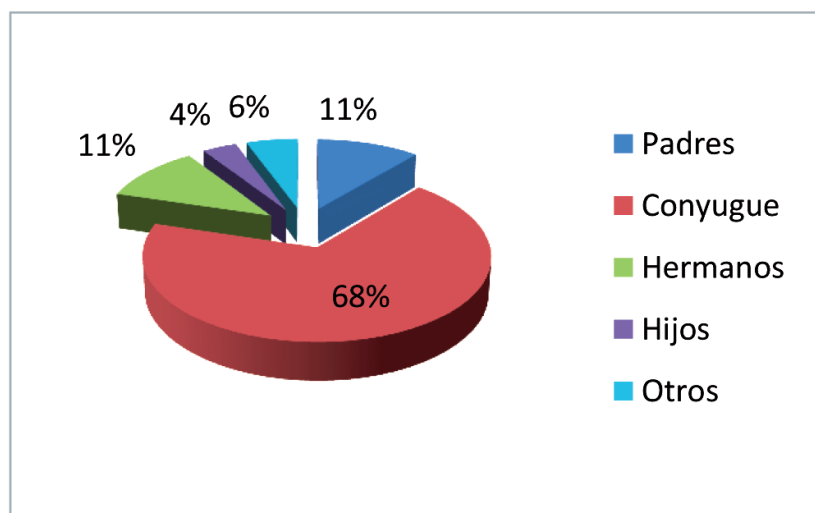
Gráfica 10. Rango de ingreso de la población en proceso de DDR en Santander



Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

El 30% de las personas con actividad laboral y con una familia a cargo, cuentan con aportes de otros miembros de la familia, principalmente el conyugue, y luego otros como padres o hermanos, quienes logran aportar entre \$100.000 y \$800.000 resultado de su actividad productiva, este es el caso de la mayoría de las mujeres entre quienes son los conyugues o sus familiares los que aportan el ingreso mayor para los gastos de la familia.

Gráfica 11. Aportes al ingreso familiar de la población en proceso de DDR en Santander



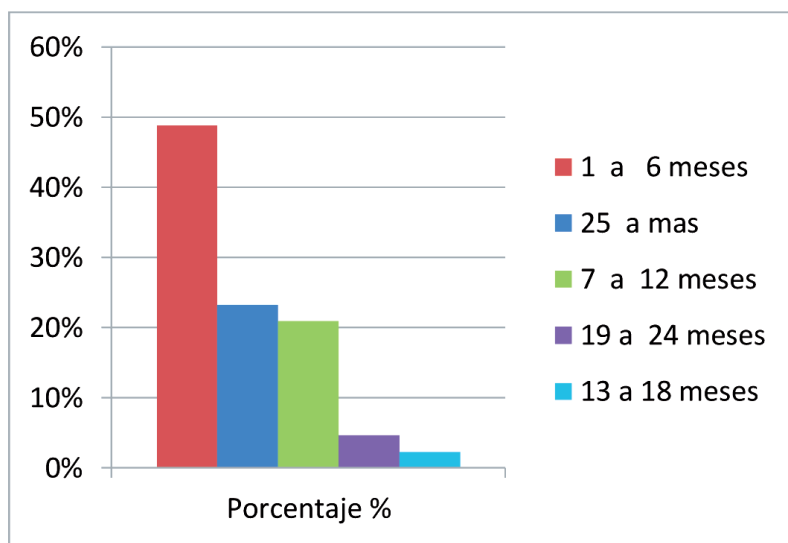
Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

3.3.4 Desempleo en la población en proceso de DDR en Santander

En la Tabla 18. Actividad económica de la población en proceso DDR de Santander, se aprecia que el 24.2% se encuentra desempleada, presentan una inactividad laboral en periodos que oscilan entre uno y seis meses, subsisten solo con el aporte que reciben del Estado y la contribución de algunos miembros de la familia, especialmente el

conyugue. En el análisis se encontró un número significativo de personas que tienen un paro laboral que va de 7 meses hasta 2 años, quienes a pesar de sus esfuerzos no logran conectarse en el mercado laboral y no disponen de capital o conocimientos en oficios o profesiones que les permitan actuar por cuenta propia. Al respecto manifiestan que no han contado con apoyo de ACR para el acceso a relaciones que les permitan una ubicación o un trabajo.

Gráfica 12. Rango de tiempo de desempleo de la población en proceso de DDR en Santander



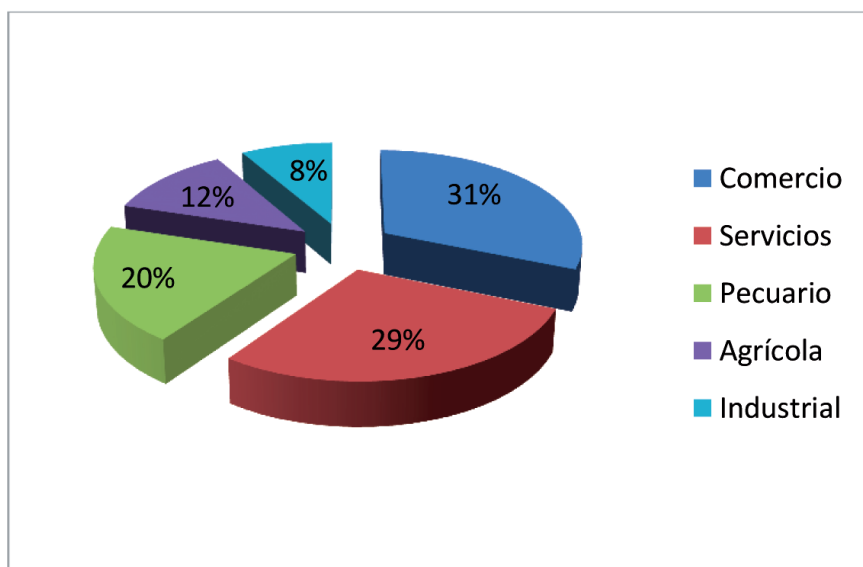
Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

La situación de desempleo por lapsos de tiempo tan amplios ha generado condiciones familiares de exposición a extrema pobreza, carencias materiales y desesperanza en el devenir. Situaciones como éstas propician el riesgo de un grupo de familias a la reincidencia, muchas de ellas presionadas por actores armados ilegales para vincularse con nuevas manifestaciones de prácticas ilegales y delincuenciales, repitiendo historias que solo conllevan a la prolongación de la violencia y el conflicto armado en el país, poniendo en riesgo de fracaso los procesos de reintegración de desmovilizados como eslabones hacia la paz.

3.3.5 Planes de negocios como estrategia para la reintegración económica

Respecto al apoyo al emprendimiento y estímulo para la creación o fortalecimiento de proyectos productivos en el departamento de Santander, la ACR señala que se han desembolsado, entre 2004 y 2010, 202 proyectos, por valor de \$1.413.428.705. Estos proyectos productivos se han desarrollado en diferentes sectores económicos: 31% en Comercio, con un aporte de \$460.744.978; 29% en Servicios con una inversión de \$376.699.998; 20% Pecuario con recursos por valor de \$344.200.000; 12% Agrícola con montos de \$101.001.607; y en el sector Industrial con inversión de \$130.782.122 para financiar el 8% de los proyectos. Los proyectos mencionados apenas logran atender una cobertura del 14% de la población desmovilizada y participante del proceso de reintegración.

Gráfica 13. Proyectos productivos apoyados por la ACR en el departamento de Santander

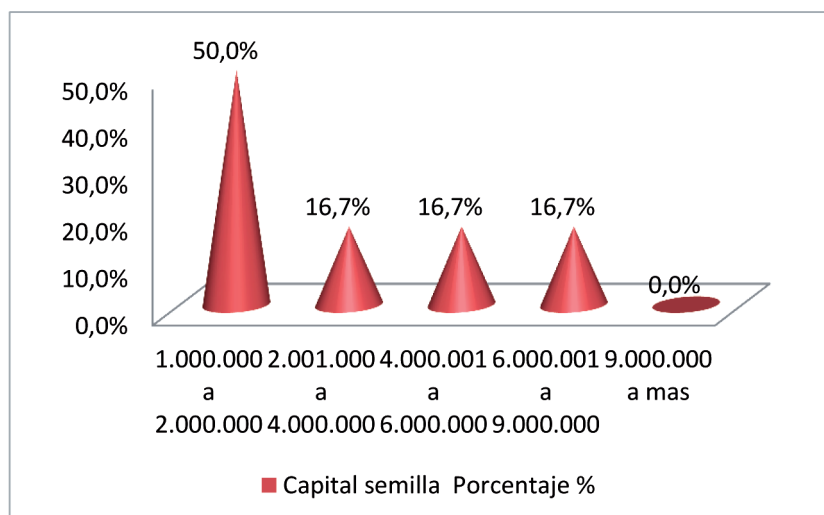


Fuente: ACR, marzo de 2012

Respecto de la inversión realizada se destaca un incremento en el año 2010 de los recursos y proyectos financiados del 212% en relación al año 2009. Pese al esfuerzo de incrementar acciones en la estrategia, es necesario ampliar la cobertura para lograr alternativas de ingreso a más personas en procura de su reintegración económica, sin dejar de lado el fortalecimiento de los proyectos con capacitación, asistencia técnica y articulación al mercado, que son la garantía de la sostenibilidad.

Respecto al año 2011 y 2012, la presente investigación no dispuso de información de la ACR en cuanto al número, montos y estado de los proyectos financiados. Desde los participantes en el proceso de reintegración, logró establecer aportes para capital semilla y capacitación en el 3,4% de la población, con aportes entre \$2.000.000 y \$8.000.000. En el 50% de estos casos con montos de \$2.000.000, 16% con apoyo de \$3.000.000 y en el 34% restante con aportes de \$8.000.000.

Gráfica 14. Aporte de capital semilla recibido para proyectos productivos de la población en proceso de DDR en Santander



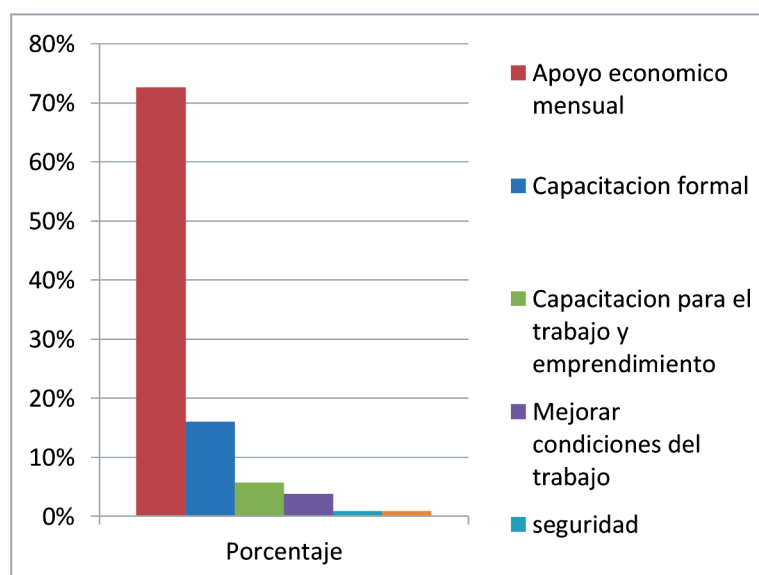
Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

3.3.6 Fortalezas que presenta el proceso de reintegración económica

Desde la valoración de los participantes se destacan seis fortalezas del proceso de reintegración económica. La primera, mencionada por el 73% de la población, se relaciona con el apoyo económico para la reintegración, otorgado por el Gobierno; al decir de éstos, les contribuye para el sustento de su familia, pago de arriendo, estudio, vestido, pago de deudas y en algunos aporta al ahorro. Quienes han sido beneficiados con el capital semilla destacan que les ha servido para emprender una actividad económica que les genera ingresos y les permite tener una ocupación.

En general se puede apreciar que los recursos por este concepto se han integrado al ingreso y al gasto familiar. El 16% destaca como la mayor fortaleza la educación formal que les ha permitido elevar su grado de escolaridad y que les abre oportunidades para aspirar a una mejor ubicación laboral. Existe un 6% que define como la fortaleza del programa de reintegración económica la formación para el trabajo, por cuanto los ha dotado de capacidad para enfrentar el mercado laboral, aquí se reitera la necesidad que tienen de mayor relacionamiento con el sector empresarial para facilitar su inserción al mercado laboral. Para el restante 5% la fortaleza está en la seguridad que les brinda el programa para mejorar las condiciones de trabajo y el poder avanzar en su proceso de reintegración con beneficios que tienen efectos en su familia.

Gráfica 15. Fortalezas del proceso de reintegración económica



Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

3.3.7 Debilidades del proceso de reintegración económica

Las debilidades se agrupan en seis factores principales: El primero relacionado con el apoyo a la reintegración, al respecto el 61% de la población manifiesta que tiene bastante trámite, que en las regiones apartadas no llega a tiempo, que ha disminuido a medida que avanza el proceso; el énfasis lo ubican en la necesidad de capital semilla para emprender o fortalecer proyectos productivos; de igual manera se refieren al monto del capital asignado en relación con los requisitos de capacitación que tienen que cumplir para la parte productiva, especialmente quienes se desmovilizaron de las AUC cuyo monto es de \$2.000.000.

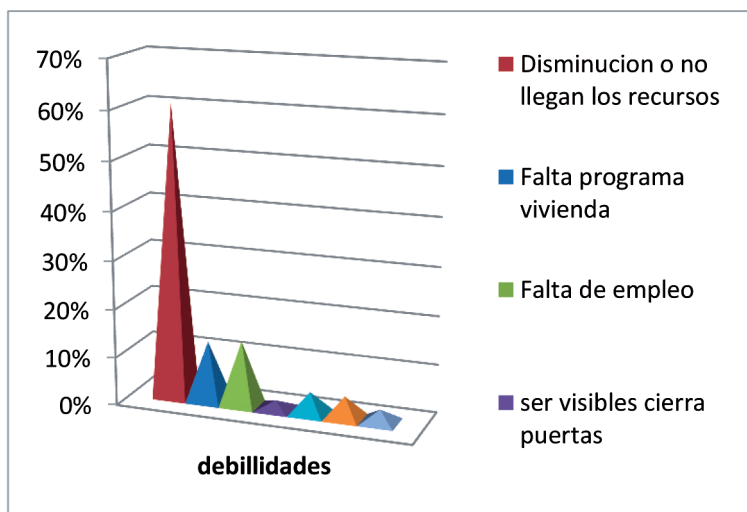
Al respecto resalta el hecho que para algunos el apoyo a la reintegración es visto como un ingreso del cual esperan un incremento anual y no como una acción temporal de ayuda humanitaria mientras ganan condiciones para estar en la sociedad autónomamente.

El segundo aspecto, para el 13% de la población, está en el hecho de que la vivienda no está considerada como un beneficio de reintegración. Al respecto manifiestan que el pago de arriendo es el gasto más alto a nivel familiar y que se convierte en las actuales condiciones en un factor de inestabilidad en el proceso de reintegración, pues el ingreso alcanzado por actividad económica no logra satisfacer necesidades básicas. Al respecto solicitan que se les brinde mayor acompañamiento para que sean tenidos en cuenta en la oferta pública, para quienes están en zonas rurales el acceso a tierras es fundamental, pues es la garantía de estabilidad económica.

El tercer aspecto en el orden de prioridades está en el acceso a mejores ubicaciones laborales, 13% de la población manifiestan que hasta hoy el esfuerzo les ha tocado solos, pero que a medida que se cualifican y avanzan en conocimientos y habilidades requieren un acompañamiento más directo y efectivo, comentan que hasta ahora este factor ha sido marginal, la corresponsabilidad de las empresas santandereanas en el tema de DDR ha sido inexistente, al respecto sienten que falta mayor sensibilización y compromiso de parte del sector privado y mejores estrategias que permitan un número mayor de vinculación en el sector público.

El 13% restante de población, establece como debilidades del proceso de reintegración que haberlos hecho visibles en el entorno los hace vulnerables, les cierra oportunidades laborales y de relacionamiento con la comunidad; también, especialmente las mujeres, manifiestan que los horarios de la capacitación tanto formal como para el trabajo no son adecuados, pues no tienen con quien dejar a sus hijos o su trabajo para la generación de ingresos lo realizan principalmente en servicios domésticos donde conseguir permiso de los empleadores es más difícil, al respecto manifiestan que sienten cierta inequidad pues por no participar en estas actividades pierden el subsidio, que para ellas es base en la subsistencia de sus familias ya que muchas llevan la jefatura del hogar.

Gráfica 16. Debilidades del proceso de reintegración económica



Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

La población desmovilizada puntualiza que llegaron a ser parte del conflicto armado por las condiciones precarias de vida, llena de carencias y falta de oportunidades para su desarrollo, algunos pensaron que las iban a resolver participando en el grupo armado, pero los resultados se conocen y están sobrediagnosticados; la desmovilización presenta una oportunidad de recomenzar, pero a pesar del tiempo que han pasado en el proceso de reintegración sienten que en parte la situación es similar: falta de oportunidades, carencias, necesidades no satisfechas, pobreza, exclusión social y demasiado esfuerzo para subsistir junto con sus familias, miran a sus hijos y no ven el futuro que quieren para ellos. Esperan que el proceso de reintegración genere estrategias más efectivas y de mayor impacto en la reintegración económica pues la precariedad, en ciertas condiciones, puede llevar a la reincidencia o a desencadenar nuevas formas de violencia.

Es importante manifestar que la estrategia de empleabilidad para la reintegración no presenta hasta ahora los resultados esperados que el proceso demanda, los esfuerzos de interacción entre ACR, entes territoriales y gremios económicos han sido tímidos, no ha existido compromiso real de las empresas, sus gremios y entes de representación, y faltan vínculos del nivel municipal y departamental con el proceso de DDR. Vale decir que el mayor esfuerzo se ha quedado en el entorno comunitario local, por lo que es de bajo impacto el cambio de las condiciones socioeconómicas de la población.

En este aspecto los desmovilizados perciben la prevención, el temor, la estigmatización de los empresarios que se refleja en el acceso, las condiciones y calidad del empleo. En la variable de reintegración económica las instituciones que hoy tienen bajo su responsabilidad la ejecución de la política de reintegración tendrán que hacer esfuerzos adicionales para lograr impactos positivos en el corto, mediano y largo plazo y responder al reto de devolver a la sociedad una población con goce de derechos y oportunidades que les garantice un buen vivir a ellos y a la sociedad.

Existe un último aspecto que, aunque no está relacionado directamente con el restablecimiento económico, fue incluido por la población como debilidad en el programa de reintegración socioeconómica, y tiene que ver con la débil asistencia jurídica por parte de la ACR, que no contribuye a informar sobre los cambios de ley y el significado de éstos en su situación jurídica, generando inestabilidad ante el desconocimiento legal y dificultad para establecerse en el entorno socioeconómico.

3.4 Salud de la población desmovilizada

La política de reintegración a nivel nacional brinda una cobertura en servicios de salud a los desmovilizados y a sus familias. De acuerdo al Decreto 128 de 2003, el plan de reincorporación incluye la vinculación a la red pública hospitalaria al desmovilizado y su familia cuando ingresan al programa del Ministerio de Defensa, y al Régimen Subsidiado en salud cuando se asignen los cupos por el Consejo Nacional de Seguridad en Salud. El objetivo es el de garantizar la oportunidad, calidad y accesibilidad a todos los servicios de salud que demande la población desmovilizada junto con su grupo familiar.

El Acuerdo 365 de 2007, establece las disposiciones para el no cobro de los copagos a poblaciones especiales en el régimen subsidiado, entre ellas la población desmovilizada y los miembros de su familia, y aclara que:

“Respecto de la población desplazada o desmovilizada que haya sido identificada mediante encuesta SISBEN en sus municipios de origen, prevalece su identificación como desplazado o desmovilizado en el lugar de residencia actual y por tanto no estará sujeta al cobro de copagos”¹⁷⁴.

3.4.1 Condiciones actuales de salud y atención recibida

De acuerdo a la información suministrada por la ACR a noviembre de 2011 en el departamento de Santander se encontraban afiliadas al sistema general de seguridad social en salud 1.204 participantes y sus grupos familiares, teniendo en cuenta que son población de estratos 1 y 2, y 450 cotizantes activos en el régimen contributivo que equivalen a la población ocupada.

El servicio de salud presenta para los desmovilizados dificultades de calidad y oportunidad en el servicio, las cuales son generalizadas para todos los usuarios del sistema pero afectan gravemente el proceso de reintegración dadas las características de la población. Es el caso de la desatención o mala atención de patologías mentales y afectaciones emocionales, entre ellas el consumo de sustancias psicoactivas o el stress postraumático, y otras situaciones en la misma línea relacionadas con la no inclusión en el POS y la falta de prevención en la atención de la salud mental.

De acuerdo a la valoración realizada por la población desmovilizada en reintegración sobre el estado de su salud se establece que 73% considera que tienen una buena salud, regular un 25% y mala un 2%. De igual manera la Tabla 22 establece que un 27% de la población sufre enfermedad o discapacidad que requiere atención del sistema de salud.

Tabla 22. Población en proceso de DDR de Santander según estado de salud

Ciudad	Con discapacidad o enfermedad grave o crónica	En estado de salud normal	Total
	Porcentaje %	Porcentaje %	Porcentaje %
Bucaramanga	5,6%	16,9%	22,5%
Floridablanca	3,9%	5,6%	9,6%
Piedecuesta	2,8%	2,8%	5,6%
Girón	2,2%	5,6%	7,9%
Lebrija	0,6%	1,7%	2,2%
Barrancabermeja	5,6%	22,5%	28,1%
Cimitarra	0,0%	4,5%	4,5%
Rionegro	1,7%	4,5%	6,2%
San Vicente	0,0%	3,4%	3,4%
Sabana de Torres	0,0%	1,7%	1,7%
El Carmen	4,5%	3,9%	8,4%
Total	27,0%	73,0%	100,0%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

174- MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Acuerdo 365 del 20 de septiembre de 2007.

Respecto al grupo poblacional que manifiesta un estado de salud deficiente, en la Tabla 23. Población en proceso DDR atendida por el sistema de salud con discapacidad o enfermedad grave o crónica, se puede apreciar que un 27% de personas discapacitadas o con enfermedad grave son atendidas por el sistema de salud, según el caso y sus particularidades con tratamiento, prótesis, rehabilitación.

Tabla 23. Población en proceso de DDR atendida por el sistema de salud con discapacidad o enfermedad grave o crónica

Ciudad	Tratamiento	Prótesis	Rehabilitación	Total
	Porcentaje %	Porcentaje %	Porcentaje %	Porcentaje %
Bucaramanga	19,5%	2,4%	7,3%	29,3%
Floridablanca	12,2%	0,0%	7,3%	19,5%
Piedecuesta	4,9%	0,0%	0,0%	4,9%
Girón	9,8%	0,0%	0,0%	9,8%
Lebrija	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Barrancabermeja	12,2%	4,9%	2,4%	19,5%
Cimitarra	0,0%	2,4%	0,0%	2,4%
Rionegro	0,0%	2,4%	0,0%	2,4%
San Vicente	2,4%	0,0%	4,9%	7,3%
Sabana de Torres	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
El Carmen	0,0%	4,9%	0,0%	4,9%
Total	61,0%	17,1%	22,0%	100%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

Al indagar sobre la calidad de los servicios manifiestan dificultades en la entrega de medicamentos, pues en algunos casos no son cubiertos por el POS, otros manifiestan dificultades con la afiliación de los miembros de sus familias, aparecen registrados en la EPS pero en la base de datos de la IPS no aparecen registrados y no les brindan la atención. Muchos de estos casos se presentan cuando las personas cambian de ciudad de residencia y no se actualizan las bases de datos de afiliados a los sistemas de atención.

Existe un 77% de las personas con enfermedades graves que el sistema de salud no atiende, especialmente en casos de personas con problemas de drogadicción y alcoholismo.

El estudio llama la atención sobre la necesidad de considerar los efectos de las deficiencias del sistema de salud en el proceso de reintegración de los participantes,

ante la ausencia de programas dirigidos particularmente a las necesidades de salud física y mental de la población desmovilizada, tales como las discapacidades físicas, tratamientos de drogadicción y severos casos de salud mental.

3.4.2 Atención psicosocial como parte del programa de reintegración

La estrategia de atención psicosocial es desarrollada directamente por los profesionales de los Centros de Servicios de la ACR. Tiene dentro de sus objetivos el establecimiento de relaciones asertivas de los desmovilizados, la solución no violenta de conflictos, el conocimiento y el ejercicio de derechos y deberes en el contexto educativo, productivo, comunitario y familiar. Realizan además actividades familiares y comunitarias para el fortalecimiento del proceso de reintegración. A marzo de 2012 el cubrimiento con atención psicosocial era del 99% de la población desmovilizada vinculada al proceso de reintegración.

La Tabla 24. Población en proceso DDR en Santander con atención Psicosocial, establece que la población desmovilizada asiste a los talleres sicosociales por voluntad propia el 37,8%; la mayoría, con un 62.2%, tiene distintas percepciones entre satisfacciones e inconformidades que se expresan en casos: se participa por ser un requisito condicionado del programa, situación que tiene su explicación en el largo tiempo de permanencia dentro del mismo; para otros, se participa con perspectiva de los avances logrados; y otros consideran que definitivamente en el actual momento el programa de atención psicosocial no les está aportando respuestas reales a sus problemáticas.

Tabla 24. Población en proceso de DDR en Santander con atención psicosocial

Ciudad	Asisten voluntariamente		Como requisito del programa	
	Frecuencia	Porcentaje %	Frecuencia	Porcentaje %
Bucaramanga	16	8,6%	26	14,1%
Floridablanca	4	2,2%	15	8,1%
Piedecuesta	2	1,1%	8	4,3%
Girón	6	3,2%	8	4,3%
Lebrija	1	0,5%	3	1,6%
Barrancabermeja	23	12,4%	28	15,1%
Cimitarra	1	0,5%	7	3,8%
Rionegro	5	2,7%	8	4,3%
San Vicente	2	1,1%	4	2,2%
Sabana de Torres	0	0,0%	3	1,6%
El Carmen	10	5,4%	5	2,7%
Total	70	37,8%	115	62,2%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

Al examinar los beneficios que se reconocen en la atención psicosocial en el grupo de participantes aparecen diferentes apreciaciones, de las cuales se destacan dos por ser las de mayor frecuencia en el nivel de respuestas: la primera reconoce los aportes del proceso en el ámbito personal, familiar y en el entorno social. En lo personal,

llama la atención el enfoque trabajado por la ACR especialmente con el manejo del pasado: en este aspecto destacan el cuidado emocional, la superación de miedos, de la agresividad, pero curiosamente hacen alusión al olvido del daño realizado, no hablar del pasado, no recordar; aspecto que riñe con los deberes de aportar a la memoria histórica sobre los hechos violentos y la afectación a las víctimas.

Positivamente reconocen el cambio de valores humanos logrado a nivel de “sentirse mejor persona”: le encuentran un valor a la vida, se recuperan las confianzas, logran actuar con respeto y tolerancia, tienen autocontrol, reconocen un valor al trabajo, destacan el cambio de rol en la vida civil y la capacidad lograda de adaptarse a la nueva vida. Frente a este aspecto del programa también destacan el avance que logran en la construcción de proyecto de vida, resaltan que a pesar de ser un proceso lento hoy les ha permitido tener sueños, proyecciones, superar problemas, sentirse libres.

En cuanto al entorno familiar los participantes destacan que la atención psicosocial les ha servido para recomponer o establecer mejores relaciones con sus parejas e hijos, solución a problemas de pareja, dedicación y cuidado de la familia; el desarrollo de emociones ha sido un proceso importante, hoy manifiestan afecto, cariño, amor, sentimientos que al decir de ellos estaban negados en su interior y que ahora pueden exteriorizar.

El proceso investigativo en los diferentes momentos de encuentro con la población en reintegración, pudo apreciar la valoración de contar con una familia como la mayor ganancia del proceso, poder compartir con ella, sin desconocer los problemas que persisten con situaciones de violencia intrafamiliar.

En el contexto de sus relaciones con el ámbito social, reconocen avances en la comprensión de sus responsabilidades, deberes y obligaciones; manifiestan que el trabajo psicosocial les ha servido para relacionarse, convivir con las personas, dejar atrás los odios, la violencia, a mirar a las personas de otra manera y en general a ganar unas habilidades sociales en la vida comunitaria para salir adelante en el proceso de integración.

Existe un segundo punto de vista, crítico del proceso psicosocial, que manifiesta que éste se ha construido a prueba y error, que es repetitivo y con encuentros permanentes, muy genérico, que no logra superar las afectaciones de la guerra, que el enfoque del programa psicosocial carece de personal especializado para atender los casos especiales del grupo de participantes; y que con los cambios que se han dado recientemente, en el que un solo profesional atiende de manera integral y en diferentes áreas a un grupo amplio de participantes, muchos se quedarán sin la atención psicosocial personalizada que algunos casos ameritan, situación que suma a la problemática del sistema de salud.

De igual manera manifiestan que existen otro tipo de dificultades que limitan la asistencia a los talleres psicosociales, entre ellos los horarios y el costo del transporte, especialmente manifiesto por quienes residen en zona rural y destacan que se hace necesaria la atención individual allí, pues existen casos que requieren tratamiento especial y confidencial.

Existen quienes manifiestan sentirse incómodos pues todos los trabajos los hacen en forma grupal, y ellos desconocen quienes son los integrantes del grupo, las situaciones que se ventilan al interior de estos talleres son muy personales y sienten que quedan muy visibles, recomiendan realizar sesiones más privadas que le permitan expresarse en confianza a cada participante, sin prevenciones, y en algunos casos por la seguridad de cada uno. Consideran que la atención psicosocial también debería involucrar a la familia, realizar las visitas al hogar para el trabajo psicosocial en grupo familiar. De igual manera sugieren para la ACR cambiar la estrategia de pedagógica de talleres y dinámicas, que consideran son repetitivas, aburridas y poco prácticas en la cotidianidad de sus vidas.

3.5 Ámbito Organizativo y comunitario

La caracterización establece que del total de población desmovilizada participante en el proceso de reintegración entrevistada, el 49,4% participa en actividades comunitarias y de organización social, el 50,6% no participa. Entre las razones que sustentan para la no participación, están: no quieren ser visibles en sus comunidades, es evidente que pesa el estigma y el temor al rechazo; al igual expresan que no quieren problemas con bandas o grupos armados organizados, algunos manifiestan que esto les trae problemas pues en el imaginario de algunas comunidades ellos son los llamados a “establecer el orden” frente a problemas cotidianos y conflictos en su comunidad.

Sin embargo, es claro que los esfuerzos y las acciones del proceso de DDR han sido insuficientes para acabar la desconfianza de las comunidades hacia los desmovilizados. La desconfianza y estigmatización se ha acentuado por dos razones importantes: la primera, la incapacidad del programa de reintegración de vincular la comunidad, de hacerla participe del proceso de reintegración y beneficiarla del mismo, reconstruyendo así el tejido social de las comunidades donde se generó y validó el uso de la violencia. El programa debería enfatizar la incorporación del modelo de reintegración comunitaria, como lo establece el Documento Conpes 3554, para integrar la población desmovilizada en las comunidades receptoras a través de procesos de construcción de ciudadanía y proyectos ciudadanos, creando condiciones que faciliten el trabajo conjunto en un contexto democrático de cultura de la legalidad y los derechos humanos.

La segunda razón está puesta en las actuaciones de los mismos desmovilizados, quienes en la construcción de posibles liderazgos sociales siguen estando atrapados en la trampa de la seguridad, en la función del control represivo y en el ejercicio de liderazgos autoritarios. En el desarrollo de la investigación en Barrancabermeja se manifestaba que de alguna manera la relación entre sociedad civil y desmovilizados sigue estructurándose sobre el eje de la demanda y oferta de seguridad, pues los desmovilizados se conservan en el imaginario de las comunidades como una figura autoritaria, con la capacidad de lograr lo que quieren, imaginarios que legitiman y permiten nuevas actuaciones que ponen en alto riesgo los procesos de reintegración.

Tabla 25. Participación de la Población en proceso de DDR en el ámbito organizativo y comunitario

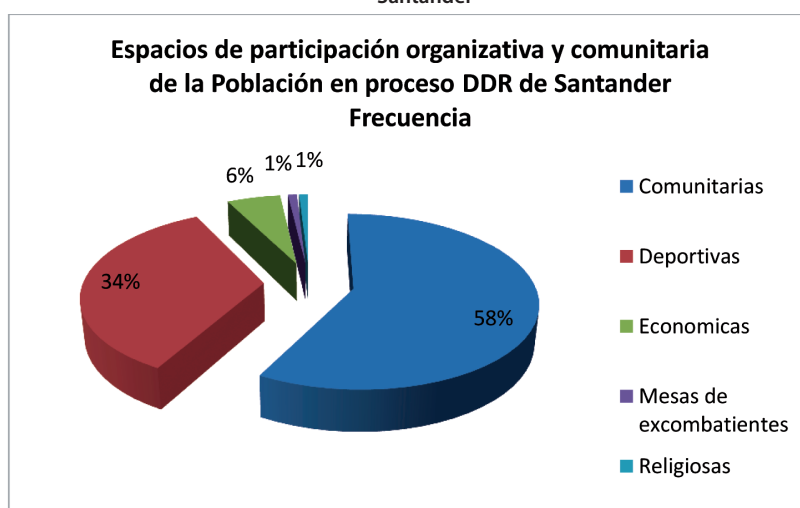
Ciudad	Participan		No participan	
	frecuencia	Porcentaje %	Frecuencia	Porcentaje %
Bucaramanga	16	9,0%	24	13,5%
Floridablanca	6	3,4%	11	6,2%
Piedecuesta	2	1,1%	8	4,5%
Girón	6	3,4%	8	4,5%
Lebrija	3	1,7%	1	0,6%
Barrancabermeja	25	14,0%	25	14,0%
Cimitarra	7	3,9%	1	0,6%
Rionegro	8	4,5%	3	1,7%
San Vicente	3	1,7%	3	1,7%
Sabana de Torres	2	1,1%	1	0,6%
El Carmen	10	5,6%	5	2,8%
Total	88	49,4%	90	50,6%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

La Gráfica 17. Espacios de participación organizativa y comunitaria de la población en proceso DDR en Santander, permite apreciar las formas de participación de la población desmovilizada en las comunidades receptoras. Se reconocen varios espacios, el primero de ellos propiciado por el programa de la ACR para la participación en acciones orientadas a estimular escenarios de convivencia con la población receptora que por lo general es población víctima, desplazada o vulnerable, por tanto en este contexto se realizan actividades comunitarias de reforestación, mejoramiento del entorno, adecuaciones locativas en hogares y colegios y jornadas de recreación con niños y niñas.

Las personas desmovilizadas se han vinculado a la comunidad dentro de una opción individual sin manifestar su condición de desmovilizado, participando en el trabajo organizativo especialmente a través de las juntas de acción comunal del barrio o vereda, el trabajo a través de fundaciones como el caso de Renacer en Barrancabermeja que orienta a jóvenes y personas con problemas de drogadicción principalmente. De igual manera se han hecho parte de las asociaciones de padres del colegio de sus hijos. Otros espacios en que algunos participan son las Mesas de participantes (desmovilizados) de Barrancabermeja y Bucaramanga.

Gráfica 17. Espacios de participación organizativa y comunitaria de la población en proceso de DDR en Santander



Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

Otro espacio de integración se da en la actividad deportiva, como campeonatos de futbol y micro futbol en barrios, campeonatos deportivos en empresas, prácticas deportivas en atletismo y eventos de instituciones educativas donde cursan sus estudios. Estas actividades se destacan entre la población desmovilizada de los municipios de Bucaramanga y su área metropolitana, Barrancabermeja, Rionegro, San Vicente y El Carmen.

El desarrollo de la actividad económica propicia también el relacionamiento e integración con la comunidad. En este ámbito se identifican la asociación de productores agropecuarios e industriales de Colombia del municipio de San Vicente, una empresa de estampados y publicidad y la asociación “La rápida” integrada por mototaxistas en el municipio de Rionegro; otra forma asociativa es un proyecto ecoturístico en el municipio de El Carmen.

3.6 Seguridad de la población desmovilizada

La seguridad de los desmovilizados al igual que la de cualquier colombiano es responsabilidad exclusiva del Estado y sus instituciones encargadas. Es por eso que desde 2008 la Policía Nacional y la ACR vienen implementando el Plan Padrino, una estrategia en la que los uniformados acompañan las actividades psicosociales y comunitarias realizadas en el marco del proceso de reintegración, y dan asesoría en temas de autoprotección.

Este Plan ofrece seguridad a los desmovilizados al disponer de 1.130 policías en los 757 municipios donde están asentados los participantes del proceso de reintegración, y establece una estrategia de atención personalizada para la prevención y la atención de riesgos. De igual manera para los contratistas de la ACR que trabajan en los Centros de Servicio, durante los desplazamientos hacia municipios y barrios en zonas de alto riesgo que realizan en el marco de su labor. Lo anterior ha tenido un gran impacto en la disminución de casos de riesgo en las comunidades donde residen¹⁷⁵.

175- AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN, “El Plan Padrino de la Policía Nacional presenta resultados positivos en materia de seguridad de los desmovilizados”. Disponible en: http://www.reintegracion.gov.co/Es/prensa/Paginas/plan_padrino.aspx. Fecha de consulta: 14 de mayo de 2012.

La población en procesos de DDR entrevistada en los once municipios del departamento de Santander manifiestan respecto de su seguridad personal que se sienten seguros el 56,2%, inseguros el 37,6% y en alto riesgo 6,2%, las dos últimas sustentadas en las amenazas e intento de reclutamiento de bandas ilegales u otros grupos armados.

3.6.1 Amenazas

El estudio de caracterización realizado estableció que la seguridad del 28,7% de los entrevistados se ha visto afectada por las amenazas recibidas contra su vida y la de su familia. Estos casos se presentan especialmente en Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca, Rionegro, Carmen de Chucurí, San Vicente, Girón, Piedecuesta.

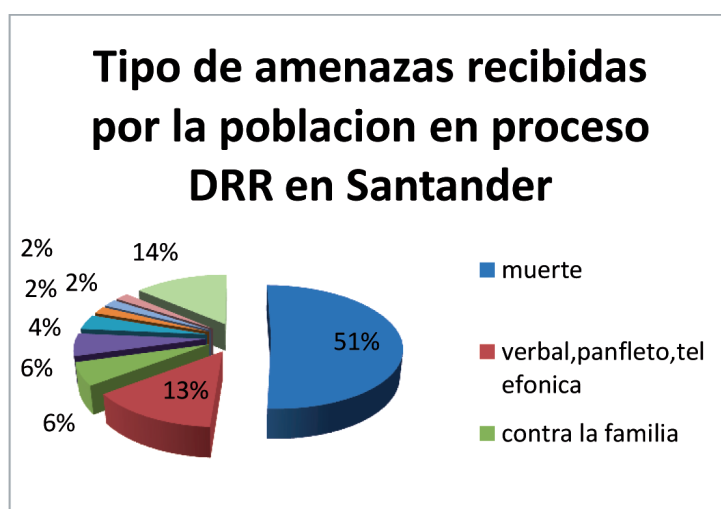
Tabla 26. Amenazas recibidas por la población participante en proceso de DDR Departamento de Santander

Ciudad	Ha recibido amenazas		No ha recibido amenazas	
	Frecuencia	Porcentaje %	Frecuencia	Porcentaje %
Bucaramanga	15	8,4%	25	14,0%
Floridablanca	6	3,4%	11	6,2%
Piedecuesta	2	1,1%	8	4,5%
Girón	2	1,1%	12	6,7%
Lebrija	0	0,0%	4	2,2%
Barrancabermeja	17	9,6%	33	18,5%
Cimitarra	1	0,6%	7	3,9%
Rionegro	3	1,7%	8	4,5%
San Vicente	2	1,1%	4	2,2%
Sabana de Torres	0	0,0%	3	1,7%
El Carmen	3	1,7%	12	6,7%
Total	51	28,7%	127	71,3%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

La Gráfica 18. Tipo de amenazas recibidas por la población en procesos DDR en Santander, establece que el 57% de éstas han sido de muerte y de éstas en un 6% se han recibido disparos. En un 14% de los casos las amenazas las han realizado a través de panfletos, en forma verbal y telefónicamente; un 6% de las amenazas las han recibido en contra de la familia; el 4% recibió amenazas desde la cárcel por parte de postulados a beneficios de la Ley 975 de 2005, modalidad donde telefónicamente les inducen qué actuaciones deben hacer a cambio de no mencionarlos como participantes en hechos violentos en las audiencias de Justicia y Paz; otro 6% de las amenazas están dirigidas a presionar el rearme, desalojo y no regreso al sitio de origen. El restante 14% no manifestaron el tipo de amenaza, al decir de éstos, por la gravedad que el caso tiene o porque simplemente no lo quieren mencionar.

Gráfica 18. Tipo de amenazas recibidas por la población en proceso de DDR en Santander



Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

El 55% de los participantes que han recibido amenazas manifiestan que reportaron el tema a las autoridades competentes. El restante 45% no las reportó; como razones aducen 14 de ellos que buscaron solucionarlo por medios propios, pues no querían agravar la situación; 4 de ellos consideraron que perdían el tiempo al denunciar pues no les iban a poner cuidado ni a dar respuesta; los restante 5 no denunciaron por miedo.

Tabla 27. Reporte de las amenazas recibidas por la población desmovilizada

Ciudad	Ha reportado amenazas		No ha reportado amenazas		Total	
	frecuencia	Porcentaje %	frecuencia	Porcentaje %	Total	Porcentaje %
Bucaramanga	6	11,8%	9	17,6%	15	29%
Floridablanca	5	9,8%	1	2,0%	6	12%
Piedecuesta	2	3,9%	0	0,0%	2	4%
Girón	1	2,0%	1	2,0%	2	4%
Lebrija	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
Barrancabermeja	11	21,6%	6	11,8%	17	33%
Cimitarra	0	0,0%	1	2,0%	1	2%
Rionegro	1	2,0%	2	3,9%	3	6%
San Vicente	0	0,0%	2	3,9%	2	4%
Sabana de Torres	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
El Carmen	2	3,9%	1	2,0%	3	6%
Total	28	54,9%	23	45,1%	51	100%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

La Tabla 28. Población en proceso DDR en Santander que ha recibido protección una vez denuncia las amenazas, muestra que de los casos reportados a las autoridades recibieron protección 32,9%, correspondiente a 9 casos; los 19 casos restantes que equivalen al 67,9% no recibieron protección. Al decir de los participantes afectados: porque las autoridades consideraron que no era necesario (6 casos), no les pusieron cuidado (4 casos), se trasladó de ciudad (3 casos), no les respondieron (5 casos) y el caso restante manifiesta no conocer las razones por las cuales no le brindaron protección.

Tabla 28. Población en proceso de DDR en Santander que ha recibido protección una vez denuncia las amenazas

Ciudad	Ha recibido protección		No ha recibido Protección		Total	
	Frecuencia	Porcentaje %	Frecuencia	Porcentaje %	Frecuencia	Porcentaje %
Bucaramanga	3	10,7%	3	10,7%	6	21%
Floridablanca	0	0,0%	5	17,9%	5	18%
Piedecuesta	1	3,6%	1	3,6%	2	7%
Girón	0	0,0%	1	3,6%	1	4%
Lebrija	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
Barrancabermeja	5	17,9%	6	21,4%	11	39%
Cimitarra	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
Rionegro	0	0,0%	1	3,6%	1	4%
San Vicente	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
Sabana de Torres	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
El Carmen	0	0,0%	2	7,1%	2	7%
Total	9	32,1%	19	67,9%	28	100%

Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

3.6.2 Reincidencia

Datos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación señalan que al menos un 15,5% – tanto del paramilitarismo como de las guerrillas – han reincidido cometiendo diversos delitos¹⁷⁶.

El 39,4% de las personas participantes en el proceso de reintegración entrevistadas manifiestan que han recibido propuestas de grupos ilegales y bandas armadas, las cuales responden a intentos de reclutamiento por parte de las estructuras emergentes. Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja son los municipios con el mayor número de casos de propuestas para la reincidencia.

Tabla 29. Población en proceso de DDR en Santander que ha recibido propuestas de GAI para participar en acciones ilegales

Ciudad	Ha recibido propuestas		No ha recibido propuestas		Total	
	Frecuencia	Porcentaje %	Frecuencia	Porcentaje %	Total	Porcentaje %
Bucaramanga	20	11,4%	17	9,7%	37	21%
Floridablanca	9	5,1%	8	4,6%	17	10%
Piedecuesta	4	2,3%	6	3,4%	10	6%
Girón	6	3,4%	8	4,6%	14	8%

176- RADIO SANTAFE. “Desmovilizados en Bolívar denuncian amenazas”. Disponible en <http://www.radiosantafe.com/2011/02/03/desmovilizados-en-bolivar-denuncian-amenazas/>. Consultado: 14/06/12

Lebrija	1	0,6%	3	1,7%	4	2%
Barrancabermeja	19	10,9%	31	17,7%	50	29%
Cimitarra	3	1,7%	5	2,9%	8	5%
Rionegro	4	2,3%	7	4,0%	11	6%
San Vicente	0	0,0%	6	3,4%	6	3%
Sabana de Torres	1	0,6%	2	1,1%	3	2%
El Carmen	2	1,1%	13	7,4%	15	9%
Total	69	39,4%	106	60,6%	175	100%

Fuente: Corporación
Compromiso, Encuesta de
caracterización socioeconómica
de población en proceso de DDR
en Santander, marzo de 2012

Dentro de las propuestas que reciben está la paga de \$1.200.000 por el ingreso a bandas rurales y \$1.000.000 a bandas en zonas urbanas. La negativa del ingreso a las bandas ilegales incluso puede poner en riesgo sus vidas y la de sus familias, razones por las cuales prefieren trasladar su sitio de residencia a otra ciudad.

CAPITULO VI

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE REINTEGRACIÓN Y LA POLÍTICA DDR EN SANTANDER

1. Política de reintegración social y económica de personas y grupos armados al margen de la ley y el papel de la Agencia Colombiana para la Reintegración

1.1 Breve acercamiento al desarrollo institucional, cronología y normatividad jurídica para la Reintegración

El Estado colombiano en las últimas décadas ha desarrollado procesos de DDR, desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil de diversos grupos armados, de guerrillas y autodefensas, mediante negociaciones y acuerdos colectivos, y además ha promovido la desmovilización individual; procesos que en el período 2002 a mayo 13 de 2012 reportan la desmovilización colectiva de 31.846 personas y 24.953 desmovilizaciones individuales.

A lo largo de estos procesos, resultado de sus aciertos y errores, y también de las experiencias en otros países, el Estado colombiano ha construido una institucionalidad, una normatividad jurídica y una política para los procesos de DDR.

De una parte, ha desarrollado una institucionalidad encargada de orientar y coordinar la implementación de la política:

- En diciembre de 1991, se creó la Dirección del Programa Presidencial para la Reinserción, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; en 1999, traslada el programa al Ministerio del Interior mediante la creación de la Dirección General para la Reinserción (DGR);

- En 2001 se crea el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) en el Ministerio de Defensa, para coordinar las primeras fases del proceso de desmovilización individual de adultos y la desvinculación individual de menores de edad; en febrero de 2003 se transforma la DGR en el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil de personas y grupos alzados en armas (PRVC) adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia;
- En septiembre de 2006 se crea la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de personas y grupos alzados en armas y en 2011 se transforma en la Agencia Colombiana para la Reintegración Social y Económica de personas y grupos alzados en armas.

De otra parte, se ha construido un marco jurídico que establece los lineamientos y orientaciones de política.

- Mediante las leyes 77 de 1989, 104 de 1993, 241 de 1995, y el Decreto 213 de 1991, se otorgaron facultades al gobierno para adelantar negociaciones de paz con grupos armados organizados al margen de la ley y conceder beneficios jurídicos por hechos constitutivos de delitos políticos a miembros de organizaciones que se reintegraran a la vida civil; las modifica la Ley 418 de 1997 manteniendo el espíritu de las mismas y mediante Ley 548 de 1999 se prorrogan estas facultades hasta diciembre de 2002.
- La Ley 782 de diciembre de 2002, prorroga la vigencia de la Ley 418 y otorga facultades al gobierno para realizar acercamientos con grupos armados ilegales, tanto autodefensas ilegales como guerrillas, para llevar a cabo negociaciones que permitan la desmovilización de los miembros de estas organizaciones, incorpora disposiciones especiales para menores desvinculados de grupos armados y eliminó el reconocimiento del carácter político como condición para negociar con grupos al margen de la ley y otorgar beneficios jurídicos. El Decreto 128 de 2003, reglamenta la política de reincorporación a la vida civil, política de corto plazo, que desarrollaba actividades asistenciales y humanitarias. En julio de 2005 se sanciona la Ley 975 de 2005, de Justicia y Paz, que se reglamenta mediante el Decreto 4760 de diciembre de 2005.
- Mediante los decretos 3041 y 3043 de 2006, 395 y 3097 de 2007 y el 1059 de 2008, se ha reglamentado el desarrollo y aplicación de la política. En diciembre de 2007, mediante el Decreto 4690 se crea la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de grupos armados ilegales. En diciembre de 2008 se aprueba el Conpes 3554, el cual establece la Política de Reintegración Social y Económica para personas y grupos armados ilegales, estableciéndola como plan de estado y de sociedad con visión de largo plazo, que busca promover la incorporación efectiva del desmovilizado con voluntad de paz y de su familia a las redes sociales del Estado y a las comunidades receptoras.
- En diciembre de 2010 se aprueba en el Congreso la Ley 1424, diseñada por el gobierno sobre la marcha para evitar que miles de paramilitares desmovilizados desde 2003 fueran dar a la cárcel, definiendo una fórmula para que los procesos judiciales continúen hasta que haya sentencia y aplica para los delitos de pertenencia al grupo armado -concierto para delinquir simple o agravado, el porte y uso ilegal de uniformes, armas, municiones y de equipos de transmisión y recepción-. Se

les suspende la orden de captura y la pena que reciban a los ex paramilitares que no hayan cometido ningún delito desde su desmovilización, que suscriban el acuerdo de contribución a la verdad y la reparación, que cuente la verdad sobre su participación en la guerra ante el Centro de Memoria Histórica creado por la Ley de Víctimas, que cumplan con el proceso de reintegración a la vida civil, que reparen a las víctimas y participen en actividades sociales con el propósito de reparación. La reintegración que era voluntaria, ahora es obligatoria.

Una característica importante de la política de DDR en Colombia, es que se ha construido sobre la marcha de los procesos, es producto del ensayo-error, de los aciertos y las dificultades presentadas en su implementación, además que se va construyendo e implementando en medio de la continuidad del conflicto armado interno, factor que complejiza aún más los procesos de reintegración a la vida civil.

1.2 Ruta de la desmovilización en Colombia

El Estado colombiano ha construido una ruta para los procesos de desarme y desmovilización de personas y grupos armados ilegales o al margen de la ley, con dos caminos diferenciados: El primero para la desmovilización individual de integrantes de grupos armados al margen de la ley y el segundo para los procesos de desmovilización colectiva de grupos armados al margen de la ley.

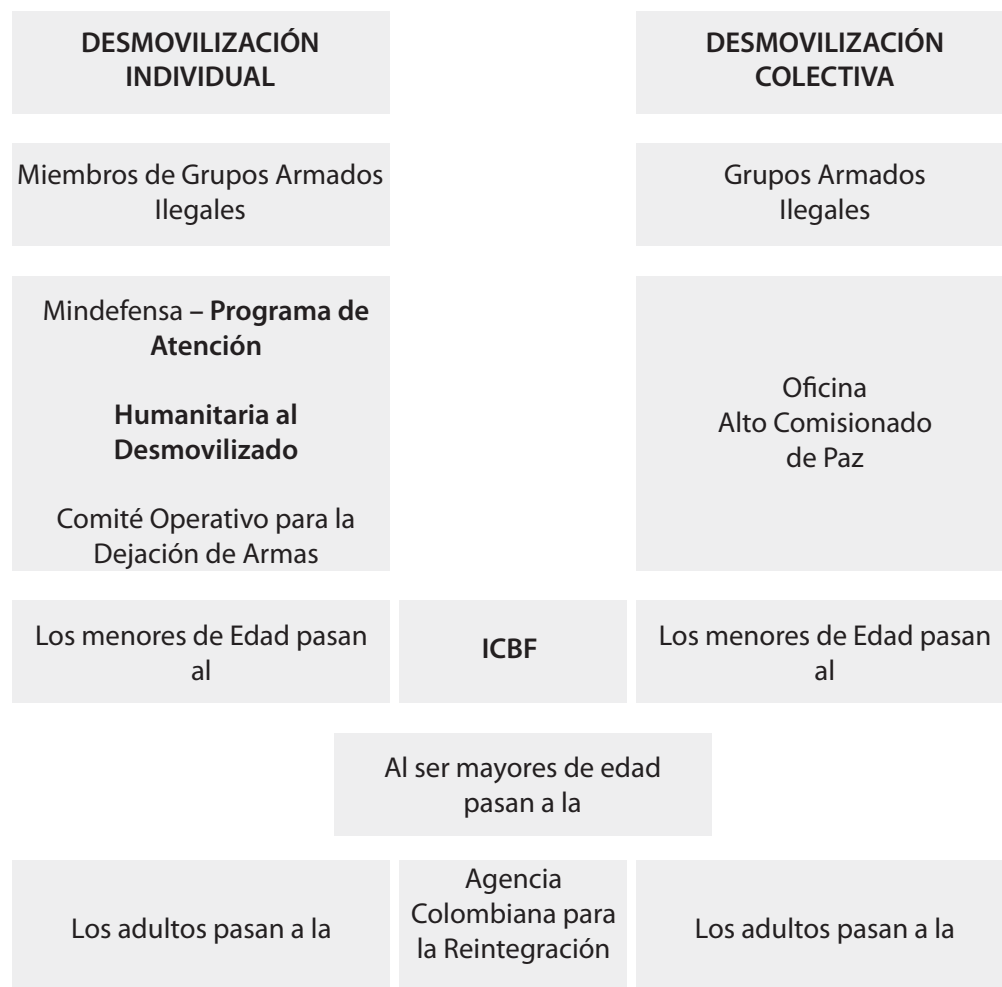
El camino para la desmovilización individual empieza con la presentación del integrante de grupo, la manifestación de su deseo de desmovilizarse y la entrega de armamento y material de guerra ante miembros de la policía, ejército, armada o fuerza aérea, ante alcaldes o gobernadores, jueces o fiscales, representantes de la Procuraduría General de la Nación o la Defensoría del Pueblo, los cuales reportan a la guarnición militar más cercana y a la Fiscalía, y se traslada al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, el cual se encarga de brindar alojamiento, alimentación, vestuario, atención en salud, atención psicológica, seguridad, transporte hasta el lugar de ubicación temporal o definitiva, y de adelantar la documentación requerida, en la cual se constata que la persona ha pertenecido a una organización armada al margen de la ley y que tiene la voluntad de abandonarla y de reincorporarse a la vida civil. Luego se presenta ante el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) el cual decide si lo vincula al programa o no.

Si la persona que expresa su decisión de desmovilizarse es menor de edad será transferido al ICBF para que sea ubicado en un Centro de Atención Especial, en el cual se brinda alojamiento, alimentación, vestuario, atención en salud, atención psicológica, seguridad, y un programa especializado en el restablecimiento de derechos, especialmente de acceso a educación, formación para el trabajo y el restablecimiento de redes sociales de apoyo, hasta cuando sea mayor de edad momento en que pasa a registrarse ante la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR y podrá disfrutar de los servicios que se tienen para la reintegración social y económica de la población desmovilizada.

Si la persona certificada por el CODA es mayor de edad, ingresa al registro de la ACR y podrá disfrutar de los beneficios jurídicos y sociales establecidos en la ley, obtención de documentos de identificación (cédula de ciudadanía, libreta militar), acceso a servicios de salud, atención psicosocial, educación, formación para el trabajo, apoyo para acceso a empleo o proyecto productivo.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz es la encargada de adelantar las negociaciones con los grupos armados al margen de la ley que mediante la suscripción de acuerdos y cronogramas conduzcan al desarme y desmovilización colectiva y al comienzo del proceso de reincorporación a la vida civil. Esta oficina se encarga de organizar la documentación requerida para la identificación de los integrantes del grupo que se desmoviliza y de la situación jurídica de los mismos, entregando la información al CODA para que se apruebe la desmovilización del grupo armado y la certificación de los integrantes en el programa de reincorporación a la vida civil.

RUTA DE LA DESMOVILIZACIÓN EN COLOMBIA



Los menores de edad que se desmovilicen mediante procesos colectivos también pasan a la protección del ICBF y a los programas de atención integral para restitución de derechos de los desvinculados del conflicto armado, y cuando alcanzan la mayoría de edad pasan al registro de la ACR y a los servicios que allí se brindan a la población desmovilizada.

Tabla 30. Cifras de la desmovilización en Colombia
Del 7 de agosto de 2002 al 13 de mayo de 2012

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012					2012	TOTAL	%
											Ene	Feb	Mar	Abr	May			
TOTAL DESMOVILIZADOS	730	2538	2972	2564	2460	3192	3461	2638	2446	1527	100	106	77	96	46	425	24.953	
HOMBRES	623	2162	2571	2242	2035	2536	2727	2045	1838	1152	83	78	52	70	32	315	20.246	81,14
MUJERES	107	376	401	322	425	656	734	593	608	375	17	28	25	26	14	110	4.707	18,86
MENORES	232	434	513	365	384	353	288	221	248	248	24	13	5	7	7	56	3.342	13,39
MAYORES	498	2104	2459	2199	2076	2839	3173	2417	2198	1279	76	93	72	89	39	369	21.611	86,61
TOTAL	730	2538	2972	2564	2460	3192	3461	2638	2446	1527	100	106	77	96	46	425	24.953	100
FARC	529	1376	1300	1135	1558	2480	3027	2128	2009	1308	86	93	65	81	43	368	17.218	69,00
AUI	0	692	1269	1096	470	155	0	0	65	0	0					0	3.747	15,02
ELN	139	405	333	301	359	423	403	492	359	213	14	13	12	15	3	57	3.484	13,96
DISIDENCIAS	62	65	70	32	73	134	31	18	13	6	0					0	504	2,02
TOTAL GRUPOS	730	2538	2972	2564	2460	3192	3461	2638	2446	1527	100	106	77	96	46	425	24.953	
SANTANDER	60	157	142	138	71	79	41	61	29	24	1	1	0	1	1	4	806	3,2%

Fuente: Ministerio de
Defensa nacional. Programa
de Atención Humanitaria al
Desmovilizado 2012

Entre el 7 de agosto de 2002 y el 13 de mayo de 2012, las estadísticas del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional reportan que se han presentado 24.953 desmovilizaciones individuales, de las cuales el 18,86% (4.707) fueron mujeres.

Del total de desmovilizados el 69,00% eran integrantes de las Farc, el 15,02% integrantes de autodefensas desmovilizados individualmente, el 13,96% integraban el Eln y el 2,02% pertenecían a disidencias de grupos armados al margen de la ley.

De las personas desmovilizadas, 3.342 eran menores de edad al momento de su desvinculación del grupo armado, que representan el 13,9% del total.

Valga señalar la preocupación y rechazo a la práctica del reclutamiento y vinculación de menores en el conflicto armado, que según datos del estudio realizado por Natalia Springer¹⁷⁷, con niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado, muestran que el 65,7% de los NNA fueron vinculados entre los 6 y 14 años de edad, en clara violación de toda la normatividad vigente; que los niños además de combatir están siendo empleados por los grupos armados en diversas modalidades: hacer mandados, llevar razones y hacer llamadas, labores de inteligencia, logística, milicia y transporte de víveres, alimentos, minas y explosivos, todas orientadas a cumplir propósitos relacionados directamente con el conflicto armado.

El análisis realizado por Springer, con una población de 10.732 personas desmovilizadas registradas en el sistema de información, entre agosto de 2002 y diciembre de 2007, encuentra que el promedio de ingreso formal de los niños, niñas

177- SPRINGER, Natalia. "Prisioneros combatientes". Datos del primer informe exploratorio sobre el uso de niños niñas y adolescentes para los propósitos del conflicto armado en Colombia. Bogotá, abril de 2012.

y adolescentes a los grupos armados fue a los 12,9 años y que “una proporción no inferior al 42,16% del total de combatientes desmovilizados/capturados de las Farc y el 45.25% de los combatientes desmovilizados/capturados del Eln ingresaron a las filas de estos grupos armados siendo aún menores de edad”¹⁷⁸ y estima que una proporción no inferior a 1 de cada 4 miembros de las AUC ingresó siendo menor de edad.

Gráfica 19. Desmovilizaciones individuales 2002-2012



Fuente: Ministerio de Defensa nacional. Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado.

Las desmovilizaciones individuales luego de alcanzar su pico más alto en 2008, con 3.461 personas desmovilizadas, en los años siguientes disminuyen hasta alcanzar la cifra de 1.527 personas desmovilizadas en 2011. En los primeros cinco meses de 2012 (mayo 13) se han desmovilizado 425 personas, 315 hombres y 110 mujeres, donde el 13,7% son menores de edad. De los desmovilizados(as) en 2012 el 86,59% eran integrantes de las Farc y el 13,41% lo eran del Eln.

La información que presenta la Agencia Colombiana para la Reintegración en su página web¹⁷⁹, sobre las desmovilizaciones colectivas entre el 7 de agosto de 2002 y mayo de 2012, han sumado 31.846 integrantes de los grupos de autodefensas. En ese mismo período las desmovilizaciones individuales de integrantes de autodefensas sumaron 3.747 personas, para un total de 35.503 integrantes de autodefensas desmovilizados.

Tabla 31. Total de desmovilizaciones individuales y colectivas
DEL 7 DE AGOSTO DE 2002 AL 13 DE MAYO DE 2012

AÑO	FARC	ELN	AUTODEFENSAS		DISIDENCIAS
			AUI	COLECTIVAS	
2002	529	139	0	0	62
2003	1.376	405	692	869	65
2004	1.300	333	1.269	2.644	70
2005	1.135	301	1.096	10.422	32

178- Ibíd., p. 11.

179- <http://www.reintegracion.gov.co>

2006	1.558	359	470	17.766	73
2007	2.480	423	155	0	134
2008	3.027	403	0	145	31
2009	2.128	492	0	0	18
2010	2.009	359	65	0	13
2011	1.308	213	0	0	6
2012	368	57	0	0	0
TOTAL	17.218	3.484	3.747	31.846	504
GRAN TOTAL	56.799				

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado

Del total de desmovilizados registrados por la ACR en el Sistema de Información de Reintegración, SIR, el 59,88% se encuentra activo en el programa de reintegración social y económica, 32.581 participantes; en tanto el 14,06% es reportado como inactivo, es decir que su reintegración la realizan al margen del programa, lo que significa que 7.648 personas no disfrutaban de los servicios y beneficios que ofrece.

Según la información del Centro de Servicios de la ACR en Bucaramanga, entre 2003 y 2010 fallecieron 952 desmovilizados, 1,75% del total. En tanto entre 2003 y 2008, 1.107 desmovilizados perdieron los beneficios ofrecidos por el programa de reintegración en razón del incumplimiento de criterios y requisitos y han sido suspendidos 220 desmovilizados (0,4%) en el mismo período.

1.3 Política nacional para la reintegración social y económica¹⁸⁰

La Agencia Colombiana para la Reintegración ACR es la encargada de diseñar, ejecutar y evaluar la política de Estado dirigida a la reintegración social y económica de las personas o grupos armados al margen de la ley que se desmovilizan voluntariamente de manera individual o colectiva.

El objetivo principal de la Política de Reintegración consiste en reintegrar social, comunitaria y económicamente a las personas que se desmovilizan de los GAI, y en la perspectiva de constituirse en instrumento para la construcción de paz y en una estrategia importante para evitar la repetición de los actos violentos, desarrolla dos componentes:

- i) Apoyar y formar a las personas y grupos desmovilizados para que de manera voluntaria y autónoma aprovechen las oportunidades que ofrece la civilidad y al mismo tiempo cumplan con sus deberes como ciudadanos con la sociedad.
- ii) Promover la convivencia y la reconciliación de las comunidades receptoras a fin de generar mejores condiciones y capacidades de acogida y aceptación de la población desmovilizada, es decir, lograr la reintegración comunitaria.

180- La Política de Reintegración Social y Económica de personas y grupos armados ilegales está contenida en el Documento Conpes 3554, de diciembre de 2008, como política de estado y sociedad, con visión de largo plazo, para promover la incorporación efectiva del desmovilizado y su familia a las redes sociales del estado y a las comunidades receptoras.

La política orienta las estrategias para la reintegración basada en el individuo, a fin de dar respuesta a las necesidades de cada persona, como también de sus propias capacidades y potencialidades para la reintegración, de allí que busque tomar en cuenta las características psicosociales, el nivel educativo, las capacidades y habilidades para el desempeño laboral, y las capacidades de liderazgo y desempeño social y cívico de las personas.

También se orienta la prestación de servicios especializados que implementan las estrategias definidas para apoyar el proceso de reintegración, el cual se prevé sea temporal y construya capacidades en la población desmovilizada y sus familias para desarrollar procesos sostenibles de reintegración social, económica y comunitaria, los principales servicios son los siguientes.

Hacia la reintegración social

- Afiliación y acceso a servicios de salud, al desarrollo de estilos de vida saludable, atención especializada a enfermedades mentales y de consumo de sustancias psicoactivas, como también de prótesis y rehabilitación a personas en condición de discapacidad.
- Acompañamiento Psicosocial, busca desarrollar, fortalecer y reorientar las competencias del participante y sus familias hacia el establecimiento de relaciones asertivas, la resolución no violenta de conflictos, el reconocimiento y ejercicio de derechos y deberes, y la proyección y orientación al logro.
- Inclusión y acceso al sistema educativo, formación básica, media, técnica, tecnológica y universitaria, proceso de largo plazo y condición importante para el acceso e inserción al mercado laboral y de participación activa en la sociedad civil.

Hacia la reintegración económica

- Busca ofrecer herramientas para desenvolverse en el mercado laboral mediante la formación para el trabajo y el desarrollo de competencias laborales y la implementación de programas de empleo y planes de negocio.
- Formación para el trabajo desarrolla capacidades y habilidades laborales y técnicas a fin de facilitar el acceso y permanencia en el sistema productivo.
- La generación de ingresos es factor fundamental en la reintegración, en tanto la vinculación a una opción productiva permite que cada participante del programa desarrolle un plan de vida y crear condiciones de estabilidad para ellos y sus familias. La gestión se orienta a facilitar el acceso a empleo en el sector público o privado, o también hacia la estructuración e implementación de planes de negocio que permitan la generación de ingresos estables al participante y su familia.

La reintegración comunitaria

- La estrategia se orienta a promover en desmovilizados(as) y en las comunidades, capacidades de liderazgo y de ejercicio de ciudadanía, en un marco de legalidad y civilidad, promoviendo escenarios de resolución no violenta de conflictos, de respeto de los derechos humanos y cultura democrática que contribuyen a la construcción de convivencia y reconciliación, mediante procesos de formación ciudadana, apoyo a iniciativas ciudadanas de convivencia, el desarrollo de acciones simbólicas y el apoyo a proyectos comunitarios que resuelvan problemas de las comunidades. Procesos que buscan fortalecer las confianzas y cooperación entre desmovilizados, comunidades y autoridades locales.

Otro componente importante propuesto en la Política de Reintegración es su proceso de regionalización, como adecuación de la política a los contextos y dinámicas regionales, construcción de agendas públicas para la reintegración, fortalecer la institucionalidad regional para la reintegración incluyéndola en los planes de desarrollo municipales y departamentales, vinculando entidades e instituciones locales a la implementación de proyectos, estableciendo espacios de coordinación interinstitucional para la ejecución de la política en las regiones, y superar que la reintegración sea asunto exclusivo de la Agencia y de la población desmovilizada para que sea asumida como estrategia de la sociedad para avanzar en la reconciliación y construcción de paz.

2. Relaciones y vínculos institucionales en la política de DDR- Reintegración de los desmovilizados en Santander

2.1 La reintegración social y económica¹⁸¹, frente al manejo centralista y desarticulado de los entes territoriales, o la justificación de alianzas institucionales vinculantes para la paz

En los documentos de política nacional la reintegración es considerada un proceso de largo plazo, que se implementa tomando en consideración las particularidades de cada región y de la población desmovilizada. En esa perspectiva, es necesario analizar el grado de descentralización, coordinación o articulación del proceso de regionalización de esta política, los niveles de inclusión en las agendas públicas territoriales locales, en los planes de desarrollo de cada municipio y departamento. Si la política pública se construye con la participación y la concertación de los sectores sociales, políticos y territoriales de la población, es apenas elemental reconocer la acción pública y las dinámicas de complementación institucional y social realizados, en primer lugar para desarrollar acciones que sensibilicen, articulen y coordinen la construcción de políticas, planes y estrategias de reintegración en las cuales se vincule a las entidades de gobierno, los gremios empresariales y organizaciones de comunidad; en segundo lugar en el fortalecimiento de programas y políticas locales de reintegración, paz y reconciliación.

En esa perspectiva, se supone la existencia de una estrategia orientada a la tarea de promover la conciencia y responsabilidad en entidades, gremios y organizaciones frente al tema; igualmente en la creación de espacios de concertación que incentiven la participación coordinada de los actores locales y regionales en el diseño y ejecución de la Política de Reintegración, que se concreten en planes y programas integrales que cuenten con definiciones de plazos, fuentes de recursos, programas y proyectos específicos con montos específicos de presupuestos y con estrategias de seguimiento, monitoreo y evaluación a nivel departamental y local que aseguren cumplir los planes.

La situación encontrada a través de entrevistas y documentos consultados para realizar este estudio, permite identificar diversos problemas en la implementación

181- En el desarrollo del estudio, se conversó con funcionarios de entidades públicas departamentales y municipales de Santander, con líderes de gremios y sectores económicos, a fin de recoger sus visiones y recomendaciones sobre el proceso de regionalización y construcción de alianzas para la reintegración, acá se sintetizan las principales reflexiones y aportes.

de las políticas de reintegración, con resultados preocupantes que llaman a nuevos esfuerzos de rediseño de políticas y alianzas institucionales de paz y reconciliación para los territorios afectados por el conflicto armado en Santander.

“La reintegración es también corresponsabilidad que debe existir entre las instituciones, empresas y gobierno local, porque la experiencia nos demuestra que si los participantes (desmovilizados) se capacitan, se forman pero no hay alguien que los emplee, si no hay fuentes de trabajo, es complicado que se logre la reintegración económica, y a pesar de que se pueda decir este participante ha desarrollado habilidades de comunicación, de resolución no violenta de sus conflictos... pero nada que obtiene trabajo... se frustra y podrá pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo en este momento?... Entonces pienso que la reintegración tiene muchos matices. La ruta de reintegración es para ellos, pero también es importante que se reconozcan perteneciendo a una comunidad, que no van a repetir, no van reincidir, pero también requiere de la corresponsabilidad de los actores externos”¹⁸²

Este marco de política concibe a los Centros de Servicio de la ACR como instancias que realizan la interlocución entre las entidades del nivel central y los gobiernos locales para la implementación de la política, con capacidades para convocar a gobiernos y organizaciones locales representativas para socializar la Política de Reintegración, sensibilizar sobre la importancia de apoyar el proceso de reintegración de los desmovilizados.

“Hicimos un taller con los medios de comunicación para explicar qué es un desmovilizado, qué es un participante, qué es la ACR, qué servicios desarrolla, y los periodistas nos decían, ¿y por qué no ponen una oficina aquí en Barranca?, y les dije: ¡Resulta que nosotros estamos en Barrancabermeja desde el 2007!”¹⁸³

Se entiende que la regionalización de la política se realiza en el territorio local, en los municipios con su participación y vínculos, al tiempo que los Centros de Servicio implementan los beneficios al desmovilizado en cumplimiento del proceso de reintegración social y económica, gestionando articulaciones y buscando la inclusión en las agendas públicas.

“(...) el proceso de reintegración es de todos, desmovilizados, Agencia, instituciones públicas, instituciones privadas, comunidades receptoras, sí, porque es un proceso de todos. Nosotros (ACR) frente a los planes de desarrollo y las inclusiones dentro de políticas públicas, te puedo hablar de que en Santander ha sido positivo, no lo esperado, pero sí positivo, en los municipios que nosotros hemos priorizado por número de desmovilizados la receptividad ha sido buena. Pero desafortunadamente el tema es que existen muchas clases de población: afrodescendientes, madres cabeza de familia, tercera edad, desmovilizados, desplazados, toda esa tipificación dificulta a las instituciones poder poner recursos y estar al frente de cada una de esas situaciones”¹⁸⁴.

182- Entrevista a Lida Sofía Padilla, líder Centro de Servicios a desmovilizados de Barrancabermeja. ACR.

183- Ibid.

184- Entrevista a Diego Julián Jones, líder del Centro de Servicios a desmovilizados de Bucaramanga. ACR.

Se considera que la desmovilización de grupos armados paramilitares en forma colectiva desde la política de justicia transicional no incorporó una perspectiva de paz, fue un proceso que arrancó a espaldas de las regiones, fue un acuerdo entre el alto Gobierno y las autodefensas - paramilitares, que no invitó ni vinculó a gobernadores y alcaldes a discutir sobre su responsabilidad, funciones y participación en los procesos de desmovilización y reintegración en su territorio; este signo de vacío es fuente de múltiples problemas encontrados en la implementación de la política gubernamental, caracterizada por su centralismo. Sin embargo los problemas, causas y consecuencias derivados del conflicto armado empiezan en las regiones, con sus actores, sus intereses y disputas no resueltas.

Una perspectiva de solución para la convivencia ciudadana bien pronto se puede convertir en una nueva causa de conflictos y problemáticas que ponen en riesgo la eficacia de las políticas y el logro de los objetivos propuestos con sus esfuerzos presupuestales, humanos y políticos. Así, cuando llegan los desmovilizados a la localidad encuentran a las instituciones del Estado poco fortalecidas, muchas veces sin saber qué hacer y sin cómo enfrentar el reto de la reintegración, sin recursos, y además teniendo que atender algunos problemas heredados y deudas históricas no resueltas:

- i). Con las poblaciones pobres que no tienen condiciones de vida digna;
- ii). Con las víctimas del conflicto y desplazados que a partir de la Sentencia T - 045 de la Corte Constitucional y la Ley 1448 obligan a incorporar programas de reparación integral y de restablecimiento socioeconómico en las políticas públicas, en los planes de desarrollo y en los presupuestos territoriales;
- iii). Con los desmovilizados que causaron múltiples violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra la población civil, sin que hasta ahora se hayan adelantado procesos de reconciliación y reparación del daño causado.

“El proceso de reintegración es fruto de una política que no se conversó con la sociedad desde un comienzo, es producto de los acuerdos de Santafé de Ralito que vendieron internacionalmente la imagen de un gobierno que está resolviendo el conflicto armado, que impulsó su discurso sobre posconflicto y el discurso sobre DDR se ha venido dando según las circunstancias”¹⁸⁵.

Diferentes informes de instituciones internacionales, de la MAPP – OEA y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia de la ONU, así como de otras instituciones nacionales como la Policía Nacional, otras no gubernamentales como Indepaz y Nuevo Arcoíris, dan cuenta que la desmovilización ha sido parcial, tanto en el desarme como en la desmovilización, porque quedaron estructuras que siguen usufructuando las rentas ilegales, incidiendo en procesos políticos desde lo local y departamental, no hubo desmonte total de las estructuras. Además se acota que la ACR se conformó dos años después del proceso, que el Documento CONPES 3554 se aprobó tres años después, en 2008, y que la política de reintegración no fue discutida, no fue concertada, no es conocida y por eso la política pública anda coja y se ejecuta con éxitos parciales.

185- Entrevista Amparo Chicué Cristancho, coordinadora Oficina de Paz y Derechos Humanos, Secretaría del Interior, Gobernación de Santander.

Sin embargo, el proceso de reintegración no está terminado, tiene personas de por medio y hay que trabajar por fortalecerlo, consolidarlo, consideran que en esta tarea las entidades públicas y privadas tienen un papel muy importante que jugar y sobre todo garantizar que se mantenga la confianza en la institucionalidad del Estado.

“En medio del conflicto el Gobierno nacional ha venido tratando de resolver temas con algunos grupos que estaban en la ilegalidad, en mi concepto hay que cumplir todo lo que dice la ley, ser respetuosos de los acuerdos y brindar las oportunidades porque si no le damos la seguridad y les generamos confianza a los que se acogieron a la propuesta de paz del gobierno, van a sentir que el gobierno los abandonó y los compromisos que se generaron a través del proceso de desmovilización no son valederos y generaría desconfianza en el Estado”¹⁸⁶

Es evidente que persisten manifestaciones de rechazo y prevención desde sectores de la sociedad civil, desde empresas y funcionarios de la misma institucionalidad pública, situación explicada por las atrocidades que se cometieron, porque han pasado cerca de 9 años sin que se vean resultados efectivos de paz, porque aún existe miedo, recelo, resentimiento, porque hay hechos que no se pueden ocultar y porque no se ve voluntad efectiva de transformación, de verdadero arrepentimiento en los desmovilizados, por esa razón no se superan estas prevenciones y no avanza la reconciliación.

“El tema es complejo aquí en Barranca porque la violencia fue muy cruda, iniciado por la guerrilla con todo el daño que ocasionó y luego los paramilitares aquí en Barranca también hicieron mucho daño... y las víctimas tienen todo su derecho de decir no, yo no quiero estar con las personas que ocasionaron daño a mi familia, a mi municipio... pero a través de estas acciones (de reintegración comunitaria) las comunidades empiezan a conocer también sus historias, a conocer quiénes son ellos, porque la imagen que la comunidad tiene de los participantes (desmovilizados) está basada en hechos pasados y en el dolor que han sufrido. De hecho estuvimos con una asociación de mujeres víctimas que se llama AFIT, y ellas decían que fue muy difícil entrar a trabajar en el proyecto comunitario con participantes por todo eso que había significado el dolor causado, por los familiares que perdió por este conflicto, pero ella decía: sino empezamos a trabajar en conjunto no vamos a llegar a ningún lado. Y se dieron la oportunidad de conocerse, de empezar a conocer sus historias y muchos de ellos también tiene una historia dolorosa en su vida”¹⁸⁷

“(...) sentimos que hay una cultura de rechazo, desde la misma institucionalidad inclusive, y comienza por uno. Recuerdo que hubo un convenio con el Ministerio del Interior y de Justicia sobre construcción de memoria histórica, yo invité a esa primera reunión, se citó a todo el mundo, cuando llega Diego (Coordinador del Centro de Servicios de Bucaramanga de la ACR) y me dice, ¿Ud. por qué no me invito a lo de memoria histórica? Yo me dije ¿ustedes, por qué? Y claro caigo en cuenta, por supuesto que tiene razón Diego, y empezamos a hablar del tema. Entonces Diego decía que se sentía maltratado inclusive por las instituciones, ahí es cuando yo hago

186- Entrevista René Rodrigo Garzón Martínez, Secretario de Gobierno de Bucaramanga. Alcaldía de Bucaramanga.

187- Entrevista Lida Sofía Padilla, Líder del Centro de Servicios a desmovilizados en Barrancabermeja. ACR.

*la reflexión, que hay una cultura como de rechazo desde la sociedad y desde la institucionalidad, explicada por las atrocidades, el miedo, resentimiento o temor”*¹⁸⁸

En la región no hay una institucionalidad fuerte apoyando la reintegración, el gobierno departamental y la Alcaldía de Barrancabermeja apoyan programas coyunturales y acciones puntuales, no hay mesas de trabajo establecidas, no hay componentes estratégicos definidos, no hay planes de trabajo concertados entre entidades, definiciones y organización necesarias para que las instituciones se cohesionen, presten un mejor servicio y obtengan mejores resultados.

*“A mí me parece que no hay una institucionalidad fuerte apoyando el tema, la ACR hace lo suyo con poca coordinación de las entidades, eso hace que los programas sean débiles, pero además de débiles son coyunturales. A diferencia de la población víctima no hay unas mesas de trabajo establecidas, no hay unos componentes estratégicos establecidos en las líneas de acción, no hay unos protocolos en educación, en generación de ingresos, en vivienda. No existe esa organización que es necesaria para que unas instituciones que son débiles puedan hacer cohesión, puedan hacer sinergia y puedan prestar un mejor servicio”*¹⁸⁹

En medio de las dificultades señaladas y de las limitaciones presupuestales, se logró en años anteriores, establecer acuerdos con la Gobernación de Santander, Alcaldía de Barrancabermeja, Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y OIM, entre otros, para el desarrollo de algunos proyectos conjuntos con la ACR, dirigidos a fortalecer planes de negocios –iniciativas económicas de desmovilizados- como también a proyectos que beneficiaron a comunidades y desmovilizados.

*“La Alcaldía de Barranca nos apoyó el año pasado con 115.000.000 de pesos para planes de negocios, para fortalecimiento y emprendimiento y en este momento tenemos 36 planes de negocio que ya son una realidad, con apoyo de la Alcaldía de Barranca, el apoyo de la OIM y de la Gobernación de Santander. (...) Tenemos otro proyecto comunitario, de hecho es el más grande que ha tenido la ACR con recursos de Unión Europea, se hizo con el Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en tres corregimientos del municipio de Simití, allí fue una inversión grande en infraestructura, se llevó electricidad al corregimiento El Paraíso, se dio la dotación, la Pelton y todo para que haya electricidad en el municipio, se dotó el puesto de salud, se hizo el comedor para los niños dentro del colegio y del corregimiento como tal”*¹⁹⁰

“El aporte que hizo la Gobernación, frente al fortalecimiento de emprendimientos se vio y se entregaron 28 en diciembre de 2011; nosotros gozamos de un convenio con el Hospital Psiquiátrico (de Bucaramanga) para la atención por consumo de sustancias psicoactivas, lo tenemos desde el 2009 y ha sido prorrogado, todavía hay vigencia del año 2011; en estos momentos tuvimos encuentros con el Señor Gobernador,

188- Entrevista Amparo Chicué Cristancho, coordinadora Oficina de Paz y Derechos Humanos. Secretaría del Interior, Gobernación de Santander

189- Ibíd.

190- Entrevista Lida Sofia Padilla, Líder del Centro de Servicios a desmovilizados en Barrancabermeja. ACR.

con el Secretario del Interior, hay disposición a continuar apoyando el proceso de reintegración”¹⁹¹

*“En el Plan de Desarrollo determinamos que la política pública debe beneficiar a desplazados y también a desmovilizados, pensamos en brindar educación porque la educación es la que les puede dar la posibilidad de tener estabilidad económica, ofertar mano de obra, de la misma manera en la posibilidad de generar algunos emprendimientos, y sobre esas partes vamos a trabajar y específicamente a poner los recursos que tenemos”*¹⁹²

En el análisis de la situación de desencuentro institucional con la política de DDR se considera que para fortalecer la política de reintegración y avanzar en procesos de reconciliación es necesario realizar algunos ajustes a la política que se viene implementando, empezando por tener espacios de encuentro, articulación y coordinación entre entidades públicas y privadas, víctimas y desmovilizados – victimarios-, organizaciones de paz y derechos humanos, que permitan la discusión sobre las estrategias para el restablecimiento de los derechos de las víctimas, de las estrategias de reintegración social, económica y comunitaria, de los procesos de reparación y reconciliación, espacios que hoy no existen.

*“(...) es necesaria una mesa de instituciones y delegados de desmovilizados para articular y coordinar las estrategias de apoyo a la reintegración. En el Comité de justicia transicional voy a invitar a todos los actores, no solo desplazados, sino también desmovilizados, para hacer el plan de acción con víctimas y victimarios que implementará la administración municipal (de Bucaramanga), porque mientras no haya equidad y justicia no salimos del conflicto, porque mientras sigan las mismas condiciones y desigualdades, unos salen y otros entran al conflicto”*¹⁹³

También se escuchan voces intencionadas para avanzar en procesos de justicia, considerando que debe fortalecerse el proceso de Justicia y Paz; a su entender consideran que el proceso de DDR no puede seguir con tan poca eficacia, que haya castigo sobre los hechos de violencia graves sucedidos en la región, que es necesario que haya pronunciamientos, fallos y condenas; con impunidad no es posible avanzar en reconciliación y perdón con las víctimas y la sociedad.

Así mismo, se necesita avanzar en construir capacidades y voluntades para rescatar la memoria histórica de las víctimas y del conflicto en Santander y el Magdalena Medio, pero es necesario un consenso sobre cómo hacerlo, incluyendo a víctimas, a organizaciones sociales y también a desmovilizados que integraban los grupos armados que causaron los hechos y violaciones de derechos, es necesario mirar la realidad departamental, lo sucedido, las relaciones de políticos y empresarios con grupos armados, esclarecer las redes de apoyo que permitieron que el fenómeno de violencia se instalara y desarrollara en la región... La academia debe ayudar a organizar y sistematizar la información, análisis y hacer preguntas importantes.

191- Entrevista Diego Julián Jones, líder del Centro de Servicios a desmovilizados de Bucaramanga. ACR.

192- Entrevista René Rodrigo Garzón Martínez, Secretario de Gobierno de Bucaramanga. Alcaldía de Bucaramanga

193- Ibid.

La Memoria Histórica regional no es sólo un museo, archivo histórico o grabaciones, se necesita una institución con capacidades y recursos de investigación, documentación, comunicación – información para que haya formación en la sociedad, que la gente conozca... es convertirla en elemento educativo de construcción de voluntad clara de rechazo a la violencia para que las nuevas generaciones no repitan la historia de barbarie que estamos viviendo hace más de medio siglo.

*"Considero que entre todos tenemos que hacer construcción de la memoria. Afortunadamente tenemos un convenio con el Ministerio de Justicia que nos va permitir encontrarnos para hacer un consenso frente al tema de memoria histórica, de cómo trabajarlo, pero necesariamente tienen que estar víctimas y victimarios, así a algunas organizaciones sociales o de derechos humanos no les guste hay que hacerlo... Como dice un adagio popular "ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre". Tendríamos que mirar lo que ha sucedido en el Departamento, por ejemplo el fenómeno de parapolítica, el fenómeno de dineros oscuros en la economía local, puede que sea a menos escala que otras regiones, pero ha sucedido y hay que mirarlo... no tanto como historia, como la serie de hechos particulares sino pensar cómo convertir eso en un elemento educativo de construcción de una voluntad clara de rechazo a la violencia y para las generaciones futuras para no repetir"*¹⁹⁴

2.2 Regionalización de la política de reintegración y la participación de empresas y gremios económicos

En el marco de la política de reintegración económica y social de las personas desmovilizadas es de gran importancia la participación de empresas y gremios económicos en su implementación, en tanto ayuda a concretar el acceso a empleo, el banco de tiempos y la construcción del Fondo de Inversión para el Beneficio Social, teniendo en cuenta los altos riesgos de reincidencia cuando los desmovilizados no encuentran espacio para reconstruir su proyecto de vida productiva y su espacio social en la civilidad.

No se pueden desconocer experiencias y esfuerzos que realizan la ACR regional y algunas empresas en este aspecto. Sin embargo las percepciones y opiniones mayoritarias recogidas entre personal desmovilizado sobre el espacio y oportunidades brindadas a la reintegración afirman que son bastante insuficientes, precarias y marcadas por la desconfianza y la prevención, con razones soportadas en materia de seguridad. Los datos recogidos en el Estudio Socioeconómico de la población en proceso de reintegración en Santander muestran un alto índice de desempleo, informalidad y pobreza en ingresos de los desmovilizados y sus familias.

La ACR nacionalmente ha desarrollado una gestión orientada a vincular a empresas y gremios económicos en iniciativas de generación de empleo. De un lado con Almacenes Éxito, Carrefour, Coca Cola, entre otros, ha logrado acuerdos para vinculación laboral de desmovilizados. De otro lado, con la ANDI ha venido desde

194- Entrevista Amparo Chicué Cristancho, coordinadora Oficina de Paz y Derechos Humanos. Secretaría del Interior, Gobernación de Santander

2006 desarrollando varias experiencias de apoyo a la reintegración económica de participantes en el proceso. En la primera fase del Programa Encadenamientos Productivos, que desarrolla la ANDI y el BID, se invirtieron U\$4 millones y apoyó a 27 iniciativas productivas, cerca de 4.500 familias, que incluyeron víctimas de desplazamiento forzado, participantes en el proceso de reintegración, madres cabeza de familia, víctimas de minas antipersona.

La Fundación Proyectos Tecnovo, que tiene entre sus aliados a ANDI, Departamento para la Prosperidad Social, Alcaldía Mayor de Bogotá, Usaid, Fupad y la OIM, también a Coltabaco y Home Center, desarrolla proyectos de comercialización de productos con calidad, artesanías, velas, cerámica, productos en guadua, elaborados por desmovilizados, desplazados, víctimas de minas.

Electrolux patrocinó un curso para técnicos a desmovilizados, seleccionados por llevar a cabo un proceso de reintegración exitoso, según criterios de la ACR, y por tener nivel técnico y disposición para realizar el curso según parámetros de Electrolux. La empresa Scania graduó a 16 jóvenes participantes del proceso como auxiliares mecánicos, en capacitación gratuita ofrecida por la Empresa.

“¿para qué han servido estas experiencias? Para superar el miedo de las empresas a trabajar con los participantes del proceso de reintegración, debemos demostrarle a las empresas la necesidad de perder el miedo”¹⁹⁵

Experiencias que muestran perspectivas y posibilidades para el desarrollo de estrategias de gestión y relación de los Centros de Servicios de la ACR con los gremios y empresas regionales. Sin embargo, es necesario señalar que en la región de Santander y del Magdalena Medio han sido muy pocos los apoyos de empresas y gremios a las políticas de reintegración económica.

El testimonio de un desmovilizado en un taller de grupo focal, la percepción del Coordinador del Centro de Servicios de Bucaramanga de la ACR y del presidente del Comité de Gremios de Santander, evidencian los escasos avances en la vinculación de empresas y gremios al desarrollo de la política de reintegración económica de los desmovilizados en Santander:

“A uno le toca conseguir empleo de acuerdo a las condiciones que tenga, por ejemplo porque si uno no tiene estudio completo pues le toca en oficios de construcción y a las mujeres en oficios domésticos, además porque es lo único que saben hacer”¹⁹⁶

“(…) el sector privado ha sido un sector bastante renuente en algunos momentos pero el que abre sus puertas no las cierra; nosotros llegamos con Almacenes Éxito, abrimos las puertas un día y fue bastante difícil abrirlas, pero en estos momentos no se han cerrado, es una puerta que se abrió para una temporada y vamos para la temporada 3. Lo mismo nos sucedió con Coca-Cola, los acuerdos venían desde Frank Pearl, el anterior Alto Consejero, y abrir las puertas era difícil, pero ahorita tenemos todas las

195- Juan Diego Méndez Larrañaga, Gerente Seccional ANDI. Ponente en el Foro regional de construcción de alianzas institucionales para la paz. Bucaramanga, 20 de junio de 2012. Gobernación de Santander-Corporación Compromiso.

196- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

puertas abiertas a nivel nacional con Coca Cola como institución en muchos de los proyectos que manejan; entonces, lo más difícil que hemos visto es abrir las puertas pero el día que se abren las puertas no se cierran, afortunadamente”¹⁹⁷

“La reintegración económica de las personas desmovilizadas no ha sido tema que se haya tratado en el Comité de Gremios desde que lo estoy presidiendo, por eso no podría tener y dar una opinión de consenso del gremio (pero) podría decir sí lo que puedo percibir... sí, es claro que al salir de un conflicto mucha gente que estaba dedicada al conflicto debe ser absorbida por la sociedad, no tiene empleo, seguridad social y viven en invasiones urbanas, debe dárseles oportunidades y hacerlo es una responsabilidad de esta generación, de esta sociedad para que regresen y se mantengan en la vida civil”¹⁹⁸

En conversación con la directora de Clase Mundo Formando Talento Humano, compartía que Ecopetrol se ha comprometido, al igual que otras entidades públicas y empresas privadas de Barrancabermeja, a cumplir con la política pública de empleo del municipio, aprobada por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 005 de 2008, que entre sus principales lineamientos establece:

- Información pública sobre las ofertas de empleo, difusión a través de medios masivos: radio, prensa, web, información a organizaciones de desempleados, JAL y sindicatos sobre las ofertas y las convocatorias.
- Convocatorias públicas a presentar hojas de vida, estableciendo perfiles, requerimientos y plazos de inscripción.
- Preselección de aspirantes de acuerdo a perfiles y citación a pruebas.
- El 60% de las personas vinculadas deben residir en Barrancabermeja, lo cual se acredita mediante: Cédula de ciudadanía; Certificado electoral de 2007; inscripción en el Sisbén o un recibo de servicios públicos de la residencia.

Se compartía que específicamente a Ecopetrol le interesa que las personas que presenten hoja de vida y aspiren a vincularse tengan la certificación y acreditación de competencias laborales pedidas en el perfil ocupacional y obtengan buen resultado en las pruebas de perfil requeridas. También señaló que no aplican políticas de discriminación positiva o negativa hacia ningún tipo de población, sea género, etnia, condición de desplazamiento forzado, víctima o desmovilizado. Este factor no se considera para estimular o para impedir postulación o selección del personal a emplear, las ofertas de empleo están abiertas a todos y dependen de su capacidad y competencia laboral.

Dentro de los empleos provistos a mayo de 2012, la base de datos registra que 620 desplazados se inscribieron, presentaron hoja de vida, pruebas, obtuvieron buenos resultados y fueron vinculados en lo corrido del año, información que se entregó a las organizaciones de desplazados y fueron las que promovieron la inscripción de afiliados.

No tienen registro de desmovilizados, lo cual no significa que no haya sino simplemente que no se han inscrito como tales. Señala que si los desmovilizados

197- Entrevista Diego Julián Jones, líder del Centro de Servicios a desmovilizados de Bucaramanga. ACR.

198- Entrevista Sergio Fernando Luna Navas, Presidente Ejecutivo Comité de Gremios de Santander.

no participan del proceso, tal vez es porque no están organizados, no se informan y no promueven la participación en las convocatorias, o no cumplen los perfiles solicitados.

De otro lado, la Gerencia de la ANDI seccional santanderes, avanza con empresas del sector metalmecánico en la estructuración de un proyecto de negocio inclusivo para el montaje de un Centro de Formación especializada, con el cual se ofrecería capacitación técnica y oportunidades de empleo a desmovilizados y jóvenes vulnerables.

*"Estamos trabajando con 10 empresas del sector metalmecánico de Santander, que han identificado la necesidad de mano de obra calificada en oficios del sector metalmecánico, entonces, partiendo de esa necesidad, se avanza en un proyecto de centro de formación especializada, con el cual se espera formar y capacitar a participantes del proceso de reintegración y también a jóvenes (...) necesitamos garantizar mejores opciones de vida a población que ante la falta de oportunidades pueden ser reclutados y utilizados para el servicio de grupos al margen de la ley; que a la vez sea centro de prestación de estos servicios de soldadura para las empresas del proyecto y para proyectos de infraestructura en Santander, así se ha planteado a empresarios y a la ACR como proyecto piloto de negocio inclusivo"*¹⁹⁹

La responsabilidad social empresarial con la paz y la no violencia pone a prueba al empresariado urbano y rural de Santander con los cuales se espera desarrollar instrumentos que permitan hacerse partícipes activos de una política eficaz de Reintegración y Paz dentro de un enfoque territorial, en el acceso al mercado laboral, ofrecer empleo, asesoría, capacitación y financiación a planes de negocios de desmovilizados y proyectos comunitarios.

3. Reintegración social y económica de la población desmovilizada a cargo de la ACR en Santander

En Santander, la ACR por medio de los Centros de Servicios al Desmovilizado en Bucaramanga y Barrancabermeja, desarrolla las estrategias del programa de reintegración con 1.449 personas desmovilizadas. El 82,88% (1.201) son hombres y el 17,12% son mujeres.

Tabla 32. Participantes activos en Santander, según año de desmovilización

Año	Activos	%
2003	54	3,73
2004	73	5,04
2005	241	16,63
2006	864	59,63
2007	65	4,49
2008	42	2,90

199- Juan Diego Méndez Larrañaga, Gerente Seccional ANDI. Ponente en el Foro regional de construcción de alianzas institucionales para la paz. Bucaramanga, 20 de junio de 2012. Gobernación de Santander-Corporación Compromiso.

2009	50	3,45
2010	28	1,93
2011	32	2,21
Total	1.449	100,00

Fuente: SIR – ACR – Centro de Servicios Bucaramanga, corte enero 31 de 2012

El 14,15% tienen entre 18 y 25 años y el 35,82% tienen entre 26 y 32 años, es decir el 49,97% son menores de 32 años.

El 42,77% tiene entre 33 y 46 años de edad y el 7,26 es mayor de 47 años, ponderaciones que ratifican la vinculación a edades muy tempranas con los grupos armados ilegales y la alta presencia de niños y niñas en los grupos armados al margen de la ley.

Tabla 33. Participantes activos en Santander, según rango de edad

Grupo edad	Activo	%
18-25	205	14,15
26-32	519	35,82
33-39	443	30,57
40-46	177	12,22
47-53	63	4,35
54-60	27	1,86
Mayor a 60	8	0,55
Sin dato	7	0,48
Total	1.449	100,00

Fuente: Fuente: SIR – ACR – Centro de Servicios Bucaramanga, corte enero 31 de 2012.

Tabla 34. Participantes activos en Santander, según municipios de residencia ²⁰⁰

Municipios	Participantes activos	%
Centro Servicios al Desmovilizado – Bucaramanga		
Bucaramanga	304	20,54
Floridablanca	127	8,58
Girón	107	7,23
Piedecuesta	88	5,95
Rionegro	73	4,93
Otros (Lebrija, Sabana de Torres, Sangil, Charalá, Barichara, Barbosa, El Playón y Los Santos)	165	11,15

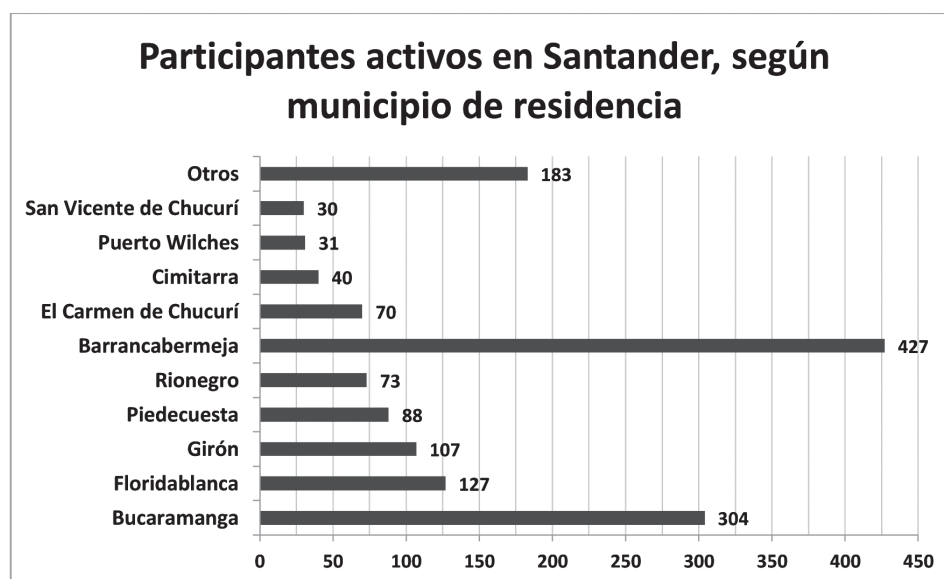
200- Esta tabla registra un número mayor de participantes activos porque incorpora a quienes han ingresado entre enero y junio del 2012 a residir en municipios de la provincia de Mares, área de influencia del Centro de Servicios de Barrancabermeja

Fuentes: SIR – ACR. Centro de Servicios Bucaramanga, corte enero 31 de 2012 y Centro de Servicios Barrancabermeja, corte junio 12 de 2012.

Centro Servicios al desmovilizado – Barrancabermeja		
Barrancabermeja	427	28,85
El Carmen de Chucurí	70	4,73
Cimitarra	40	2,70
Puerto Wilches	31	2,09
San Vicente de Chucurí	30	2,03
Otros (Landázuri, Puerto Parra, Santa Helena del Opón)	18	1,22
Total Santander	1.480	100,00

El 42,30% del total de participantes activos en el programa de reintegración, se ubica en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga. En los municipios de Rionegro, Lebrija, Sabana, Sangil, Charalá, Barichara, Barbosa, El Playón y Los Santos reside el 16,08%, quedando adscrito al Centro de Servicios en Bucaramanga el 58,38% de los participantes activos en el proceso de reintegración.

Gráfica 20. Participantes activos en Santander, según municipio



En los municipios de la provincia de Mares reside el 41,62% de participantes activos en proceso de reintegración en Santander. Barrancabermeja es el municipio con mayor número, el 28,85% de participantes está radicado en él, le sigue el municipio de El Carmen con el 4,73% y la distribución de la población puede verse en la gráfica 20.

3.1 Participantes activos y la ruta de reintegración

La ACR ha avanzado en la organización y estructuración de los procesos de reintegración social y económica, en la perspectiva de construir indicadores de la ruta que llevan los y las participantes.

Con el propósito de estructurar la ruta de reintegración y de organizar las actividades de acompañamiento de manera más cercana a las características y necesidades de los procesos de reintegración de los desmovilizados, a quienes prefiere llamar participantes, la ACR reorganizó la ruta en tres etapas: básica, intermedia y avanzada. Para cada etapa definió los énfasis de la acción que permiten valorar la evolución de los participantes en el desarrollo de la ruta de reintegración y entenderla como proceso de avance y desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas desmovilizadas.

En la etapa básica, se potencian capacidades y habilidades del participante para el conocimiento de sí mismo, la re-significación de conceptos de legalidad, violencia, trabajo, familia, etc. También la re-significación de roles, vínculos, resolución de conflictos, adaptación a la vida familiar... Es decir se brinda atención psicosocial, se afilia al servicio de salud, se vincula al sistema educativo; es una etapa de preparación y aprestamiento para la convivencia en el entorno próximo.

La etapa intermedia, potencia las capacidades y habilidades de comunicación asertiva hacia el fortalecimiento de vínculos y redes familiares, sociales y económicas, reconocerse como agente de deberes y derechos y el ejercicio de ciudadanía, se avanza en los procesos educativos, formación para el trabajo, en la atención psicosocial, en acercamientos con la comunidad y desarrollo del trabajo social, es de aprestamiento para la convivencia y el desempeño productivo.

La etapa avanzada, potencia capacidades y habilidades para la relación y el trabajo con víctimas y la concertación con diversos actores hacia procesos de reconciliación, además finaliza la formación y educación, el acceso a empleo o la implementación del plan de negocios, la implementación de iniciativas ciudadanas y las acciones simbólicas que configuran su proceso de reintegración comunitaria; se considera que los participantes han logrado desarrollar exitosamente junto con su familia el proceso de reintegración social, económica y comunitaria.

En ese sentido, la ruta de reintegración deja de ser proceso sólo del desmovilizado para vincular al participante, su familia y la comunidad en que reside, y a la vez, es un proceso que aclara las condiciones que debe cumplir cada participante y conduce a la regionalización del mismo, en tanto, la reintegración se realiza en el territorio –localidad–, en donde reside.

La implementación de esta estrategia de la ruta de reintegración, conllevó el análisis y valoración del avance de cada participante en el desarrollo de las estrategias y servicios: Atención psicosocial, educación, formación para el trabajo, empleabilidad o plan de negocio y trabajo social, y de acuerdo a esos factores la ACR ha clasificado al grupo de participantes en las 3 etapas del proceso, quedando distribuido como lo muestra la tabla Participantes Activos en Santander según etapa de proceso.

Tabla 35. Participantes activos en Santander, según etapa del proceso de reintegración²⁰¹

Etapa del proceso	% Participantes Centro Servicios B/ manga	% Participantes Centro Servicios Barranca
Básica	36,99 %	8,11 %
Intermedia	30,50 %	39,45 %
Avanzada	18,91 %	51,62 %
Sin etapa	13,60 %	0,81 %
Total	100.00 %	99,99 %

Fuentes: SIR – ACR, Centro de Servicios Bucaramanga, corte a enero 31 de 2012 y Centro de Servicios Barrancabermeja, corte a junio 12 de 2012.

Esta reorganización de la ruta de reintegración también se acompaña de la reorganización de los beneficios económicos que se brinda a los participantes del programa. De la suma global que se desembolsaba mensualmente a cada participante, se ha pasado a tres tipos de beneficios económicos que están condicionados a la participación y asistencia superior al 90% de las actividades que se realizan de: Talleres de atención psicosocial; clases en el proceso educativo; y las clases teóricas o prácticas en el proceso de formación para el trabajo, correspondiendo a cada una de las estrategias la suma de \$160.000 pesos mensuales. En esta reorganización los beneficios económicos son entendidos como apoyo para cubrir gastos de transporte, materiales y alimentación de los participantes en el desarrollo de las estrategias y actividades que acompañan el proceso de reintegración y no como recursos de sostenimiento de las personas en proceso.

Esta reorganización ha generado insatisfacciones e inconformidades entre la población participante puesto que ha significado para ellos y ellas:

- Obligación de asistir a la totalidad de actividades que se programen, sean talleres psicosociales, clases del programa educativo o del curso de capacitación, frente a una realidad cotidiana de llegadas tarde e inasistencias frecuentes (justificadas o no) a las actividades programadas.
- El 40% de participantes no recibe beneficio económico educativo, un 22,84% porque son bachilleres y no adelantan estudios tecnológicos o universitarios y el 17,18% porque no están inscritos en ningún curso educativo.
- El 56,94% de los desmovilizados que no han participado de cursos de capacitación técnica y productiva, desarrollada por el Sena, no reciben beneficio económico por este concepto.

En consecuencia, buena parte de los participantes en el programa han tenido una reducción en los beneficios económicos que recibían de la ACR, situación que genera inconformidad para ellos, incluso algunos siguen considerando que el beneficio económico es una ayuda para la subsistencia de sí mismos y sus familias.

201- Estos datos se van modificando en la medida en que se incorporan al Sistema de Información para la reintegración, el cumplimiento de requisitos educativos, de formación para el trabajo, de atención psicosocial y de trabajo social de los y las participantes en el proceso de reintegración.

De otro lado, dado que en la clasificación de los participantes en las etapas de la ruta de reintegración se toman en cuenta factores como: el nivel educativo en el cuál cursa estudios, la formación y capacitación técnica – productiva y la ruta psicosocial, es de esperar que en una población de bajo acceso a la educación formal y a capacitación técnica se encuentre que el 13,7% de ellos no se pueda clasificar fácilmente en alguna de las etapas, y que haya participantes con 6 – 7 años en el proceso que son clasificados en una etapa que no les correspondería en relación con el tiempo recorrido.

El desarrollo de la ruta de reintegración, lleva a preguntarse por las dificultades que tiene la población desmovilizada participante de la ACR para el acceso y uso de las oportunidades que ofrece el programa, como también por las dificultades de las estrategias del programa para vincular y garantizar la permanencia de los participantes en la implementación de las actividades de cada estrategia.

3.1.1 Perfil de los participantes en proceso de reintegración

Las características de la población desmovilizada, que participó de las reuniones y talleres de grupo focal realizadas en el desarrollo de la investigación, son muy diversas y contrastantes, puesto que se encuentran desmovilizados(as) que:

Tienen un buen nivel de análisis político del proceso de desmovilización y reintegración desde la perspectiva colectiva, están actualizados frente a la problemática jurídica y aplicación de la Ley 1424 de 2010. Otros presentan bajo nivel de análisis del proceso colectivo, ubican y enfatizan sólo en los problemas de su situación individual y personal.

En algunos participantes se identifica y reconoce la trayectoria de su liderazgo entre la población desmovilizada, en la interlocución con la ACR y con organizaciones sociales, que son críticos y enfatizan en problemáticas colectivas del proceso de reintegración, no en problemas personales e individuales, y con una actitud de propuesta frente a los problemas y dificultades.

En algunos grupos se aprecia buena relación entre participantes, se evidencian lazos de integración, camaradería y confianza entre ellos, -se nombran, hacen bromas, comparten refrigerios, comentan situaciones cotidianas y del proceso de reintegración entre ellos sin prevenciones, exponen sus ideas y discuten diferencias sin problema, comparten información sobre distintas personas del programa, sus actividades, ocupaciones y problemáticas, evidencia de relaciones permanentes y cotidianas entre ellos.

En otros en cambio, se aprecia muy baja participación, no expresan los problemas y dificultades, algunos a veces intervienen con cierta agresividad, mantienen silencios, y manifiestan que los estudios, reuniones, talleres y foros no llevan a ninguna parte, que no les resuelve problemas y no les interesan porque sus problemas los resuelven ellos mismos.

La participación de las mujeres es más bien baja, son el 17,12% de la población participante en el proceso de reintegración pero no tienen una dinámica de encuentro y discusión colectiva sobre su condición y problemática como desmovilizadas, tampoco identifican las diferencias o dificultades propias de la condición de género.

Algunos participantes reflejan una visión de crítica y necesidad de transformación de estructuras sociales para la solución de los problemas de la población, y expresan su rechazo a las violaciones de derechos y a la guerra, aunque pocas veces desde una perspectiva autocrítica.

Muy pocos reconocen su participación en actividades de combate, señalan que eran transportistas, radistas-comunicación, rancho-cocina, sanidad-enfermería... pareciera que se ubican en estos roles como forma de protección y seguridad, dado que no tendrían información directa sobre operaciones, enfrentamientos y acciones que significaron violaciones de derechos humanos o infracciones del DIH.

Para ex-integrantes de autodefensas y ex paramilitares la desmovilización fue obligada, no pensaban ni les interesaba desmovilizarse. No hubo información, ni participación de las tropas en la discusión interna o análisis de la desmovilización, sólo recibieron la orden de sus comandantes de trasladarse al lugar de concentración de las tropas para la desmovilización y se limitaron a cumplir las órdenes, porque estaban obligados a hacerlo y sabían que si incumplían podrían ser asesinados. En ese sentido, el desarme y desmovilización fue un acuerdo y negociación entre el Gobierno, por medio de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y los comandantes de los bloques y frentes de las autodefensas.

“En los campamentos no se habló del proceso DDR, se habló de procesos de paz y de proyectos macro a nivel productivo, no se habló de nuestra vida, de nuestro futuro, del papel de los desmovilizados ni del proyecto de vida que se iba a llevar”²⁰²

Los y las ex-integrantes de las AUC recibían pagos mensuales de dinero, el monto dependía del oficio o actividad que realizaba para el grupo armado.

Una parte de la población desmovilizada colectivamente percibe que los servicios y beneficios de la política de reintegración que da la ACR son producto de las negociaciones del Gobierno y los comandantes, y que se lo ganaron por colaborar en la derrota de la guerrilla y la defensa de la patria, aun cuando ahora les ‘echen toda el agua sucia’.

Por su parte, los y las integrantes de los grupos guerrilleros no recibían pagos mensuales, ocasionalmente solicitaban y recibían dinero para cubrir gastos familiares, principalmente urgencias médicas. Para ellos, la desmovilización es pensada, analizada, es una decisión personal que lleva bastante tiempo tomar y otro más para encontrar la oportunidad de huir del grupo armado y entregarse a las autoridades. Es decir, parte del interés y voluntad de cada persona. En ese sentido, les es más fácil comprender que el Gobierno por intermedio de la ACR les apoya en su proceso de reintegración a la vida civil.

Unas personas ingresaron a los grupos armados porque le atraía la vida militar (uniforme; las armas; el respeto que recibían de la población, así fuera resultado del miedo; el uso de carros y la posibilidad de salir de la zona; la oportunidad de comandar un grupo); muchos ingresaron muy jóvenes, siendo aún niños; no han

estudiado, no saben hacer otra cosa distinta a la vida de la guerra, y algunos tampoco desean hacer otra cosa distinta, y como al estar desmovilizados no pueden seguir la vida militar (no les está permitido trabajar con el ejército, policía u organismos de seguridad; ni con empresas privadas de seguridad, aunque algunos se desempeñan en esta actividad) ¿qué caminos les quedan?

3.1.2 Huellas de la guerra sobre las personas integrantes de grupos armados

En los talleres de grupos focales y conversaciones con participantes en el programa de reintegración y con funcionarias(os) reintegratoras(es) sobre las huellas que la guerra hace sobre las personas, se encontró que:

- El entrenamiento militar y el adoctrinamiento político que dan los grupos armados preparan para el uso de armas y tácticas de guerra, también prepara para cumplir las órdenes impartidas por los superiores, sin ninguna consideración ética o moral, sin consideración de vínculo filial, de amistad o de vecindad, y sin ninguna clase de discusión o cuestionamiento. Se aprende que cuestionar, discutir e incumplir las órdenes significa recibir castigos severos e incluso la muerte.
- Se aprende a usar las armas, el vestuario, los símbolos, los himnos, y a hacerlos parte de la vida cotidiana, de la imagen e identidad personal y grupal.
- Se usan lenguajes autoritarios, bruscos, desprovistos de afecto y frecuente uso de palabras vulgares.
- Se “gozaba” del respeto de la población, producto del miedo y el temor a las represalias.
- Los mandos medios usufructuaban algunas comodidades: carros, dinero, hombres bajo su mando, mujeres...
- La vida cotidiana estaba centrada en las tareas de la organización y en el cumplimiento de las órdenes dadas por el mando. No se planifica ni se hacen proyecciones personales y familiares; se debilitan y se pierden las responsabilidades familiares; se destruyen las relaciones y lazos afectivos familiares y de amistad.
- Algunos sectores realizaban con alguna frecuencia parrandas, francachelas y comilonas, que terminaban la mayoría de veces con riñas y hechos de violencia.

Con hombres y mujeres participantes se conversó sobre las diferencias que se presentan en razón del género, tanto en la guerra como en el proceso de reintegración, encontrando algunos elementos que permiten comprender las diferencias entre hombres y mujeres, así:

- Consideran que en la guerra las mujeres deben comportarse igual que los hombres probando su valor cada vez que se requiera.
- Las mujeres durante la guerra -en la organización- no podían andar con civiles, para los hombres era más permitido involucrarse con mujeres de la civil. Cuando una mujer de la organización andaba con un hombre que no era del grupo se pensaba que era un infiltrado, por eso no estaba bien visto, aunque no estaba expresamente prohibido.
- A las mujeres civiles les atraen los hombres armados y con poder, en cambio a los hombres civiles no les gustan las mujeres de los grupos armados porque les tienen miedo.

“Mi motivación para ingresar al grupo fue mi esposo, quería un nivel igual a él, pues de esta manera me podía defender de él”²⁰³

“Las mujeres en la organización perdían la feminidad. Eran iguales a los hombres, uno no se metía con una paraca por temor”²⁰⁴

- Muchas mujeres que estaban solas (sin pareja estable) en el grupo armado hoy están solas en la reintegración, a diferencia de los hombres que venían solos y encontraron pareja, en ese sentido parece que es menor el rechazo y la estigmatización hacia los desmovilizados varones.
- Algunos participantes narran que en una zona los comandantes paramilitares salían con sus hombres a prostíbulos y desde allí llamaba a la pareja -esposa o compañera- de algunos de ellos para que éstas se dieran cuenta de la infidelidad y se formaran discusiones, que ocasionalmente terminaban en riñas callejeras. Era una forma de diversión, que desde luego generaba problemas de pareja y además violencia.
- Según el relato de mujeres desmovilizadas, es cierto que en las filas de la insurgencia la procreación no está permitida en el campo de batalla y que por ello muchas guerrilleras son obligadas a abortar.

3.1.3 Percepción de las mujeres sobre diferencias entre hombres y mujeres y violencia contra las mujeres

En el proceso de investigación se realizó un taller focal con mujeres en reintegración, el cual abordó la reflexión sobre las diferencias de hombres y mujeres, encontrando que las mujeres participantes no identifican con facilidad diferencias significativas entre hombres y mujeres desmovilizados(as). Según ellas la ACR tampoco hace distinciones en el acceso a servicios, se brindan por igual, no hay prioridad ni privilegios, y piensan que es igual ser un hombre o una mujer desmovilizada²⁰⁵.

Algunas ideas surgieron en torno de las dinámicas durante la guerra y durante la etapa de reintegración, al respecto compartieron:

En el grupo armado ilegal, a diferencia de la vida civil, la violencia contra las mujeres no estaba permitida, tampoco la infidelidad.

“En la vida civil los hombres son más violentos con las mujeres porque no hay sanción ni control, allá el que le pegara a la mujer (su pareja) se moría”²⁰⁶

“Existía respeto por la pareja y no estaba tolerada la infidelidad -de los hombres ni de las mujeres-. En la guerrilla si se presentaba un infidelidad se recibía una sanción, un correctivo (...) ahora sí descaradamente lo pueden hacer porque no hay control.

203- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

204- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

205- Se identifican como diferencias importantes que los hombres consiguen trabajo en oficios de construcción que generalmente no exige recomendaciones o experiencia certificada y con un mercado de mano de obra amplio, mientras que la empleabilidad de las mujeres está en el trabajo doméstico o en actividades de cocina y restaurantes que generalmente es de bajo salario, necesita menos mano de obra y en el que se exige experiencia.

206- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

Tampoco eran violentos con sus parejas porque tenían una imagen que mantener ante los compañeros”²⁰⁷

Las mujeres participantes del taller focal no pueden decir qué tan frecuente es la violencia de pareja en la población desmovilizada, pero cada una da cuenta de uno o dos casos que conoce, expresando que en el grupo armado ilegal había control y castigo sobre esta práctica. Consideran como causas de la violencia de pareja entre los desmovilizados que:

“Luego de desmovilizarse las parejas se alejan de sus familias y eso hace vulnerable a las mujeres”²⁰⁸

“las mujeres que se dejan maltratar carecen de autoestima”²⁰⁹

“cada mujer tiene sus propias razones para aguantar el maltrato”²¹⁰

Una de las mujeres participantes en el taller se reconoció como víctima de la violencia de pareja, y hace explícita la ‘queja’ de cómo las funcionarias de la ACR de Bogotá -donde sucedieron los hechos- no hicieron nada para ayudarla, a pesar de que su marido también era desmovilizado. Y narró que una vez llegaron a una visita domiciliaria, ella no tenía más de 40 días de haber parido, y la encontraron con las huellas de la violencia de su marido en el rostro. Cuenta que esa vez no le indagaron sobre los hechos, ni la apoyaron o motivaron para que denunciara y que la funcionaria que la atendió le hablaba del perdón y de la importancia del diálogo en la pareja. Nunca sintió el apoyo de la ACR, ella quería denunciarlo, necesitaba protección y aunque ellos sabían que era víctima de la violencia de género nunca la ayudaron. Comentó que ella sola, más adelante, logró salir de ese círculo de violencia.

De otra parte, también se dijo, con base en lo que las participantes habían observado a lo largo de su proceso de desmovilización y reintegración, que había diferencias entre las mujeres que provenían de la guerrilla o de los paramilitares. Las de la insurgencia tenían mayor formación política, porque fueron preparadas en la organización para pensar, para hablar, para tener voz y voto. Las que provienen de organizaciones armadas con orientación ideológica de derecha no son formadas políticamente y “son más indisciplinadas y más promiscuas” (según afirman quienes así lo vivieron (o vieron) en los albergues de desmovilizados donde convivieron unas y otras en algún tiempo).

3.1.4 Consecuencias de la guerra sobre los y las integrantes de los grupos armados

En las conversaciones con participantes del programa de reintegración y funcionarias reintegratoras, se anota que la principal consecuencia de las situaciones vivenciadas en el grupo armado ilegal es el stress postraumático, que al ser más o menos agudo

207- Esta percepción contrasta con las anécdotas que narran cómo paramilitares propiciaban la infidelidad y la violencia entre sus hombres y sus parejas. Comentaban que un comandante iba con sus hombres a un prostíbulo y de allí llamaba a las parejas y les hacía ir hasta donde estaban para que los vieran y se generaran discusiones y riñas. Era una forma de diversión bastante usual, según contaron.

208- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

209- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

210- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

puede presentar una mayor o menor afectación, y sus manifestaciones cotidianas pueden ser más o menos observables, pero en muchos casos pasan desapercibidas para el desmovilizado, su familia, compañeros e incluso para los funcionarios que acompañan el proceso de reintegración. Esa forma de estrés puede expresarse a través de:

- **Alteración de ciclos de sueño y descanso**, por alucinaciones, sueños, recuerdo de hechos y situaciones vivenciadas por cada participante en el grupo armado.
- **Estado de inseguridad y temor**. Sensación de persecución, inseguridad e indefensión que genera estados permanentes de alerta y sobresalto, y lleva a aislarse de las personas que lo rodean, incluso de su familia.
- **Estado de irritabilidad y violencia**. Reacciones explosivas y violentas, hasta las situaciones más sencillas y normales provocan reacciones de soberbia, ira, gritos; ofende, golpea y puede llegar a agresiones mayores sin ser consciente de ello.

Las personas que son más cercanas y allegadas a quienes sufren de stress postraumático, suelen ser las primeras y principales víctimas de las explosiones de violencia de las personas afectadas por esta enfermedad mental.

En los casos agudos, donde las manifestaciones del stress postraumático han sido muy visibles, los profesionales de la ACR han podido identificarlas, ofrecer un primer nivel de atención y se han remitido a instituciones médicas especializadas que han desarrollado el tratamiento correspondiente. Los casos menos agudos han pasado desapercibidos, en tanto el participante, que es quien siente y sufre las manifestaciones del stress, no las comenta ni solicita la ayuda profesional o terapéutica.

Hasta ahora (desde diciembre de 2011) se aplica un instrumento a la población desmovilizada tendiente a identificar y valorar afectaciones de la guerra y adicciones a sustancias psicoactivas. Los resultados de esta prueba diagnóstica permitirán diseñar estrategias y rutas de atención especializada y personalizada a fin de contribuir a la recuperación de la salud mental de la población desmovilizada.

3.2 Atención psicosocial

3.2.1 Logros del proceso de reintegración y la atención psicosocial

Se reflexionó con participantes y profesionales re-integradoras sobre los avances y logros de la atención psicosocial, encontrando que se reflejan en:

- Un aspecto alrededor del cual hay unanimidad, entre desmovilizados y funcionarias re-integradoras, es que se mantiene a hombres y mujeres participantes en la civilidad, en los talleres psicosociales, en los cursos de capacitación. Y eso significa que no están ‘en el monte echando bala’ y hay menos muerte, dolor y sufrimiento.
- Los y las participantes en proceso de reintegración desarrollan nuevas competencias y estrategias de afrontamiento de situaciones: conocimiento de sí mismos, de sus fortalezas, sus debilidades, sus miedos y sus capacidades, para actuar en sus entornos familiares, sociales y laborales.

- Avanzan en la re-significación de conceptos como: Legalidad, violencia, trabajo, vida productiva, familia... que aportan en la aceptación de normas y de mecanismos institucionales para la solución de conflictos, del reconocimiento de derechos y deberes y del compromiso de mantenerse en la legalidad-civilidad, al tiempo que adquieren mayor conciencia del proceso en el que están y de los avances en el mismo.

“En la guerra es todo temporal, en la civilidad tengo un lugar, un espacio, proyección, pero igual unas responsabilidades, unas normas que cumplir, unas obligaciones”²¹¹

- Avanzan en la construcción de proyecto de vida, empiezan a construir visión de la vida y el futuro que quieren para sí y sus familias; se plantean metas y expresan sus deseos de superación y de satisfacción personal por los avances en la ruta de reintegración: Recuperar o establecer su familia, avanzar en el estudio, tener empleo, adaptarse al barrio donde vive...
- Desarrollan competencias sociales: capacidad de comunicación asertiva, reconocimiento del otro y de la diferencia, resolución dialogada de los conflictos, responsabilidad con su vida, con la familia y capacidad de construir confianzas para formar e interactuar con la familia y asumir la crianza de los hijos.
- Re-significación de conceptos en roles, vínculos, relaciones, resolución de conflictos, responsabilidad, adaptación a la vida familiar, relación con los hijos, son consientes en su rol de padres, existe preocupación por las cosas cotidianas del hogar, trabajan la reconstrucción de la dinámica familiar, recuperación del afecto y la confianza.
- El acceso al programa educativo genera satisfacciones y motivaciones para seguir adelante, además les permite acceder y valorar los procesos de formación y capacitación para el trabajo, el logro de empleo.
- Se brindan servicios que posibilitan el acceso a educación, generación de ingresos, salud, y procesos de atención de problemáticas específicas: consumo de sustancias psicoactivas, enfermedad de alto costo y discapacidades.
- Avance en la apropiación de conceptos víctima – victimario y comprensión del desafío de la reparación, que posibilita cambios en las maneras de relacionarse y lograr la inclusión social, proceso lento para lograr la aceptación e inclusión en la comunidad.

3.2.2 Limitaciones detectadas en el proceso de atención psicosocial

De las conversaciones con participantes en proceso de reintegración y funcionarias de los Centros de Servicio al desmovilizado se identificaron las siguientes limitaciones:

211- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

- i). Falta de aplicación de pruebas de detección de afectaciones y adicciones para desarrollar estrategias de atención y tratamiento especializado a cada participante según las afectaciones detectadas.
- ii). Es necesaria una mayor vinculación de la familia en actividades de reintegración y realización de actividades de atención psicosocial a cada grupo familiar.
- iii). La atención que pueda brindarse está condicionada al número de profesionales vinculados y al número de participantes y de municipios a los cuales se debe atender, lo que se ha visto es que la capacidad de atención es muy limitada, ello conduce a privilegiar las actividades y talleres grupales que resultan poco efectivos para la atención a problemáticas y necesidades específicas de los participantes del proceso de reintegración.

3.3 Atención en salud

La ACR en desarrollo de la política de reintegración social y económica brinda a las personas desmovilizadas y a sus familias el acceso a servicios de salud, mediante la afiliación al régimen subsidiado; también mediante convenios con entidades especializadas brinda la atención a enfermedades mentales y de consumo de sustancias psicoactivas, como también de prótesis y rehabilitación a personas en condición de discapacidad.

La información suministrada por la ACR – Centro de Servicios de Bucaramanga, señala que a enero de 2012, en el departamento de Santander 1.204 participantes y sus familias se encuentran afiliados al Sistema de Salud Subsidiado, que corresponden al 83,09% del total de participantes.

Igualmente se reporta a 450 participantes de la ACR como afiliados al régimen contributivo, sea como resultado de vinculación laboral o por afiliación independiente, indicando avances en el proceso de reintegración y estabilidad económica.

Ahora bien, sumadas las afiliaciones a los dos sistemas se totalizan 1.654 afiliaciones, es decir, hay 205 afiliaciones más que el número de participantes, indicando que 205 participantes tienen doble afiliación al sistema, porque han logrado mejores ingresos y han querido mejorar los servicios de salud, dada las diferencias que se presentan en los POS.

Tabla 36. Participantes de Santander afiliados al Sistema de Salud

Afiliación a Noviembre de 2011	Número participantes afiliados	Porcentaje
Afiliado SGSSS – Subsidiado	1.204	83,09%
Cotizante Activo – Contributivo	450	31,06%

Fuente: Fuente: ACR – Centro de Servicios Bucaramanga.

Sin embargo, la información recogida en las encuestas de caracterización socioeconómica, muestran que el 25,84% de encuestados está afiliado al régimen contributivo en tanto un 56,74% está en el subsidiado y se encuentra que un 17,42% reporta en la encuesta no estar afiliado a ningún sistema de salud.

Esta cifra pareciera explicarse en factores como:

- Cambios de municipios de residencia de los participantes en el programa.
- Demora en trámites de afiliación y actualización de las afiliaciones.
- En las bases de datos de los sistemas de salud, aparecen personas con nombres parecidos y se rechaza la afiliación y el trámite de aclaración y modificación es lento y dispendioso.

La encuesta permitió conocer que 48 personas reportan tener problemas de discapacidad o enfermedad crónica, de ellas 26 reciben tratamiento médico, 6 han recibido prótesis y 9 se encuentran en rehabilitación, los otros 7 casos no han recibido atención.

3.3.1 Dificultades en el acceso a salud

En las conversaciones con participantes en el proceso de reintegración fueron señaladas como principales problemáticas de acceso y atención de salud de la población desmovilizada, las siguientes:

Cambiaron las categorizaciones de sisbén y los desmovilizados aparecen en categorías altas -no se cumple el nivel 'N' en el cual estaban- y la atención especial se ha perdido. Obedece a que algunos participantes no señalan su condición de desmovilizado(a) al momento de tramitar la afiliación y por eso no se les ubica en la categoría que corresponde; también obedece a que el servicio de sisbén en los municipios es manejado por medio de OPS (órdenes de prestación de servicios a 3 – 4 meses) y hay alta rotación de personal que desconoce la normatividad vigente para afiliación de desmovilizados al régimen subsidiado, gestión que realizan las funcionarias reintegratoras para lograr la categorización y restablecimiento de servicios.

Problemas que se han vuelto cotidianos en el acceso a los servicios de salud: Demora en los trámites de citas médicas, exámenes, especialistas, medicamentos, copagos.

Discriminación del personal de salud al conocer que son desmovilizados: Rechazo; demora innecesaria en los trámites; señalarlo (nombrarlo) como desmovilizado frente al público...

Un obstáculo presentado a algunos participantes para el acceso a servicios de salud se origina en los riesgos de seguridad que significa el desplazamiento para buscar la atención fuera del municipio donde residen.

3.4 Acceso a la educación formal

El acceso a la educación formal es considerado un pilar fundamental en el proceso de reintegración social, porque contribuye a la construcción de valores, por las relaciones sociales que establecen las personas apoyando la construcción de vínculos sociales, por el desarrollo de procesos mentales para apropiar conocimientos y potenciar capacidades y habilidades de análisis y de actuación ante la realidad, elementos que apoyan la reintegración y la capacidad de desempeñarse en la civilidad.

De otro lado, el avance en los procesos educativos formales, permite que cumplan los requisitos de escolaridad establecidos por el Sena para el acceso a la oferta pública de formación y capacitación para el desarrollo de competencias laborales, y por esta vía tengan más y mejores oportunidades de acceso al mercado laboral o de generación autónoma de ingresos, avanzando en el proceso de reintegración económica.

En esta perspectiva la ACR a través de los Centros de Servicios, gestiona el ingreso a la oferta pública educativa existente en los municipios de residencia de los participantes, oferta dirigida a jóvenes y adultos que no lograron permanecer y culminar sus estudios en el sistema educativo, a fin de validar el bachillerato y permitir la continuación de los procesos formativos en la educación técnica, tecnológica o universitaria.

Esta oferta educativa se estructura por ciclos que comienzan por la alfabetización (lectura, escritura y operaciones lógico-matemáticas), preparando para el estudio del ciclo primario (1º a 5º grado), la básica secundaria (6º a 9º grado) y la educación media (10 y 11º grado) obteniendo el grado de bachiller.

La oferta pública de validación de bachillerato en la cual están inscritos los participantes de la ACR, se realiza desde dos modelos pedagógicos diferentes. El primero que se desarrolla en la mayoría de colegios públicos, es conocido como el modelo de Educación Continuada de CAFAM²¹², diseñado a partir de contenidos académicos básicos para el aprendizaje y organizado por etapas. En el proceso de aprendizaje hay un dominio cognitivo, la metodología se centra en aprender a aprender a través del estudio independiente en casa, también da importancia al trabajo en pequeños grupos en el centro de aprendizaje con el fin de desarrollar la competencia comunicativa, interactuar con los demás compañeros y aprender con ellos y de ellos.

El segundo modelo es el Programa Colombiano de Formación para la Reintegración²¹³, desarrollado por la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, en convenio con la ACR, que partiendo de comprender la importancia que la educación y la formación para el trabajo tienen en los procesos de reintegración, encaminó esfuerzos a poner en marcha una propuesta novedosa de formación para la reintegración que pretende vincular los procesos de educación y formación para el trabajo, a partir de realizar acciones de alfabetización y nivelación de competencias académicas básicas, del desarrollo de conocimientos, actitudes, capacidades y habilidades para que al realizar cursos de formación para el trabajo puedan formarse con niveles de calidad.

El proceso llamado “La vuelta es aprender, mi compromiso para prosperar” se organizó en 6 ciclos -6 semestres-, en los cuales se avanza en el desarrollo de competencias académicas básicas, se trabaja el proyecto de vida en sus dimensiones afectivas, productivas y ciudadanas, y paralelamente se desarrollan cursos de formación para

212- El Ministerio de Educación Nacional reconoce el modelo de Educación Continuada de CAFAM como educación para jóvenes y adultos dirigido a personas mayores de 13 años que no han realizado ningún grado de la básica primaria o que hayan cursado máximo el tercer grado. Igualmente a personas mayores de 15 años que realizaron la básica primaria y han estado por fuera del servicio público formal por más de dos años.

213- “La vuelta es aprender mi compromiso para prosperar”. Programa Colombiano de Formación para la Reintegración, ACR – FIDC, primera edición, Santafé de Bogotá D.C. Mayo de 2011.

el trabajo y capacitación en gestión empresarial como apuesta de formación para enfrentar el reto de la reintegración económica.

Esta experiencia se implementa desde 2011 en el Colegio Carlos Vicente Rey de Piedecuesta y en 2013 estará completando el cierre de la primera cohorte formada en el desarrollo del modelo, en ella participan 117 personas, de ellas 19 son participantes del programa de reintegración.

Tabla 37. Acceso a la educación formal

Nivel Educativo		Centro Servicios B/ manga	Centro Servicios Barranca
Sin registro o inscripción		17,18%	20,29%
Primaria	Alfabetización	11,18%	2,11%
	Ciclo 1	18,15%	6,17%
	Ciclo 2	14,22%	18,02%
Básica Secundaria	Ciclo 3	9,59%	13,64%
	Ciclo 4	5,59%	11,85%
Media Vocacional	Ciclo 5	1,24%	5,19%
	Ciclo 6 – Bachilleres	22,84%	22,73%
Total		99,99%	100,00%

Fuente: ACR – Centros de Servicios Bucaramanga y Barrancabermeja.

La información suministrada por la ACR – Centro de Servicios de Bucaramanga, muestra que de los participantes en el programa de reintegración en Santander, el 17,18% no está inscrito en ningún curso de formación, es decir, no adelantan en la actualidad estudios en ninguno de los ciclos del proceso educativo, y en consecuencia tampoco obtienen el beneficio económico por estudio.

La información muestra que el 22,84% de participantes de la zona que atiende el Centro de Servicios en Bucaramanga y que el 22,73% de participantes de la zona que atiende el Centro de Servicios en Barrancabermeja han culminado su bachillerato y pueden aspirar a continuar su proceso de formación técnica, tecnológica o universitaria. Sin embargo, en la política de reintegración no hay definiciones de apoyo para el acceso de participantes a la educación universitaria; se contempla que el aporte para plan de negocio (beneficio económico por una sola vez y por la suma de 2 millones de pesos para desmovilizados colectivos y de 8 millones para desmovilizados individuales) podrá ser invertido en educación superior, pero aun así los recursos resultan insuficientes para permitir la realización de estudios pos secundarios dados los actuales costos de la educación superior.

Las definiciones de política para los beneficios educativos establecen tiempos para la realización de los distintos ciclos educativos y en los cuales se otorga a cada participante el beneficio económico. Para la alfabetización asigna un plazo de 6 meses, para los estudios primarios 2 años, para estudios de básica secundaria 2 años y para la educación media también 2 años, en total se prevén 6 años y 6 meses para realizar todo el proceso educativo.

3.4.1 Dificultades identificadas para el acceso al sistema educativo

Según los datos de las encuestas y de las conversaciones sostenidas en los talleres de grupo focal con participantes en proceso de reintegración y con funcionarias re-integratoras, se identifica que las principales dificultades para el acceso a la educación son las siguientes.

En primer lugar, se identifican dificultades relacionadas con los horarios de las ofertas educativas, donde algunos expresan que los horarios diurnos (sábados) se cruzan con horarios laborales. Respecto de la posibilidad de la jornada nocturna entre semana, se expresa que el horario educativo comienza a las 6:30 p.m. y por eso los que terminan la jornada laboral a las 5:30 – 6:00 p.m. no alcanzan a llegar, a lo que agregan que el cansancio producido por las jornadas laborales dificulta aprovechar los horarios nocturnos. También quienes residen o trabajan en fincas señalan que no tienen posibilidad de trasladarse al casco urbano del corregimiento o municipio regularmente por las distancias, costos del transporte, el tiempo de traslado o la ausencia de medio de transporte en los horarios de estudio.

En segundo lugar, problemas de aprendizaje, causados unos por limitaciones visuales, otros por dificultades en el desarrollo de la motricidad fina y otras relacionadas con la forma en que se procesa la información, que podrían considerarse problemas de aprendizaje normales en personas que iniciaron estudios primarios no los culminaron y que han estado durante varios años alejados de la disciplina y la práctica de estudiar.

- Dificultades de visión: No se ve bien, se cansa muy rápido, se duerme leyendo.
- Dificultades de escritura: Torpeza en el manejo del lápiz, lentitud en la escritura, mala ortografía y composición gramatical.
- Dificultades de aprendizaje: Necesita leer y repetir varias veces, por tanto aprenden muy lento; dificultad para realizar operaciones matemáticas y para comprender bien las ideas; se aprende y se realizan ejercicios y tareas, pero se olvida muy rápido lo que se aprendió; se dificulta organizar las ideas y pensamientos.

En tercer lugar, dificultades relacionadas con el sentido y el interés que el participante tiene sobre el estudio. En las discusiones con ellos se evidencia que personas jóvenes entienden el estudio como oportunidad para aprender, tener un oficio o profesión y como un medio para obtener un empleo y un futuro mejor. Algunos participantes mayores de 45 años consideran que el estudio es para aprender pero no lo relacionan con una profesión o empleo, “porque a un viejo ¿quién lo emplea?”, no necesitan ser bachilleres necesitan aprender lo que pueden utilizar para el trabajo que realizan, además para ellos la prioridad es la generación de ingresos para su sostenimiento y el de su familia.

En cuarto lugar, en algunos municipios no hay oferta pública de educación en la cual puedan participar, o es percibida como educación de “mala calidad”, factor que no motiva a realizar allí los estudios; por ello algunos se desplazan hacia el área metropolitana de Bucaramanga cada fin de semana para hacerlo, lo cual implica tiempos y costos que no son reconocidos por la ACR y con frecuentes problemas de llegadas tarde e inasistencias por los trancones y cierres de vías, que conducen a descuentos en el beneficio económico recibido de la ACR por asistencia al estudio.

En quinto lugar, dificultades para responder por el trabajo y el estudio, situación más complicada cuando se tiene familia, especialmente para las mujeres con hijos y que están sin pareja y apoyo de otros familiares. Surge una disyuntiva que no es fácil de resolver: cumplir con el estudio o dedicarse al trabajo para cubrir las necesidades familiares.

Situaciones que las ofertas públicas educativas no reconocen y ante las cuales las llegadas tarde, las faltas y el retiro se vuelven condición frecuente de la situación educativa de algunos desmovilizados y desmovilizadas, recordemos que el 17.18% de participantes no está inscrito en ningún proceso educativo.

“La ruta de la reintegración es un obstáculo, no pudieron encontrar la ruta: la oferta de la educación la ofrecen cuando se está trabajando y en condiciones que limita el acceso, la oferta no se adapta a las condiciones reales de nosotros, la calificación generada no cumple con las necesidades de la población respecto a lo educativo”²¹⁴

El reto en el acceso a la educación formal es diseñar e implementar propuestas educativas que ofrezcan alternativas de formación a los y las participantes, tomando en consideración sus características, sus problemáticas y dificultades de aprendizaje, también sus expectativas y las realidades de los contextos locales en donde reside la población. En esa perspectiva sería recomendable:

1. Vincular a la discusión a las secretarías de educación y a los colegios con programas en los que participan desmovilizados para identificar nuevas alternativas y propuestas, en particular, “La vuelta es aprender”, a definir estrategias de formación de docentes en las estrategias pedagógicas, y concertar con población desmovilizada las condiciones de implementación a fin de ofrecer alternativas más pertinentes y adecuadas de educación.
2. Ofrecer oportunidades de acceso a educación superior de la población, dado que el 22.82% es bachiller y existe interés en continuar proceso el educativo.

3.5 Formación para el trabajo

La estrategia de formación para el trabajo es considerada un eje clave para la reintegración económica, que junto con la educación permiten más y mejores oportunidades de empleo o de generación autónoma de ingresos. En razón de ello, la ACR gestiona la participación de la población dentro de la oferta pública de formación para el trabajo que ofrece el Sena por medio de los Centros de Formación Profesional, según la programación que esta institución realice y cumpliendo los requisitos de escolaridad que ella exige.

La oferta pública gratuita del Sena se da a nivel de formación titulada y de formación complementaria. La formación titulada en los niveles operativos se da en varias modalidades:

- i). **Trabajadores Calificados**, por lo general requieren educación básica secundaria más cursos de capacitación, entrenamiento en el trabajo o experiencia, duración promedio 1.760 horas, es decir un año tiempo completo;

214- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

- ii). **Formación de técnicos profesionales**, por lo general tiene una duración de año y medio -2.640 horas-, distribuidos en la etapa lectiva 1.760 horas y en la etapa productiva 880 horas;
- iii). **Formación de Tecnólogos**, en general tiene una duración de dos años -3.520 horas-, en la etapa lectiva 2.640 horas y en la etapa productiva 880 horas.

La complementaria se orienta a actualizar y complementar los conocimientos y destrezas de trabajadores vinculados a un trabajo, como también a capacitar y complementar conocimientos y destrezas de personas desempleadas a fin de promover su vinculación al mundo laboral, por lo general son cursos con duración máxima de 400 horas.

Para el ingreso a la oferta pública de formación profesional gratuita del Sena se necesita acreditar noveno grado para cursos de formación complementaria y de bachiller para la formación técnico profesional o tecnólogo.

Se identificaron cinco factores que limitan de manera significativa el acceso a los cursos de formación profesional por parte de los participantes en el programa de reintegración:

- i). Cumplimiento de requisitos académicos. El 30% de participantes tiene entre el 9º grado y bachiller, y alrededor del 23% estudia la secundaria;
- ii). La mayoría de la oferta educativa profesional se realiza en horarios diurnos y la formación complementaria en horarios nocturnos, que coinciden con jornadas laborales de los participantes;
- iii). La oferta de formación para el trabajo del Sena se hace regularmente en las sedes de los Centros de Formación Profesional, y hacia otros municipios y corregimientos se ofrecen y realizan cursos trasladando instructores pero están condicionados a la inscripción de un grupo mínimo de personas, en caso de no completarse la oferta no se realiza;
- iv). Los cursos de formación Sena están diseñados para la población en general y no necesariamente reconocen los intereses, necesidades o aspiraciones de la población desmovilizada, razón por la cual pueden ser poco atractivos y convocantes;
- v). Para residentes y trabajadores rurales las distancias, costos de transporte, tiempo de traslado y falta de medios de transporte, son limitantes de acceso y participación.

La información reportada por la ACR – Centro de Servicios de Bucaramanga, muestra que el 56,94% de los y las participantes en el proceso de reintegración no han realizado cursos de formación para el trabajo y que el 28,23% ha realizado 1 ó 2 cursos, reflejo de las dificultades ya señaladas.

Tabla 38. Participantes en cursos del Sena, según número de cursos en que se inscribieron

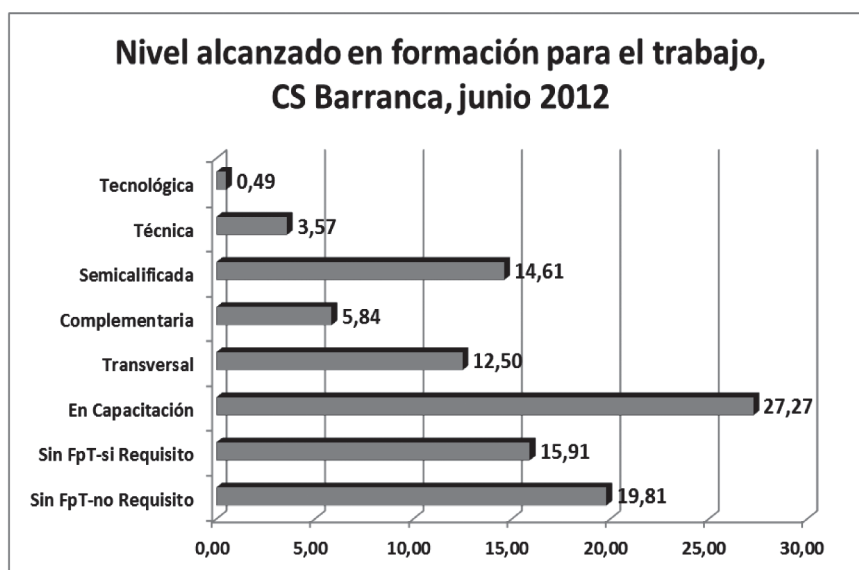
Número de cursos en que han participado	Número participantes	Porcentaje
No han accedido	825	56,94%
1	237	16,36%
2	172	11,87%
3	85	5,87%
Más de 4	130	8,91%

Fuente: ACR – Centro de Servicios Bucaramanga.

La información suministrada por el Centro de Servicios de Barrancabermeja muestra que el 64,29% de participantes activos han adelantado procesos de formación para el trabajo; el 27,27% adelanta estudios de capacitación, el 5,84% realiza cursos complementarios, el 14,61% es obrero semicalificado, el 3,57% son técnicos y el 0,4% son tecnólogos.

Se observa que el 35,61% de los participantes activos no ha realizado procesos de formación para el trabajo, el 19,81% por no tener los requisitos de escolaridad y el 15,91% no ha tenido formación para el trabajo a pesar de tener requisitos de escolaridad.

Gráfica 21. Nivel alcanzado en formación para el trabajo



Fuente: ACR- Centro de Servicios Barrancabermeja

La indagación realizada con la población participante en el proceso de reintegración, en los 11 municipios estudiados, arroja que el 51,12% de personas encuestadas no ha participado de las ofertas hechas por el Sena y en las cuales la ACR les ha invitado a participar, es decir no han tenido procesos de formación para el trabajo.

Sin embargo, el 94,49% de las personas encuestadas reconoce la necesidad y la importancia de capacitarse y formarse para un mejor desempeño productivo y al indagarse por cuales serían las temáticas de interés para su formación, se obtuvieron los siguientes resultados que muestra la tabla 39.

Tabla 39. Temáticas de interés para formación

Sector	Temáticas deseadas	%
INDUSTRIA	A nivel universitario: Ingenierías de Industrial, Mecánica, Civil, Sistemas, Alimentos, Mecatrónica, Arquitectura y Diseño gráfico	56
	En formación técnica: Joyería, Ebanistería, Panadería, Mecánica automotriz, Mecánica de motos, Soldadura, Seguridad industrial, Redes eléctricas y Electricidad.	

SERVICIOS	En formación técnica: Belleza, Culinaria, Conducción, Enfermería, Modistería y Cosmetología	18
COMERCIAL	A nivel universitario: Administración de empresas	12
	En formación técnica: Asesor de ventas, Atención al cliente, Comercio, Contabilidad y Emprendimiento	
AGROPECUARIA	A nivel universitario: Administración de empresas agropecuarias, Agronomía, Ingeniería Ambiental y Botánica.	6
	En formación técnica: Ganadería y alimentación Bovina	

3.5.1 Problemas y obstáculos para el acceso a la formación para el trabajo

En las conversaciones con participantes en el proceso de reintegración se valoran e identifican aportes y dificultades presentadas en el acceso a la formación para el trabajo:

- Los y las participantes valoran muy positivamente la capacitación para el trabajo y la educación formal como parte de la reintegración económica.

“yo no sabía leer ni escribir y ya voy en sexto grado, y he hecho capacitaciones con el Sena, uno de mampostería (...) económicamente me ha servido para ser oficial de construcción, e incluso para vincular a otros compañeros desmovilizados”²¹⁵

“yo he tenido sobretodo trabajos en construcción y solo hice un curso de lácteos en el Sena cuando yo estaba en Bogotá”²¹⁶

- Algunos participantes de los talleres señalan que no pueden adelantar estudios de capacitación laboral en el Sena debido a que los horarios de trabajo y los lugares de residencia no facilitan el acceso y permanencia en los cursos de capacitación técnica o empresarial.
- Otros participantes expresan que la posibilidad de capacitarse en el Sena está supeditada a los avances en el área de educación formal.
- Otros señalan que en algunos corregimientos no se ha realizado ningún curso de capacitación técnica. El Sena ha hecho ofertas de cursos pero no se han inscrito suficientes personas para conformar el grupo, a pesar de haberse invitado a la población en general y a desmovilizados. Las principales dificultades para inscribirse: i). Los horarios propuestos de capacitación se cruzan con la jornada laboral; ii). Para residentes y trabajadores rurales, las distancias, costos de transporte, tiempos de traslado al casco urbano y falta de medios de transporte se convierten en limitantes de participación.

215- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

216- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

- De otro lado, en las conversaciones con participantes se anota que al no acceder a la formación para el trabajo no reciben el beneficio económico, no mejoran el desempeño laboral y tampoco tienen posibilidades de lograr mejores trabajos y salarios, en esa perspectiva y comprendiendo la importancia que tiene, recomiendan a la ACR se gestione con el Sena cursos de capacitación para el trabajo relacionada con las demandas y oportunidades laborales y productivas que hay en los municipios y corregimientos donde reside la población participante, también que para definir requisitos, tiempos y horarios se tengan en cuenta las posibilidades reales de la población participante.

3.6 Reintegración Económica

Uno de los objetivos estratégicos de la política de reintegración económica formulada en el documento Conpes 3554 de 2008, es facilitar el ingreso de los participantes a la actividad económica legal, apoyando procesos de empleabilidad y desarrollando planes productivos.

En esa dirección, para promover el acceso de la población desmovilizada a opciones de empleo, la política se orienta a la gestión de empleo para los desmovilizados con empresas del sector público y privado, a través de prácticas ocupacionales, contratos de aprendizaje e incentivos a la empleabilidad.

Igualmente la política se orienta a promover los planes productivos o planes de negocio definiendo que la ACR brinda un beneficio económico de capital semilla²¹⁷ a fin de financiar una iniciativa productiva autogestionada de los participantes. Así mismo se considera un factor de éxito en la implementación del plan de negocio contar con el acompañamiento de expertos del sector privado, sean empresas, fundaciones o entidades especializadas en servicios empresariales para apoyarlos en la formulación y puesta en marcha de los mismos.

De manera complementaria la ACR debe asesorar y apoyar a la población desmovilizada en el uso de la oferta institucional y los instrumentos de apoyo existentes para la estabilización económica de poblaciones vulnerables, incluyendo entre ellas, el fondo de asignación de tierras para la población en el proceso de reintegración.

Con el fin de garantizar la implementación de las estrategias planteadas y para concretar la vinculación del sector privado, el Conpes propone dos instrumentos:

- i). El Banco de Tiempo, a partir de alianzas con el sector privado, como la Fundación Colombia Presente y las cajas de compensación familiar, para canalizar donaciones en tiempo, talento y conocimientos de empresas y profesionales que brinden apoyo a desmovilizados en la formulación, gestión e implementación de planes de negocio; y

217- La Resolución 0163 de 2011 establece los requisitos para acceder al capital semilla y establece montos entre 2 y 8 millones de pesos, para ser utilizados en emprendimiento, fortalecimiento o para vivienda como estímulo a la empleabilidad formal sostenible.

- ii). El Fondo de Inversión para el Beneficio Social -FIBS-mecanismo conformado con recursos del sector privado, para facilitar la inversión en proyectos productivos que fomenten el empleo de poblaciones vulnerables y población en proceso de reintegración.

En la información suministrada por el Centro de Servicios de Bucaramanga no se incorpora información sobre la gestión realizada con empresas y los avances logrados en el acceso a empleo, como tampoco de la participación o donaciones en el banco de tiempo y su aplicación en los planes de negocio de participantes del proceso de reintegración en Santander, que permita apreciar los desarrollos que en el Departamento tienen los convenios y acuerdos que la ACR nacional ha venido realizando con gremios y empresas a nivel nacional, entre ellas: Fundación ANDI, Coca Cola FEMSA, Fundación Corona, Almacenes Éxito, Carrefour y otras.

En las conversaciones sostenidas con participantes en los talleres de grupo focal se plantea de manera enfática y unánime que el principal problema de la población desmovilizada es el acceso a empleo y a ingresos dignos para garantizar la sobrevivencia de ellos y sus familias.

Se considera que la estrategia de empleo planteada desde el programa de reintegración no funciona, que no han tenido apoyo efectivo de la ACR en la obtención de empleo y la mayoría señala que han conseguido empleo por su propio esfuerzo, y lo han hecho a través de empleos temporales en construcción, obras de mantenimiento y construcción de vías, otros en actividades agrícolas, algunas mujeres señalan que han obtenido empleos en oficios domésticos y restaurantes. Todos coinciden en manifestar que tienen dificultad para obtener ingresos dignos, la percepción generalizada en la población participante sobre el apoyo a la empleabilidad se puede sintetizar así:

*“El programa de reintegración no ha asumido la responsabilidad de reintegrar y restablecer socioeconómicamente a los desvinculados y desmovilizados”*²¹⁸

En la encuesta de caracterización socioeconómica se encontró que el 37,64% está trabajando actualmente, el 38,20% desarrolla actividades de cuenta propia y 24.16% está desempleado.

3.6.1 Dificultades para acceso a empleo

De los talleres de grupo focal y de la encuesta aplicada se identificaron las siguientes dificultades para el acceso a empleo por parte de los desmovilizados:

- Bajo nivel educativo, baja capacitación laboral y formación técnica para desempeño calificado o técnico.
- Mercado laboral con baja oferta de empleo formal y altos índices de informalidad y rebusque.
- En municipios del área de influencia de Ecopetrol, el trabajo que ofrecen las empresas contratistas está intermediado por juntas de acción comunal, quienes postulan a sus favoritos y no dan oportunidad a desmovilizados.

218- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

- Imposible presentar antecedentes judiciales ‘limpios’ y certificados de experiencia laboral durante tiempo de vinculación al grupo armado ilegal.
- Discriminación y prevención de los empleadores por la vinculación anterior con el grupo armado ilegal, e incomprensión del compromiso y responsabilidad asumidos en la reintegración.
- Participación en reuniones y talleres crea dificultades porque los desmovilizados deben pedir permisos en sus trabajos o no pueden trabajar tiempo extra por lo que son señalados como poco colaboradores con la empresa; además que algunos no pueden explicar los motivos reales de solicitud de los permisos pues han ocultado a la empresa su condición de desmovilizado.
- En las políticas sociales se engloba a la población desmovilizada dentro de la categoría de poblaciones vulnerables, y ante convocatorias e iniciativas de empleo se compite con desplazados, afros, mujeres cabeza de familia, discapacitados, los cuales son priorizados.
- Se anota la experiencia de un grupo cooperativo de desmovilizados que montó una fabrica pupitres, no tuvo apoyo económico de la ACR, logran sacar algunas producciones pero fracasan por: falta de mercado; carecían de conocimientos en costos y determinación de precios; no conocían las especificaciones técnicas de calidad y precios competitivos – una adecuada asesoría y acompañamiento hubiera podido evitar este fracaso.

3.6.2 Planes de negocio y proyectos productivos

La información aportada por el Centro de Servicios de Bucaramanga, muestra que entre 2004 y 2010 se han desembolsado recursos para 214 proyectos en Santander, con un monto total de \$1.531.425.705 y un promedio de \$7.156.194,88 por proyecto.

Del total de proyectos desembolsados entre 2004 y 2010, el 29,44% correspondieron al sector comercio, con un promedio de \$7.313.412,35 y un desembolso total de \$460.744.978. El 27,10% de los proyectos desembolsados estuvieron en el sector de servicios, con promedio de \$6.494.827,55 por proyecto y un desembolso total de \$376.699.998.

Luego se ubican los proyectos del sector pecuario que representan el 18,69% del total y con promedio de \$8.605.000 totalizan \$344.200.000 desembolsados para este sector, en tanto para el sector agrícola se desembolsaron en promedio \$4.208.400,29 por proyecto y totalizaron \$101.001.607 en 24 proyectos.

Los 17 proyectos del sector industrial representan el 7,94% del total, con un promedio de \$7.693.066 por proyecto y totalizan \$130.782.122. En el periodo se han asignado 12 proyectos de vivienda con promedio de \$9.833.083,33 por proyecto y un desembolso total de \$117.997.000 en este sector de iniciativas.

Durante el año 2010, se desembolsaron en Santander, 88 proyectos con un monto total de \$531.227.261, y un promedio de \$6.086.902,56 por proyecto.

Del total de proyectos desembolsados 39 eran del sector de comercio con un monto total de \$244.745.138 y un promedio por proyecto de \$6.275.516,36. También se desembolsaron 39 proyectos en el sector de servicios por un valor total de \$226.700.000 y un promedio de \$5.812.820,51 por proyecto; 9 proyectos del sector

industrial tuvieron un valor total de \$54.782.123 y un promedio de \$6.086.902,56 y el único proyecto agrícola tuvo un desembolso de \$5.000.000.

Tabla 40. N° de proyectos desembolsados por sector

Sector	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Agrícola	1	3			16	3	1	24
Comercio	1	8	3		7	5	39	63
Industrial	1	1	5			1	9	17
Pecuario	1	14	14	3	2	6		40
Servicios	2		1		6	10	39	58
Vivienda	1	5	3	2	1			12
Total	7	31	26	5	32	25	88	214

Fuente: Fuente: ACR – Centro de Servicios Bucaramanga

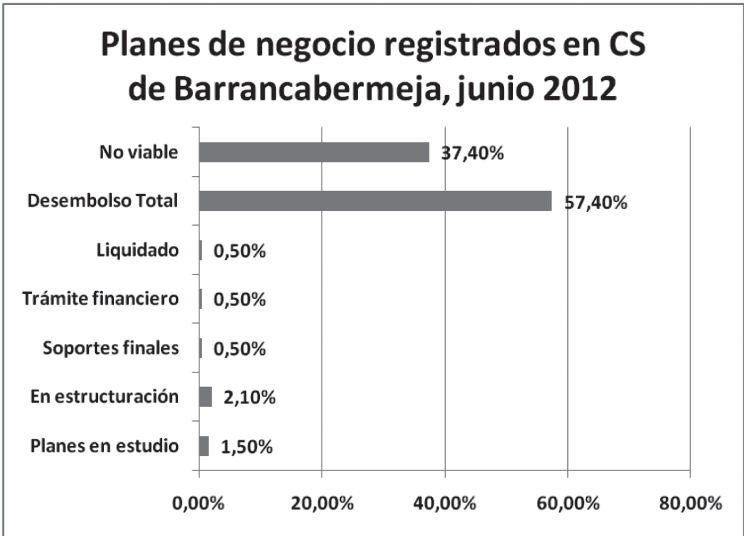
Tabla 41. Monto de los aportes realizados por sector

Sector	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	Total
Agrícola	8.001.607	32.000.000			32.000.000	24.000.000	5.000.000	101.001.607
Comercio	8.000.000	88.000.000	24.000.000		58.000.000	37.999.840	244.745.138	460.744.978
Industrial	8.000.000	12.000.000	47.999.999			8.000.000	54.782.123	130.782.122
Pecuario	8.000.000	120.000.000	112.200.000	58.000.000	16.000.000	30.000.000		344.200.000
Servicios	16.000.000		16.000.000		48.000.000	69.999.998	226.700.000	376.699.998
Vivienda	9.997.000	52.000.000	24.000.000	24.000.000	8.000.000			117.997.000
Total	57.998.607	304.000.000	224.199.999	82.000.000	162.000.000	169.999.838	531.227.261	1.531.425.705

Fuente: ACR – Centro de Servicios Bucaramanga.

Las cifras evidencian la necesidad de ampliar y fortalecer los recursos destinados a capital semilla para la financiación y puesta en marcha de planes de negocio que generen ingresos de manera autónoma para los participantes, al tiempo que señalan la necesidad de asumirlo como tarea prioritaria en el proceso de reintegración, dado que la precariedad de los ingresos es un factor de vulnerabilidad y riesgo de reincidencia.

Gráfica 22. Planes de negocio registrados en el Centro de Servicios de Barrancabermeja



Fuente: Fuente: ACR – Centro de Servicios Barrancabermeja.

Las cifras aportadas por el Centro de Servicios de Barrancabermeja sobre los planes de negocio presentados por participante, arrojan que se han presentado 195, de ellos el 37.4% (73 planes) se considera que no cumplen los requisitos y criterios de viabilidad, en tanto que el 57,4% (112 planes) han sido desembolsados completamente y el 0,5% ya han sido liquidados.

De otro lado señalan que el 1,5% de planes presentados está en estudio, el 2,1% está en proceso de estructuración, y en soportes finales y trámites financieros están el 0,5% de planes presentados.

De los planes de negocio que recibieron capital semilla, 35 eran proyectos pecuarios, 22 eran proyectos agrícolas, 9 en sector industrial, 31 en las áreas de servicios, 33 en actividades de comercio y 3 fueron aplicados a vivienda familiar.

Ahora bien, en los talleres de grupo focal con población desmovilizada se analizaron los procesos de reintegración económica, de los cuales se extraen las siguientes valoraciones y dificultades en el acceso a empleo y en el proceso de los planes de negocio:

En los municipios de influencia de Ecopetrol en la provincia de Mares se identificaron varias alternativas de empleo: i). Empleo convencionado, que se considera bien remunerado y con garantías laborales, ofrecido por empresas contratistas de Ecopetrol, para técnicos y obreros calificados, con jornales superiores a cincuenta mil pesos y garantías médicas y prestacionales; ii). Trabajo por jornal para arreglo de vías y obras menores, con empresas no contratistas de Ecopetrol, con jornales alrededor de veinticinco mil pesos -sin alimentación- y, iii). Trabajos en actividades rurales con jornal de quince mil pesos y alimentación.

Las dificultades que tiene la población desmovilizada para acceder a estos empleos, son:

- Bajo nivel educativo de la población desmovilizada, además que muy pocos participantes en el programa tienen calificación laboral o formación técnica que les permita el desempeño de oficios calificados o técnicos.
- Discriminación y prevención hacia la población desmovilizada en razón de su vinculación anterior con los grupos armados ilegales y la incomprensión del compromiso y responsabilidad que han asumido en la reintegración a la vida civil.
- En los municipios, corregimientos y zonas rurales de influencia de Ecopetrol, el trabajo que ofrecen las empresas contratistas está intermediado por las directivas de las juntas de acción comunal quienes postulan a sus amigos y personas cercanas.

“a uno mismo le toca conseguir el empleo de acuerdo a las condiciones que tenga, por ejemplo porque si uno no tiene estudio completo pues solo puede aspirar a uno donde ese no sea el requisito. A los hombres por ejemplo les toca en oficios de construcción (...) Una vez hubo una convocatoria para desmovilizados para trabajar en Ecopetrol pero los requisitos eran muy altos”²¹⁹

219- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

*"Cuando se sabe que es desmovilizado se le niega el trabajo, o se termina el contrato si estaba contratado"*²²⁰

De manera más general, manifiestan que tienen dificultades para acceder a empleos estables y con ingresos suficientes para atender a las necesidades de sus familias, que tienen empleos con bajos ingresos y que además han vivido situaciones en las cuales su condición de desmovilizado les impidió el acceso a puestos de trabajo, en unos casos por simple rechazo, en otros por la imposibilidad de presentar historia y certificados de experiencia laboral o antecedentes judiciales.

*"A las empresas y contratistas, hace años se les coaccionaba para que apoyaran al grupo armado y ahora se les pide que colaboren por medio de contratos o trabajo a los desmovilizados (...) algunos que apoyaban al grupo ilegal sin necesidad de presión, nos veían como salvadores, ahora nos ven con desprecio y no apoyan la reintegración"...*²²¹

También manifiestan sentirse afectados y castigados por los cambios presentados en la asignación de beneficios económicos, porque al estar trabajando para sostenerse a sí y a sus familias no participan de todos los componentes de la ruta (Educación, Capacitación técnica, y Psicosocial) y en consecuencia no reciben los beneficios económicos completos, lo que hace más precarias las condiciones de sobrevivencia.

El solo aporte en capital semilla a los proyectos productivos no garantiza que sean alternativa de generación de ingresos pues carecen de experiencia productiva y de gestión de negocios, requiriendo de acompañamiento y asesoría en el proceso de implementación.

Algunos de los participantes señalaron que elaboraron y entregaron propuestas en piscicultura y cultivos pero después surgieron nuevas exigencias y requisitos: curso de 300 horas en el oficio relacionado con el proyecto para la calificación técnica y productiva; curso de 100 horas para mejorar las capacidades empresariales y de mercadeo; haber realizado servicio social de 80 horas, requisitos que varios no han podido cumplir y otros que aún no han logrado el desembolso.

Señalan que en los últimos meses se han enterado que los proyectos productivos, en adelante, se desembolsan a quienes estén clasificados en la etapa avanzada de la ruta de reintegración, y en su sentir, la nueva clasificación que hicieron 'los castiga' pues al no ser bachilleres y no tener capacitación técnica quedaran en etapas inferiores y por tanto no tendrían proyecto productivo en el corto plazo.

Se anota que el monto del aporte para proyecto productivo a los desmovilizados colectivos es muy bajo (2 millones), que es insuficiente y que en las realidades actuales no alcanza para el montaje de un negocio que garantice ingresos de sobrevivencia. Situación que debería reconsiderarse para incrementarlo a sumas significativas.

220- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

221- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

3.6.3 Situación económica de las mujeres desmovilizadas en relación a los hombres

Los y las participantes consideran que respecto de la reintegración económica no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, que tienen las mismas necesidades, las mismas demandas y que en cuanto al proceso de reintegración manifiestan que no se tienen diferencias.

“ellas son iguales y siempre fueron iguales, a pesar de lo duro que es”²²²

A pesar de lo anterior, la reflexión permitió identificar cinco elementos que diferencian la reintegración económica de los hombres y las mujeres:

1. Las mujeres, generalmente, tienen que dividir su diario vivir entre las responsabilidades reproductivas, el cuidado de los hijos que tradicionalmente están delegados a las mujeres, el trabajo doméstico y el trabajo productivo para la generación de ingresos.

“Las mujeres con hijos pequeños tienen dificultades para trabajar y participar activamente en las actividades del programa cuando no tienen quien cuide y atienda a niños y niñas pequeñas”²²³

“Cuando uno tiene hijos tiene que organizar la agenda. Además de trabajar tiene que cuidar del hogar”²²⁴

2. Para los hombres es más fácil encontrar trabajo pues en algunos oficios no se exige un gran nivel educativo, ni experiencia, ni referencias laborales: oficios de construcción, mototaxismo, otros.

3. Las mujeres buscan empleo –principalmente– en oficios varios o servicios domésticos, donde se exigen referencias laborales y personales que no siempre son fáciles de conseguir.

4. Muchas mujeres desmovilizadas que llegan sin pareja de la guerra permanecen sin pareja, lo que hace más complejo el sustento del hogar y el cuidado de los hijos.

5. Reconocen en las mujeres habilidades que los varones no tienen: su capacidad de ‘sacrificio’ y compromiso con el cuidado de los hijos.

“Las mujeres son muy rebuscadoras, ellas son capaces de hacer lo que sea para conseguir el sustento de los hijos (...) tiran más lengua que un perro en una totuma rota”²²⁵

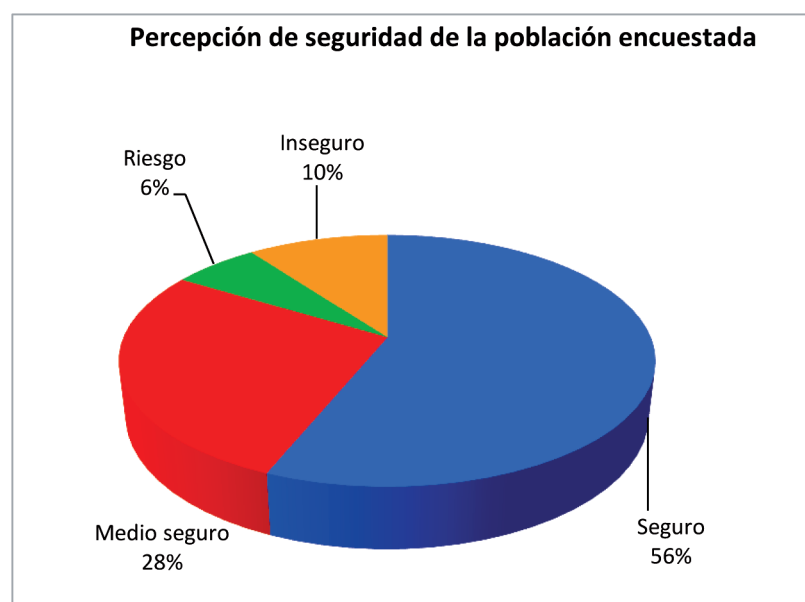
222- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

223- Profesional reintegrador.

224- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

225- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

Gráfica 23. Percepción de seguridad de la población en proceso de DDR en Santander



Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

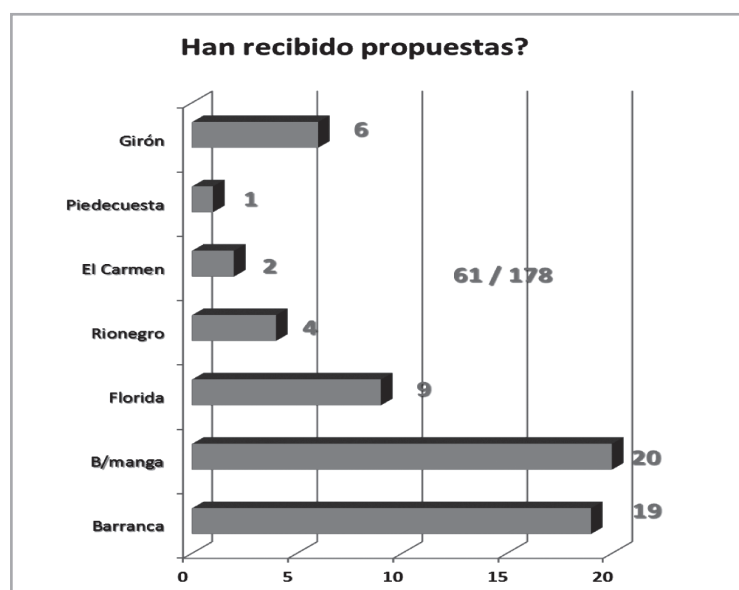
4. Percepción de los desmovilizados sobre seguridad y riesgos

En los talleres de grupo focal y en las encuestas aplicadas a participantes en el proceso de reintegración se analizaron las percepciones sobre la seguridad y riesgos personales de los desmovilizados. Es necesario señalar que las percepciones están territorializadas.

En algunos municipios se sienten seguros (por ejemplo Piedecuesta, San Vicente, El Carmen), no evidencian presencia o acción de GAI y la presencia policial es permanente; en otros se sienten medianamente inseguros a pesar de la presencia policial (Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca) por el accionar de bandas que ocupan espacios dejados por grupos desmovilizados, ejercen control del territorio y de las rentas ilegales (narcotráfico, contrabando, extorsión, oficinas de cobro...).

El 56% de las personas encuestadas se consideran en condiciones de seguridad por la presencia de las fuerzas militares y el control que realizan; el 28% señala que se siente medianamente seguro a pesar de la presencia de las fuerzas militares; el 10% se declara inseguro por la presencia de bandas emergentes y bacrim; y el 6% restante se declara en riesgo.

Gráfica 24. Participantes encuestados del proceso de DDR en Santander que han recibido amenazas



Fuente: Corporación Compromiso, Encuesta de caracterización socioeconómica de población en proceso de DDR en Santander, marzo de 2012

La encuesta develó que 51 de las 178 personas encuestadas, reconocen y señalan que han recibido amenazas de grupos armados ilegales. En 26 casos ha sido amenaza de muerte, en 7 casos recibieron panfletos o llamadas al teléfono personal, 3 señalaron haber recibido atentados con disparos, 3 casos fueron amenazas contra miembros de la familia del desmovilizado y en 2 casos llamadas desde cárceles.

28 casos fueron reportados a la ACR y por ese conducto a la Policía Nacional, 9 de los casos presentados tuvieron medidas de protección, en los otros 19 casos no obtuvieron respuesta. Los participantes identifican que la lentitud en los trámites para la valoración del riesgo y la decisión sobre las medidas de protección ha obligado a que los mismos participantes enfrenten solos la situación para resolverla, factor que genera desconfianza hacia la ACR y la policía y sirve de excusa para no reportar los casos que se presentan.

También se indagó en la encuesta sobre si han recibido propuestas por parte de grupos armados ilegales para participar de actividades ilegales, encontrando que 61 de los 178 encuestados señalan haber recibido propuestas de grupos armados. En el área metropolitana de Bucaramanga se reportan 35 casos (Bucaramanga 20, Floridablanca 9 y Girón 6) y en Barrancabermeja se reportaron 19 casos.

Estas situaciones han llevado a que sea relativamente frecuente el cambio de residencia, de teléfonos o el traslado de municipio, y la mayoría no da a conocer su condición de desmovilizado para evitar señalamientos y estigmatización y como forma de protección personal y familiar.

Anotan que debe brindarse mayor apoyo de la ACR, Policía, Defensoría del Pueblo, Personería y Fiscalía a la población desmovilizada, mediante la agilización de los estudios de riesgo, en la definición de medidas de protección, apoyo en los cambios de residencia o traslado hacia otros municipios y especialmente en la investigación de los incidentes de seguridad y captura de los responsables de las amenazas.

Consideran que están en medio de un conflicto armado que continúa. De un lado, las guerrillas, bandas emergentes y bacrim que ocupan espacios de los grupos armados desmovilizados; del otro lado, el Ejército y la Policía que los combaten. Y los desmovilizados en medio, recibiendo amenazas o propuestas de unos y otros relacionadas con actividades ilegales. Pese a esta situación señalan que la gran mayoría de desmovilizados se mantiene en el cumplimiento de los acuerdos, el respeto a la legalidad y en el proceso de reintegración a la vida civil.

Información aportada por el Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señala que en el país 4.800 desmovilizados han reincidido en hechos delictivos (15%) desde 2006 hasta 2011.

La Policía reporta que en 2011 fueron capturados 20 desmovilizados en municipios de Santander. 14 en Bucaramanga; 2 Lebrija; y de a uno en los municipios de Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Barrancabermeja, que pertenecieron a distintos grupos de autodefensas desmovilizados: Bloque Central Bolívar del sur de Bolívar (7); Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio de Puerto Boyacá (3); Bloque Norte del Copey (3); Autodefensas Unidas de Colombia del Sur Andaquíes (2); Bloque Central Bolívar de Remedios (1); Bloque Norte de La Mesa (1); y el Resistencia Tairona (1).

4.1 Factores de vulnerabilidad a la reincidencia

En los talleres de grupo focal se identificaron como factores de vulnerabilidad de los desmovilizados frente a la reincidencia, los siguientes:

- i). Falta de red de apoyo familiar, que ofrezca alternativas y solidaridad ante situaciones de riesgo o de dificultad.
- ii). Falta de trabajo estable que asegure medios de subsistencia y condiciones de vida decorosa.
- iii). Falta de aporte de empresas y empresarios a la reintegración reflejado en el estigma, rechazo, marginación y baja oferta de inclusión laboral de desmovilizados.
- iv). Falta gestión del programa para facilitar empleo en el proceso de reintegración, en tanto queda como responsabilidad del propio desmovilizado y dependiendo de sus posibilidades, capacidades y relaciones.
- v). Falta de convicción, compromiso y disciplina de desmovilizados con su proceso de reintegración, que les hace presa fácil de los grupos armados ilegales.
- vi). Presencia de bandas y grupos que tienen la capacidad para presionar y amenazar a los desmovilizados que no acepten vincularse a actividades ilegales.
- vii). Débil relación y aceptación de las comunidades, que no posibilita tener un tejido social de apoyo y protección frente a incidentes y riesgos.

Como gran conclusión de este trabajo valorativo sobre el DDR en Santander 2002-2012, se afirma que es necesario recuperar la apuesta de largo plazo y el sentido transformador de la política de DDR, la paz y la reconciliación de la sociedad colombiana, que convoca al conjunto de sectores gubernamentales y no gubernamentales, sociales y productivos, sin distinciones. No es otra que asumir el derecho a la paz como un proceso político y cultural, colectivo y progresivo, más allá de la reintegración individual de personas que abandonan las armas y deciden voluntariamente recuperar un lugar en la sociedad civil como ciudadanos y ciudadanas.

CONCLUSIONES SURGIDAS DEL ESTUDIO - CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

La principal amenaza al éxito de la reintegración hacia la paz, por la que atraviesa el reciente proceso de DDR en Colombia, es el contexto donde hoy subsisten preocupaciones que lo llaman a considerar la realización de cambios que le permitan cumplir con sus objetivos. La primera de ellas es la implementación de una política de justicia transicional acompañada de acuerdos de DDR en medio de la continuidad del conflicto armado, con protagonismos de dos guerrillas: la Farc y Eln, además de un reducto del EPL en Norte de Santander, y diversos grupos armados posdesmovilización en los que se reconocen procesos de rearme de desmovilizados y nuevos reclutamientos en diferentes lugares del territorio nacional y las regiones.

Estos grupos posdesmovilización son reconocidos como bandas criminales, bacrim, las cuales actúan con patrones de conducta similares a las anteriores AUC, ligados al narcotráfico y al control territorial en las periferias de municipios donde mantienen estructuras armadas y realizan diferentes acciones delincuenciales, en las cuales las principales víctimas son la población civil, hacen amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La segunda preocupación está marcada por la existencia de una economía de guerra, patrocinada por el narcotráfico, que pone grandes flujos de dinero, incremento de los hombres armados de los diferentes actores de la guerra en el territorio, donde convergen la guerrilla, el crimen organizado, los narcotraficantes e importantes sectores de los desmovilizados.

El tercer problema es un Estado fragmentado, penetrado por la ilegalidad y en el cual es visible la coexistencia de una democracia con el control que tienen de ella, en el ámbito nacional y local, el poder del narcotráfico, la parapolítica y el paramilitarismo²²⁶.

226- ALONSO, Manuel Alberto, Estudios políticos, Balance del proceso de desmovilización, desarme y reinserción de los bloques cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín. 2008.

En cuarto lugar, el enfoque de los programas que orienta la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR. Se recomienda a la ACR e instituciones con responsabilidades en la conducción y ejecución de la política de reintegración no perder de vista los objetivos del programa de DDR: LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN como horizontes de llegada. Los derechos de las víctimas, la memoria histórica y la verdad deben hacerse visibles como parte del proceso de justicia transicional.

Las estrategias y programas de la ACR para la reintegración actualmente están centrados en beneficios asistenciales, vía subsidios, para los desmovilizados; muy poco en las comunidades afectadas y nada con las víctimas del conflicto. Se puede afirmar que la reintegración laboral vía empleo o autogestión para la generación de ingresos de la población desmovilizada ha sido una de las grandes dificultades del proceso de reintegración, pues el sector público no ha tenido la capacidad para absorberlos y el sector privado refleja rechazos, ha sido discreto y reservado en su contratación.

El bajo perfil del DDR, su poca visibilización, limita sus aportes a la construcción de la paz y la reconciliación entre los colombianos. El DDR es escasamente conocido, la ACR tiene bajo perfil institucional y sus esquemas centralistas limitan los resultados. Es urgente hacer más visibles sus programas y sus políticas, ampliar relaciones en una perspectiva integral de paz.

La política pública de DDR sufre serias falencias de origen, en su formulación, al no convocar un proceso de respaldo social y político, de consenso nacional, pues no consultó al ámbito territorial y a sus diversos sectores y actores como parte definitiva del acuerdo. Lo anterior redujo la participación y el sentido de la responsabilidad de instituciones municipales y departamentales, que no se sintieron comprometidas en el proceso. Es notoria la carencia de diálogo con los entes territoriales, municipios y departamentos para construir acuerdos sobre la concurrencia de esfuerzos en las políticas de reintegración, reconciliación y construcción de paz duradera, que mantiene una débil participación y responsabilidad de instituciones municipales y departamentales que siguen no sintiéndose comprometidas con el proceso. En esta perspectiva es necesario que los Centros de Servicios diseñen e implementen mecanismos de articulación

y participación vinculante de la ACR y los entes territoriales locales, departamentales, gremiales, sociales y culturales.

El Sistema de Información para la Reintegración SIR construido no permite la consulta de datos relacionados con los programas, que pueden ser útiles para conocer del trabajo y los procesos que se adelantan; es necesario producir y compartir información con otras instituciones para lograr aportes y concurrencia de esfuerzos en apoyo a los procesos de reintegración en el Departamento.

El manejo centralista de la política excluye potencialidades de las regiones y participación de sociedad civil hacia la reconciliación. Por las complejidades del conflicto y el contexto cambiante, así como por las particularidades de las dinámicas económicas y políticas regionales, es necesario construir y mantener un análisis de contexto compartido sobre la realidad del conflicto armado, el proceso de desmovilización y reintegración en la Región con la Policía Nacional, directivos de Centros de Servicio y reintegradores de la ACR, funcionarios públicos locales, gremios económicos, actores sociales, que permita animar y dar respuestas contextualizadas y descentralizadas en forma oportuna a las problemáticas que surjan del proceso de reintegración.

Consultar las condiciones del proceso en cada municipio: La política de reintegración se concreta en cada municipio donde reside la población desmovilizada. Por tal consideración, el diseño de programas reclama incorporar una planeación desde el territorio, la cultura y las relaciones económicas, políticas y sociales:

- Necesita considerar las condiciones locales: económicas, sociales, políticas y culturales (diagnóstico).
- También las características de familia, género y edad, las necesidades y posibilidades de los y las participantes del proceso de reintegración.
- Incorporar el enfoque diferencial y flexibilidad en el acceso a los programas, acorde a las condiciones urbanas o rurales, de género y edad en los municipios.
- Los programas de reintegración no pueden evadir el cumplimiento de procesos de verdad, reparación a las víctimas y reconciliación, con ruta jurídica clara de salida y garantías de no repetición.

La promoción de alianzas institucionales para la reintegración en Santander

La estrategia de investigación participativa y las visitas a las instituciones fueron el medio principal para lograr acercamientos entre ellas e iniciar intercambios sobre la importancia de fortalecer el DDR en Santander. Estos vínculos facilitaron la recolección de información cualitativa actualizada y directa con fuentes primarias, con las personas desmovilizadas, con funcionarios públicos y con otros actores de la sociedad civil.

Promover alianzas institucionales para el DDR y la paz a nivel territorial en medio de las agendas propias y las dificultades que atraviesan las instituciones no es nada fácil, ni se resuelve en el corto plazo. Sin embargo se avanzó en promover la iniciativa y las condiciones de participación de los desmovilizados a partir del contacto directo y la concertación con la ACR; así, se contó con el apoyo, la cooperación y la participación de instituciones como los Centros de Servicios de la ACR en Bucaramanga y Barrancabermeja, la Misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, MAPP – OEA, la Secretaría del Interior de la Gobernación de Santander, las alcaldías de Bucaramanga y Barrancabermeja, la Policía Nacional y otros actores.

Es de destacar la amplia participación de población desmovilizada de los diferentes municipios visitados, su disposición libre a brindar sus opiniones y percepciones y la asistencia altamente representativa a foros, eventos, talleres, encuestas y entrevistas.

Igualmente es de resaltar la conformación de la Mesa de apoyo a la reintegración en Barrancabermeja, integrada en el mes de mayo de este año en el marco de la formulación del Plan de Desarrollo municipal de Barrancabermeja, con vivo interés de dinamizar un proceso participativo mediante una alianza institucional local entre la Oficina de Paz y Convivencia de la Alcaldía, la MAPP– OEA, el Centro de Servicios de la ACR para el Magdalena Medio y la población desmovilizada. Este espacio ha determinado concertar una agenda con temas y reuniones periódicas a favor de la política de DDR.

Fue sobresaliente la convocatoria y realización de los Foros regionales, en Barrancabermeja y Bucaramanga, como primeros espacios de diálogo territorial e interlocución en un escenario de deliberación pública para la promoción de acuerdos y alianzas

institucionales y creación de mesas permanentes con la población desmovilizada, con relacionamiento amplio que incluya además del Estado a instituciones privadas, empresariales y comunitarias.

Sin embargo, la promoción de alianzas institucionales para la reintegración a nivel departamental es un proceso que apenas da muestras de unos primeros signos de interés compartido, sin tener articulaciones sostenidas que avancen en concertaciones permanentes entre los entes territoriales y la ACR, sin embargo ha quedado un primer momento de encuentro con recomendaciones de continuidad y cooperación.

Al examinar las conclusiones y recomendaciones, estos espacios sugeridos y creados inicialmente, podrán ser un punto de encuentro en el que se privilegie el diálogo como herramienta para la construcción de acuerdos y confianzas entre los diferentes actores: Estado, comunidades receptoras, sociedad civil y los desmovilizados, quienes en su conjunto entienden su nivel de corresponsabilidad en el proceso. Esta estrategia tiene como fin aportar elementos que favorezcan a la definición de políticas que garanticen la plena reintegración y la construcción de ambientes de paz y reconciliación.

El examen de este propósito permite identificar nuevas actitudes y disposición a construir confianzas y voluntad política en algunos actores gubernamentales, empresariales, sociales y políticos en la propuesta de Construcción de Alianzas Institucionales para la Paz, teniendo en cuenta que dicha construcción se fundamenta en un elemento de participación activa.

La responsabilidad de las agencias del Estado, de las administraciones territoriales y la corresponsabilidad del sector privado y la sociedad civil, son fundamentales para el proceso. Se ha recomendado concertar una agenda departamental y establecer reglas de juego, responsabilidades, asumir compromisos y rendir cuentas de ello públicamente. De la misma manera debe haber una institución responsable de coordinar y hacer seguimiento a los acuerdos interinstitucionales para asegurar el cumplimiento de los mismos.

En el país y en la región es evidente el fraccionamiento y la polarización entre desmovilizados, víctimas del conflicto, gobiernos locales y sociedad civil. Se mantienen barreras de prevención, de odio, de

resentimientos que no se han tratado. Esta situación solo se resuelve dentro de un proceso social y cultural de mediano y largo plazo. Se deben diseñar estrategias y acciones para superar esta situación en perspectiva de una reintegración integral, de paz y país.

La sociedad santandereana está a la expectativa de que el nuevo escenario de posibilidades de construcción social de paz se consolide. Por esta razón, la institucionalidad debe fortalecer su capacidad de respuesta y de propuestas en este ámbito particular, logrando de forma progresiva ir aumentando el impacto de las políticas y la eficacia de los recursos invertidos en el apoyo a las políticas de DDR y paz.

Finalmente, el estudio posibilitó recoger una serie de recomendaciones y conclusiones dentro de una mirada analítica y propositiva que buscó interesar al conjunto de actores regionales de la sociedad, especialmente a las instituciones públicas locales como principales gestores de la construcción de un proceso integrador de alianzas institucionales a favor de la paz y la convivencia.

1. Enfoques y criterios sugeridos para ajuste a las políticas y programas de DDR

Se sugiere realizar ajustes en la implementación de la política tomando en consideración los siguientes elementos de enfoque, en la idea de fortalecer y consolidar los procesos de reintegración en el departamento de Santander:

Un enfoque territorial articulado entre la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Gobernación, alcaldías y entidades públicas descentralizadas, de manera tal que los criterios de responsabilidad, articulación, coordinación y complementariedad institucional propuestos en el Conpes 3554, que aprobó la política de reintegración, se desarrollen en la región.

Sería conveniente considerar otras experiencias, como la implementada en Bogotá con un enfoque diferenciado y de flexibilización de los programas y estrategias específicas, acorde con las condiciones socioeconómicas y vocacionales de los desmovilizados del conflicto.

Reconocer el contexto territorial y sus condiciones urbanas o rurales, de género y edad de los

desmovilizados y de las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de los municipios.

Promover el cumplimiento de los Acuerdos por la Verdad, de aportes a procesos de memoria, de reparación a las víctimas y reconciliación, asegurando una ruta jurídica clara y definida para la salida del programa y que ofrezca garantías de no repetición a la sociedad.

2. Recomendaciones en materia de programas y políticas territoriales para mejorar los procesos y el programa de reintegración

En las conversaciones sostenidas en los talleres de grupo focal con participantes en el proceso de reintegración y con funcionarios reintegradores de la ACR se aportaron y construyeron algunas recomendaciones orientadas a la solución de dificultades y a la mejora de las estrategias que apoyan los procesos de reintegración de la población desmovilizada. Son:

Recomendaciones para los programas del Estado

- Incorporar la Política de Reintegración Social y Económica en los planes de desarrollo territorial, en la medida que se hace evidente la ausencia de una política clara y coherente con el proceso y esfuerzos de coordinación entre las instituciones y entidades del Estado.
- Vincular las entidades municipales y departamentales al desarrollo de la política y estrategias de reintegración.
- Asumir la responsabilidad frente a la situación jurídica de la población desmovilizada, definir con claridad la situación jurídica y las maneras de resolverla.
- Se necesita clarificar las rutas y condiciones de entrada y salida del proceso de reintegración, dando cumplimiento a los tiempos del proceso y garantizando el cumplimiento de las obligaciones y los beneficios jurídicos.
- Sensibilizar a los funcionarios públicos municipales y departamentales sobre el significado del proceso de reintegración y la condición del participante para que cese la estigmatización por parte de los funcionarios.
- Enfatizar la gestión de la ACR con gremios

económicos y empresas para promover la vinculación laboral de la población participante de la reintegración.

- Brindar oportunidades de acceso a la educación superior para la población desmovilizada.
- Se considera que aunque existe una oferta de capacitación productiva, ésta no resuelve los problemas inmediatos que les aquejan en la generación de ingresos, fundamental en el proceso de reintegración a la vida civil.
- Flexibilizar los requisitos para acceder al proyecto productivo.
- Dar un trato equitativo a los desmovilizados respecto del monto de los beneficios económicos para los planes de negocio, actualmente los desmovilizados colectivos reciben 2 millones de pesos, mientras los individuales 8 millones de pesos.
- Sobre vivienda: se recomienda que este tema sea prioridad en la gestión de la ACR. Los desmovilizados consideran necesaria su inclusión como beneficiarios para el subsidio nacional de vivienda, y que haya complemento del Departamento y del Municipio para facilitar el acceso a vivienda rural y urbana.
- Se hace imperioso un proceso de transformación de imaginarios individuales y colectivos de la población desmovilizada y las comunidades receptoras, como un elemento esencial para obtener garantías de no repetición y en el entendido de que el perdón no puede ser impuesto y por lo tanto no puede ser otorgado en nombre de las víctimas.
- Difundir el proceso en los medios de comunicación para sensibilizar a la opinión pública, mostrar avances en los procesos y propiciar un ambiente favorable a la paz que contribuya a superar la estigmatización y avanzar en la reintegración comunitaria.
- Existe un alto número de desmovilizados que no están activos en los programas de reintegración. A pesar de los avances el proceso de reintegración aún se enfrentan problemas para vincular la totalidad de los desmovilizados, articular las instituciones del sistema, acompañar más de cerca al participante y su familia y realizar una apuesta más integral articulando las comunidades receptoras.

Recomendaciones a las personas en proceso de reintegración

- Mantener el compromiso con la legalidad y la civilidad, cumpliendo con los acuerdos de desmovilización y las normas del proceso de reintegración.
- Asumir las responsabilidades en el desarrollo de los procesos de reintegración comunitaria e inclusión social, implementar mecanismos de responsabilidad ante la sociedad.
- Mantener la motivación, el deseo de superación y el compromiso con el programa de reintegración, con mejor aprovechamiento de las oportunidades y estrategias que la ACR ofrece a los y las participantes.
- Mayor apertura frente al proceso y frente a la sociedad para avanzar en la consolidación de redes de relaciones sociales y comunitarias.

“Dejar una enseñanza a los jóvenes para que no caigan en el mismo error de uno”²²⁷

“Hacernos conocer ante la sociedad de otra manera”²²⁸

227- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

228- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

3. Recomendaciones al proceso de reintegración económica y social

En las discusiones con los y las participantes y funcionarios reintegradores de la ACR se generaron recomendaciones y propuestas para avanzar en los procesos de reintegración económica y social, unas son planteadas en perspectiva de recomendación para los mismos participantes, otras son recomendaciones hacia los Centros de Servicio de la ACR en Santander, a los gremios económicos y otras en relación con la reintegración económica de las mujeres desmovilizadas.

Recomendaciones hacia los participantes en proceso de reintegración

- Consideran necesario seguir en la vida legal, seguir esforzándose por estudiar y trabajar hasta lograr una vida normal, sin desvíos en el camino.
- Lograr mayor capacidad de interlocución y relacionamiento con las comunidades y pensar cómo construir un mayor nivel de vocería y representación de la población participante en el proceso de reintegración.
- Es necesario pensarse estrategias de generación de ingresos teniendo en cuenta las posibilidades reales a nivel de conocimientos y habilidades personales, considerando incluso la perspectiva de ubicación en municipios diferentes a los actuales.

"Es necesario generar propuestas en torno a donde vivir y trabajar, de manera que el proceso sea más sostenible para el desmovilizado y su familia" ²²⁹

Recomendaciones para la ACR y sus centros de servicios en Santander

- La reintegración para el trabajo tiene en el desarrollo de habilidades productivas que garanticen empleo y generación de ingresos, superación de la dependencia asistencial del Estado (principalmente de la ACR) y buen desempeño laboral, su principal desafío frente a los peligros y acechos de la reincidencia. Una clave de este punto se pudiera resolver en un nuevo proceso concertado con el sector gremial. Promover con empresarios y gremios nuevas estrategias de apoyo a la inclusión y el empleo: patrocinios, capacitación laboral y entrenamiento para vida productiva, teniendo en cuenta que la seguridad sostenible se construye en un entorno productivo y con oportunidades incluyentes.
- La ACR desde sus Centros de Servicios puede liderar, promover y conformar una mesa de concertación en apoyo a la política de reintegración y diálogo de paz con Gobernación, alcaldes, gremios, empresas, desmovilizados, en la cual se aborde la discusión de estrategias y alternativas de empleo y reintegración económica para desmovilizados.
- Enfatizar la gestión con empresarios, Ecopetrol, empresas contratistas y gremios económicos, para motivar la vinculación de mano de obra local y en ella incluir población participante mediante vinculación laboral o por medio de contratos para realización de obras y proveeduría de servicios; o apoyar la creación de empresas donde trabajen desmovilizados.

229- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

- Adelantar diálogos con alcaldes sobre la importancia de apoyar la reintegración, el empleo para desmovilizados y la alianza para fortalecer la reintegración y consolidación de la paz. Esta es una tarea de ACR, porque realizar visitas de desmovilizados a empresarios, alcaldes o funcionarios causaría problemas de seguridad, algunos sectores podrían considerar que los están extorsionando.
- El enfoque individual y de atención focalizada que se le ha dado a la reintegración de las personas desmovilizadas refleja dificultades y limitaciones en el proceso de DDR. Todos los programas se han enfocado de forma individual al desmovilizado, aunque se lee en documentos oficiales otras propuestas y enfoques, no se implementan en forma integral ni se experimentan suficientemente los énfasis hacia la reconciliación; se hace necesario un cambio de enfoque orientado de manera integral al entorno social, al desmovilizado y su familia, las comunidades receptoras, los jóvenes, los niños y niñas, su sostenibilidad socioeconómica, sus vínculos con las comunidades que fueron afectadas o son afectadas directamente por la guerra. Hoy es importante construir confianzas y fortalecer el tejido social, en perspectiva de reconciliación.
- Se destacan los programas de capacitación, que presentan avances en cuanto al número de personas alfabetizadas, con primaria, bachillerato y capacitación técnica en relación a los cinco años anteriores; en este sentido es importante destacar los esfuerzos realizados por las instituciones responsables del proceso y del sistema escolar que los acoge dentro de la oferta pública. Al respecto es importante mencionar que hoy se requiere una revisión de los programas y propuestas programáticas, contenidos, metodologías, diseño de las ofertas, adecuándolos a las actuales condiciones y necesidades de la población desmovilizada.
- Ampliar recursos destinados a capital semilla y asumir la estrategia de formulación e implementación de planes de negocio como prioridad en el proceso de reintegración, dado que el 24,16% está desempleado, el salario promedio es de \$700.000 y el ingreso cuenta propia es de \$545.515. Unificar montos en proyectos productivos (desmovilizados individuales y colectivos) e incrementar el monto del apoyo para los desmovilizados colectivos (está en 2 millones de pesos para desmovilizados colectivos y en 8 millones para los individuales) para que los proyectos puedan ser una mejor alternativa de estabilidad económica. Promover la asociatividad y el cooperativismo de participantes en el proceso de reintegración.
- Se hace útil dar fuerza a programas y estrategias que promuevan el desarrollo integral de las comunidades receptoras, creando espacios para actividades socioculturales y económicas, avanzando en una reconstrucción del tejido económico y social que facilite procesos de reconciliación. Para ello es necesario el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades locales en aras de maximizar el impacto de las intervenciones a través de entrenamiento y asistencia técnica a las instituciones públicas.
- Es necesario seguir fortaleciendo los programas de atención psicosocial, ésta debe dar mayor atención a la familia de los participantes pues son su red de apoyo, e iniciar un trabajo pensado y articulado a las comunidades de donde el desmovilizado se ha hecho parte. Este proceso debe ser fortalecido con los programas educativos en valores y promoción de la convivencia. También es importante atender casos especiales que requieran, previo diagnóstico, tratamiento.
- Se recomienda gestionar y concertar con el Sena y otras instituciones técnicas o tecnológicas un convenio especial; diseño y oferta de programas de capacitación y formación para el trabajo especiales para desmovilizados, que más allá de dar cupos en programas generales tomen en cuenta las características y demandas de la población participante en el proceso de reintegración, las oportunidades laborales y productivas existentes en los municipios donde residen; y en la definición de requisitos, tiempos y horarios tener en cuenta posibilidades reales de los y las participantes.
- Se recomienda a la ACR dar un mayor énfasis a los programas de formación humana integral de los participantes del proceso de reintegración, más orientados a la formación de valores, participación, democracia, deberes y derechos ciudadanos, convivencia y resolución pacífica de conflictos, para lograr aprendizajes, cambios culturales y nuevas prácticas en las relaciones sociales y ciudadanas de derechos y deberes.

“Hacerle claridad a la comunidad sobre quiénes somos nosotros y qué queremos ahora”²³⁰.

“(que) contemple las condiciones especiales de los participantes: Quiénes laboran, (quiénes) viven en zonas de difícil acceso, en zonas rurales, para establecer los requisitos y demás”²³¹

“La memoria histórica no se ha trabajado desde la ACR, entendiendo historias de vida se logrará mayor comprensión de esto que aún no tiene claridades, ni respuestas, quizás con esto podamos comprender, entender y quizás lo más importante avanzar”²³²

“Es necesario que se abran oportunidades de trabajo, que no se les excluya por su pasado, que los empresarios aporten generando oportunidades laborales es la necesidad más apremiante”²³³

Recomendaciones a gremios económicos y empresarios

- Tener una mejor comprensión y conciencia social del proceso de reintegración y del compromiso del desmovilizado con el proceso, asumir una disposición de diálogo y acceso con la población desmovilizada en perspectiva de ofrecerles alternativas de empleo estable y superar la estigmatización como factor de la exclusión laboral que sufren.
- Promover al interior de sus empresas asociadas un mayor compromiso con la inclusión, participación y creación de oportunidades laborales de la población participante del programa, desarrollar estrategias de patrocinio de procesos educativos, capacitaciones laborales y entrenamiento para vida productiva. Aprovechar los beneficios establecidos en la ley del primer empleo y vincular a participantes de la reintegración y familiares.

Recomendaciones para mejorar la reintegración de las mujeres desmovilizadas

Las recomendaciones recogidas para mejorar la reintegración económica de las mujeres:

“La ACR debería tener programas que privilegien a las mujeres, por ejemplo no se tiene en cuenta que nosotras tenemos en la familia las obligaciones de una madre o que muchas son madres solteras”²³⁴

“La ACR no da las soluciones que verdaderamente se necesitan, el carnet del seguro para los hijos, las cédulas, etc., además las fallas en los trámites de la ACR afectan por igual a los hombres y a las mujeres”²³⁵

230- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

231- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

232- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

233- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

234- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

235- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

“Menos requisitos para acceder al capital semilla de los planes de negocio”²³⁶

“Más apoyo para acceder a planes y subsidios de vivienda (...) porque en el documento que firmamos al desmovilizarnos el Gobierno se compromete con el tema de vivienda para los desmovilizados”²³⁷

4. Recomendaciones a instituciones en materia de seguridad y protección a personas en proceso de reintegración

El éxito de la reintegración duradera es una responsabilidad del Estado, de sus instituciones y de cada uno de los desmovilizados(as), con el apoyo del conjunto de la sociedad civil y política. Por tanto, es fundamental para las autoridades locales:

- Ofrecer un espacio digno en la sociedad para reconstruir el proyecto de vida de las personas desmovilizadas, con oportunidades satisfactorias sociales, económicas y culturales.
- Brindar una acogida para hacer posible la reintegración comunitaria y la convivencia pacífica. Vincular entidades municipales y departamentales a la política de reintegración.
- Incluirlos como población en Planes de Desarrollo: Promover alianzas, mesas, comités locales entre alcaldías, gremios y sectores sociales.
- Garantizar la debida protección y seguridad personal para los desmovilizados y sus familias.
- Diálogo social. Difusión del proceso de DDR en medios de comunicación, foros y eventos con víctimas e instituciones; sensibilizar, superar discriminaciones y avanzar en una estrategia de paz y reconciliación.

Recomendaciones frente a factores generadores de reincidencia.

- Mantener comunicación entre los desmovilizados y los encargados de los Centros de Servicios con la Policía Nacional, para la elaboración y actualización de mapas de riesgo, el seguimiento e investigación de incidentes, la definición de acciones de protección, siendo necesario fortalecer esta dinámica para restablecer confianzas y garantías de protección.
- Sensibilizar a la comunidad sobre la ACR, sus programas y el proceso de reintegración para que se creen mejores comprensiones sobre el proceso que llevan los desmovilizados y hacia la acogida y aceptación en las comunidades.
- Realización de campañas en instituciones educativas, orientadas a la prevención del reclutamiento y uso de menores con propósitos de conflicto armado o grupos al margen de la ley, al tiempo que promueva estilos de vida saludable y no consumo de sustancias psicoactivas.

236- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

237- Testimonio de un desmovilizado(a) en un taller de grupo focal.

5. Compromisos de los desmovilizados(as) en los vínculos sociales de convivencia y paz

- Los hombres y las mujeres en proceso de reintegración a la civilidad deben ganar reconocimiento dando a conocer su nuevo proyecto de vida, junto con su compromiso al rechazo a toda forma de violencia, el reconocimiento y respeto del estado social de derecho y sus instituciones.
- El principio de respeto a la vida y la renuncia a hacer justicia por mano propia establece unos parámetros éticos y humanos de responsabilidad consigo mismos y con el entorno social que les brinda acogida y oportunidades de convivencia.
- El esfuerzo por la reintegración a la sociedad demanda el aprendizaje de competencias que deben hacerse visibles y aplicadas en su comunidad: actitud participativa, reconocer fortalezas, debilidades, capacidades para actuar en entorno familiar, social comunitario y laboral.
- Re-significar conceptos como: democracia, legalidad, violencia, vida productiva, familia, trabajo, responsabilidad, derechos y deberes; más conciencia del proceso de civilidad.
- Apropiación del proceso de justicia transicional y el respeto a los derechos de las víctimas, entre ellos el de reparación; también realizar manifestaciones de cambio y compromiso con las víctimas y la verdad; nuevas relaciones y participación en eventos de inclusión social para lograr la aceptación de la comunidad y la reconciliación de la sociedad.

ANEXOS

Documentos y ponencias
presentados
en el FORO REGIONAL DE
PROMOCION
DE ALIANZAS INSTITUCIONALES
PARA LA PAZ
“Los desafíos de la reintegración y
la reconciliación duraderas”

Ponencia de la Corporación Compromiso

LA RECONCILIACION ES LA META, HAY QUE CONSTRUIR EL CAMINO

Por **EDUARDO RAMÍREZ GÓMEZ**
DIRECTOR CORPORACIÓN COMPROMISO

Hace unos años, en un evento académico denominado Umbrales de Reconciliación, Eduardo Pizarro León Gómez afirmaba que ningún colombiano está al margen del conflicto; con nuestra complicidad, aquiescencia, conformismo o cruda indiferencia, nos ubicamos en diferentes umbrales que nos hacen partícipes directos o indirectos de la violencia.

Y es que el tema del conflicto armado en Colombia es tan complejo que no nos podemos sustraer a él, el tema de la victimización nos pone en el escenario a victimarios que anteriormente pudieron haber sido víctimas, es decir, hay personas que a través de su historia han experimentado esa doble condición.

Por supuesto que para avanzar hacia un horizonte de reconciliación, no es suficiente con señalar y castigar a unos cuantos culpables, los más visible; se requiere el trazado y la implementación de políticas de Estado que permitan hacer realizable el derecho a la verdad y con él llegar a quienes han sido determinadores de violaciones a los derechos humanos. Es que la verdad no solo es un derecho de las víctimas, es un derecho también de toda la ciudadanía.

Por eso es tan importante colocar el tema del desarme, la desmovilización y la reintegración en un horizonte de reconciliación. Reconciliación entendida como la acción colectiva de construcción de un escenario diferente a la violencia, de superación del conflicto por medio de la acción política no violenta y la democracia.

La reconciliación entendida como un asunto de todos, del Estado y la sociedad, de las instituciones públicas y el sector privado, de las víctimas y los perpetradores, de

las víctimas, los desmovilizados y las comunidades receptoras; de las organizaciones sociales, los empresarios, los medios de comunicación, los gobernantes, los funcionarios públicos; la reconciliación en un marco de corresponsabilidad de todos los actores sociales y políticos.

Por eso la reconciliación hay que entenderla como la meta de largo plazo, hay que construir el camino a través de un proceso profundamente político cuyo horizonte es la construcción de una sociedad preparada para la paz y la convivencia pacífica, un proceso de acción colectiva que debe avanzar con paso firme pero sin afanes, porque es necesario cerrar heridas, y algunas de estas heridas son muy profundas y dolorosas. Cerrar y curar heridas para construir confianza que permita reconstruir y fortalecer relaciones rotas; tal vez el daño más grande ocasionado por tantos años de violencia armada, es la destrucción de las confianzas generada por las violaciones graves a los derechos humanos, la ruptura del tejido social, la escasa respuesta institucional y la impunidad.

De acuerdo con lo anterior, pensar en transitar decididamente hacia la reconciliación, requiere algunos pasos previos. Por una parte, se necesitan normas claras y efectivamente aplicables para crear el marco jurídico que posibilite la acción política colectiva hacia la reconciliación, con una institucionalidad dispuesta a cumplir su mandato. Se requiere una sociedad preparada para la reconciliación, es necesario sacar el tema del ámbito de lo privado y llevarlo al debate público, porque la reconciliación no es un asunto a resolver entre víctimas y victimarios, tampoco es solo un asunto de perdón y olvido, como dije anteriormente, es un asunto de acción política del Estado y la Sociedad.

Se requieren nuevos liderazgos con mentalidad reconciliadora, liderazgos que logren unir voluntades hacia ese propósito colectivo, liderazgo que oriente la construcción de procesos para construir el nuevo tejido social para un escenario de superación de

las violencias. Pero también se requieren procesos pedagógicos, científicos y culturales que fundamenten las bases que formen una nueva generación de ciudadanos y ciudadanas preparados para la paz y la convivencia pacífica.

En palabras del catedrático español Mario López, “la reconciliación sería, más que el principio de un acuerdo o de un proceso, el resultado exitoso de la combinación de muchos procesos armonizados”. Por eso, en este escenario que nos hemos convocado para hablar de los resultados en materia de la política de desmovilización, desarme y reintegración, es necesario tener claro que ese proceso hace parte de los mecanismos y dinámicas en un horizonte de reconciliación.

No podemos pensar en reintegración a la vida civil de excombatientes, si no se cumplen debidamente los acuerdos pactados. No esperemos que no haya reincidencia de las personas desmovilizadas, si no existe la corresponsabilidad en el proceso por parte del sector privado y los gremios económicos. No esperemos que se avance en la sanación y cierre de heridas si no se realiza el derecho a la verdad, se reparan los daños causados a las víctimas y se desarrollan acciones políticas para la reconstrucción del tejido social y el restablecimiento de confianzas y relaciones.

Así que la tarea es de todos y de todas, es un compromiso que nos debe llevar a acciones firmes, con resultados concretos, sin apresuramientos. Es un imperativo ético y político la superación del conflicto, la construcción de la paz y la creación de condiciones para la reconciliación. La historia nos convoca, el momento es ahora, si no lo hacemos, estaremos condenando a las nuevas generaciones a que cíclicamente sigan aportando en el futuro al engrose de las cifras de las víctimas y los victimarios.

Bucaramanga, junio 20 de 2012

Ponencia de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP-OEA

RENÉ RODRÍGUEZ / MAPP-OEA
BARRANCABERMEJA JUNIO 22 DE 2012

Desde su llegada a Colombia para acompañar y verificar el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración de las Autodefensas Unidas de Colombia, la Misión ha resaltado la importancia de atender la reincorporación de los excombatientes a la vida civil.

A ocho años de iniciado este esfuerzo por parte de los colombianos, son muchos los frutos pero también enormes los desafíos del desarme y desmovilización de los 31.651 hombres de las Autodefensas.

La gran mayoría de ellos iniciaron una ruta hacia la civilidad que no ha sido fácil, que ha implicado un profundo cambio de mentalidad, así como la curación de las heridas, no solo físicas sino también psicológicas y emocionales de la guerra; después de acostumbrarse a vivir a través de las armas, los ex combatientes han tenido que reaprender a relacionarse de manera pacífica; a estar sometidos a la ley y a respetar las normas de convivencia. De igual manera, el retorno de los excombatientes a las comunidades ha significado para éstas recordar episodios profundamente dolorosos de su historia, y preguntarse sobre temas complejos como el perdón y la reconciliación.

También ha puesto a prueba la capacidad institucional del Estado colombiano y de las administraciones locales, para ofrecer alternativas viables para los desmovilizados, así como para atenuar el impacto económico y social de la reintegración.

El hecho de que el proceso de reintegración se esté dando en medio del conflicto, ofrece obstáculos adicionales y genera riesgos para los beneficiarios del proceso de reincorporación.

Es necesario crear condiciones adecuadas para que los ex combatientes puedan hacer el tránsito a la vida civil; mientras sigan persistiendo contextos de violencia relacionados con el narcotráfico y otras actividades ilícitas, la población desmovilizada estará sujeta a riesgo, no solamente de retornar a la ilegalidad, sino de perder la vida al rehusarse a reincidir.

En particular en el departamento de Santander y la región del Magdalena Medio, la persistencia de estructuras ilegales como los Rastrojos, los Urabeños, los Botalones y Don Cesar, así como la presencia del Bloque Magdalena Medio de las FARC, y el Frente de Guerra Nororiental del ELN, claramente constituyen condiciones que dificultan la reinserción, en la medida en que sostienen contextos que ejercen presión sobre los desmovilizados para que retornen a la ilegalidad.

El acompañamiento de la Misión, especialmente a través de sus Oficinas Regionales, le ha arrojado importantes aprendizajes que pueden ser tenidos en cuenta tanto para lo que resta de este proceso como para procesos posteriores.

Una de las lecciones fundamentales ha sido la necesidad de involucrar desde el inicio a todas las entidades del nivel departamental y local en la planificación, diseño y preparación de los instrumentos necesarios para la recepción de los desmovilizados y su incorporación en las comunidades.

En este mismo sentido, el proceso de DDR debe entenderse como un esfuerzo colectivo, que abarca todas las esferas de la sociedad, que incide en la economía, en las relaciones, en el tejido social y en los imaginarios de un país, por lo que no puede dejarse exclusivamente en manos de las instituciones. Es fundamental que la sociedad en su conjunto participe de manera activa en este proceso.

Hay que involucrar a las comunidades. El objetivo a largo plazo es la reconciliación, las políticas públicas deben ir de la mano de procesos comunitarios donde las poblaciones se preparen para recibir a los desmovilizados.

Es por eso que es de gran importancia esta iniciativa regional que se está llevando a cabo en este Foro, impulsada por un ente territorial, y con el apoyo de la sociedad civil.

Hay que entender que la reintegración es un esfuerzo a largo plazo, cuyos resultados pueden no ser evidentes durante los primeros años posteriores a una desmovilización, pero que debe ser sostenido a través de las diferentes administraciones y gobiernos, convirtiéndose en una política de Estado. En este sentido, la Misión celebra la transformación de la Alta Consejería para la Reintegración, en la Agencia Colombiana para la Reintegración, pues considera que esto le da mayor estabilidad a la política de reintegración.

Son muchos los logros que se han alcanzado en estos ocho años de proceso: Gracias al proceso de DDR y la Ley de justicia y paz, los desmovilizados, además de ser sometidos a una justicia transicional, han recibido herramientas para contribuir con la reparación de las víctimas, esto es un factor que contribuye a la reconciliación y la reconstrucción del tejido social; al expresar la verdad en los procesos judiciales, están permitiendo que las víctimas hagan el duelo y abren la puerta para que surja el perdón.

Las fuerzas económicas del país deben involucrarse de manera más activa en los procesos de empleabilidad de los desmovilizados, desde una óptica de responsabilidad social.

La situación del DDR en Santander, al igual que en otras partes de Colombia, se ha visto influida por los cambios normativos acaecidos a lo largo del 2011, en particular lo que se refiere a la modificación de los beneficios económicos y el establecimiento de un límite temporal máximo de permanencia en el programa de 6 años y 6 meses. Igualmente, la aprobación de la Ley 1424 de 2010, que buscó resolver la situación jurídica de los más de 30 mil desmovilizados (sic) que no fueron postulados a Justicia y Paz.

En concreto, desde la Oficina Regional de Barrancabermeja se cubrió todo el departamento de Santander realizando acciones de difusión de la Ley en lugares como Bucaramanga, Barrancabermeja, Yondó, Lebrija, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Puerto Boyacá e incluso en Puerto Berrío (Antioquia). En total se realizaron 125 intervenciones de apoyo a la difusión de la 1424.

Se destaca el esfuerzo que se viene haciendo a nivel de esta región por parte de las autoridades y de la sociedad civil para superar alguna de las dificultades,

particularmente la inclusión del tema en los planes de desarrollo y la participación de la Corporación Compromiso en la elaboración del estudio sobre el DDR y sus recomendaciones. Es necesario continuar en este camino de coordinación institucional. También se resalta que ya hay un primer graduado del programa en Bucaramanga.

En la actualidad, se observan dos desafíos principales para la reintegración: las graduaciones de los desmovilizados que ya han cumplido con su ciclo en el programa de reintegración, lo que implica que estos beneficiarios se consideran integrados a la vida civil, habrá que hacerle seguimiento cercano a este proceso.

El segundo desafío tiene que ver con la implementación de las 80 horas de Servicio Social por parte de los beneficiarios, como mecanismo de reparación; la Misión considera que este servicio debe ir más allá de la reintegración comunitaria y contribuir de manera más sólida al propósito de la reconciliación.

Colombia se encuentra en este momento en una transición; gracias a los avances del proceso las víctimas ahora se encuentran en el centro de la agenda nacional; han podido reivindicar sus derechos y acceder a la reparación; pero no debemos olvidar la otra cara de la moneda. Los esfuerzos del Estado no pueden descuidar a los desmovilizados, porque de su adecuada reinserción depende en gran medida el retorno de la paz.

Es del interés de todos los colombianos que los beneficiarios del proceso de reincorporación, encuentren alternativas viables para sustentarse económicamente a sí mismos y a sus familias, que puedan recuperar un lugar digno y útil en las comunidades y participar de manera activa en la construcción de la paz en el país.

Barrancabermeja Junio 22 de 2012.

Ponencia del Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en Bogotá

Por ILDELFONSO HENAO

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL
PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN EN
BOGOTÁ

Primero creo que es necesario tener presente el contexto en el que desarrollamos nuestros procesos de reintegración, atendiendo la realidad compleja y difícil de comprender nuestro país:

Persistencia del conflicto armado con reiteradas manifestaciones de interés en buscarle una salida negociada, por parte del Gobierno nacional e igualmente por parte de las FARC y el ELN, pero con posiciones contrarias de sectores de extrema derecha que siguen apostándole a la derrota de estas.

Presencia de poderes ilegales y delincuenciales que siguen ejerciendo presión sobre los desmovilizados afectando los procesos de reintegración; desde el Programa distrital hemos constado dicha situación mediante una caracterización realizada a desmovilizados en la ruta de intermediación laboral que al momento se ha aplicado a 192 personas. Los encuestados reportan que saben de 50 casos (equivalente a un 26%) que en los últimos dos meses han sido invitados en un intento de reclutamiento por parte de los GAIL, y 35 (equivalente a un 18%) han sido invitados a participar en actividades delincuenciales.

Igualmente constatamos que se les sigue realizando invitación a los reincorporados, a participar en operativos con el Ejército Nacional; manifestaciones aún de la concepción de estrategia de guerra contra la insurgencia, propuesto desde la creación del programa de desmovilización, cuando era ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez. Lastre para un proceso de reintegración con base en la reconciliación, que la Presidencia debe superar.

Por otra parte, a pesar de que somos un país con ingreso per cápita medio, \$US 8.540 según el último Índice de Desarrollo Humano de la ONU, una infraestructura productiva y cultural importante, esta riqueza no se distribuye al grueso de la sociedad, somos el tercer país más desigual del mundo según el mismo Informe, solo superado por Haití y Angola, y el primero en distribución desigual de tierras.

Para la materialización de un programa de desarme, desmovilización y reintegración –DDR– en perspectiva de reconciliación, en materia de normas internacionales y nacionales, contamos con las definiciones de la ONU, reafirmada por el Conpes 3554 “la Reintegración debe ser diseñada y ejecutada como parte integral y complementaria a las estrategias de consolidación de la paz, seguridad y desarrollo económico”; se logra una mayor precisión en la Ley de Víctimas, en su Decreto reglamentario 4800, “cimentar un proceso de reconciliación nacional sobre bases de equidad e inclusión social, entendiendo que la reconciliación es un proceso que tiene por objeto favorecer la construcción de escenarios de convivencia pacífica entre las víctimas, la sociedad civil, el Estado y los desmovilizados, a través de la profundización de la noción de participación conjunta y mediante la reconstrucción del tejido social”.

De allí que, los programas de Reintegración se deben plantear el reto de adecuarse y responder a las dificultades del país, expuestas anteriormente, y cerrar el retorno al conflicto armado y a la ilegalidad de los desmovilizados, ayudar a superar la discriminación de éstos, contribuir a enfrentar la desigualdad, aportar a la reconstrucción del tejido social, influir en mejorar la confianza entre los colombianos, para así ayudar a mirar el futuro de Colombia.

Proponemos que se deben trabajar dos perspectivas: de un lado los procesos de atención directa a los desmovilizados, procurando mejorar los métodos de inclusión social, que el excombatiente se logre re – conciliar en la sociedad; y por otro trabajar por comprometer la sociedad en los procesos de reintegración, dado que la diada conflicto armado y problemas estructurales son al mismo tiempo causa y consecuencia entre sí. La reintegración en perspectiva de reconciliación requiere del compromiso de la sociedad, ya que si se dejan solas a las entidades públicas encargadas de la atención, Agencia Colombiana para la Reintegración –ACR–,

Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en Bogotá –PAPDRB–, no se romperá dicha diada de manera permanente.

En ese sentido quiero felicitar a los organizadores del Foro por el acierto de plantear, de manera integrada, la reintegración en perspectiva de reconciliación y paz junto con alianzas institucionales. La experiencia nos ha enseñado que el proceso de reintegración no puede plantearse a plazos cortoplacistas sino que necesita ese amplio horizonte de la reconciliación y la paz como fin.

Pero para enlazar la reintegración con la reconciliación, se necesita un fuerte componente pedagógico. Hemos aprendido que la reconciliación es una práctica que hay que aprender, enseñar, insistir sobre ella tanto como esfuerzo hacia los individuos y hacia la sociedad. Quiero recordar los altos niveles de desconfianza y estigmatización cuando buscamos el apoyo institucional para nuestros procesos, o el que solo el 13% de los empresarios del país daría empleo a desmovilizados en 2011.

En el Programa de Reincorporación de Bogotá se ha trabajado como elemento central la pedagogía de convivencia y paz. La definimos como un ejercicio de reconciliación, entendida como el conjunto de sensibilidades, conocimientos y prácticas que permiten que una sociedad aborde sus conflictos de una manera no violenta. Se contemplan diversas actividades: construcción de paz a través de la formación artística con niños y jóvenes familiares de desmovilizados; educación para la paz y la convivencia en los centros educativos donde estudian los desmovilizados; carnavales por la vida, la paz y la convivencia donde los excombatientes interactúan con amplios sectores sociales.

Pero donde hemos desarrollado un ejercicio de pedagogía de paz con mayor impacto es en los conversatorios testimoniales para la prevención del uso de formas violentas y la resolución de conflictos, donde desmovilizados de derecha e izquierda y víctimas hablan desde sus vivencias en el conflicto a jóvenes estudiantes de secundaria y universitarios, logrando un doble resultado transformador: hacia el público, logrando que cambien la percepción de la reincorporación y del conflicto; y de los que dan el testimonio, ya que el ejercicio pedagógico les afianza la perspectiva de reconciliación.

Lo pedagógico lo consideramos como un eje transversal, inclusive en el trabajo territorial: conformación o fortalecimiento a organizaciones mixtas; fortalecimiento de comunidades de acogida; mejoramiento de las condiciones de vida; apoyo a los procesos sociales donde se involucran los desmovilizados. Entendemos, entonces que, la inclusión social es primordialmente el ejercicio pleno y responsable de la ciudadanía, y esta se vive en la interacción dinámica con la sociedad. Este esfuerzo se complementa con la realización de gestiones institucionales en lo local para buscar apoyo a los procesos de reintegración; se impulsan diversos procesos de participación de los desmovilizados tales como en el Plan de Distrital de Desarrollo, Planes de Desarrollo Local, Presupuestos Participativos, espacios sociales e institucionales. Otro esfuerzo, con intencionalidad pedagógica, que desarrolla el Programa Distrital, corresponde a actividades de visibilización y sensibilización buscando llevar los temas de la reintegración al grueso de la sociedad.

La inclusión social de excombatientes es un tema que aún necesitamos seguir consolidando, por eso nos gusta hablar de construcción de modelo de atención, que para nuestro Programa denominamos “Modelo Diferenciado, Pedagógico y Polifónico”. Considero que los procesos de reintegración necesitan tanto resultados puntuales de atención de tipo humanitaria (salud física, mental y espiritual, educación, trabajo, recreación, participación política y social, y un largo etc.), además, cuidar la forma y el método que se aplica en el proceso de atención. Lo que en últimas define si se hace un buen proceso de atención es el agregado pedagógico y sicosocial que se logre transmitir a los desmovilizados, sus familias, las comunidades donde se asientan y a la sociedad. Son diversos los temas de interés que también se deben tener en cuenta dentro de un proceso de reintegración, tales como: superación de la estigmatización, el desconocimiento, la discriminación, de las actitudes excluyentes sobre los excombatientes y el proceso de reintegración; contribuir en el fortalecimiento de la democracia, en la creación de tejido social, el desarrollo de sujeto político y de la autonomía, entre otros conceptos. Igual estos conceptos los podríamos resumir como reincorporación en clave de reconciliación.

Quiero mostrar otro ejemplo de la trascendencia que le damos al contenido pedagógico, con nuestro ejercicio en el área de productividad: lo aplicamos con las rutas

de emprendimiento donde aplicamos un modelo que trabaja con la familia del desmovilizado, valoramos las competencias productivas que han construido en su núcleo familiar, realizamos una atención diferenciada acorde con las necesidades concretas, de los emprendedores, priorizando el desarrollo de capacidades humanas, acompañándolos durante un año.

El siguiente ejercicio es con la gestión de empleo, que definimos como: “La Ruta de Intermediación Laboral es una propuesta pedagógica que reconoce a la población vulnerable como sujetos de derechos, capaces de aportar al desarrollo socioeconómico de su ciudad y a la construcción de una cultura de paz en el marco de la legalidad”. En últimas lo que pretendemos es transferir competencias y capacidades para que los reincorporados se puedan desenvolver en el mercado laboral, por eso se hace énfasis en lo pedagógico. Esto ha permitido tener un mejor nivel de colocación, casi el doble de entidades públicas dedicadas a la búsqueda de empleos para poblaciones vulnerables; pero lo que más nos congratula es que son muchos más los que, habiendo pasado por nuestra ruta de empleabilidad, han gestionado por su propia cuenta un empleo. La ruta trabaja con desmovilizados, familiares y comunidades de acogida; incluye la aplicación de instrumentos de caracterización, aplicación de instrumentos especializados para identificar competencias laborales, capacitaciones para las diferentes actividades de la búsqueda de empleo, desarrollo de ferias de empleo con requerimientos puntuales de empresas y perfiles específicos definidos de antemano, incentivos económicos de la Organización Internacional para las Migraciones OIM a los empresarios por empleos dados, acompañamiento durante un año al empresario y al trabajador que vinculamos. Miremos las cifras de un año de aplicación de la ruta: más de 2.000 hojas de vida recibidas, 845 vinculados a la ruta con aplicación de los instrumentos, 120 con empleos gestionados por el programa y 200 con empleo autogestionado después de recibir el proceso de atención.

Creo que los programas de reintegración al transferir competencias al desmovilizado, la familia y la comunidad, impacta también en la sociedad; esta es una forma de incidir sobre las fallas estructurales de ésta, en el sentido en que, al lograr que los desmovilizados adquieran autonomía para acceder a la vida en sociedad en los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos, cierra el camino al

uso de mecanismos marginales, ilegales, ilegítimos o informales de su anterior experiencia. Igualmente se logra transformar la actitud dependiente del estado en que comúnmente caen los procesos asistencialistas. El proceso de atención debe ser integral y multidisciplinario dado que busca la reconstrucción de los proyectos de vida de los excombatientes y sus familias.

Los programas de reintegración deben generar y entregar recursos materiales, académicos, médicos para la salud del cuerpo y del espíritu; espacios para la reconstrucción de la memoria y los derechos jurídicos, espacios para la restitución de los derechos para las víctimas pero, sobre todo, la posibilidad de reconstruir el vínculo social fracturado por el conflicto.

Hoy el mayor reto que tenemos es alcanzar una sociedad como un solo espacio de convivencia, como una sola nación, con mecanismos alternativos y legales para tramitar las múltiples diferencias, que son lo común en estas sociedades posmodernas. Por ejemplo, para cumplir con la Ley de Víctimas se necesita agenciar el encuentro entre todos los desmovilizados con las víctimas dentro de los ejercicios de reparación y, sobre todo, para alcanzar compartir la sociedad como un espacio común. A pesar que los teóricos aún no lo logran encontrar cómo, la experiencia en el PAPDRB es que cotidianamente los reincorporados se reencuentran con las víctimas; tenemos experiencias en los que entre ellos mismos crean empresas, participan en organizaciones sociales, se organizan en familias.

Esto incluye obviamente reafirmar la necesidad de la verdad, la justicia y la reparación para alcanzar una real reconciliación; en el caso concreto de los perpetradores de crímenes violatorios al Derecho Internacional Humanitario, se hace indispensable la aplicación de la justicia, además de la verdad y la reparación.

Quiero plantear una cuestión polémica, muchos programas que tratan el tema de verdad, justicia y reparación están enfocados fundamentalmente a

saldar una deuda con el pasado, con mucho énfasis en la reparación monetaria; lo que quiero afirmar es que, es necesario plantear al mismo tiempo cómo lograr a futuro el “encuentro” entre contrarios, entre las víctimas y los desmovilizados para una vida en común dentro de una sociedad democrática.

Creo que la reincorporación en clave de reconciliación prepara a los desmovilizados para otro choque, para enfrentar las condiciones de vida de la sociedad colombiana, una sociedad fracturada, desigual, con pocas oportunidades, donde hay que luchar a brazo partido para superar a los otros en el ascenso social, donde se ha perdido la solidaridad, con unos estándares de éxito definido con unos criterios basados en la acumulación, donde prima la desesperanza. De dónde viene el excombatiente: de organizaciones que le solucionaba el diario subsistir, al pertenecer a una organización cerrada, ésta le dictaba todo lo que tenía que hacer, diluyendo al individuo en el colectivo, con una ausencia casi total de autonomía, mientras la sociedad a la que llega es, primordialmente, individualista. De un espíritu profundamente colectivo, de cuerpo, de las organizaciones armadas a prácticamente sálvese quien pueda en la vida, en esta sociedad. Este tal vez es el obstáculo y reto más grande, preparar al desmovilizado a una nueva forma de vida colectiva en una sociedad democrática; con todo lo que esto implica, en las múltiples materias que requiere la reintegración en temas como educación formal, capacitación para el trabajo, la vida en sociedad, reconstrucción de proyectos de vida.

Se necesitan elevados componentes en cultura de convivencia y paz, en modelo pedagógico, en sentido de construcción de nación, en reconciliación, para apuntar a la solución de los problemas estructurales de Colombia, para cumplir con lo que afirma el Conpes 3554, en cuanto a la política de estado para la reintegración: “reconciliación implica reconocer y reflexionar sobre el pasado para construir un futuro común. Además, aceptar las diferencias y forjar actitudes como la tolerancia y el respeto por el otro”.

Bucaramanga, Junio 20 de 2012.

Ponencia ANDI

Seccional Santanderes

JUAN DIEGO MÉNDEZ LARRAÑAGA
Gerente Seccional ANDI

Desde el año 2006, con el entonces Alto Consejero Presidencial para la Reintegración Social y Económico de Personas y Grupos Alzados en Armas ACR y ahora Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Señor Frank Pearl, la ANDI, consciente de la importancia que, un desarrollo económico y social del país –basado en el fortalecimiento y competitividad de la empresa privada-, requiere de una sociedad equitativa, solidaria y ética -a través del fortalecimiento de la democracia y la modernización del Estado-, fue abriendo los espacios necesarios con los empresarios, para permitir el acercamiento del sector privado con el proceso de reintegración.

Muestra de esto es la inclusión, en la Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial (que viene aplicándose desde 2004) del año 2006-2007 (octubre 2007), de dos áreas específicas de posible inversión social de las empresas en RSE, como parte de la medición global de dicha inversión, a saber, Aportes en Soluciones para la Paz y Proyectos de Generación de Ingresos, los cuales pasaron de 10.7% y 0%, respectivamente en 2006, a 13.8% y 16.4%%, respectivamente en 2007 (resultados de la encuesta 2007-2008 - Diciembre 2008).

Un año más tarde, fue posible cuantificar específicamente, la destinación en 2008 de 11.209 millones de pesos para apoyo a población vulnerable (desplazados, reintegrados; 11.121 comunidad y 88 para trabajadores), que solo representan el 0.5% de todo lo invertido, pero que es un punto de partida (Encuesta 2008-2009, noviembre 2009). Ya en 2009, en estas tres áreas (apoyo a la población vulnerable, construcción de paz y superación del conflicto) el 23.2% de las empresas invirtieron recursos de RSE.

Sin embargo esto, en esta misma encuesta (2009-2010, que se publica a finales de 2010, tiempo para el cual ya el Señor Alejandro Eder Garcés se encontraba posesionándose como Alto Consejero Presidencial, debo destacar que dentro de los mecanismos que emplean las empresas para el desarrollo de acciones de inversión social, el 18.1% consideró el desarrollo de negocios inclusivos como la opción más viable. Esta es una cifra para resaltar.

Por otro lado, como otra muestra de esta conciencia, el pasado 1 de marzo la ANDI y el BID, entregaron los resultados de la primera fase del Programa Encadenamientos Productivos en un Marco de Responsabilidad Social Empresarial, dirigido a contribuir en la superación de la pobreza extrema, fase en la cual se invirtieron U\$4 millones y se logró apoyar 27 iniciativas productivas, cerca de 4.500 familias. Dentro de estas iniciativas, se incluyeron personas víctimas del delito de desplazamiento forzado, participantes del proceso de reintegración, madres cabezas de familia, víctimas de minas antipersonal. Una de ellas, es del conocimiento de muchos de ustedes, ya que es gestionada por la Fundación Proyectos Tecnovo, entidad que cuenta dentro de sus aliados, además de la ANDI, a entidades como la otrora Agencia Presidencial para la Acción Social, hoy Departamento para la Prosperidad Social, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a entidades internacionales como USAID, FUPAD y la OIM, pero también a empresas privadas como Coltabaco y Homecenter, quien se ha convertido en su principal socio comercial; ojo que no digo patrocinador, no, es una alianza para la comercialización de productos con calidad, artesanías, velas, cerámica, productos en guadua, que adicionalmente, como valor agregado importantísimo, tienen un origen ulterior, de construcción de paz y de equidad social.

Una tercera línea de acción es la que encuentra fundamento en los compromisos adquiridos de la pasada Asamblea Nacional de la ANDI, que se llevó a cabo el 11 y 12 de agosto (de 2011) en Cartagena, la cual, como respuesta a esa conciencia que se viene generando conjuntamente con la ACR, encontró nuevos recursos para poner en el marco de la Fundación ANDI (nuestro más alto órgano en la articulación y ejecución de la RSE de los empresarios parte de la Asociación) y colaborar con el proceso de reintegración. El compromiso es que “ese es un programa que tiene que salir bien y que el sector

privado tiene que ayudar a que salga bien, de manera que cuenten con ese nuevo entusiasmo de estos empresarios para ese programa”.

Producto de ese entusiasmo podemos destacar 2 cosas muy brevemente, por un lado, la alianza público-privada realizada entre ANDI, Consejo Internacional de la Industria Sueca (NIR), la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la ACR, para promover que las empresas privadas financien y ejecuten proyectos que beneficien a desmovilizados. Dicha alianza, oficializada a través de dos acuerdos entre las 4 entidades en diciembre de 2011, permitirán formación y apoyo al empleo a los participantes del proceso.

Sin embargo esto, como segunda cosa, este proceso de alianza es la culminación de otro proceso que viene desde hace más de dos años atrás, cuando FIP, junto con ANDI y NIR, identificaron las regiones del país en las que se consideraba conveniente sensibilizar a las empresas sobre la importancia de vincularse a procesos de construcción de paz. Una de esas compañías que aceptó el reto de realizar el plan piloto en una de las regiones identificada como prioritaria: la Costa Atlántica (Barranquilla), fue Electrolux. Las personas beneficiadas con el programa fueron seleccionadas por llevar a cabo un proceso de reintegración exitoso, de acuerdo con los criterios de la Agencia Colombiana para la Reintegración y por tener el nivel técnico y la disposición para llevar a cabo el curso a cabalidad, según los parámetros de Electrolux.

Otra experiencia de este misma alianza se llevó a cabo con la empresa sueca Scania, que permitió la graduación de 16 jóvenes participantes del proceso como auxiliares mecánicos, en capacitación gratuita ofrecida por la empresa, una multinacional Sueca fabricante de camiones y buses para varios sistemas de transporte en Colombia. Esta iniciativa sumó, es importantísimo mencionarlo, a la Secretaría de Gobierno del Distrito.

Una última cosa que quiero mencionar, en el mismo marco de la Asamblea General y de la Fundación ANDI, es que esta fundación, con el propósito de estimular la convivencia pacífica y el fortalecimiento del tejido social, decidió destinar la Distinción “Carlos Arturo Ángel” a reconocer los esfuerzos de participantes del proceso de reintegración que estén aportando a la paz de Colombia. Lisbé Granda y Euclides Ramírez, fueron los galardonados, por haberse destacado en su

ruta de reintegración y sacado adelante un proyecto empresarial (Ruta de Generación de Ingresos).

En pocas palabras ¿para qué nos están sirviendo estas experiencias? Para superar lo que, en las mismas palabras del Director de la Agencia es lo más difícil del manejo de este proceso, que es el miedo de las empresas a trabajar con los participantes del proceso de reintegración. Y es en ese sentido hacia donde debemos avanzar, debemos demostrarle la necesidad a las empresas, de perder el miedo.

¿Hacia dónde estamos avanzando en este momento a nivel Seccional?

Estamos trabajando con un grupo de 10 empresas del sector metalmecánico de Santander, denominado Grupo Metalmecánico 10M, grupo que surge con el apoyo y acompañamiento de la ANDI Seccional Santandere.

Estos empresarios, han identificado la necesidad de mano de obra calificada, técnica y tecnológica, principalmente en oficios aplicables en el sector metalmecánico; particularmente, el de la soldadura. Auge minero energético, infraestructura, macro proyectos viales, energéticos, etc., requieren de una inmensa cantidad de mano de obra calificada. No es solo Santander, a pesar que si existe una tradición particular en el desarrollo del sector MM, y no solo es Colombia. Ejemplo, el sector Minero Metalúrgico de Chile ya se encuentra formando 100.000 trabajadores, entre ingenieros, geólogos, técnicos, que necesitan para el 2020, Argentina y Perú van por el mismo camino; nosotros, estamos dormidos. Hay 15 universidades regionales en este proceso; el salario promedio de un trabajador minero en Chile es de U\$ 2.000 y de ahí para arriba.

Entonces, partiendo de esa necesidad, desde el Grupo 10M se viene avanzando en dos sentidos. Por un lado, el apoyo al fortalecimiento, casi que a la reactivación de la educación técnica y tecnológica en el área metropolitana de Bucaramanga y ojalá en Santander, para lo cual necesitamos el acompañamiento de la Gobernación y de las alcaldías. Hemos avanzado, conjuntamente con la Caja de Compensación Familiar de Santander Cajasán y los empresarios, en la construcción de una línea de base, inicialmente con 10M pero ya estamos trabajando en ampliarla, de la

demanda de soldadores por parte de estas empresas y de los promedios de rangos salariales para dichos oficios. Gracias a la participación de los mismos empresarios en otros espacios –como el Sena- y en mi calidad de representante del Consejo Regional del Sena en el Comité del Centro Técnico de Girón de esa entidad, se viene dando el apoyo institucional que permita poner en el mapa esta necesidad en las entidades territoriales mencionadas.

Necesitamos que los adolescentes y jóvenes de los colegios técnicos entiendan y vuelvan a ver estos oficios y general la formación técnica y tecnológica como una opción de vida, más allá de la formación profesional. El 51% de los graduados de estas instituciones educativas no ingresan a cerreras profesionales (por falta de oportunidades), cuando por otro lado existe el gran potencial de desarrollo laboral, profesional, de proyecto de vida, que se encuentra ahora en esta formación técnica y tecnológica; y lo estamos logrando, paso a paso.

Y es que este trabajo apunta a uno de los aspectos más importantes que menciona Joshua Mitrotti (Director Nacional de Reintegración de la ACR) y es la prevención entendida como garantías no repetición. Necesitamos garantizar una mejor opción de vida para estos adolescentes y jóvenes y sus familias, que son población vulnerable que, ante la falta de mejores oportunidades, pueden ser utilizados y reclutados para el servicio de grupos al margen de la ley (todos, independiente de su categoría).

Bueno, sin embargo esto, la otra parte de la respuesta (ya en términos de unidad de negocio) que el mismo 10M ha planteado para superar esta falencia, es la planeación y puesta en operación de un Centro de Formación Especializada, que permita, por un lado, servir como su nombre lo dice, como un lugar de formación que responda a las necesidades específicas de las empresas del 10M (o de aquellas que quieran sumarse) y, por otro lado, que sirva como centro de prestación de estos servicios de soldadura, ya sea, en el sitio físico de formación, como resultado de la tercerización de ciertas etapas de los procesos productivos de productos metalmecánicos, inicialmente para las empresas del 10M (que es ahí donde entran como empresas ancla de este proceso), pero más adelante para aquellas que lo requieran; y en segundo lugar, como centro de prestación de esos mismos servicios pero para trabajos de

campo, como resultado de la subcontratación de las empresas contratistas responsables de la ejecución de macroproyectos en la región.

Dicha iniciativa, nuevamente teniendo en cuenta la conciencia de la ANDI por el tema, la pensé inicialmente posible como el desarrollo de un modelo de negocio inclusivo. Así lo fuimos planteando a los empresarios y así lo fuimos planteando a la ACR, ahora aceptado como una opción viable en la puesta en marcha del Centro de Formación Especializada, como un proyecto piloto de negocio inclusivo.

¿El estado de avance de esta iniciativa? Se enmarca en este momento en la segunda línea de acción que mencioné, relacionada con el convenio ANDI-BID-FOMIN, cuya fase se encuentra cerrando en estos días. Estamos a la espera de una segunda fase, que más de una segunda fase es un nuevo proyecto, con BID-FOMIN, que nos permita contar con la asistencia técnica y el financiamiento necesario para poner esa iniciativa en marcha. Localmente, nuevamente el Sena y la Gobernación de Santander han manifestado su voluntad de apoyar el desarrollo de este negocio inclusivo.

Por lo tanto, estamos avanzando, como les menciono, en la metodología del BID para presentar el proyecto, nos coincidió con la finalización de la primera fase del proyecto pero estamos confiados que pronto se oficializará el nuevo proyecto, que nos permita ir viabilizando, claramente siempre con el acompañamiento de la ACR, este proyecto.

Eso es, señoras y señores, en líneas generales es lo que hacemos desde la ANDI en compromiso particular con el proceso de reintegración, lo que estamos haciendo localmente desde la Seccional Santandereña y que quería compartir con ustedes. Reitero algunas de las palabras con las que comencé mi intervención, como Gremio, somos conscientes y creemos en la importancia que, un desarrollo económico y social del país –basado, desde el punto de vista nuestro, en el fortalecimiento y competitividad de la empresa privada–, requiere de una sociedad equitativa, solidaria y ética –a través del fortalecimiento de la democracia y la modernización del Estado; en ese sentido, creemos que eso no es posible sin creer igualmente en el proceso de reintegración que adelanta el Gobierno Nacional; creemos en sus participantes y en la posibilidad de la paz en Colombia.

Bucaramanga, 20 de junio de 2012

Bibliografía

ACCIÓN SOCIAL. Índice general de tabulados de población desplazada. Disponible en: <http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20feb%2028%20de%202009.htm> Fecha de consulta: 5 de marzo de 2012

ACNUR. La situación de los derechos humanos en Colombia. Editorial CÓDICE LTDA, Bogotá D.C 2008. p. 16

Agencia Colombiana para la Reintegración. "Balance 2009, el año de la consolidación de la Reintegración en Colombia". Disponible en: www.reintegración.gov.co

_____. "Informe anual de gestión Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de personas y grupos alzados en armas. Marzo de 2009 a mayo de 2010". Disponible en: www.reintegración.gov.co

_____. "Reintegración. Avances y retos. Informe de gestión ACR 2011". Consultado en: www.reintegración.gov.co

_____. "Modelo de atención psicosocial para la paz- MAPAZ". Primera edición, Mayo de 2010, Colombia.

_____. "Módulo preparatorio para desarrollo de escenarios de reconciliación". Marzo 12 de 2012.

_____. Reintegración en Colombia, HECHOS & DATOS. Boletín de la ACR. Consultado en: www.reintegración.gov.co

_____. Documento informe presentado a la Asamblea de Gobernadores. Departamento de Santander – 2012.

_____. “El Plan Padrino de la Policía Nacional presenta resultados positivos en materia de seguridad de los desmovilizados”. 2010. Disponible en: http://www.reintegracion.gov.co/Es/prensa/Paginas/plan_padrino.aspx. Consultado: 14 de junio de 2012.

_____. Sistema de Información para la Reintegración.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en Bogotá (PAPDRB), “Modelo diferenciado, Polifónico y Pedagógico”. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá. Noviembre de 2011.

ALONSO, Manuel Alberto, Estudios políticos, Balance del proceso de desmovilización, desarme y reinserción de los bloques cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín, 2008.

BONILLA, Laura, “Magdalena Medio: De las Luchas por la Tierra a la Consolidación de Autoritarismos Subnacionales”, en: “Parapolítica. La Ruta de la Expansión Paramilitar y los Acuerdos Políticos”, Corporación Nuevo Arco Iris, Editorial Intermedio, Segunda Edición, Bogotá, D.C., Colombia, Noviembre de 2007.

CAICEDO, Luz Piedad. Impacto de los procesos de DDR en la vida y seguridad de las mujeres. Corporación Humanas. Disponible en: http://www.humanas.org.co/archivos/humanas_documento_pon_50Ponencia_Impacto_de_los_procesos_de_DDR.pdf, Consultado el 15/05/12 Escuela de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona. CONSULTADO EN: http://escolapau.uab.es/img/qcp/introduccion_ddr.pdf

CARACOL RADIO, Judiciales, “Así transcurre el paro armado de Los Urabeños en todo el país”. Enero 5 de 2012. Disponible en: <http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/asi-transcurre-el-paro-armado-de-los-urabenos-en-todo-el-pais/20120105/nota/1602482.aspx>. Fecha de consulta: 12 de abril de 2012.

CARAMÉS, Albert. Escola de Cultura de Pau, Agencia Española de Cooperación Internacional, “La Reintegración Comunitaria.” Disponible en: <http://escolapau.uab.cat/img/programas/desarme/informes/06informe022.pdf>

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR-CINEP, “Deuda con La Humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988- 2003”. Bogotá, D.C., Diciembre de 2004. Capítulos: “La doctrina contrainsurgente del Estado y la población civil”. p. 1, 2. “El modelo chucureño del paramilitarismo”. p. 1. “Las “convivir”: legalización del paramilitarismo”. p. 1, 2, 3. “Puerto Boyacá. Una experiencia piloto de paramilitarismo”.

CODHES. Tapando el Sol con las Manos. Disponible en: http://www.codhes.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=89&Itemid=50 Fecha de consulta: 20 de abril de 2012.

COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO. “La extradición de jefes paramilitares favoreció la impunidad”. Disponible en: <http://www.colectivodeabogados.org/Extradicion-de-jefes-paramilitares>. Fecha de consulta: 12 de abril de 2012.

COMISION NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACION– Grupo Memoria Histórica - El Orden desarmado, la resistencia de la Asociación de trabajadores campesinos del Carare ATCC, p. 20.

_____. “La reintegración: logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas”, Área de DDR, 2010. Disponible en: www.verdadabierta.com/archivos.../8-documentos-sobre-rearme?.

_____. 3er informe de DDR, “Síntesis Regional Presencia de GAI por Municipios CNRR Consolidad Colombia Presencia GAI”, CD room, 2011.

_____. Área de Desmovilización, Desarme y Reintegración, “Disidentes, rearmados y Emergentes: ¿Bandas Criminales o Tercera Generación Paramilitar?”, Bogotá, 2007.

_____. “Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?”. Bogotá. 2007

COLOMBIA. CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA (2003, diciembre 23). “Ley 782 de 2002, Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”. Diario Oficial No. 45.043, de 23 de diciembre de 2002. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0782_2002.html

_____. (2005, julio 25). “Ley 975 de 2005, Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0975_2005.html. Fecha de consulta: 28 de enero de 2012.

_____. (2010, diciembre 29). “Ley 1424 de 2010, Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”. Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1424_2010.html. Fecha de consulta: 28 de enero de 2012.

CORPORACIÓN COMPROMISO- FUNDESVIC. Documento Memoria de las víctimas del sur del Cesar (2011).

CORPORACION NUEVO ARCO IRIS. Observatorio del Conflicto Armado, Informe Anual de la Corporación Nuevo Arco iris, “Política y Violencia en 2011. Las Cuentas no son tan Alegres. (Dinámicas de las FARC, Bacrim, ELN, y riesgos a la restitución de tierras)”, Informe ejecutivo, 2011.

COORDINACIÓN COLOMBIA-EUROPA-ESTADOS UNIDOS. Informe para el Examen Periódico Universal de Colombia. Julio, 2008. p. 15, 16.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Consejo Nacional de la política económica y social, República de Colombia. Documento Conpes 3554-2008. Política nacional de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales.

DE ROUX, Francisco. "El Magdalena Medio en el centro del conflicto y la esperanza" En: Revista Controversia, Número 174. Junio de 1999. Bogotá: CINEP, 1999. P. 15. Disponible en: <http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/Contextoelmagdalenamedio.pdf>

DUNCAN, Gustavo. Los señores de la guerra de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia. Editorial Planeta. Colombia. Bogotá, 2007

EL ESPECTADOR. "Luis C. Restrepo sabía de las falsas desmovilizaciones: Mancuso". Mayo 11 de 2012. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/audio-345443-luis-c-restrepo-sabia-de-falsas-desmovilizaciones-mancuso>. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2012.

EL ESPECTADOR, sección Nación: "Alarma por rearme paramilitar". Octubre 24 de 2008. Disponible en: <http://www.elespectador.com/node/85934>. Fecha de consulta: 13 de mayo de 2012.

ELNUEVOSIGLO.CO: "Persecución a Bacrim requiere ajustes: Pérez", 15 de enero de 2012. Disponible en: <http://www.Elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2012-persecuci%C3%B3n-bacrim-requiere-ajustes-p%C3%A9rez.html>. Fecha de consulta: 12 de abril de 2012.

ELTIEMPO.COM: "Capturan a jefe militar de 'Los Rastrojos' en San Rafael de Lebrija (Santander)", 15 de abril de 2010. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7603911>. Fecha de consulta: 22 de mayo de 2012.

ELTIEMPO.COM: "Escandalosas grabaciones de coronel en líos por relación con bandas", 9 de diciembre de 2011. Disponible en: <http://m.eltiempo.com/justicia/casos-de-policas-y-militares-corrupitos/10914589>. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2012.

EL TIEMPO, sección Nación: "Seis frentes de las FARC y ex "paras" unidos para el narcotráfico: policía". Junio 20 de 2008. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2995416>. Fecha de consulta: 13 de mayo de 2012.

ELUNIVERSAL.COM.CO: "Ex paramilitar alias "El Alemán" se siente traicionado por Uribe". Agosto 24 de 2009. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/ex-paramilitar-alias-%E2%80%99El-aleman%E2%80%9D-se-siente-traicionado-por-uribe>. Fecha de consulta: 14 de marzo de 2012.

Escrito de acusación Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, Medellín, 30 junio de 2011, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias 'Julián Bolívar'.

FISAS Vicenç, Escola de Cultura de Pau ECP, Quaderns de Construcció de Pau, "Introducció al Desarme, Desmovilizació y Reintegració (DDR) de excombatientes", Noviembre de 2011. p. 6.

FISAS, Vicenç. Desmovilización y Reintegración en perspectiva de Reconciliación. Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=367%3Adesmovilizacion-y-reintegracion-en-perspectiva-de-reconciliacion&catid=73%3Aarticulos-procesos-de-paz&Itemid=59&lang=es

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. Disponible en: www.fiscalia.gov.co

FORO RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA REFORMA A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ-MAPP OEA – ICTJ-. Bogotá, mayo 14 de 2012.

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER (2009) Información General. Disponible en: <http://www.nortedesantander.gov.co/infgeneral.php#seccion8>. Fecha de consulta: 23 de abril de 2012.

GOBERNACIÓN DE SANTANDER. Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 "El Gobierno de la Gente".

GOBERNACIÓN DE SANTANDER. Libro PIU 2012– Mapa de Riesgos. p. 48, 49, 50, 51, 52, 53.

GONZALEZ, Camilo, "El Debate de las Bacrim". Disponible en: <http://www.indepaz.org.co/?p=1241>. Fecha de consulta: 22 de marzo de 2012.

GONZÁLEZ, Diro César, Los días que estremecieron a Barrancabermeja. Barrancabermeja: 2011. p. 69 – 71, 79, 80.

GLEICHMANN Colin, Michael Odenwald, KeesSteenken, AdrianWilkinson, Cooperación Técnica Alemana GTZ, Centro Noruego para defensa Internacional FSS, Centro Pearson para el

GUTIERREZ, Juan Carlos y Diana GIRALDO. "Ernesto Baez' revela sus apoyos en Santander. Vanguardia Liberal, 22/07/12. Disponible en: <http://www.vanguardia.com/actualidad/politica/166470-ernesto-baez-revela-sus-apoyos-en-santander>. Fecha de consulta: 23 de julio de 2012.

Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Febrero de 2009. p. 15.

INSTITUTO DE ESTUDIO PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ, INDEPAZ, "VII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en el 2011", 2011.

_____. Cuadro comparativo de informes sobre nuevos grupos paramilitares 2008. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=169:cuadro-comparativo-de-informes-sobre-nuevos-grupos-paramilitares-2008&catid=59:paras&Itemid=74. Fecha de consulta: 21 de abril de 2012.

LEÓN, Daniel Alfonso. Impactos ambientales de la expansión de la palma aceitera en el Magdalena Medio: Caso Las Pavas, Municipio El Peñón, Bolívar. Noviembre de 2009. P. 1. Disponible en: www.iniciativaambiental.net/descargas/download/fileid/35

LESMES Libardo –Documento Marcos interpretativos para el análisis dinámicas de riesgo en territorio Santandereano. Bucaramanga: 2012. p. 3, 5.

Mantenimiento de la Paz PPC y Colegio Sueco para Defensa Nacional FHS: “Desarme, Desmovilización y Reintegración. Guía teórica y práctica”, Imprenta Hassmüller, Fráncfort, Alemania. 2004. p. 15.

MARTÍNEZ GARNICA, Armando. Informe del Departamento de Santander, 2008. S.R. Disponible en: <http://www.globalexchange.org/countries/americas/colombia/SantanderReportESP.pdf>. “¿Puede seguir existiendo la historia regional?” en: Memorias, vol. 1, Bucaramanga, diciembre de 2003, p. 16. Fecha de consulta: 2 de abril de 2012.

MELENDEZ, Jorge Enrique. “A examen, solicitudes de reparación”. En: El Tiempo. Septiembre 22 de 2008. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3103945>. Fecha de consulta: 24 de febrero de 2012.

MINISTERIO DE CULTURA. Caracterización y situación actual de la población infantil, adolescente y juvenil, 27 julio de 2010.

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Acuerdo 365 del 20 de septiembre de 2007.

NUSSIO Enzo, Revista Pensamiento Jurídico N° 26, Artículo: ¿Reincidir o no? Conceptos de la literatura internacional aplicados al caso de desarme, desmovilización y reintegración de las Autodefensas Unidas de Colombia. p. 213- 235. Noviembre 2009.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Misión de apoyo al proceso de paz en Colombia-MAPP-OEA. “Diagnostico de Justicia y Paz en el Marco de la Justicia Transicional en Colombia”. Octubre, 2011.p.17-32

OBSERVATORIO DE PAZ INTEGRAL, OPI-PDPMM, 2011.

PLANETA PAZ. Observatorio Nacional de Paz. “Escenarios, actores y dinámicas de la conflictividad socioterritorial en Colombia. Narrativas, miradas y percepciones desde la subalternidad”, Bogotá: abril 2011.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. p. 30.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Oficina del Alto comisionado para la Paz, “Proceso de Paz con las Autodefensas. Informe ejecutivo”, Diciembre de 2006.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Documento “Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia”.
Disponible en: http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2003/julio/15/09152003.htm . Fecha de consulta: 25 de enero de 2012.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. La Voz de las Regiones. Bogotá, julio de 2009. Pág.459, 460, 461.

QUINTANA, Guillermo. Modelos de ocupación y zonificaciones territoriales en Norte de Santander, Colombia (Región Del Catatumbo). En: ACE© AÑO III, núm.7, junio. Bogotá, 2008. p 2, 7. Disponible en: http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/5655/1/13_GUILLERMO-QUINTANA.pdf

RADIO SANTAFE. “Desmovilizados en Bolívar denuncian amenazas”. Disponible en <http://www.radiosantafe.com/2011/02/03/desmovilizados-en-bolivar-denuncian-amenazas/>. Consultado: 14/06/12

REVISTA CAMBIO. “El país según José Obdulio”. Noviembre 2 de 2008. Disponible en: http://www.cambio.com.co/portadacambio/789/4445405-pag-3_3.html. Fecha de consulta: 21 de abril de 2012.

REVISTA CULTURA Y TRABAJO No 84 ENS- Escuela Nacional Sindical. Diciembre 2011

REYES POSADA, Alejandro. Documento Identificación de los agentes colectivos responsables del abandono de tierras en los municipios colombianos. Bogotá, Septiembre de 2007. p. 3, 4, 14.

SALAZAR, Gustavo. “Paramilitarismo: una aproximación a sus orígenes y evolución 1980 – 1999” Bogotá, 1999. Presidencia de la República.

SANTOS Peñuela, Alberto, Universidad de Los Andes, Tesis de pregrado, Director Iván Orozco: “Las Enseñanzas del Proceso de Reinserción del M19: una Evaluación desde los Actores, Hacia las Nuevas Negociaciones de Paz. El Escenario Ideal para la Reinserción”. Bogotá. D.C., Noviembre 2005.

SEMANA.COM: “¿Qué son las Águilas Negras?”, 18 de agosto de 2007. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/aguilas-negras/105663-3.aspx>. Fecha de consulta: 22/03/12.

SEMANA.COM: “EXCLUSIVO SEMANA divulga unos casetes en los que por primera vez se muestra cómo el gobierno negocia con las autodefensas y revela cómo la mafia se está adueñando del paramilitarismo en Colombia. La negociación secreta finalmente sale al aire.” Septiembre 24 de 2004. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/revelaciones-explosivas/82024-3.aspx>. Fecha de consulta: 5 de febrero de 2012.

SEMANA.COM: “Una radiografía a las llamadas bacrim”, 31 de marzo de 2011. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/radiografia-llamadas-bacrim/154287-3.aspx>. Fecha de consulta: 23 de mayo de 2012

SPRINGER, Natalia. Prisioneros Combatientes. “Informe exploratorio sobre el uso de niños niñas y adolescentes para los propósitos del conflicto armado en Colombia”. Bogotá, abril 2012.

TRUJILLO ESCOBAR, Alberto y Jorge ARIAS SEPÚLVEDA. “Guía Socioeconómica del Magdalena Medio”, Publicidad Calda, Editorial La Patria, Manizales, 1991, p. 4.

UNITED NATIONS DEPARTMENT OF PEACEKEEPING OPERATIONS, Office of Rule of Law and Security Institutions, Disarmament, Demobilization and Reintegration Section, "SECOND GENERATION DISARMAMENT, DEMOBILIZATION AND REINTEGRATION (DDR).PRACTICES IN PEACE OPERATIONS. A Contribution to the New Horizon Discussion on Challenges and Opportunities for UN Peacekeeping", Enero de 2010.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración -ODDR-, "Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración: buenas prácticas y retos.", Bogotá D.C., febrero de 2010. p. 4.

UNIVERSIDAD NACIONAL. Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. Desmovilización, desvinculación y reintegración de mujeres en Colombia. 2002 – 2011

VALENCIA Olga Lucia, Vinculación a grupos armados: un resultado del conflicto armado colombiano, Universidad del Bosque, revista Diversitas, perspectivas en Psicología, 2009.

VANGUARDIA.COM: "Bucaramanga, escondite de capos de la mafia", 16 de noviembre de 2008. Disponible en: <http://www.vanguardia.com/historico/13186-bucaramanga-escondite-de-capos-de-la-mafia->. Fecha de consulta: 23 de marzo de 2012

VANGUARDIA.COM: "Capturado jefe militar de la banda de 'Los Urabeños'", 17 de octubre de 2010. Disponible en: <http://www.vanguardia.com/historico/79172-capturado-jefe-militar-de-la-banda-de-los-urabenos> . Fecha de consulta 16/05/12

VANGUARDIA.COM: "La DEA y la Dijín capturan a un 'Urabeño' en Floridablanca", 12 de junio de 2011. Disponible en: <http://www.vanguardia.com/historico/108399-la-dea-y-la-dijin-capturan-a-un-urabeno-en-floridablanca>. Fecha de consulta: 10 de abril de 2012.

VERDADABIERTA.COM: "Reactivación: La tregua de los 90 (1992-1996). La historia". Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/24-periodo-2/129-sometimiento-a-la-justicia-y-reactivacion-paramilitar-en-la-primera-mitad-de-los-anos-noventa>. Fecha de consulta: mayo 2 de 2012

VERDADABIERTA.COM: "Balance de la entrega al fondo de reparación". Agosto 24 de 2008. Disponible en: <http://verdadabierta.com/component/content/article/208-restitucion-de-bienes/155-del-ahogado-el-sombrero->. Fecha de consulta: junio 12 de 2012.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, "Panorama actual del Magdalena Medio", Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Fondo de Inversión para la Paz. Bogotá, Junio de 2001. Introducción, p. 1.

El hilo del laberinto

“Queda claro que el DDR, el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración de los ex miembros de los grupos armados ilegales a la civilidad, es un paso fundamental para lograr la paz, pero por sí mismo no es la paz. Se requiere unir este proceso con la voluntad política y el compromiso profundo de la sociedad colombiana para remover las causas de estas violencias como un eslabón indispensable. Múltiples estudios demuestran que los diferentes conflictos armados en el mundo han implementado diversos enfoques o modelos de DDR para superar las guerras. Muchos de ellos han considerado incorporar acuerdos más allá de los reconocimientos sociales, políticos y económicos a miembros de los grupos desmovilizados, llegando a suscribir pactos y reformas institucionales que logran modificar las raíces de esos conflictos y benefician a la sociedad en su conjunto.

La Agencia Colombiana para la Reintegración, adelanta el acompañamiento en Santander a 1448 personas vinculadas a procesos de reintegración, es decir, este mismo número de familias viven una situación especial con múltiples retos a superar al albergar entre sus miembros a un excombatiente, ya sea del paramilitarismo o de la guerrilla. También se conoce que un alto número de estas personas que abandonaron las armas pasan por situaciones de rechazo, con impactos psicosociales de aislamiento social y económico, que no encuentran lazos de confianza ni canales de integración y reconciliación con las comunidades receptoras. Es de una alta responsabilidad institucional procurar procesos de reintegración exitosos y avanzar en experiencias de reconciliación, son acciones fundamentales en el marco de la construcción de paz y convivencia.”

Jorge Castellanos Pulido, Director de la investigación El hilo del laberinto, Conflicto armado y DDR en Santander. Corporación Compromiso.

“La Corporación Compromiso con acierto insiste en consolidar para los programas de reintegración un horizonte de paz y reconciliación. Analiza la parcialidad de los logros conseguidos y los riesgos de los procesos de DDR en contextos de conflicto armado, narcotráfico y persistencia de grupos armados ilegales, incluso posteriores a las estructuras de las AUC que buscan mantener dominios propios del fenómeno paramilitar. Señala que la labor del Estado se ve afectada por su fragmentación, de forma que coexiste su expresión democrática bajo presupuestos constitucionales democráticos con poderes ilegales asociados al paramilitarismo y la llamada parapolítica. Critica el bajo perfil y centralismo en las políticas y los programas de reintegración. Avala la importancia de correlacionar la reintegración con la defensa de los derechos de las víctimas y con los trabajos por el rescate de su memoria histórica. Agrega además, una serie de recomendaciones particulares a tono con las problemáticas, falencias y situaciones descritas en cada una de los tópicos referidos de la reintegración.

Álvaro Villarraga (Dirección de Acuerdos por la Verdad, Centro Nacional de Memoria Histórica)

